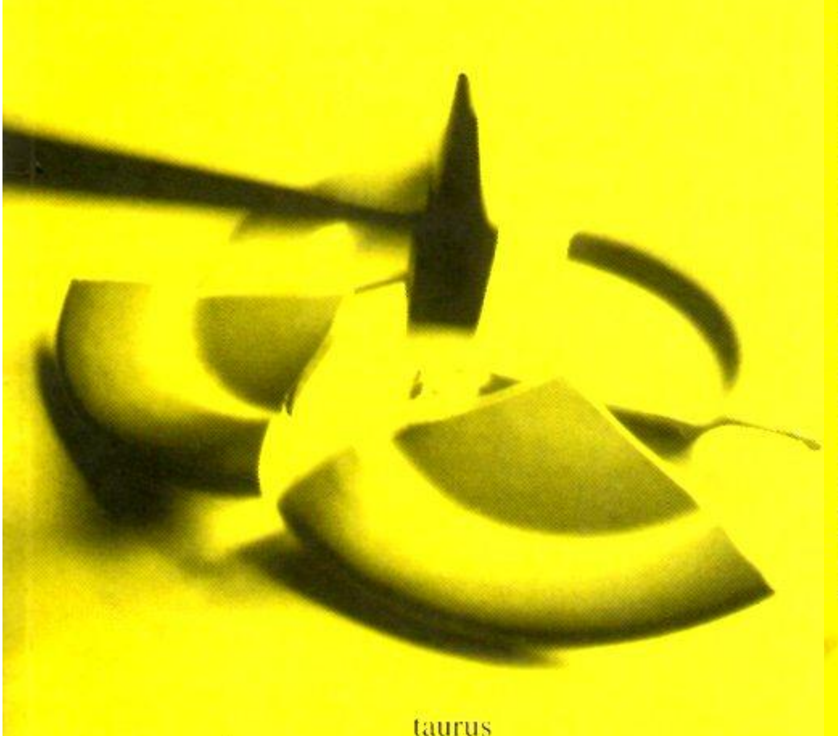
LA SOCIEDAD EXCLUYENTE

La Argentina bajo el signo del neoliberalismo

Maristella Svampa



taurus



Maristella Svampa es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Es investigadora-docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigadora del Conicet. En el año 2000 obtuvo la cátedra Simón Bolívar de la Universidad de París III, Nouvelle-Sorbonne. Desde 2002 es investigadora invitada del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), de París. Ha publicado *El dilema argentino: Civilización o Barbarie. De Sarmiento al revisionismo peronista* (1994); *La Plaza vacía. Las transformaciones del peronismo* (1997, con Danilo Martuccelli); *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales* (2000, editora), *Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados* (2001), *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras* (2003, con Sebastián Pereyra) y *La brecha urbana* (2004). También es autora de una novela, *Los reinos perdidos* (2005).

Maristella Svampa

La sociedad excluyente

La Argentina bajo el signo del neoliberalismo

TAURUS

PENSAMIENTO

Av. Leandro N. Alem 720, (1001) Buenos Aires
www.alfaguara.com.ar

ISBN: 987-04-0232-1

Hecho el depósito que indica la ley 11.723
Impreso en la Argentina. *Printed in Argentina*
Primera edición: noviembre de 2005

Diseño de cubierta: Claudio A. Carrizo
Imagen de cubierta: Focus Stock fotográfico

Una editorial del Grupo Santillana que edita en:
Argentina - Bolivia - Brasil - Colombia - Costa Rica - Chile - Ecuador - El Salvador - España - EE.UU. - Guatemala - Honduras - México - Panamá - Paraguay - Perú - Portugal - Puerto Rico - República Dominicana - Uruguay - Venezuela

Svampa, Maristella
La sociedad excluyente : la Argentina bajo el signo del neoliberalismo - 1a ed. - Buenos Aires : Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2005.
352 p. ; 24x15 cm.

ISBN 987-04-0232-1

1. Ensayo Sociopolítico Argentino. I. Título
CDD A864



A Roberto M.

Índice

Introducción 9

Primera parte
La gran mutación

Capítulo 1. Hacia el nuevo orden neoliberal 21
Capítulo 2. Mutaciones de la política y modelo de dominación 51
Capítulo 3. Mutaciones de la ciudadanía 73

Segunda Parte
La nueva configuración social

Introducción 95
Capítulo 4. Continuidades y rupturas de los sectores dominantes 99
Capítulo 5. La fragmentación de las clases medias 129
Capítulo 6. La transformación y territorialización de los sectores populares 159

Tercera parte
La acción colectiva: de la crisis a las nuevas formas de resistencia al modelo neoliberal

Introducción 199
Capítulo 7. Crisis estructural y nuevas formas de resistencia 205
Capítulo 8. Las dimensiones de la experiencia piquetera 235
Capítulo 9. El retorno de la política a las calles (2002-2005) 263

Comentarios finales 293
Notas 305
Bibliografía citada 327

Introducción

1

En las últimas décadas, la entrada en una nueva etapa de acumulación del capital produjo hondas transformaciones sociales. Esos procesos, caracterizados por la difusión global de nuevas formas de organización social y por la reestructuración de las relaciones sociales, cambiaron las pautas de integración y exclusión, visibles en la nueva articulación entre economía y política. Estos cambios desembocaron en un notorio incremento de las desigualdades en el interior de las sociedades contemporáneas, creando nuevos "bolsones" de pobreza y marginalidad.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en los países centrales los procesos de mutación estructural no se expresaron necesariamente en el desmantelamiento total o cuasitotal de las instituciones y marcos regulatorios típicos del modelo anterior (Estado de Bienestar o Estado Social). En contraste con ello, en las regiones del capitalismo periférico la globalización no sólo profundizó los procesos de transnacionalización del poder económico, sino que se tradujo en el desguace radical del Estado Social en su versión "nacional-popular", el que más allá de sus limitaciones estructurales y tergiversaciones políticas, se había caracterizado por orientar su acción hacia la tarea nada fácil de producir cierta cohesión social, en un contexto de sociedades heterogéneas, desiguales y dependientes. Así, en Amé-

rica Latina, estas transformaciones, que vinieron de la mano de políticas neoliberales, conllevaron una fuerte desregulación económica y una reestructuración global del Estado, lo cual terminó por acentuar las desigualdades existentes, al tiempo que generó nuevos procesos de exclusión, que afectaron a un conglomerado amplio de sectores sociales.

Recordemos que, como afirmaban hace décadas los teóricos latinoamericanos que reflexionaron sobre la dependencia y la marginalidad, los obstáculos al desarrollo forman parte intrínseca del proceso global del capitalismo y, como tal, son el resultado de la asimétrica articulación entre el centro y la periferia. En ese sentido, en América Latina la dependencia siempre implicó el reconocimiento de que la realidad tenía dos escenas: por un lado, la nacional; por el otro, la internacional. Así, esta dualidad de escenas limitaba los márgenes de acción de los diferentes actores sociales nacionales, al tiempo que señalaba la incorporación de otros actores económicos, de carácter internacional, en la espinosa articulación entre política y economía. Sin embargo, en las últimas décadas, a la luz de la nuevas condiciones de dominación económico-financieras, estos procesos cobraron gran envergadura y dimensión, hasta llegar, para decirlo con términos de Guillermo O'Donnell (2001), a "un grado y un tipo de dependencia que no soñaron siquiera los más pesimistas textos sobre la dependencia escritos hace algunas décadas".

Cierto es que este escenario tenía como telón de fondo la "década perdida", signada por la crisis estructural del modelo nacional-popular, visible en el incremento de la deuda externa, la alta inflación, la pauperización creciente y, al final de los 80, los episodios hiperinflacionarios. Con todo, el reconocimiento de la crisis no habilitaba como única salida, y mucho menos como la más adecuada a los intereses de la mayoría de la sociedad, aquella que finalmente habría de adoptarse, a saber, la "solución neoliberal".

Ahora bien, en la Argentina, en el contexto de la nueva dependencia, la salida neoliberal se tradujo en la implementación de un programa drástico de reformas estructurales que, acompañado y facilitado por la instalación de un nuevo modelo de dominación política, terminó produciendo una fuerte mutación y reconfiguración de la sociedad.

En efecto, cambios de toda índole, algunos ya anunciados desde mediados de los 70, encontraron una inflexión hiperbólica en el marco de la política neoliberal puesta en marcha por Carlos Menem (1989-1999) y continuada por sus sucesores. En este nuevo marco social, atravesado por una fuerte dinámica de polarización, todas las clases sociales sufrieron grandes transformaciones. Mientras que los grupos pertenecientes a la cúspide de la sociedad aunaron alta rentabilidad económica y confianza de clase al encontrar en su adversario histórico —el peronismo— un aliado inesperado, una gran parte de la sociedad, perteneciente a las clases medias y populares, experimentó una drástica reducción de sus oportunidades de vida. Aun así, el proceso no fue, de ningún modo, homogéneo, pues si bien es cierto que amplias franjas de las clases medias experimentaron el empobrecimiento y la caída social, otras se acoplaron con mayor éxito al modelo y buscaron afirmar la diferencia por medio del consumo y los nuevos estilos de vida. Por último, las clases trabajadoras, cuya identidad político-social se había estructurado desde y a partir del primer peronismo, atravesaron un proceso de descolectivización que arrojó a la situación de marginalidad y exclusión a vastos sectores, por vía del trabajo informal y el desempleo.

En suma, la dinámica de polarización y fragmentación social adquirió tal virulencia que durante gran parte de la década de los 90 hubo grandes dificultades en dotar de un lenguaje político a las experiencias de descolectivización, en la cual se entremezclaban diferentes trayectorias y situaciones, además de sentimientos contradictorios y ambivalentes respecto de la nueva condición social. No era para menos; la mutación era no sólo económica, sino también social y política.

En realidad, durante la década del 90, los cambios fueron reflejando rápidamente la configuración de un nuevo "campo de fuerzas societal", noción que tomamos de Edward Thompson (1986), y que designa menos una estructura ya consolidada que un proceso atravesado por dos grandes tendencias, suerte de polos magnéticos que arrastran de manera irresistible a los diferentes grupos sociales hacia uno u otro extremo, hacia la adquisición de posiciones ventajosas o hacia la descalificación social; en el lenguaje de los actores sociales, hacia la "salvación" o hacia la "caída". El país nos devolvía así la imagen de una sociedad

en pleno estallido, polarizada, en medio de una dinámica vertiginosa y, a la vez, muy inestable. Sin embargo, con los años, lejos de constituir un movimiento pasajero, la doble dinámica de polarización y fragmentación fue moldeando los contornos más duraderos de un nuevo país, de una *sociedad excluyente*, estructurada sobre la base de la cristalización de las desigualdades tanto económicas como sociales y culturales.

Este libro se propone abordar algunas de las dimensiones principales de ese proceso de mutación y reconfiguración estructural vivido por la Argentina en los 90, con una óptica que privilegia el análisis de la sociología política. Su objetivo es describir, en la medida de lo posible, los contornos generales de la sociedad excluyente. Para dar cuenta de ello, hemos decidido dividir nuestro análisis en tres partes, cada una de ellas compuesta por tres capítulos. En la primera parte, titulada "La gran mutación", iniciamos el recorrido presentando las diferentes dimensiones del proceso de mutación estructural, a fin de instalarnos luego en el terreno propio de la sociología política, a saber, a través del análisis del modelo de dominación política y sus avatares, así como de las transformaciones en las figuras de la ciudadanía. Aunque conscientes de que estas vías de entrada están lejos de agotar el conjunto de mutaciones políticas que atraviesa la sociedad argentina de las últimas décadas, creemos que el análisis propuesto nos facilitará algunas de las claves conceptuales que nos servirán de guía para abordar y comprender los núcleos problemáticos que componen la segunda y la tercera parte de este libro.

La segunda parte está consagrada al estudio de "La nueva configuración social". Para ello, nos proponemos pasar revista al proceso de dislocación y transformación de las diferentes clases sociales, en un contexto que señala el pasaje de la gran mutación a la consolidación de una sociedad excluyente. Así, comenzaremos con un análisis de las continuidades y rupturas de los sectores dominantes, para adentrarnos luego en la dinámica de fragmentación de las clases medias y, por último, avanzaremos en el relato de los procesos de pauperización y territorialización de las clases populares. Aquí, nuestro análisis apunta a detectar y poner de manifiesto la nueva dialéctica que se establece entre estructuras y prácticas sociales, en un escenario marcado por un fuerte incremento de las asimetrías económicas, sociales, culturales y políticas.

En la tercera y última parte abordamos el estudio de la acción colectiva y sus diferentes inflexiones. Sin pretender exhaustividad, nuestro propósito apunta a dar cuenta, con la ayuda de algunos casos emblemáticos, de las formas de resistencia propias del período, en las cuales se alternan y entremezclan viejos y nuevos actores sociales, así como nuevos escenarios y diferentes escalas de la conflictividad emergente. En fin, en un marco por demás complejo y atravesado por diferentes modalidades de acción colectiva, nos proponemos aprehender los sentidos y formas que adopta la resistencia a un modelo de exclusión, leída no sólo como una mera respuesta reactiva, sino también como una apuesta política de creación de nuevos lazos sociales. En este sentido, nuestra reflexión busca emplazarse en una perspectiva que señala la doble dinámica y vitalidad de lo social, a saber, la compleja dialéctica que es posible establecer entre fases y procesos de descomposición y de recomposición social.

2

Antes de iniciar nuestro recorrido, querríamos realizar algunos comentarios sobre el carácter y sentido de este libro. En primer lugar, deseamos dejar constancia de que en él se sintetiza y reelabora gran parte de las investigaciones que hemos venido desarrollando en los últimos diez años de nuestra carrera académica, en el marco de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Para comenzar, esta reelaboración contempla una serie de investigaciones realizadas entre 1995 y 1997, las cuales nos permitieron dedicarnos a esa recurrente tarea de la sociología argentina de los últimos sesenta años que consiste en interpretar una y otra vez las transformaciones y significaciones del peronismo. Esta primera investigación sobre la Argentina de los 90, realizada juntamente con Danilo Martuccelli, apuntaba a dar cuenta de las mutaciones de la vida política y el descentramiento de las imágenes del peronismo en la memoria colectiva, mediante el estudio pormenorizado de las subjetividades de los actores sociales (militantes políticos, mundo sindical, subjetividades populares). Poco después, dicha investigación nos llevó a profundizar la lectura de

los procesos de desestructuración del mundo del trabajo, principalmente a través de las diferentes transformaciones operadas en el mundo de los trabajadores metalúrgicos, protagonistas emblemáticos del modelo nacional-popular.

Hacia 1999, dirigimos nuestra atención hacia los nuevos fenómenos de segregación urbana, a partir del estudio de las urbanizaciones cerradas. Ello nos permitió adentrarnos en el análisis de ciertos cambios generales ligados a las clases medias y altas, sobre todo en lo que respecta a estilos de vida, espacios de sociabilidad, modelos de socialización y figuras de la ciudadanía. Asimismo, nos parecía que esta vía posibilitaba realizar una primera aproximación a la otra cara del proceso de fragmentación de las clases medias (la dinámica ascendente), la cual buscaba complementar aquellas lecturas emprendidas por nuestros colegas de área en la UNGS, centrada en los procesos de empobrecimiento y caída social, así como en el desarrollo de nuevas estrategias de sobrevivencia (el trueque). Por último, esta inmersión en la vida en los countries y barrios privados, en la cual participó un equipo formado por jóvenes investigadoras de la UNGS, nos permitió sopesar la magnitud de los cambios culturales y sociales vividos en la época del menemismo.

En noviembre de 2001, luego de la publicación del libro *Los que ganaron*, Juan Carlos Torre me sugirió la idea de escribir un texto sobre la sociedad argentina actual. Aunque en aquel momento la sugerencia despertó un sinnúmero de interrogantes acerca de su factibilidad y pertinencia, lo cierto es que no contaba con la energía suficiente como para emprender tamaño desafío y, a decir verdad, tampoco me atraía la idea de continuar instalada dentro de aquel campo que el propio Torre designaba con el acertado título de "sociología y antropología de la descomposición social". Meses después, los avatares de la propia historia política argentina nos llevaban hacia lugares impensados y nuevas inflexiones político-académicas. En efecto, en febrero de 2002 iniciamos el estudio y acompañamiento de la acción colectiva protagonizada por los desocupados y las asambleas barriales. Así, durante aquel año extraordinario realizamos junto con Sebastián Pereyra y parte del equipo de Ciencias Sociales de la UNGS una suerte de inmersión en los senderos de aquella Argentina desvertebrada, en especial, por aquellas provincias y lu-

gares del interior que, habiendo conocido épocas de esplendor, habían sufrido los efectos devastadores de la política de privatizaciones y el desmantelamiento de sus economías regionales. El viaje incluyó muchos otros largos recorridos por el ancho y desindustrializado Conurbano Bonaerense, ahí donde al decir de algunos reside el verdadero corazón de la nueva cuestión social argentina. Necesario es decir que, pese a que en los últimos tiempos hemos comenzado a explorar otras vías y experiencias de la acción colectiva, el recuerdo imborrable de aquellos viajes —verdaderos "viajes de ida"— no han cesado de acompañarnos.

En mayo de 2004 recibí un llamado de la editora Julia Saltzmann, quien llegó con la propuesta de un libro que pudiera sintetizar los cambios ocurridos en la sociedad argentina contemporánea, un libro que de alguna manera diera cuenta de "ese nuevo país", tan diferente del de nuestros mayores y tan distante de nuestras primeras experiencias de socialización. Finalmente, me decidí a emprender el nuevo viaje, a sabiendas de que el desafío era enorme y de que hasta ese momento sólo contaba con una hoja de ruta a medio armar. Por ello mismo, en el camino, me aboqué a una intensa búsqueda bibliográfica sobre lo que se había escrito acerca de los 90, en especial, lo referido a las transformaciones económicas y políticas. Releí así aquellos textos que forman parte de la tradición crítica, y descubrí otros tantos no menos valiosos. Ellos me ayudaron no sólo a recuperar parte de aquel increíble clima social que caracterizó la mutación estructural experimentada en los 90, sino también a asentar una suerte de conversación continua y enriquecedora con otras épocas y otros contemporáneos. Así, son múltiples los libros y autores que me acompañaron en el proceso de mapeo de la nueva sociedad argentina; que, en definitiva, me orientaron tanto en las preguntas como en la escritura, como bien podrá advertir el lector por el título y, sobre todo, en el desarrollo mismo de esta obra. Si sus nombres aparecen una y otra vez, no es sólo porque una obra como ésta, que aspira a una cierta síntesis, termina siendo necesariamente una suerte de producción colectiva, sino también porque los argumentos centrales desarrollados en estas páginas apuntan a inscribirse y a subrayar la existencia —pese a la discontinuidad— de una tradición crítica en las ciencias sociales argentinas. En este sentido, más allá de los resultados concretos de este libro, esto último me reveló hasta qué punto la existencia de un legado crítico en las ciencias sociales puede traducirse en un "efecto de acumulación positiva", cuando éste alimenta y produce nuevas preguntas e investigaciones.

Este libro no hubiera sido posible sin el apoyo del equipo de Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias de la UNGS, que codirijo con Inés González Bombal y Gabriel Kessler. Por ello, quiero agradecer los comentarios y sugerencias realizados por Pablo Bonaldi, Carla del Cueto, Damián Corral, Mariana Barattini, Pedro Núñez, Carla Grass, Marina García, Gabriela Wiczykier, Lorena Bottaro y Lucía Canel. Una vez más, agradezco la pertinencia de las correcciones y las sugerencias de Mariana Luzzi, así como la infinita paciencia con la cual leyó las distintas partes de este manuscrito. Agradezco a Marina García la colaboración, siempre diligente y afectuosa, en la búsqueda por momentos febril de material bibliográfico.

Quiero agradecer muy especialmente a Inés González Bombal y Gabriel Kessler, no sólo por el apoyo irrestricto que me ofrecieron, aun en los momentos más difíciles, cuando todo parecía tambalear frente a la vastedad de la tarea, sino también por la generosidad intelectual con la cual siguieron el proceso de escritura de este libro, haciéndome sugerencias, proponiéndome explorar nuevas vías, abrir nuevos canteros, integrar bibliografía olvidada o simplemente ignorada, en fin, incluir observaciones que dieran con el matiz justo que requería el abordaje de ciertas temáticas.

Agradezco a Roberto Bisang, Cristina García y Valeria Hernández, por haberme ayudado a comprender algo del nuevo mundo de la agroindustria argentina. A Pierre Salama, por sus comentarios sobre nuestro país, siempre incisivos y cargados de una rica perspectiva comparativa. A Ana Castellani, por haber puesto generosamente a mi disposición distintos materiales (algunos inéditos) sobre los sectores dominantes, de los cuales hay tan poca investigación en nuestro país. A Pablo Bergel, porque el diálogo y la discusión que mantenemos desde hace tres años me han ayudado a enriquecer la visión sobre los movimientos sociales. Al equipo de "Trabajo y Mundialización" del IRD, de París, en especial a Monique Selim, por el apoyo incondicional que me brindan en cada una de mis largas estadías en Francia, como investigadora invitada de aquella institución.

Sin duda, si este libro mejoró sustancialmente entre el primer borrador y la versión definitiva, ha sido gracias a todos ellos. Huelga decir que las omisiones, desaciertos e incompletudes que seguramente hay, son, por supuesto, absoluta responsabilidad de la autora.

* * *

El relato aquí presentado propone un recorrido que privilegia un análisis desde la sociología política: así, en primer lugar, realizamos el trazado de las mutaciones económicas, políticas y sociales que hicieron posible la emergencia de otra sociedad. Luego nos adentrarnos en el análisis de la dialéctica entre estructuras y prácticas sociales, mediante el estudio de las transformaciones de los diferentes grupos o clases sociales. Por último, el recorrido propone terminar con el estudio de las formas de acción colectiva, que involucran la acción de diferentes actores sociales, desde 1989 hasta el presente.

En fin, digamos que este libro está lejos de pretender dar una visión exhaustiva de los procesos sociales y políticos vividos por la Argentina a partir de 1989, lo cual no sólo sería una tentativa vana, sino que además le restaría pertinencia al enfoque que buscamos desarrollar en estas páginas. Con todo, somos conscientes de que un abordaje de esta naturaleza nos distancia de la tendencia dominante de la sociología argentina, poco proclive a la construcción de relatos con cierta vocación integradora. Aun así, creemos que los cambios han sido de tal envergadura, la eclosión de significados tan grande, que bien valía la pena correr el riesgo, a fin de realizar el trazado de las distintas vías, los núcleos de tensión, los nuevos entramados y ramificaciones de lo que hemos dado en denominar "la sociedad excluyente". En suma, más allá de las ausencias inevitables, estoy convencida de que el sentido último de un libro está dado menos por las respuestas que pueda aportar que por los nuevos caminos que su dinámica y su propia incompletud sugieran o abran.

Maristella Svampa,
31 de julio de 2005.

Primera parte

La gran mutación

Capítulo 1

Hacia el nuevo orden neoliberal

La hiperinflación constituyó así el momento resolutivo en la interminable agonía, que llegaba a su término, para la sociedad forjada por la revolución peronista. [...] Este fin fue también un principio; el principio de los días que estamos viviendo. A la memoria de esta experiencia debe su fuerza el orden socio-económico y político que hoy vemos perfilarse; es ese recuerdo aleccionador el que da a las mayorías la fuerza necesaria para soportar la ostentosa indiferencia de los sectores privilegiados por las penurias que siguen sufriendo los que no lo son y ofrecer su resignada aquiescencia a la progresiva degradación de las instituciones cuya restauración celebraron con tan vivas esperanzas hace diez años.

Tulio Halperin Donghi,
La larga agonía de la Argentina peronista.

Los momentos de la mutación económica

Durante décadas, en la Argentina imperó un modelo de integración de tipo nacional-popular, cuya máxima expresión fue el primer peronismo (1946-1955). Este modelo se caracterizaba por tres rasgos mayores. En primer lugar, en el plano económico, presentaba una concepción del desarrollo vinculada a la etapa de sustitución de importaciones y la estrategia mercado-internista. En segundo lugar, implicaba el reconocimiento del rol del Estado como agente y productor de la cohesión social, principalmente por medio del gasto público social. Esta política se tradujo así en la ampliación de la esfera de la ciudadanía, a través del reconocimiento de los derechos sociales, expresados paradigmáticamente en el artículo 14 bis de la Constitución nacional. Por último, una tendencia a la homogeneidad social, visible en la incorporación de una parte importante de la clase trabajadora, así como la expansión de las clases medias asalariadas.

El desmantelamiento de este modelo societal, luego de largos avatares políticos y tergiversaciones no menores, y su reem-

plazo por un nuevo régimen, centrado en la primacía del mercado, conoció diferentes momentos. En realidad, el proceso de instauración de un nuevo orden liberal estuvo lejos de ser lineal o de registrar una secuencia única. De manera esquemática, podríamos afirmar que los cambios en el orden económico arrancan durante la década del 70, a partir de la instalación de regímenes militares en el cono sur de América Latina; las transformaciones operadas en la estructura social comenzarían a tornarse visibles en la década del 80, durante los primeros años del retorno a la democracia; por último, podemos situar los cambios mayores a fines de los 80 y principios de los 90, con la gestión menemista.

En rigor, el cambio en el régimen de acumulación conoció un primer intento con el "Rodrigazo", bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón (1974-1976). Recordemos que, pese a la brevedad de su gestión, el ministro de Economía Celestino Rodrigo (1975), marcó una inflexión de talla, pues aplicó drásticas medidas de ajuste que implicaron una devaluación del 100% y un aumento de las tarifas de los principales servicios públicos que, en algunos casos, llegó al 200%. Impulsado por el ministro José López Rega, el plan de Rodrigo implicaba una reorientación fundamental de la economía, pues apuntaba a poner fin a la política económica nacionalista y reformista, característica del peronismo, para dar paso a una política de estabilización y ajuste, asentada en una alianza con los grupos económicos. Sin embargo, esta primera tentativa por cambiar el régimen de acumulación encontró grandes escollos en las movilizaciones populares espontáneas que paralizaron el país y culminaron en una huelga general decretada por la CGT, lo cual determinó no sólo el final abrupto del plan de ajuste, sino la suerte del hombre fuerte del régimen, López Rega, quien tuvo que renunciar y abandonar el país.

La segunda tentativa arrancaría de manera decidida con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Como en otros países de América Latina, el objetivo de la dictadura militar argentina fue llevar a cabo una política de represión, al tiempo que aspiraba a refundar las bases materiales de la sociedad. En consecuencia, el corte que introdujo fue doble: por un lado, mediante el terrorismo de Estado, apuntó al exterminio y disciplinamiento de vastos sectores sociales movilizados; por otro lado, puso en marcha un programa reestructuración económi-

co-social que habría de producir hondas repercusiones en la estructura social y productiva.

Las consecuencias económicas y sociales de estos procesos fueron devastadoras. El nuevo régimen de acumulación supuso la puesta en marcha de un modelo asentado en la importación de bienes y capitales y en la apertura financiera. Estas medidas implicaban la interrupción de la industrialización sustitutiva (visible en la erosión de la producción interna), y propiciaban el endeudamiento de los sectores público y privado (reflejado en el aumento espectacular de la deuda externa, que en el período 1976-1983 pasó de 13 mil millones a 46 mil millones). Asimismo, la lógica de acumulación desencadenada por este proceso centrado en la valorización financiera apuntó también a liquidar las posibilidades de una coalición nacional-popular, al tiempo que fue sentando las bases de un sistema de dominación centrado en los grandes grupos económicos nacionales y los capitales transnacionales, que finalmente terminaría de concretarse en 1989, a partir de la alianza política entre estos sectores y el peronismo triunfante.

El proceso de desindustrialización iniciado por la dictadura militar produjo importantes cambios en la estructura social argentina, anticipando su "latinoamericanización", a través de la expulsión de mano de obra del sector industrial al sector terciario y cuentapropista, y la constitución de una incipiente mano de obra marginal. Asimismo, el deterioro de los salarios reales y la baja de la producción produjeron la contracción de la demanda interna, lo cual fue acompañado por el fuerte incremento de las disparidades intersectoriales. Por último, la eliminación de las negociaciones colectivas y la caída del salario impactarían negativamente en la distribución del ingreso.

Recordemos que en 1974, en la Argentina, la distribución de la riqueza era similar a la de muchos países desarrollados: los ingresos del 10% más rico eran 12,7 veces mayor que el del 10% más pobre. En realidad, la falta de difusión de indicadores socio-económicos durante el régimen militar, a lo que siguió la profundización del deterioro de las condiciones de vida de franjas importantes de los sectores medios y populares, explican que sólo hacia mediados de los 80, con el retorno a la vida constitucional, gran parte de la sociedad tomara conciencia de la

dimensión de los cambios producidos. Más aún, este cuadro económico-social no tardó en poner de manifiesto el aumento de las desigualdades, visible en el incremento de la llamada "pobreza estructural", así como en la aparición de una "nueva pobreza" que afectaría a los sectores medios y medios-bajos.

Las cifras de la época son más que elocuentes, como lo refleja la distribución del ingreso per cápita de los hogares entre 1974 y 1989. Así, el 30% de los hogares de ingresos bajos pasó del 12,4% del ingreso en 1974 al 7,3% en 1989; los ingresos medios, en los cuales se comprende el 60% de los hogares, pasaron a su vez del 60,7% en 1974 al 51,1% en 1989; finalmente, los hogares con ingresos altos, el 10% del total, pasaron de concentrar el 27% en 1974 al 41,7% en 1989 (Beccaria:2001). Asimismo, el total de nuevos pobres en el Conurbano Bonaerense pasó del 4,2% en 1980 a 12,3% en 1987.

Ahora bien, aunque la dictadura logró crear las bases de un nuevo orden económico, ello no significa que no haya habido luego tentativas de reorientar el sistema hacia una economía productiva. Así, durante los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), en medio de la efervescencia democrática, hubo ciertos ensayos que, aunque limitados, se propusieron reorientar el desarrollo, acorde al modelo de acumulación precedente. Dichas tentativas se dieron en el marco de la crisis de la deuda externa que sacudió a gran parte de los países latinoamericanos a partir de los años 80 (la "década perdida", según la Cepal), y en un contexto de aumento de las demandas y expectativas populares. Sin embargo, pese a sus proclamas iniciales, que prometían desde la renovación de las estructuras sindicales hasta una democracia sustantiva, como en tantos otros temas el nuevo gobierno constitucional no contó con el coraje político ni tampoco con las alianzas necesarias para ir hasta el fondo de la cuestión.

Por un lado, las acciones del gobierno de Raúl Alfonsín dejaron entrever una debilidad creciente en relación con los poderosos sindicatos peronistas. En efecto, en 1987 el gobierno tuvo que retroceder en su propuesta de reforma sindical y nombrar como ministro de Trabajo a un hombre procedente de las filas del sindicalismo. Por su parte, la CGT, conducida por el sector ubaldinista, continuó desarrollando una fuerte capacidad

de presión, ilustrada de manera elocuente por los trece paros generales realizados entre 1984 y 1988.

Hacia fines de los 80, envuelto en una serie de conflictos económicos e institucionales, el país se hundía cada vez más en una grave crisis económica, reflejada en la importante caída de la inversión interna y extranjera, la creciente fuga de capitales y el récord inflacionario, que en 1987 alcanzaría el 175% y en 1988, el 388%. Finalmente, el gobierno de Alfonsín naufragaría sin dar con la clave de la constitución de una nueva alianza político-económica, que apuntara tanto a consolidar el recobrado marco institucional como a sanear una economía severamente deteriorada. La disociación entre, por un lado, una democracia representativa, orientada hacia la consolidación del marco institucional y el respeto de las reglas de juego entre los partidos políticos y, por otro, una democracia sustantiva, basada en la articulación entre solidaridad y demandas de justicia social, se tornaba cada vez más evidente. La debacle del Plan Austral —que en sus comienzos había contado con un alto apoyo popular— y la entrada en un período de alta inflación, culminarían en la crisis hiperinflacionaria de 1989, impulsada en parte por los grandes grupos económicos (el "golpe del mercado"). Estos sucesos determinarían el retiro anticipado de Alfonsín, quien había accedido al poder en 1983, avalado por el 52% de los sufragios, en medio de grandes expectativas de renovación política y económica.

Así las cosas, la Argentina de principios de los años 90 era una sociedad empobrecida y atravesada por nuevas desigualdades, que ya había experimentado una primera gran desilusión respecto de las promesas sustantivas de la democracia. El país asistía a la crisis estructural del modelo nacional-popular, sin por ello descubrir la fórmula, a la vez económica y política, que permitiera reencontrar las claves perdidas de la integración social. Sin embargo, aunque el incremento de la heterogeneidad y la polarización social anunciaban los contornos de un país diferente del de antaño, la gran mutación se consumaría durante el tercer momento de la secuencia, esto es, durante el largo gobierno de Carlos Menem, entre 1989 y 1999.

1989: el final de un ciclo político y económico

El año 1989 significó el final de un ciclo político-económico, tanto en el nivel nacional como en el internacional. En el nivel internacional, en 1989 colapsaron los socialismos reales, proceso ilustrado de manera elocuente por la caída del Muro de Berlín. El hecho terminaba abruptamente con la división más emblemática de la guerra fría, al tiempo que anticipaba, tras la rápida reunificación de las dos Alemanias, el triunfo avasallador del ideario capitalista. Meses más tarde, la debacle de Rumania, una de las repúblicas comunistas más pobres del Este europeo, cerraba el año, con el juicio y ejecución de los Ceaucescu, cuya transmisión televisiva en directo sería seguida por el mundo entero. El espectacular fin del mundo bipolar abrió un amplio espacio político-ideológico que sería ocupado por el neoliberalismo, rápidamente sacralizado en términos de "pensamiento único".

En el contexto de los países latinoamericanos, la situación no era menos grave. La "década perdida" se cerraba con un balance negativo: solamente en los últimos cuatro años el número de pobres en América Latina había registrado una aumento de 25% (Cepal). A principios de 1989, la crisis económica desembocaría en saqueos y revueltas masivas en Venezuela, una de las repúblicas otrora más prósperas, gracias a la riqueza de sus recursos petroleros. Así, el "Caracazo" vendría a acentuar los temores de las elites gobernantes en otros países, también jaqueadas por la crisis de la deuda externa, la inflación galopante y el deterioro de las condiciones de vida de vastos sectores sociales. Pocos meses después, en mayo de 1989, sería el turno de la Argentina, desbordada por la crisis hiperinflacionaria y los saqueos a supermercados, registrados en localidades del conurbano bonaerense y en la ciudad de Rosario.

De manera más específica, en la Argentina, la experiencia de la hiperinflación habría de constituir un punto de inflexión para la historia política nacional. En primer lugar, desde el punto de vista económico, para la gran mayoría de la población la hiperinflación trajo consigo una mayor caída del salario real, la contracción de la actividad económica, la suspensión de la cadena de pagos y el reemplazo de la moneda local por el dólar.

En 1989, los índices de pobreza treparon al 47,3%, y la tasa de indigencia, al 17,5% (Lozano:2005). Asimismo, sólo en ese año, el total de nuevos pobres alcanzó el 23,3% (Minujín y Kessler:1995).

En segundo lugar, la crisis hiperinflacionaria desembocó en el acuerdo entre diferentes actores sociales sobre ciertos puntos básicos, referidos, en especial, al agotamiento de la vía nacional-popular, esto es, del modelo de integración social que el peronismo había puesto en vigencia en 1945, —y que el proyecto alfonsinista, en parte, se había propuesto recrear—, poniendo al descubierto las distorsiones e insuficiencias producidas en cuarenta y cinco años de conflictos y transformaciones. En consecuencia, la hiperinflación terminó por afianzar aquellas posturas que afirmaban la necesidad de una apertura del mercado y un achicamiento radical del Estado.

En tercer lugar, en términos experienciales, la hiperinflación confrontó a los individuos con la pérdida súbita de los marcos que rigen los intercambios económicos, a través de la desvalorización —y desaparición— vertiginosa de la moneda nacional. Más aún, la hiperinflación como experiencia de disolución del vínculo social dejaría profundas huellas en la conciencia colectiva, visibles en la fuerte demanda de estabilidad que recorrería la sociedad argentina durante los años 90. La demanda no tardaría en transformarse en una suerte de mandato irrevocable, que erigiría al régimen de convertibilidad (mediante la paridad entre el dólar y el peso), implementado en 1991, en base y garantía de la nueva sociedad posinflacionaria.

En cuarto y último lugar, la experiencia traumática de la hiperinflación habría de asestar un rudo golpe al imaginario integracionista que, desde los orígenes de la república, había alimentado las prácticas y las representaciones de vastos sectores sociales, incluidas las clases medias y parte de las clases populares. Extenuada y empobrecida, la sociedad argentina asistía al final de un modelo de integración social que, desde los comienzos de la república y más allá de las crisis recurrentes, había asegurado canales importantes de movilidad social ascendente.

Ahora bien, si la crisis hiperinflacionaria apuró el recambio presidencial y sentó las bases para el consenso neoliberal en diferentes sectores sociales, no es menos cierto que 1989 estuvo

signado por otros sucesos, que habrían de tener vastas repercusiones políticas en los años por venir. Uno de ellos tenía que ver con la "cuestión militar", a saber, con las presiones ejercidas por las fuerzas armadas, que reclamaban que el gobierno pusiera fin a las causas por la violación de los derechos humanos registradas bajo la última dictadura. Esto, sumado a demandas más puntuales de ciertos sectores del ejército que, desde 1987, habían venido alimentando rebeliones sucesivas y rumores de conspiraciones, atentaba contra la frágil institucionalidad del sistema democrático argentino, y aparecía como uno de los legados más problemáticos del gobierno de Alfonsín, cuya cuestionable resolución estaría a cargo de Menem.

Por otro lado, 1989 fue un año que condensó grandes derrotas en el campo de los movimientos sociales. Así, en febrero, un hecho de violencia política sacudió a la sociedad argentina: una fracción del Movimiento Todos por la Patria (MTP) intentó copar el regimiento de La Tablada, en la provincia de Buenos Aires. El levantamiento tuvo como respuesta una represión sangrienta ordenada por el gobierno alfonsinista, que incluyó además fusilamientos secretos llevados a cabo por el Ejército. Sin embargo, más allá del afán del gobierno por condenar los hechos y congraciarse al mismo tiempo con la cúpula militar, los efectos de La Tablada tuvieron una significación mayor, pues alcanzaron un modelo de militancia que planteaba una continüidad ideológica entre los años 70 y los 80, al articular lo social y lo político. En efecto, aunque incipiente, la experiencia del MTP fue una de las tentativas más importantes de impulsar un proyecto de izquierda, con verdadera militancia política en los barrios. Necesario es decir que la mayoría de sus militantes no estaba al tanto del aventurerismo revolucionario de Enrique Gorriarán Merlo, líder del levantamiento; otros, probablemente lo sabían, pero naufragaron en la ambivalencia propia de un movimiento que reunía, sin duda de manera heterogénea y hasta contradictoria, elementos o matrices ideológicas de épocas diferentes. El caso es que La Tablada aceleró el proceso de quiebre ideológico de lo que quedaba de la izquierda populista revolucionaria, lo cual se tradujo en el ocaso de un tipo de militancia social y política. A esto se agregaría posteriormente la crisis del MAS (Movimiento al Socialismo), partido de izquierda

trotskista que en los últimos años había registrado una importante inserción sindical. Sin embargo, su implantación en los sindicatos no lograría resistir la ofensiva privatizadora y neoliberal, realizada en medio de la conversión vertiginosa de amplios sectores del peronismo histórico.

Por si esto fuera poco, en octubre de 1989 el nuevo gobierno de Menem firmó el primero de los dos decretos que otorgaban la amnistía a la cúpula militar, anteriormente condenada por crímenes de lesa humanidad, así como a los altos dirigentes de Montoneros, la organización armada peronista más importante —y más controvertida— de los años 70. Dichos decretos venían a convalidar la tesis de los "dos demonios", fraguada durante los primeros años de democracia, que repartía iguales responsabilidades por lo sucedido durante los "años de plomo", al terrorismo de Estado y a las organizaciones guerrilleras (y tendía a incluir, de manera más extensa, al conjunto del espacio militante).

Los indultos, que complementaban aquellas ya firmados por Alfonsín, concitaron una oposición generalizada, no sólo de los organismos de derechos humanos, sino también de vastos sectores de la sociedad. Hubo una gran movilización que, como en los primeros tiempos de la democracia, logró concentrar centenares de miles de personas; las encuestas de la época indicaban un amplio repudio de la sociedad, que rozaba el 75% (Cerruti y Ciancaglini:1992, p. 238), pero, sin embargo, nada pudo torcer la particular política de "pacificación" asumida por el nuevo presidente peronista. En consecuencia, este conjunto de hechos diferentes pondría de manifiesto una inflexión en los sistemas de acción colectiva, lo cual sería corroborado luego tanto por la desmovilización y fragmentación de las organizaciones de derechos humanos, como por la crisis de un tipo de militancia política en los barrios populares. La época que se abría revelaría una concepción diferente respecto de la relación entre lo social y lo político, en el marco de un nuevo modelo, marcado por el desdibujamiento de los antagonismos políticos y el aumento de la polarización social.

En suma, luego de 1989, la sociedad argentina cambió ostensiblemente. Tras la imagen de un país devastado, la crisis del vínculo social experimentada durante la hiperinflación dejó

la puerta abierta, demasiado abierta, para la realización de las transformaciones radicales llevadas a cabo durante la larga década menemista.

El nuevo orden neoliberal

A nadie escapa que la institucionalización creciente del sistema partidario en la Argentina desde 1983 contrasta con el largo proceso de inestabilidad institucional y polarización política que caracterizó a la Argentina a partir de 1955. Ahora bien, dicha institucionalización debe interpretarse en el marco de las especificidades del caso argentino, tradicionalmente caracterizado por un sistema político débil, y, como en otros países latinoamericanos, por una fuerte articulación entre el sistema político, los actores sociales y el Estado. Asimismo, esta situación expresaba una suerte de anomalía: cuanto más fuertes eran los grupos sociales, menor parecía ser su expresión orgánica a través de los partidos políticos. Esto se debía, por un lado, a que los sectores conservadores argentinos nunca pudieron consolidar un partido de derecha fuerte y, por ende, recurrían, para canalizar sus intereses sectoriales, a la intervención de los militares; por otro lado, los sectores populares lograron su representación por medio de partidos-movimientos (el yrigoyenismo, pero, sobre todo, el peronismo), en los cuales el rol y la autonomía del partido político propiamente dicho aparecía como particularmente débil con relación al conductor carismático y, en el caso del peronismo, hacia las corporaciones sindicales. Para muchos, por ende, para ingresar en un verdadero modelo de representación política de intereses sociales era necesario diferenciar estos niveles, a fin de posibilitar una verdadera articulación entre lo social y lo político.

Cierto es que la progresiva institucionalización del sistema político partidario no se dio sin inconvenientes, entre los cuales hay que destacar tanto las rebeliones militares producidas durante el período de Alfonsín y el primer año del gobierno de Menem, como la constante presión de los grupos económicos, dramáticamente ilustrada por el primer brote hiperinflacionario de 1989, considerado por algunos como un verdadero "gol-

pe de mercado". Sin embargo, lo propio del período que se abre en 1983 y, sobre todo, a partir de 1987, es el acercamiento cada vez mayor entre los sectores económicamente dominantes y los partidos políticos mayoritarios. En realidad, desde el punto de vista de los sectores dominantes, la apertura democrática trajo consigo un cambio importante de perspectiva política, a partir del abandono de las posiciones golpistas y la aceptación de las nuevas reglas de juego. Este proceso, que tenía como trasfondo la convicción de que la corporación militar había dejado de ser el canal más apropiado de sus intereses económicos (Acuña:1995), también daba cuenta de la existencia de una suerte de mandato "democrático" que recorría el subcontinente, avalado por Estados Unidos y los organismos internacionales. Ello nos permite comprender por qué, de ahí en más, la acción de los sectores dominantes se orientará a la colonización de los dos grandes partidos políticos existentes, a través de la infiltración del discurso económico liberal, como eje de la solución de los problemas argentinos. Este discurso tomaría un nuevo alcance, luego del fracaso ostensible del Plan Austral, en 1987, momento en el cual los sectores dominantes comenzaron a desarrollar una campaña sistemática en favor de la necesidad de realizar profundas reformas estructurales (Beltrán:1999, p. 75).

Recordemos que en 1983, la política liberal, uno de los puntos centrales del programa económico-social de la dictadura militar, era fundamentalmente sostenida por los grandes grupos económicos y los partidos de inspiración liberal, estrechamente vinculados con aquélla. Sin embargo, hacia fines de los 80, este discurso pasó a formar parte de la plataforma político-económica del entonces candidato a la presidencia por el partido radical, Eduardo Angeloz, revelando con ello los resultados exitosos de una estrategia de acercamiento y seducción de los sectores dominantes hacia los partidos mayoritarios. Finalmente, la puesta en marcha de un nuevo programa liberal, mediante la alianza entre importantes grupos socioeconómicos y el gobierno democrático, se tornaría posible con la asunción del nuevo presidente justicialista de la Argentina, Carlos Menem.

Sin embargo, a fines de los 80 no fueron pocos los observadores políticos que retomaron la categoría "populismo" para

caracterizar las propuestas de los candidatos presidenciales en países tales como la Argentina, Brasil, Perú, Venezuela y México. En realidad, el escenario político-electoral latinoamericano, que daba cuenta tanto de las limitaciones como de la crisis estructural del modelo nacional-popular, estaba atravesado por demandas ambivalentes y hasta contradictorias. Por un lado, frente a las crecientes dificultades económicas y la crisis de los mecanismos tradicionales de cohesión social, así como a la destrucción de las solidaridades sociales, el llamado populista emergía, una vez más, como una tentativa de "restitución" del progreso a las mayorías, por vía de una política nacional-popular. Por otro lado, esta demanda de revinculación iba acompañada también por una no menos fuerte exigencia de eficacia y ejecutividad, necesarias para enfrentar la crisis e imponerse por sobre los intereses de los diferentes sectores en pugna.

Sobre este telón de fondo se abre la experiencia de Menem, que refleja cabalmente esas demandas contradictorias. Así, aunque su campaña electoral se fundó en el llamado populista, Menem terminó construyendo una nueva alianza político-económica que le permitió dar cauce a la demanda de ejecutividad, mediante una estrategia liberal, orientada a la deslegitimación y desmantelamiento completo del modelo nacional-popular, sin que por ello las promesas electorales o la supuesta vocación popular del partido justicialista se convirtieran en un verdadero obstáculo.

La entrada en un nuevo orden liberal puso fin a la recurrente distancia existente entre sistema de poder y sistema político, que tantos analistas señalaron como una de las fuentes de la inestabilidad y polarización política en la Argentina. La larga etapa de los "empates sociales", que había caracterizado al país a partir de 1956, signada cada vez más por la acentuación de la crisis del modelo nacional-popular e ilustrada por las feroces pujas entre diversas concepciones de la economía, la sociedad y la política, parecía haber llegado a su fin. Se abría una nueva época, marcada a la vez por la polarización y la fragmentación social, así como por la hegemonía de los grupos económicos en alianza con el partido mayoritario.

Claro está que una transformación tan radical del proyecto económico exigió un cambio fundamental en las alianzas polí-

ticas del Partido Justicialista, que dejó de apoyarse masivamente sobre el actor corporativo sindical, como lo había hecho tradicionalmente, para vincularse estrechamente con los sectores dominantes representados por los grandes grupos económicos. Fue esta nueva alianza, en la que se integraron también los representantes políticos del neoliberalismo vernáculo, la que hizo posible la aplicación de la reforma del Estado, a partir del abandono de una política de concertación social y de la asunción de una gestión decisionista.

Sólo tras un período signado por la puesta en escena de las nuevas alianzas económicas (en una primera etapa el Ministerio de Economía fue asignado a un funcionario del grupo económico Bunge & Born) y por un conjunto de planes sucesivos de estabilización económica, se consolidó en el país la liberalización de la economía, a partir del Plan de Convertibilidad y la reforma del Estado. Hubo rumores de desplazamientos y renuncias, y resonantes escándalos de corrupción involucraron a personajes de la familia presidencial, pero en 1991 el régimen logró estabilizarse, con la asunción de Domingo Cavallo en la cartera económica y la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad.

En efecto, el Plan de Convertibilidad, que acompañó las reformas estructurales, produjo una verdadera transformación de las reglas de juego económicas, entre ellas, la paridad entre el dólar y el peso, la restricción de la emisión monetaria, la reducción de las barreras aduaneras, la liberalización del comercio exterior y el aumento de la presión fiscal. También fueron suprimidos los principales mecanismos de control del Estado sobre la economía, en favor de las reglas del mercado, al tiempo que se liberalizó la inversión extranjera en la Argentina.

Así, se logró salir de la espiral hiperinflacionaria aplicando una severa política de ajuste y de estabilización, complementada por una política de apertura del mercado nacional a las importaciones y las inversiones extranjeras. Esta estrategia de *shock* logró detener la hiperinflación, lo cual contribuyó a recuperar parte de la credibilidad ante los mercados internacionales, al tiempo que facilitó, en los primeros años del Plan de Convertibilidad, la recuperación económica y la reducción de la pobreza. Entre 1991 y 1994 la pobreza descendió —del 47,3% registrado en 1989, en pleno pico hiperinflacionario—, al 19,7%, pero

no volvió a los niveles de la década del 80 (Lozano:2005). Por otro lado, el incremento de la actividad económica alcanzaría el 10,6% en 1991, para ir descendiendo progresivamente a 9,6% en 1992, 5,7% en 1993 y 5,8% en 1994 (Aronskind:2001, p. 57). Asimismo, la adopción de la convertibilidad supuso el abandono de una política monetaria autónoma, lo cual acentuó la dependencia estructural del país frente al mercado internacional y sus sobresaltos coyunturales y no permitió tampoco desarrollar un nivel de competitividad suficiente (Salama:2003).

El nuevo orden impuso un modelo de "modernización excluyente", como tempranamente lo denominaron Barbeito y Lo Vuolo (1992), impulsando la dualización de la economía y la sociedad. Así, durante la década del 90, mientras que la Población Económicamente Activa (PEA) creció un 28%, el desempleo creció 156,3% y el subempleo, 115,4%. La pauta general fue el incremento de la productividad, con escasa generación de empleo y deterioro creciente de las condiciones laborales. Asimismo, el nuevo modelo modificó la inserción de la economía en el mercado mundial, ya que la apertura a las importaciones condujo a una "reprimarización de la economía": en este contexto las pequeñas y medianas empresas tuvieron grandes dificultades para afrontar la competencia externa, con lo cual las exportaciones se concentraron ahí donde sus precios se expresaban directamente en dólares (petróleo, gas, producción agrícola) y donde el valor agregado era débil o casi nulo (Salama:2003, p. 9).

En los primeros años, el cambio de modelo económico generó una situación novedosa, visible en la coexistencia de crecimiento económico y aumento de la desocupación. Sin embargo, las limitaciones propias del modelo de modernización excluyente se harían notorias a partir de 1995, momento en el cual el crecimiento se estanca, debido a una combinación de elementos externos (el "efecto Tequila") e internos (límites en la expansión del consumo interno). Así, en 1995 la proporción de hogares pobres aumentó en un 27% (Lozano:2005), revirtiendo la tendencia decreciente inmediatamente posterior a la hiperinflación de 1989. El inicio de la recesión iría acompañado por un aumento espectacular de la desocupación, que era del 6% en 1990, pero alcanzó un primer pico en

1996, de 18,8%. A partir de 1996, el país logró mejorar sus índices económicos, pero dos años más tarde, en 1998, entró en un período de recesión profunda, que se continuaría durante el breve gobierno de la Alianza, y llevaría al estallido del modelo, hacia fines de 2001. En octubre de 2001, la desocupación pasó a 18,3% y tuvo un segundo pico de 21,5% en mayo de 2002, después del colapso del modelo de convertibilidad. Mientras tanto, la pobreza saltó en 2002 al 54,3%, para descender en el segundo semestre de 2004 al 40%, muy por encima del umbral registrado a lo largo de los 90.

La "reestructuración" del Estado

El proceso de reestructuración del Estado fue crucial. Según el manual de Jones y Thompson, *"Un modelo para la nueva gerencia"*, el nuevo modelo de gestión se caracteriza por las "5 R: Reestructuración, Reingeniería, Reinvención, Realineación, Reconceptualización". La primera "R" es fundamental, pues constituye el primer paso de la secuencia. Reestructurar significa "eliminar de la organización todo aquello que no contribuye o aporta valor al servicio o producto suministrado al público, cliente o consumidor. Así, un problema de la reestructuración es la determinación de 'qué se elimina y qué se retiene' en función de los objetivos e intereses políticos de los gobiernos" (citado en Zuleta:2003).

El programa de ajuste, basado en la reestructuración global del Estado, puso en vigor una fuerte reducción del gasto público, la descentralización administrativa y el traslado de competencias (salud y educación) a los niveles provincial y municipal, así como una serie de reformas orientadas a la desregulación y privatización que impactaron fuertemente en la calidad y alcance de los servicios, hasta ese momento en poder del Estado nacional. En consecuencia, las reformas conllevaron una severa reformulación del rol del Estado en la relación con la economía y la sociedad, lo cual trajo como correlato la consolidación de una nueva matriz social caracterizada por una fuerte dinámica de polarización y por la multiplicación de las desigualdades. Por otro lado, la desregulación de los mercados,

acompañada de la introducción de nuevas formas de organización del trabajo, produjo la entrada en una era caracterizada por la flexibilización y la precariedad laboral y una alta tasa de desempleo.

Así, a lo largo de los 90, la dinámica de consolidación de una nueva matriz estatal se fue apoyando sobre tres dimensiones mayores: el patrimonialismo, el asistencialismo y el reforzamiento del sistema represivo institucional. El primer rasgo alude a las características que asumió el proceso de vaciamiento de las capacidades institucionales del Estado, como producto de la drástica reconfiguración de las relaciones entre lo público y lo privado. De manera más precisa, el patrimonialismo se vincula con la total pérdida de la autonomía relativa del Estado, a través del carácter que adoptaron las privatizaciones. Recordemos que la dinámica privatizadora envolvería vastas áreas del Estado. Agreguemos a esto que a principios de los 80, el Estado estaba presente de manera parcial o total en aproximadamente mil firmas, aunque solamente 14 de ellas (entre las cuales estaban YPF, Segba, Gas del Estado y Aerolíneas Argentinas) representaban entre dos tercios y tres cuartos del total de la actividad económica de las empresas públicas (Margheritis:2000, p. 50). Cierto es que muchas de esas empresas tenían una pobre performance económica, graves problemas de endeudamiento y prestaban servicios cada vez más deficitarios, alejándose así del propósito social que había guiado su creación. No menos cierto es que entre estas distorsiones figuraba el hecho de haberse convertido en un espacio de prebendas para el sector privado, proveedor de servicios (la llamada "patria contratista"), como de afirmación, muchas veces clientelar, de los poderosos sindicatos.

Gran parte de la estrategia de legitimación desarrollada por el nuevo gobierno y sus aliados apuntó entonces a desacreditar el rol monopólico del Estado, augurando que la libertad de mercado aseguraría la eficiencia y la modernización, sin necesidad de que se implementaran los controles propios que requería un modelo semiestatista, estancado y corrupto. Sin embargo, la forma que adoptó el proceso de privatizaciones estuvo lejos de corresponderse con las altisonantes declaraciones que postulaban la asociación natural entre democracia, merca-

do y globalización. Antes bien, el proceso de privatizaciones implicó la destrucción de las capacidades estatales, así como la constitución de mercados monopólicos, paradójicamente favorecidos por la propia protección estatal, que terminaron de asegurar, por medio de condiciones ventajosas de explotación, la obtención de una "rentabilidad diferencial" (Notcheff:1998; Basualdo:2000). Una de las claves del período, a saber, la rápida conformación de un nuevo entramado económico, suerte de "comunidad de negocios" (Basualdo:2002) entre grupos económicos nacionales y empresas trasnacionales, asociados en la adquisición de empresas estatales privatizadas, fue posible gracias a la corrupción y cooptación de la clase política local —como lo reflejan los grandes escándalos denunciados a lo largo de una década—, así como por la fuerte imbricación preexistente entre el equipo económico rector, con los grupos privados. Por último, no hay que olvidar que durante el proceso de privatizaciones, el Estado generó nuevas normas jurídicas, que favorecieron la implantación de capitales extranjeros, al tiempo que garantizaban la aceptación de la normativa creada en los espacios transnacionales, como el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.

En segundo lugar, en la medida en que las políticas en curso implicaron una redistribución importante del poder social (generando un contingente amplio y heterogéneo de "nuevos perdedores"), el Estado se vio obligado a reforzar las estrategias de contención de la pobreza, por la vía de la distribución —cada vez más masiva— de planes sociales y de asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas y movilizadas. Ciertamente, recordemos que desde fines de los 80 la acción estatal se encaminó a reformular la relación con las poblaciones más desfavorecidas por medio de una acción política más localizada y barrial, orientada a la gestión de las "necesidades básicas insatisfechas". De esta manera, el pasaje de la fábrica al barrio fue consolidándose a partir de la articulación entre políticas sociales focalizadas y organizaciones comunitarias: los primeros ensayos de asistencia alimentaria (impulsada por el gobierno radical y los diferentes gobiernos provinciales, en manos del justicialismo, a fines de los 80), fueron seguidos por una política

de ayuda social que incluiría la salud y la infancia. Estos procesos reorganizaron la política en función del mediador barrial, encargado de la organización y distribución de recursos alimentarios, cuya expresión paradigmática serían las "manzaneras", en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, durante la segunda mitad de los 90, en ausencia de estrategias de creación masiva de ocupación formal, los gobiernos argentinos se abocarían a implementar de manera más sistemática una serie de programas de emergencia ocupacional —que contemplaban la entrega de subsidios monetarios a cambio de una contraprestación laboral en proyectos de interés público o social—, destinados a contener, al menos parcialmente, a aquellos que quedaban excluidos del mercado de trabajo y se movilizaban a través de las incipientes organizaciones de desocupados. Los sucesivos programas nacionales, como el Plan Trabajar (I, II y III, del Estado nacional) y los planes provinciales, como el Barrios Bonaerenses, así como más cercanamente los actuales Planes Jefas y Jefes de Hogar, han sido instrumentos característicos de estas estrategias asistenciales.

En tercer y último lugar, el Estado se encaminó hacia el reforzamiento del sistema represivo institucional, apuntando al control de las poblaciones pobres, y a la represión y criminalización del conflicto social. Así, frente a la pérdida de integración de las sociedades y el creciente aumento de las desigualdades, el Estado aumentó considerablemente su poder de policía, lo cual trajo como consecuencia un progresivo deslizamiento hacia un "Estado de Seguridad". Ese rasgo, que actualmente configura las democracias latinoamericanas, no debería ser desvinculado de la emergencia de nuevas fronteras político-jurídicas, en relación, entre otras cosas, al tratamiento de la conflictividad social que apunta a la criminalización de diversas categorías sociales, desde jóvenes pobres y minorías extranjeras, hasta organizaciones político-sociales movilizadas.

EL IMPACTO DEL PROCESO DE PRIVATIZACIONES

En rigor, el proceso de reestructuración del Estado mediante las privatizaciones tuvo dos etapas. La primera se extendió desde la asunción de Menem hasta principios de 1991 y abarcó la transferencia a manos privadas de la empresa telefónica (Entel) y los transportes aéreos (Aerolíneas Argentinas), ambos convertidos en casos ejemplares. También en esta primera fase se dio inicio a otras privatizaciones, concluidas más adelante, que incluyeron la red vial, canales de televisión, radios, áreas petroleras, polos petroquímicos y líneas de ferrocarriles. Esta primera ola de privatizaciones fue acompañada por fuertes conflictos laborales, entre los que se destacaron las movilizaciones de los trabajadores telefónicos y las de la comunidad de San Nicolás, ligada a la empresa Somisa. Por su parte, la segunda etapa, según consigna Margheritis (2000, pp. 54-55), abarcó "la privatización del servicio eléctrico, gasífero, de agua y cloacales, así como también el resto de los ferrocarriles, las áreas petroleras remanentes, las firmas siderúrgicas, alrededor de 500 edificios públicos, la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, algunos hoteles, fábricas militares, la junta nacional y los elevadores portuarios de granos, el mercado de hacienda y el hipódromo. En 1994 concluyó la reforma del sistema nacional de seguridad social y la transferencia de transporte marítimo, la caja nacional de seguro y la corporación agrícola nacional. Dada sus especificidades y su ubicación temporal, la venta de YPF puede ser considerada un caso intermedio, pues reúne características de ambas etapas del proceso privatizador". Esta segunda fase estuvo menos marcada por los conflictos sindicales que la primera, entre otras cosas debido a que el Estado prometió la distribución de acciones a los trabajadores, garantizando —en ciertos casos— una participación de los sindicatos en el proceso de privatización (Torre:1998, p. 76). Asimismo, necesario es decir que a partir de 1991, las expectativas económicas ya eran otras, pues el plan de estabilización implementado por Cavallo había logrado detener la inflación y no eran pocos los argentinos que habían interiorizado un discurso crítico —y hasta vergonzante— respecto del rol del Estado, adhiriendo al consenso neoliberal.

El impacto social del desguace del Estado sobre el empleo fue devastador. En cifras absolutas, si se consideran sólo las siete empresas más importantes del sector (teléfonos, correos, transporte aéreo, gas, agua, energía y transporte ferroviario), hacia 1985 había 243.354 empleados del sector público. En 1998, se habían reducido a 75.770 (Duarte:2002, p. 71). Por lo general, los despidos masivos se combinaron con planes de retiro más o menos compulsivos, implementados en un lapso muy breve, durante el período previo a la privatización, cuando las empresas eran declaradas "sujetas a privatización". De esa manera, se habilitaban planes draconianos de racionalización, en manos de todopoderosos interventores que respondían directamente al Poder Ejecutivo. Así, entre 1991 y 1992, la reducción del empleo perjudicó nada menos que a 100.000 trabajadores del sector público (Duarte:2002, p. 75).

Es importante subrayar que este proceso afectó directa e indirectamente a comunidades enteras, como lo refleja de manera paradigmática la privatización de las empresas productivas del Estado. Ejemplo de ello es el caso de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), que desde su creación en 1922 hasta su privatización y reestructuración setenta años más tarde, fue el motor de desarrollo de varias economías regionales. Más aún, YPF, la empresa productiva estatal más grande del país, construyó un "modelo de civilización territorial" pues la modalidad de ocupación del territorio no se circunscribió a la sola explotación de los recursos naturales, sino que incluyó en todos los casos una extensa red de servicios sociales, recreativos y residenciales para el personal permanente (Rofman:1999, p. 199). En este sentido, YPF era un verdadero Estado dentro del Estado, pues el mundo laboral de la zona explotada, y de manera más extensa, el conjunto de la vida social estaban estructurados directa o indirectamente en torno de YPF.

En 1990, la empresa, que contaba con 51.000 empleados, luego de un acelerado proceso de reestructuración que incluía retiros voluntarios y despidos, pasó a tener 5600. Ello repercutió sobre la actividad económica y el empleo: por ejemplo, para el caso de Mosconi y Tartagal (provincia de Salta), el retiro de YPF en 1993 implicó una caída del 73% de la actividad petrolera, que a su vez se tradujo en una retracción del 75% en el empleo

(Svampa y Pereyra:2003). Por otro lado, la reestructuración implicó el cuasidesmantelamiento de la actividad económica de amplios sectores de la comunidad, cuyos servicios estaban orientados tanto a la empresa como al personal de YPF. Esto revela la ausencia de una estrategia de reconversión productiva en los dos niveles, esto es, respecto de la zona, integralmente dependiente de la acción territorial de YPF, y respecto de los propios trabajadores, cuya estabilidad laboral y oportunidades de vida aparecían indisociablemente ligadas —en muchos casos, desde hacía varias generaciones— a la empresa estatal. Así, en mayo de 2001, mientras que la tasa de desocupación en los aglomerados urbanos de Neuquén-Plottier era de 15,2%, en Cutral-Co y Plaza Huincul, eje de la economía petrolera del norte patagónico, alcanzaba el 32,5%. A su vez, mientras que en Salta capital la desocupación era del 17,1%, en Mosconi-Tartagal alcanzaba el 42,8% (Svampa y Pereyra:2003).

Aunque sin las dimensiones de su par petrolera, la empresa Somisa (Sociedad Mixta Siderurgia Argentina), radicada en el eje San Nicolás-Ramallo, conoció un proceso similar. Como consigna Peñalba (2000), entre 1991 y 1992, el 50% de un total de 12.000 trabajadores quedaron sin empleo. Al igual que en el caso de YPF, la reestructuración se realizó combinando retiros voluntarios y despidos. El impacto sobre la tasa de desocupación abierta en la región (16%, de los cuales el 80% eran despedidos de Somisa), así como sobre la de subocupación (13%) son más que elocuentes. Asimismo, las consecuencias de este proceso se hicieron visibles en el aumento de la proporción de empleo precario y en negro. Aquí también la ausencia de una planificación y una estrategia de reconversión económica hizo que parte de las indemnizaciones desembocara en emprendimientos comerciales individuales (kioscos, remiserías) o fuera destinada al consumo y adquisición de bienes (compra de automóviles, casas). Poco tiempo después, gran parte de los comercios bajaron las cortinas, parte de los bienes fueron vendidos, y la desocupación comenzó a trepar a tasas muy superiores respecto del resto del país.

Por otro lado, el proceso de ajuste y reestructuración desbordó la esfera del Estado, para alcanzar la totalidad del mercado de trabajo, por medio de un conjunto de reformas laborales

que implicaron la "reformulación de las fronteras internas del trabajo asalariado" (Palomino:2005). Dichas reformas trajeron aparejado el desmantelamiento del marco regulatorio anterior, fundado en los derechos del trabajador y el poder de negociación de los sindicatos.

Así, la implementación de un modelo de acumulación flexible produjo una estructuración diferente del mercado de trabajo, reflejada en la multiplicación de las formas de contratación (empleo autónomo, tercerización, subcontratación, trabajos temporarios). Ello se hizo efectivo en 1991, gracias a la sanción de la ley 24.013 o "Nueva Ley de Empleo", que conllevó un cambio en el modo en que el Estado intervenía en la relación capital-trabajo. La ley reconocía la emergencia laboral al tiempo que planteaba una doble estrategia: por un lado, la flexibilización del contrato de trabajo formal y la creación de "nuevas modalidades de contratación", destinadas a facilitar la entrada y salida del mercado de trabajo; por el otro, el desarrollo de políticas sociales compensatorias. Esta ley redujo asimismo los aportes patronales a la seguridad social, modificó las normas sobre accidentes y enfermedades laborales y creó un seguro de desempleo que cubría sólo ciertos sectores del mercado formal. Las reformas incluyeron también un decreto que incentivaba la descentralización de la negociación colectiva y otro que implementó el aumento por productividad. De esta manera, en la década del 90, el llamado "costo laboral" bajó un 62%, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo. Por otro lado, se observó también un notorio aumento del empleo no registrado, que pasó del 26,5% en 1990, al 35% en 1999 (Beccaria:2002), y del subempleo, que en 2001 alcanzaba el 16,3% (Indec). Pese a las críticas programáticas, esta política laboral encontró continuidad durante el breve gobierno de la Alianza, con la promulgación de la polémica ley de flexibilización laboral, que vino así a confirmar el cambio de las reglas de juego en las relaciones entre el capital y el trabajo.

En fin, la precarización laboral fue acompañada por nuevas formas de contratación, las cuales se difundieron de manera vertiginosa por medio de los contratos de "prestación de servicios" (tanto en el ámbito privado como en el público), y la derivación a terceros o externalización (extendida sobre todo en el

sector industrial y las nuevas áreas de comercialización). Una de las consecuencias de este fenómeno fue la emergencia de un "derecho del trabajo de segundo tipo" (Palomino:2005), que afectó la capacidad de representación y de reclutamiento del movimiento sindical. Más aún, estas transformaciones, operadas en un contexto de ajuste del gasto público y de desindustrialización, aceleraron notablemente el proceso de quiebre del poder sindical, reorientando sus fines y limitando su peso específico dentro de la sociedad, y acentuaron el proceso de territorialización de las clases populares, visible en el empobrecimiento y la tendencia a la segregación socio-espacial.

MODERNIZACIÓN EXCLUYENTE Y ASIMETRÍAS REGIONALES

El doble proceso de modernización y exclusión que afectó al sistema económico nacional se reprodujo en cada una de las regiones que lo integran (Rofman:1999, p. 228). En este sentido, la política de apertura económica significó el desmantelamiento de la red de regulaciones que garantizaban un lugar a las economías regionales en la economía nacional. Como afirman Vaca y Cao (2004, p. 76), esta política traducía una manera diferente de concebir el espacio geográfico nacional, que desplazaba la idea de un modelo global de territorio subsidiado desde el Estado nacional, a la de "territorio eficiente". En consecuencia, la viabilidad o inviabilidad de las economías regionales pasó a medirse en función de la tasa de rentabilidad. Dicha política mantuvo las asimetrías regionales preexistentes, al tiempo que conllevó la crisis y desaparición de actores sociales vinculados al anterior modelo (economías regionales ligadas a empresas estatales, pymes, minifundios) y en muchos casos condujo a la reprimarización de la economía, a través de la expansión de enclaves de exportación.

Así, una mirada nacional del impacto que tuvieron el ajuste y la puesta en marcha del modelo neoliberal requiere sin duda dar cuenta de sus dimensiones regionales. Para ello, podemos tomar el informe del PNUD (2002), el cual establece tres grandes zonas económicamente diferenciadas: en primer lugar, un *Área central*, de gran desarrollo económico, que se caracteriza

por la existencia de "economías urbanas de servicio" (ciudad de Buenos Aires), así como por la existencia de "estructuras económicas de gran tamaño y diversificación" (provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe). Aquí, el proceso de modernización excluyente desembocó en una dinámica de desindustrialización, que fue acompañada por la concentración creciente de la actividad económica en manos de grupos privados y empresas multinacionales. Ciertamente, el proceso de reforma estructural impulsó una dinámica de fragmentación y expulsión que terminó arrastrando a sectores fuertemente asalariados e integrados al mercado formal, además de otras franjas de trabajadores vinculados al trabajo informal.

En segundo lugar, el informe alude a un *Área mixta*, conformada por las provincias patagónicas (a excepción de Río Negro), caracterizadas como "estructuras productivas basadas en el uso intensivo de recursos no renovables". Lo notorio aquí es la presencia de grandes empresas multinacionales, beneficiadas por el proceso de privatización, vinculadas a la explotación de hidrocarburos. Estas provincias, que presentan una baja densidad poblacional y un ingreso per cápita mayor que el de otras provincias, sufrieron sin embargo los efectos del pasaje de un modelo de "civilización territorial" (como el que encarnaba YPF), a un esquema de explotación más asociado a una economía de enclave, ligada a las exportaciones, cuyos beneficios difícilmente llegan a derramarse sobre el conjunto de los actores sociales de la zona (Rofman:1999).

En tercer lugar, se encuentran las provincias del *Área periférica*, que se mantienen rezagadas en términos de crecimiento económico, más allá del desarrollo de ciertas áreas marginales, ligadas a la expansión de la frontera agrícola (producción de soja transgénica) y minera (Río Negro, Catamarca), que en los últimos años ha movilizado inversiones millonarias. Estas provincias se caracterizan por un deterioro económico mayor que el de otras áreas del país, luego del decreto de desregulación de 1991, aun si uno de sus rasgos mayores es el peso (e incremento) del empleo público, como visible herramienta de control político. Entre las provincias periféricas *intermedias*, el informe incluye a Río Negro, Entre Ríos, Tucumán, Salta y La Pampa, donde se detecta la convivencia de núcleos de explota-

ción económica tradicional con desarrollos más modernos (agroindustria). En este mismo grupo, pero con índices más elevados de desarrollo humano, se incluyen Mendoza y San Luis. Por último, en el grupo de las provincias periféricas *rezagadas,* caracterizadas por fuertes rigideces en su aparato productivo, están Misiones, San Juan y Jujuy, mientras que La Rioja, Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, presentan un marcado retraso productivo y empresarial. En cuanto a Catamarca, pese a que en los últimos años presenta un desarrollo minero importante, el modelo de explotación económica sigue la línea típica de una economía de enclave.

En cuanto a las fuertes asimetrías regionales existentes, el informe citado señala que "las dos jurisdicciones de mayor envergadura (provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires) dan cuenta del 59% del total de producto bruto geográfico. Les siguen, en dimensión económica, las provincias de Córdoba y Santa Fe —alrededor de un 8% del total, cada una— y Mendoza, con una participación de casi 4%. Estas cinco jurisdicciones, donde residía aproximadamente el 67% de la población del país, generaba cerca del 85% del producto total. El resto de las provincias (19), aportaba el 15% del producto bruto interno y cada una de ellas tenía una dimensión económica inferior al 10% de la provincia de Buenos Aires" (PNUD:2002, p. 32).

Por otro lado, tengamos en cuenta que el proceso de modernización excluyente implicó la introducción de un nuevo modelo agrario, que trajo aparejados grandes cambios en los sistemas de organización y explotación tradicionales. Cierto es que el nuevo modelo trajo consigo aumentos importantes de la producción y la productividad. Pero, asimismo, esta política afectó severamente a pequeños y medianos propietarios, favoreciendo la concentración de la producción en unidades de mayor tamaño (Teubal y Rodríguez:2001, pp. 75-76). En realidad, es posible distinguir tres procesos que, en gran medida, reflejan en sus diferentes aspectos las dimensiones inherentes al modelo neoliberal aplicado al sector agrario argentino. Así, en primer lugar durante los primeros años de la década del 90, el discurso oficial se centró en dos ejes: la modernización, mediante la incorporación de nuevas tecnologías, y la competitividad, mediante la producción en gran escala. El modelo estimulaba

al pequeño productor a endeudarse, o bien a ceder (vender o alquilar) la tierra a los grandes productores. Una de las consecuencias de ello fue la desaparición de numerosas pequeñas y medianas unidades de producción, lo cual supuso la modificación de la estructura agraria tradicional, anteriormente basada en la convivencia entre las grandes unidades de producción y la producción minifundista (GER:2004). Al mismo tiempo, la crisis en el campo se expresó también en la expansión de la pluriactividad, pues los titulares y trabajadores de las explotaciones comenzaron a desarrollar actividades fuera de éstas (Murmis:1998, p. 230).

En segundo lugar, el proceso de apertura económica posibilitó la introducción de nuevas tecnologías (semilla transgénica, asociada a la siembra directa), que modificaron bruscamente el modelo local de organización de la producción, orientada al mercado externo. Estas innovaciones implicaron un gran desarrollo del sector agroalimentario, que incrementó notablemente la producción de soja transgénica, colocando a la Argentina entre los primeros exportadores mundiales. El salto en la producción (la "sojización" del modelo agrario argentino) se dio a fines de los 90. Actualmente, casi más del 50% de la superficie sembrada de la Argentina se cultiva utilizando las nuevas tecnologías (Bisang:2003, p. 431). Sin embargo, el impacto social de la introducción de estas nuevas tecnologías no puede ser minimizado. Un informe elaborado por Mora y Araujo (citado en Trigo *et al.*:2002) consigna que el número de explotaciones se redujo un 32%, de 176.000 a 116.000, con un incremento en la superficie media, que pasó de 243 a 357 hectáreas. Asimismo, las técnicas de siembra directa disminuyeron entre un 28 y un 37% el uso de mano de obra (GER:2004, p. 112), lo que generó un fuerte éxodo de la población.

En tercer lugar, en los últimos años se ha registrado la expansión de las fronteras agropecuarias y mineras, pues esas actividades tienden a radicarse en las áreas marginales del país. Así, entre 1993 y 1999, la superficie total sembrada de soja creció casi un 50%; pero en Entre Ríos se incrementó en un 309%, y en Santiago del Estero, en un 161% (Bisang:2003, p. 416). Estos procesos afectan sobre todo a los campesinos y a las comunidades indígenas, quienes "ven tambalear sus derechos legales o

consuetudinarios" y están en el origen de desalojos violentos, llevados a cabo por los nuevos y viejos inversores —como las empresas sojeras o los ingenios azucareros (GER:2004)—, en muchos casos con la connivencia de poderes locales y/o provinciales.[1] Por último, recientemente, la expansión de la frontera minera, llevada a cabo por empresas trasnacionales, ha generado múltiples movilizaciones multisectorales en defensa del hábitat, que cuestionan el desarrollo de la minería tóxica.

* * *

Durante la década del 90 asistimos al final de la "excepcionalidad argentina" en el contexto latinoamericano. Más allá de las asimetrías regionales y de las jerarquías sociales, esta "excepcionalidad" consistía en la presencia de una lógica igualitaria en la matriz social, la que iba adquiriendo diferentes registros de significación e inclusión a lo largo del tiempo. Así, en términos generales, esto aparecía ilustrado por la confianza en el progreso social indefinido, asociado a la fuerte movilidad social ascendente; en términos más específicos, la "excepcionalidad" fue incluyendo fuertes referencias a un modelo de integración, favorecido por la existencia de un Estado Social, más allá de sus imperfecciones o disfuncionamientos (modelo nacional-popular); por último, la "excepcionalidad" involucraba tanto a las clases medias, consideradas como "el agente integrador" por excelencia, como a un sector significativo de las clases populares, cuya incorporación en términos de derechos sociales se había realizado durante el primer peronismo.

Las transformaciones de los 90 desembocarían en un inédito proceso de "descolectivización" (Castel:1995 y 2000) de vastos sectores sociales. Retomamos el término "descolectivización" para hacer referencia a la pérdida de los soportes colectivos que configuraban la identidad del sujeto (sobre todo, referidos al mundo del trabajo y la política) y, por consiguiente, a la entrada en un período de "individualización" de lo social.

En consecuencia, en pocos años, la cartografía social del país varió considerablemente. Al ritmo de las privatizaciones, la desindustrialización y el aumento de las desigualdades sociales,

el paisaje urbano también reveló transformaciones importantes. Al empobrecimiento visible de importantes centros regionales, anteriormente prósperos, algunos de los cuales, luego de la privatización pasaron a ser verdaderos "pueblos fantasmas" o "enclaves de exportación", hay que sumarle la imagen desoladora que presentaría cada vez más el cordón industrial de las áreas centrales, como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, convertidas en verdaderos cementerios de fábricas y de pequeños comercios, parcialmente reemplazados por cadenas de shoppings e hipermercados.

Así, durante los años 90, un enorme contingente de trabajadores fue expulsado del mercado de trabajo formal, mientras que otro sufrió las consecuencias de la precarización o buscó refugio en las actividades informales, como estrategia de sobrevivencia. En este sentido, tanto los ejemplos de YPF como el de Somisa, referidos más arriba, reflejan acabadamente el proceso de descolectivización y desincorporación producido por el colapso de los marcos sociales y laborales que acompañó a la privatización de las empresas públicas. En fin, este proceso incluyó también la destrucción de las identidades individuales y sociales, afectando muy especialmente los contornos tradicionales del mundo masculino. La dinámica afectó a gran parte de los jóvenes procedentes de los sectores medios y populares, que en muy pocos casos pudieron desarrollar algún tipo de vinculación con el mundo del trabajo, distanciados al mismo tiempo de las instituciones políticas y educativas.

Esos factores impulsaron la entrada de las mujeres en el mercado laboral. Esto fue particularmente notorio dentro de los sectores populares, donde las mujeres en muchos casos debieron asumir la responsabilidad de buscar los recursos que aseguraran la subsistencia mínima, mediante el trabajo doméstico o la labor comunitaria.

La descolectivización fue abarcando diferentes categorías sociales, desde grupos considerados como "pobres estructurales" —con una trayectoria marcada por la vulnerabilidad social y la precariedad laboral—, pasando por amplios segmentos de la clase trabajadora industrial, que hasta hacía poco tiempo habían contado con trabajo más o menos estable, hasta sectores de clases medias empobrecidas, cuyas oportunidades de vida

se habían reducido drásticamente en el último decenio. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que en la sociedad argentina no había redes de contención ni centros de formación o reconversión laboral, ni tampoco el Estado se propuso desarrollarlos a cabalidad, a la hora de aplicar crudas medidas de flexibilización o despidos masivos. En realidad, el tejido comunitario de la sociedad argentina preexistente, aunque incipientemente desarrollado en los 80, aparecía como insuficiente —y demasiado permeado por los intereses del Partido Justicialista o por los vínculos tradicionales y jerárquicos propios de las provincias periféricas— en la tarea de amortiguar el peso de tantas caídas.

La modernización excluyente se manifestó también en el campo argentino, en la desarticulación de la estructura agraria tradicional (reducción ostensible de unidades pequeñas y medianas de producción), y su reemplazo por una nueva estructura productiva en la región pampeana, basada en la aplicación de biotecnología, marcada por la concentración económica. Más recientemente, dicho proceso encuentra continuidad en la expansión de las fronteras de recursos naturales, tanto agropecuarios como mineros, en las llamadas áreas marginales (las provincias periféricas), donde se registra un comportamiento similar de los grandes agentes económicos (economías de enclave), a lo cual se añade una estrategia de desalojos y cercamiento de tierras, en detrimento de las poblaciones campesinas e indígenas, así como la amenaza del hábitat y la biodiversidad.

En fin, la modernización excluyente fue adoptando formas territoriales cada vez más radicales, ilustradas de manera emblemática por el proceso de autosegregación de las clases medias superiores, a través de la expansión de las urbanizaciones privadas (*countries*, barrios privados), así como por la segregación obligada de un amplio contingente de excluidos del modelo, reflejada en la multiplicación de las villas de emergencia y los asentamientos.

Capítulo 2

Mutaciones de la política y modelo de dominación

En la construcción de la soberanía presidencial hay una puesta en escena del poder y esta puesta en escena es necesaria para el mantenimiento de la unidad de la sociedad nacional. Se trata de un sistema en el cual el soberano es, en mucho, alguien sin poder (ni siquiera es un árbitro) y sin embargo la puesta en escena del poder se hace necesaria para la producción del campo en el cual coexisten y se confrontan unos y otros.

Gerard Althabe,
"Détour pour Buenos Aires".

Globalización y nueva dependencia

En líneas generales, la globalización puede ser considerada como un proceso de superación de las fronteras políticas, sociales y económicas, lo cual está en el origen de la transformación del Estado nacional y la emergencia de nuevas formas de soberanía, así como de una nueva articulación entre economía y política (Altvater:2000).

En efecto, este proceso implicó el desmantelamiento de los marcos de regulación colectiva desarrollados en la época fordista y la afirmación de la primacía del mercado, en función de las nuevas exigencias del capitalismo. Al mismo tiempo, esto supuso un debilitamiento del Estado nacional como agente regulador de las relaciones económicas, así como el surgimiento de nuevas fronteras y, en el límite, de nuevas formas de soberanía, más allá de lo nacional-estatal (nuevos bloques económicos y políticos regionales). Todo ello trajo aparejada una nueva división del trabajo internacional, que benefició muy especialmente a las naciones desarrolladas, al tiempo que potenció las asimetrías existentes entre las naciones del Norte y del Sur.

Lo anterior no implica desconocer la gravedad de la crisis que, a fines de los 80, atravesaban los países latinoamericanos, y la Argentina particularmente, que daba cuenta del agotamiento del modelo de acumulación anterior, visible en la crisis fiscal del Estado, el creciente endeudamiento externo y la entrada en un contexto de alta (e híper) inflación. Sin embargo, como ya hemos señalado en la introducción, el reconocimiento del agotamiento del modelo de acumulación anterior no significaba de por sí que la única solución a la crisis fuera la salida neoliberal.

En realidad, en América Latina, la entrada en nuevo orden socio-económico implicó la conjunción de dos procesos diferentes: por un lado, la profundización de la trasnacionalización de la economía; por el otro, la reforma drástica del aparato estatal, que produjo el desmantelando del marco regulatorio del régimen anterior. Este doble proceso, que atravesó en gran medida el conjunto de los países latinoamericanos, desembocó en la institucionalización de una *nueva dependencia*, cuyo rasgo común sería la exacerbación del poder conferido al capital financiero, por medio de sus principales instituciones económicas (FMI, Banco Mundial). En este nuevo escenario, la economía se separó y autonomizó, disociándose bruscamente de otros objetivos, entre ellos, la creación de empleo y el mantenimiento de un cierto estado de bienestar, ejes del modelo de acumulación anterior.

Esos procesos resultaron ser más destructivos en la periferia globalizada que en los países desarrollados, en donde los dispositivos de control público y los mecanismos de regulación social suelen ser más sólidos, así como bastante más amplios los márgenes de acción política de los propios Estados nacionales. En fin, como hemos visto en el capítulo anterior, en estas latitudes el proceso de "reestructuración" del Estado fue crucial. En realidad, antes que "extinguirse" o manifestarse como un fenómeno "residual", el Estado fue reformulado y reapareció bajo nuevos ropajes (la triple dimensión: patrimonialismo, asistencialismo y reforzamiento del sistema represivo institucional).

En consecuencia, en diferentes países periféricos se impuso un esquema de crecimiento económico disociado del bienestar del conjunto de la sociedad, esto es, una "sociedad excluyente", modelo donde convergen modernización económica y dinámica de polarización social.[2] Sin embargo, la modalidad

efectiva que adoptaron las llamadas reformas estructurales en cada país no fue ajena a los diferentes arreglos políticos, ni al peso de la cultura institucional existente (Torre:1998). Así, en América Latina, estos procesos se apoyaron y, en consecuencia, terminaron por reforzar la tradición hiperpresidencialista existente. En algunos casos, como el argentino, la confluencia de una tradición hiperpresidencialista y una visión populista del liderazgo (marcada por la subordinación de los actores sociales y políticos al líder), aceleró la desarticulación de lo económico respecto de lo social, al tiempo que garantizó el proceso de construcción política de una suerte de "nueva soberanía presidencial", frente al vaciamiento de la soberanía nacional.

Estos procesos no tuvieron un carácter unívoco: aun en el contexto de la nueva dependencia, la afirmación de un nuevo orden socio-económico debe ser pensada en su dimensión contingente y conflictiva, como resultado de la convergencia y radicalización de los factores mencionados más arriba, esto es, entre las nuevas presiones del capital por la apertura de los mercados y la exacerbación del capital financiero; entre la crisis del Estado nacional-popular y el shock hiperinflacionario; entre el peso de la tradición presidencialista y la eficacia del legado populista.

En fin, estos cambios trajeron aparejadas grandes transformaciones de la política, que fueron configurando un modelo de dominación apoyado sobre tres ejes centrales: el primero, la sumisión de la política a la economía; el segundo, la consolidación de una democracia presidencialista fuertemente decisionista; el tercero, el desarrollo de nuevas estructuras de gestión, que condicionaron el hacer político tanto "desde arriba" como "hacia abajo". En lo que sigue, nos proponemos analizar algunas de las dimensiones más relevantes de este nuevo modelo de dominación política.

La sumisión de la política a la economía

El primer rasgo y tal vez el más notorio del "modelo argentino" fue sin duda el alcance que tuvo la subordinación de la política a la economía, como resultado del reconocimiento de la "nueva relación de fuerzas".

Esa pérdida de autonomía de la política con relación a la economía puede ser leída en dos niveles diferentes. En primer lugar, la primacía de la economía adoptó distintos registros de inflexión. El primero aparece reflejado en la retórica de Menem, quien desde sus comienzos adoptó un discurso que aceptaba la pérdida de autonomía de la política, al hacer hincapié en la urgencia de la crisis o "la situación desesperada". Esta estrategia de legitimación tenía dos objetivos mayores: por un lado, subrayar el carácter ineluctable de las reformas, para desactivar las críticas al nuevo programa; por el otro, hacer desaparecer el carácter político de la decisión.

En efecto, al subrayar la imposibilidad de rehuir las nuevas restricciones estructurales, reconociendo y aceptando de entrada la pérdida de autonomía de la política, la estrategia tendía a despolitizar las decisiones, restándoles su carácter contingente, producto de una situación de conflicto, al tiempo que enfatizaba el carácter unívoco del camino emprendido para encarar las reformas. Como veremos en el próximo apartado, el correlato de esta estrategia de borramiento de la política fue que el espacio de la decisión pasó, en mucho, a estar concentrado en la autoridad presidencial y su entorno.

En segundo lugar, la subordinación de la política a la economía condujo a una naturalización de la globalización, en su versión neoliberal. En este sentido, gran parte del establishment político se esforzó en dar por sentada la identificación entre orden liberal y nueva dinámica globalizadora, naturalizando, por ende, la nueva dependencia.[3] En términos de Beck (2000), esta visión implicaba una confusión entre "globalización" (reconocimiento de que la globalización es un dato de la realidad), y el "globalismo", que es una ideología, que consiste en la creencia en la regulación automática por sobre los mercados y en la renuncia a cualquier intervención política de relevancia sobre el terreno de lo social.

No obstante, el argumento que colocaba como dato insoslayable la primacía de la economía, sería utilizado a lo largo de la década de los 90, en un claro vaivén que iba del "fatalismo" oficialista, dentro de los márgenes del "pensamiento único", al "posibilismo" de la llamada oposición progresista, que llegaría al gobierno en 1999. Más aún, una vez superada la crisis hipe-

rinflacionaria y lograda la estabilización mediante la estrategia de shock y la convertibilidad de la moneda nacional al dólar, la tendencia a naturalizar la asociación entre globalización y neoliberalismo, reafirmando la existencia de una "vía única", pareció encontrar una confirmación en la ausencia de un verdadero programa alternativo. No por casualidad esta estrategia de despolitización del espacio de la decisión tuvo como corolario el borramiento de los antagonismos, anteriormente constitutivos de la política argentina. En efecto, la adhesión al Plan de Convertibilidad, transformado en piedra basal de la sociedad y nuevo dogma de los argentinos, contribuyó notoriamente a desdibujar las identidades y divisiones políticas, creando esa suerte de "consenso blando" (Chereski:1995) que dominaría gran parte de la vida institucional argentina durante los 90.

Lo dicho aparece reflejado en la oposición que se iría gestando desde 1993-94, a partir de la emergencia de un eje de centro-izquierda, primero el Frente Grande, luego Frepaso (Frente por un País Solidario), liderado por ex peronistas como Carlos "Chacho" Álvarez, cuyas críticas harían hincapié menos en el modelo económico (esto es, en la propuesta de una nueva alternativa) que en la falta de transparencia en el funcionamiento de las instituciones, como causa fundamental de la gran corrupción existente. Mas tarde, el frente constituido por la Unión Cívica Radical y el Frepaso —la "Alianza"— insistiría en la existencia de una "deuda social" (visible en el aumento del desempleo y la pobreza), ligada más a los "efectos colaterales" (esto es, no deseados) del modelo económico, que a las propiedades estructurales del mismo. De este modo, las posibles reformas políticas encontraban un umbral, suerte de punto ciego —esto es, de no discusión— en la defensa de la convertibilidad de la moneda, aun cuando ya eran claramente visibles sus efectos recesivos. Recordemos que el mismo Álvarez, antes de devenir vicepresidente de la Nación, se vio en la obligación de realizar una autocrítica,[4] al reconocer que se había equivocado "en no votar la Ley de Convertibilidad". De esta manera, luego de una década de menemismo, el discurso aliancista dejaba incólume el tema de la convertibilidad monetaria y condensaba su "promesa política" en dos ejes, la democratización de la política social y la depuración de las instituciones.

La inocultable rigidez del modelo estaba vinculada a las proporciones que tomó la nueva dependencia, a través de la reducción del espacio de la política y la centralidad de los mandatos económicos; pero también al efecto traumático e inhibidor de la hiperinflación en los comportamientos sociales de los argentinos. Así, con el correr de los años, transformada en imperativo categórico, la "convertibilidad" funcionaba no sólo como el máximo principio de regulación de la sociedad post-inflacionaria, sino, en el límite, como único principio de legitimidad en medio de la recesión económica y la inestabilidad de las posiciones sociales. Sacralizada por unos y por otros, se expresó en la rigidización de las conductas, lo cual no hizo más que potenciar la dinámica perversa del modelo.[5] Un ejemplo de ello es la justificación que aportan los propios protagonistas, luego del estallido del modelo y el colapso del gobierno de la Alianza: por lo general, el relato adquiere el tono de una tragedia griega, como si los actores hubiesen caído presos de una lógica superior que terminaría por conducirlos inevitablemente a un final de catástrofe.

En resumen: una de las declinaciones más importantes de la época es la forma particular que adoptó la sumisión de la política a la economía. Si bien es cierto que dicha sumisión tuvo su expresión en un acto único (el viraje neoliberal, realizado en 1989), que hizo hincapié en el argumento de la crisis y la situación desesperada, ésta se fue construyendo y prolongando en movimientos sucesivos, mediante los diferentes arreglos políticos e institucionales. Finalmente, lo que al inicio de la década apareció, en medio de una crisis mayor, como una aceptación de la pérdida de autonomía de la política, mezcla de *realpolitik* con *aggiornamento* de la propia clase política, a lo largo de una década de convertibilidad, terminó por convertirse, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, en una suerte de *horizonte insuperable*, anclado en la sola certeza de la estabilidad de la moneda.

EL GIRO PRESIDENCIALISTA: ENTRE EL DECISIONISMO Y EL PERSONALISMO

Pese a su reconocida subordinación al "nuevo orden económico", la década del 90 no implicó en absoluto una evacuación de la política. En realidad, este proceso fue acompañado por una práctica política decisionista, así como por la consolidación de un tipo de liderazgo personalista. Veamos entonces ambas inflexiones.

De manera general, el decisionismo es un estilo político en el cual el líder interviene como autoridad soberana y fuente absoluta de la decisión política.[6] Ahora bien, la construcción del espacio de la soberanía presidencial —decisionismo mediante—, aparece como el sustituto de un centro estatal vaciado. Como afirma Althabe (1998), citado en el epígrafe de este capítulo "en la construcción de la soberanía presidencial hay una puesta en escena del poder y esta puesta en escena es necesaria para el mantenimiento de la unidad de la sociedad nacional. Se trata de un sistema en el cual el soberano es en mucho alguien sin poder (ni siquiera es un árbitro) y sin embargo la puesta en escena del poder es necesaria para la producción del campo en el cual coexisten y se confrontan unos y otros".[7]

En términos institucionales, el proceso de construcción de la soberanía presidencial aparece ilustrado por los decretos de "necesidad y urgencia" que la Constitución habilita para el caso de las "situaciones extraordinarias", y en el uso del veto presidencial. Como lo confirmarían las palabras de Menem, "el decreto es la forma ejecutiva de mandar".[8] El resultado fue así la instalación de una suerte de "decretismo", que amplió las facultades del Ejecutivo, otorgándole el poder de legislar, y facilitándole, al mismo tiempo, obviar las dificultades de una confrontación democrática.

A su vez, este proceso de construcción de la soberanía presidencial fue favorecido por una democracia de tipo presidencialista, así como por la eficacia simbólica del vínculo populista. Ese modelo de gestión política se consolidó en los países latinoamericanos que cuentan con una clara tradición presidencialista y un Parlamento débil, generalmente sometido a la autoridad del jefe del partido y presidente de la república. No olvidemos,

asimismo, que el modelo presidencialista fue reforzado por la reforma constitucional de 1994 (Gargarella:2005), cuyo artículo 99 (inciso 3) amplía la facultad presidencial para sancionar decretos de necesidad y urgencia.

Por otro lado, esta situación fue promovida por la misma tendencia del propio Partido Justicialista a devenir "un sistema político en sí mismo" (Torre:1999), convirtiéndose al mismo tiempo en oficialismo y oposición. Más aún, este modelo político de gestión fue potenciado sin duda por el estilo político peronista, tradicionalmente marcado por una fuerte subordinación de los actores al líder. Ciertamente, la práctica política de Menem se caracterizó por una estrategia de concentración creciente del poder, orientada hacia el control y dominio de diferentes actores sociales: hacia adentro, con relación al partido y las corporaciones sindicales; hacia afuera, en referencia a las fuerzas militares y la oposición política. Esta práctica le permitió a Menem disciplinar vastos sectores sociales y estructurar un nuevo consenso sin tener que pagar por ello altos costos políticos, tal como lo muestran sus sucesivos triunfos electorales entre 1991 y 1995.[9]

No obstante, esta política de concentración del poder, lejos de ser un rasgo coyuntural, se prolongó en la práctica de los gobernantes que sucedieron a Menem, tanto De la Rúa (que no sólo apeló a las facultades extraordinarias, sino también al estado de sitio), como Eduardo Duhalde y, más recientemente, Néstor Kirchner. La gran cantidad de decretos sancionados por el Ejecutivo a partir de 1989 corroboran la hipótesis decisionista. Por ejemplo, en sus diez años de gestión, Menem sancionó 545 decretos (Ferreira Rubio y Goretti:1996, 2000). Por su parte, De la Rúa firmó, entre 2000 y 2001, 73 decretos. La continuidad de la política decretista se extiende hasta el presente: durante sus dos primeros años de gobierno, Kirchner dictó 140 decretos, cantidad que superó los firmados por Menem y De la Rúa en el mismo lapso (*La Nación*, 13/06/2005). Esta tendencia a la normalización del "Estado de excepción", visible en la concentración de poder en el Ejecutivo y, por ende, en la alteración de la división republicana de poderes, alcanzó dos situaciones extremas: en primer lugar, en los poderes extraordinarios otorgados a Menem durante la primera etapa de

su gobierno, lo cual le permitió implementar por decreto una política de reformas; en segundo lugar, la cesión de poderes otorgada a Cavallo, convertido en superministro en el último tramo del gobierno de De la Rúa. En fin, ello viene a demostrar, como ha señalado Agamben (2004), que en la época contemporánea el argumento más generalizado para invocar el "Estado de excepción" es menos el de la guerra (externa o interna) que la emergencia económica.[10]

El segundo rasgo asociado al nuevo estilo político es la proliferación de liderazgos personalistas. De manera general, el tipo de liderazgo personalista que se fue consolidando a partir de 1983 es diferente del liderazgo carismático, asociado a los movimientos populistas de las décadas anteriores (Martuccelli y Svampa:1997). En realidad, desde una perspectiva histórica, la nueva figura del liderazgo se halla asociada al proceso de restablecimiento del juego democrático, que fue acompañado de una crisis de representación política, ligada al debilitamiento de los cuerpos intermedios y el ingreso a una relación más directa entre el líder y sus electores. En este sentido, el "regreso" del líder se corresponde más bien a una situación de crisis social, de ingobernabilidad, de descomposición de antiguos actores sociales, incluso de anomia (Zermeño:1989). Contrariamente a la lealtad sustancial producida por los liderazgos carismáticos, estos nuevos procesos dan lugar a una serie de popularidades evanescentes y transitorias. Así, mientras que el líder carismático posee un aura particular que incorpora en el espacio político, el líder personalista es un puro efecto de una posición institucional. En otros términos, el interés por su persona es momentáneo, ligado al deseo de descubrir la "persona" detrás del rol, sobre todo, el deseo de descubrir una persona semejante a uno. La identificación es, más que nunca, con la persona-del-presidente y no, verdaderamente, con la figura del líder carismático. En consecuencia, antes que del retorno de un liderazgo carismático, el liderazgo personalista se coloca más cerca de lo que Tucker denominó "carisma de situación", un fenómeno que no está determinado por los componentes mesiánicos de la personalidad del líder, sino por un estado de *stress* agudo en la sociedad que predispone a la gente (citado en Panebianco:1990).

En resumen: mientras que el líder carismático se vincula con lo político desde la distancia en la cual lo colocan sus supuestas cualidades excepcionales, el actual líder personalista asegura una forma de vinculación gracias a la proximidad de su carácter. El líder personalista actual es un fruto de la situación: un "agente", antes que un "actor". De ahí que en algunos casos, la personalización del liderazgo pueda dar lugar a la consolidación de figuras políticas desprovistas de todo carisma político, como lo muestra el caso de De la Rúa o, aun, el de Kirchner. Como la identificación se realiza con los límites de la persona, sólo dura mientras los límites humanos se encubren detrás del prestigio de la función. El líder personalista ya no es más, entonces, un líder carismático a través del cual los sectores populares se identifican-proyectan-constituyen en el sistema político; por el contrario, en la medida en que la vida política se institucionaliza y el manejo de la economía se independiza del recambio electoral, el sentimiento de distancia respecto del sistema político requiere ser compensado (aunque sólo parcialmente) por el interés hacia la persona del líder.

Por otro lado, la consolidación de este tipo de liderazgos no puede ser disociada de la importancia que han cobrado los medios masivos de comunicación en la época contemporánea, y el impacto que esto ha causado en la concepción del vínculo político. Así, durante los 90, los liderazgos personalistas tendieron a apoyarse en una lógica más bien mediática, más que en las estructuras de base. Incluso el justicialismo privilegiaría esta lógica mediática, antes que los discursos en la plaza pública. En algunos casos, como ha sido para las nuevas "terceras fuerzas" (Frepaso, ARI), los nuevos liderazgos se apoyaron exclusivamente en la estrategia de vinculación mediática, desechando desde el inicio cualquier posibilidad de construcción o vinculación con estructuras de base. Asimismo, la mediatización del vínculo político iría acompañada por una estrategia de "contacto", ilustrado emblemáticamente por el "menemóvil", pero también por las permanentes visitas presidenciales a los asentamientos y barrios populares, que venían a ilustrar el fugaz el encuentro con las estructuras de base, ahora denominadas "gente" o "sociedad civil".[11] Y hasta Carlos "Chacho" Álvarez fue proclive a la estrategia de contacto, reflejada en aquellas salidas intempestivas

—por ejemplo, subir a un colectivo para hablar con la gente— que mostraban menos su vocación plebiscitaria, que la necesidad de evidenciar cuál era su comunidad política de referencia (la "gente", la "sociedad civil", pero no el "pueblo").

Uno de los corolarios de este proceso fue que se aceleró la desarticulación de lo político respecto de lo social, y la política se tornó cada vez más autorreferencial, es decir, se encapsuló, como lo ilustran la autonomía de los líderes y los partidos con relación al electorado y la tendencia de la llamada "clase política" a realizar acuerdos secretos, sustrayendo las decisiones políticas incluso al debate parlamentario. Este rasgo se manifestó claramente en el Pacto de Olivos, realizado entre el ex presidente radical Alfonsín y el entonces presidente Menem, el cual permitió la reforma de la Constitución que abriría el camino a la reelección de este último. La tendencia a la autorreferencialidad fue potenciada, como afirma Fréderic (2004), por la ampliación del horizonte de expectativas de la clase política que acompañó la consolidación del sistema democrático, confirmando a través de la alternancia electoral la posibilidad de desarrollar una "carrera política" de por vida.

Para autores como O'Donnell, la situación descripta más arriba daría lugar a la consolidación de "democracias delegativas" (2004), en las que la situación de crisis y emergencia socioeconómica heredada, así como la debilidad de los actores sociales, conducen al presidente a arrogarse la potestad absoluta. Este tipo de democracias se caracterizan por la falta de *accountability* (rendición de cuentas) horizontal (hacia los otros poderes y su propio partido) y vertical (hacia sus electores). Desde nuestra perspectiva, es necesario comprender que, en términos de sistema político, el período que se abre a partir de 1989 instala un vaivén constante, atravesado de tensiones y ambivalencias no siempre coyunturales, entre la afirmación decisionista y la tentación delegativa.[12]

En definitiva, la consolidación de un estilo político decisionista viene a expresar la convergencia entre una tradición hiperpresidencialista, un vínculo populista (caracterizado por la subordinación de los actores sociales y políticos al líder), y un liderazgo personalista. Ello garantizó el proceso de construcción de una suerte de "nueva soberanía presidencial", frente al vaciamiento de la soberanía nacional, que emergió así como la clave de bóveda del nuevo modelo de dominación política.

La triple inflexión de la política como "gestión"

La tercera inflexión se refiere al pasaje a un determinado modo de "hacer política" vinculado al mandato de los organismos multilaterales, que puede ser sintetizado como un nuevo modelo de gestión estatal. Las nuevas estructuras de gestión se asientan sobre tres características fundamentales: la exigencia de profesionalización, la descentralización administrativa y la focalización de la política social. A su vez, estas estructuras se nutren de un modelo de gerenciamiento, "la cultura del *management*", que se propone alcanzar una mayor eficacia mediante la reducción de los costes y la adecuación a la demanda del beneficiario, planteando una distancia crítica tanto respecto del tradicional estilo político, sospechoso de discrecionalismo y clientelismo, como del tipo burocrático clásico, desarrollado el siglo pasado por Weber (1988), considerado jerárquico y centralizado, poco "flexible" para dar respuesta a las nuevas realidades. Así, frente al primer modelo, plantea la necesidad de llevar a cabo una nueva división del trabajo político, profesionalizando las funciones; frente al segundo, postula la descentralización administrativa y la focalización en el tratamiento de los problemas, con el objeto de lograr una mayor eficiencia y "equidad".[13] Siguiendo esa caracterización, en este apartado quisiéramos hacer hincapié tanto en las transformaciones que "desde arriba" significó la introducción de dicho estilo de gestión, como en algunas de las repercusiones que tuvo "hacia abajo", en relación con los sectores populares.

En primer lugar, dentro del nuevo modelo de gestión adquiere centralidad la figura del experto. De manera general, la centralidad del saber-experto se vincula con el proceso de destradicionalización de la sociedad contemporánea, que tiene como correlato una mayor reflexividad, a la vez institucional y personal (Giddens:1991). Según esta concepción, la profesio-

nalidad y el conocimiento colocarían al experto en una posición óptima para aprehender el interés público o general y, en consecuencia, para implementar las políticas más adecuadas. Sin embargo, como afirma Bourdieu (2002, p. 448), las nuevas estructuras de dominación reflejan la convergencia entre determinadas figuras del "productor cultural" —el experto y el consejero comunicacional— con la nueva nobleza empresarial y de Estado.

Ahora bien, lo particular en el nuevo modelo es el lugar privilegiado que ha ido cobrando el experto en economía. Aunque este modelo no estuvo ausente en la Argentina en experiencias políticas anteriores,[14] recién a partir de 1989 se impondría como un mandato político inexorable. Así, "desde arriba", el énfasis en la profesionalización se vio potenciado luego del ingreso del equipo de Cavallo en la cartera económica (continuado por Roque Fernández)[15]. El reconocimiento general de este mandato aparece ejemplificado por el hecho de que, en la actualidad, cualquier político con aspiraciones electorales debe contar con —y exhibir— sus equipos técnico-económicos (Iazzetta:2000), cuya competencia suele medirse por el nombre del centro académico de referencia —universidades norteamericanas—, así como por la fluidez de sus contactos internacionales.

Por otro lado, aunque cierta literatura afirme la "autonomía relativa" del experto, el caso argentino está lejos de expresar este tipo ideal. Antes bien, el modelo argentino ha encarnado de manera acabada la vinculación orgánica entre elites tecnocráticas y mundo empresarial, como lo refleja el caso de la Fundación Mediterránea, financiada por empresas que durante la gestión de Cavallo fueron favorecidas por el proceso de privatizaciones (Iazzetta:2000, p. 400).

Así, una de las claves del período, a saber, la rápida conformación de un nuevo entramado económico, suerte de "comunidad de negocios" (Basualdo:2002), entre grupos económicos nacionales y empresas transnacionales, asociados en la adquisición de empresas estatales privatizadas, fue posible no solamente gracias a la corrupción y cooptación de la clase política local, como lo reflejan los grandes escándalos denunciados a lo largo de la década del 90. Antes bien, la fuerte imbricación entre el equipo económico y los grupos privados favoreció y potenció de manera decisiva este proceso, lo cual contribuyó a la instalación de un Estado patrimonialista.

Por último, el nuevo estilo de gestión incorporó un esquema binario o polar, que derivaba del diagnóstico que la elite tecnopolítica hacía de la crisis. Como afirman Barbeito y Lo Vuolo (1992), "los modelos teóricos que pretenden atribuir un contenido 'modernizador' al proceso de transformación en marcha, se basan en un reduccionismo que rememora las interpretaciones 'duales' del subdesarrollo económico. La construcción de imágenes interpretativas de la crisis social a partir del contraste entre partes definidas como atrasadas, que supuestamente bloquean la dinámica positiva de otras partes modernas, parece otorgarle un sentido positivo a la regresión social que se está viviendo"[16]. En consecuencia, en nombre de la eficiencia y la modernización, el léxico de los funcionarios se fue nutriendo de oposiciones binarias, de fuerte connotación excluyente, cuyo carácter performativo no puede ser denegado. Esta mirada aparece ilustrada por un conjunto de parejas de oposición, que apuntaron a contraponer lo moderno/eficiente, es decir "lo viable", propio del nuevo estilo de gestión, con lo atrasado/ineficiente, es decir, lo "no viable", atribuido al anterior estilo. Ahora bien, el "viejo estilo de gestión" englobaría nada menos que al conjunto de las empresas estatales, numerosas economías regionales y, por supuesto, la totalidad de las administraciones provinciales. En efecto, en el lenguaje dualista de los técnicos, "inviables" resultaban ser las empresas del Estado, ilustradas paradigmáticamente por el transporte ferroviario, vetusto y longevo, pese a que éste había ocupado un lugar central en el proceso de construcción de la Nación, comunicando los lugares más apartados del país, al tiempo que su nacionalización formaba parte de la simbología fundacional del peronismo. "Inviables" eran catalogadas las economías regionales que lejos estaban de poder desenvolverse de manera competitiva ante la apertura a las importaciones, y de cuya actividad dependían directa e indirectamente comunidades enteras, muchas de las cuales sufrirían un fuerte proceso de empobrecimiento, cuando no se convertirían en verdaderos "pueblos fantasmas".

Claro que, desde esta perspectiva, resultaban también "inviables" gran parte de las plantas administrativas de los Estados

provinciales, en general poco eficientes y siempre sobredimensionadas, terreno del clientelismo más variopinto. Sin embargo, el nuevo modelo de gestión encontró aquí un límite en los arreglos específicos del peronismo con los respectivos poderes provinciales. En efecto, como afirman Gibson y Calvo (2001), el ajuste a las provincias habría de llegar más tarde, luego de 1995. Esto no era, por supuesto, fruto de la casualidad histórica. En realidad, la política del gobierno nacional apuntó a sostener las estructuras clientelares en las provincias periféricas, postergando recortes en el empleo público provincial e incrementando el flujo de recursos del gobierno central a las provincias, lo cual le permitió garantizar la "gobernabilidad" que requería una política tan drástica de reformas. Una de las herramientas más habituales fueron las partidas especiales (como, por ejemplo, los Aportes del Tesoro Nacional),[17] herramientas fundamentales para contener el alza de la desocupación y el creciente conflicto en las provincias, lo cual se tradujo en un aumento del empleo público provincial, como lo muestra de manera paradigmática el caso de Santiago del Estero, intervenida a fines de 1993. En resúmen, lejos de ser un elemento ajeno a las reformas en curso, el clientelismo fue "integral a la racionalidad política de las reformas" (Gibson y Calvo:2001).[18]

Sin embargo, el nuevo estilo de decisión se aplicó sobre todo en las áreas centrales —y nacionales— de la economía argentina, mediante la implementación sistemática de una política social focalizada y la descentralización administrativa. Sus consecuencias fueron múltiples: la focalización trajo consigo una orientación hacia una política social particularista destinada a aliviar la pobreza; la descentralización, por su parte, implicó el trasvasamiento de responsabilidades administrativas del Estado nacional a los municipios y provincias.[19] Ambos procesos, piezas claves de la reforma del Estado, conllevaron una reformulación de la relación con los sectores populares, visible en la tendencia a reducir la política a la gestión de las necesidades básicas, así como en la emergencia de nuevas fronteras entre política local y acción territorial.

En efecto, en primer lugar, la focalización indicó un claro giro de la política hacia el mundo de las necesidades básicas, mediante la multiplicación de las formas de intervención terri-

torial en el mundo popular. Recordemos que los signos iniciales de este viraje comienzan a manifestarse a partir de 1987, con la implementación de las primeras políticas sociales focalizadas, destinadas a los habitantes carenciados de los barrios. El plan PAN (Programa Alimentario Nacional), lanzado en 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, es un ejemplo de ello. Sin embargo, estas nuevas estrategias de intervención social, que en los 80 encuentran desarrollos más acabados en ciertos municipios del conurbano bonaerense gobernados por el Partido Justicialista (Lomas de Zamora, Moreno, entre otros), se consolidan en el nivel provincial durante la gestión de Antonio Cafiero, para ser, finalmente, implementados en escala nacional a partir de la gestión de Menem (Prévôt Schapira:1993).

Como correlato de estas estrategias de intervención, en la década del 90 emergió un entramado político constituido por una red de nuevos militantes sociales (Fréderic:2004), fuertemente dependientes de la ayuda del Estado. El nuevo estilo de decisión generó cambios importantes en las estructuras territoriales preexistentes, tanto en las específicamente sociales o comunitarias (ONG), como en las de carácter más político (asentamientos, movimiento villero). En realidad, en un contexto de creciente precariedad y dada la ausencia de recursos financieros, gran parte de las organizaciones territoriales terminaron por perder su autonomía relativa —ya débil—, subsumidas o neutralizadas por las estructuras clientelares del Partido Justicialista.

Desde este punto de vista, el impacto de la nueva política en la identidad peronista de los sectores populares fue considerable. En efecto, "desde abajo", el peronismo perdió su carácter de contracultura política, para reducirse a una lógica de dominación, a través de las multiplicadas formas del clientelismo afectivo o las nuevas formas de la militancia social. Habría que esperar hasta 1997, esto es, hasta la emergencia de las primeras organizaciones de desocupados, para que la militancia territorial se cargara de nuevos registros políticos, a partir del cuestionamiento al sistema de "punteros" barriales implementado por el Partido Justicialista y la extracción del "trabajo social" del solo ámbito del barrio (Svampa y Pereyra:2003). Esta lógica de acción permitiría la reaparición de la política y la

emergencia de un nuevo *ethos* militante, de la mano de novedosas formas de movilización, como el corte de rutas y las prácticas asamblearias.

En resumen, la consolidación de las nuevas estructuras de gestión pondría al descubierto la emergencia de un nuevo modelo de dominación, no sólo "hacia arriba", sino también respecto de los sectores populares. "Desde arriba", su puesta en marcha se tradujo en una nueva y estrecha articulación entre elites técnicas y grupos privados, sentando las bases de lo que Basualdo llamaría, acertadamente, una nueva *comunidad de negocios*. "Hacia abajo" el nuevo modelo fue consolidando una matriz asistencial, a partir del desarrollo de estrategias de contención de la pobreza, por la vía de la distribución de planes sociales y de asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas y movilizadas. La nueva división del trabajo político apuntó también a encapsular el conflicto en los barrios y a despolitizar la figura del militante. En la medida en que la situación social se fue agravando y la política implementada por el Partido Justicialista fue contestada por nuevos actores sociales, el Estado, en sus instancias provincial y nacional, debió intervenir, tanto para desarrollar planes de contención social más vastos, como para reforzar el sistema represivo institucional, judicializando y reprimiendo el conflicto social.

Los avatares del modelo de dominación política (1989-2001)

En las páginas anteriores hemos analizado las diferentes declinaciones de la política. Cada uno de esos procesos posee una dinámica relacional compleja, atravesada de tensiones y arreglos diferentes, y a su vez, produce efectos en niveles distintos: tanto en el plano de la articulación entre lo nacional y lo global, como en la trama de la política local o en las convulsionadas escenas provinciales.

A lo largo de los 90, los diversos componentes y procesos, complementarios entre sí, fueron configurando los contornos de un nuevo modelo de dominación política; el mismo que, con ciertas variantes y pese al cambio de escenario político, aún hoy, en 2005, impera en la Argentina. La hipótesis de la conti-

nuidad del modelo de dominación política en el marco de la nueva dependencia no justifica, empero, ignorar la diversidad de los estilos políticos que se han venido manifestando en los últimos quince años. Así, en lo que se refiere al período analizado aquí (1989-2001), el modelo de dominación política encontró una nueva inflexión durante el breve y colapsado gobierno de De la Rúa. Veamos brevemente cuál fue su dinámica entre 1999 y 2001.

En primer lugar, la subordinación de la política a la economía se expresó de manera dramática, en medio de la recesión, de los sucesivos ajustes y los renovados arreglos con el FMI relativos al pago de la deuda externa. En segundo lugar, la rápida licuación del capital político de la Alianza y el cuestionamiento de la capacidad de conducción del entonces presidente pusieron al descubierto tanto los límites —dolorosos y por momentos grotescos— del modelo de dominación político. La sumisión al poder económico terminó por habilitar el retorno triunfal de Cavallo, aclamado por muchos de los que hasta hacía poco tiempo lo habían cuestionado duramente.

En realidad, para comprender el alcance de esta segunda inflexión, es necesario tener en cuenta que durante la época de Menem, el éxito de la gestión decisionista y el "personalismo" del liderazgo permitieron pensar la política como algo más que "clientelismo afectivo", orientado a la gestión de las necesidades básicas. Sin embargo, no olvidemos que una de las promesas mayores de la Alianza había sido la de depurar las instituciones, así como impulsar la apertura del espacio público (Delamata:2000). La sorpresa ante la rápida evaporación de estas promesas, única especificidad que ofrecía el nuevo gobierno en relación con el anterior (que, de manera esquemática y lineal oponía una supuesta "virtud aliancista" a la "corrupción menemista"), fue tan escandalosa que terminó nada menos que con la carrera política del vicepresidente de la Nación, quien, atravesado por dilemas éticos, decidió renunciar, signando de ese modo el final previsiblemente catastrófico de la Alianza. Al mismo tiempo, esta certeza fue tan corrosiva como otro descubrimiento: que el presidente De la Rúa no encarnaba —ni podría encarnar— un liderazgo de tipo personalista. Seamos claros: no se trataba de la ausencia de carisma, algo que todos ha-

bían reconocido desde el principio, pero que sin embargo no había sido un obstáculo para su elección. Al contrario, pues nada había impedido su resignificación positiva, como bien lo mostró la glamorosa campaña electoral de 1999.[20] Más bien, lo que quedaba en evidencia era la incapacidad de De la Rúa de desempeñar el rol, la imposibilidad de sostener un "efecto de posición", tal como lo hemos caracterizado más arriba, cuando hablamos del liderazgo personalista.

En cuanto a la eficacia del modelo de gestión y la orientación de la ayuda social, fueron varios los obstáculos. Así, la promesa de "democratizar la ayuda social" recentralizándola, entre otras tácticas, y su ostensible fracaso, dio cuenta también del escaso conocimiento que el gobierno de la Alianza poseía —perseverando en su actitud, en medio de los sucesivos ajustes— del alcance y la dinámica de la descolectivización en la sociedad argentina. En esta dirección, importa destacar tanto el carácter deficitario de la ayuda social como los permanentes incumplimientos del gobierno, que parecía ignorar los "tiempos políticos", cada vez más impregnados por las urgencias de los sectores más desamparados y, al mismo tiempo, por las exigencias del Partido Justicialista. Por último, el Ministerio de Desarrollo Social tampoco era la encarnación de la "profesionalidad" exigida por el nuevo modelo de gestión, atravesado como estaba por internas partidarias que por momentos amenazaban con paralizar cualquier acción, en medio de la nacionalización de la cuestión piquetera, en alianza con dos de las tres cúpulas sindicales existentes en la época (CTA y MTA).

Así, los componentes del modelo de dominación político se fueron desarticulando uno tras otro. Completamente desmantelado, el principio rector —el dictado de lo económico y la sacralización de la convertibilidad— continuaba su fuga hacia adelante, tras los sucesivos ajustes y aparentes "soluciones" al problema de la deuda, pactados con los organismos multilaterales de crédito ("blindaje", "megacanje", entre otros). Vastos sectores sociales experimentaban una pérdida de confianza en la autoridad de la figura presidencial que no sólo era vertiginosa, sino que llegaría a adquirir connotaciones por demás grotescas, que los medios de comunicación se encargarían de explotar, de manera tan implacable como oportunista. A medida que

la crisis se agravaba y el modelo se apoyaba en el vacío, las propias declaraciones de De La Rúa no hacían más que acentuar, con evidente crispación, el cariz personalista y decisionista de la autoridad presidencial. En medio de una recesión económica sin precedentes, el modelo de dominación se desarticulaba por completo, vaciado de toda eficacia y legitimidad. Por otra parte, la avalancha de votos nulos y en blanco de las elecciones legislativas de octubre de 2001 advertiría el alcance de la crisis.

Cavallo, uno de los artífices indiscutidos de la nueva dependencia, sería el responsable de tensar el modelo hasta el extremo, conduciendo así al estallido de la convertibilidad, núcleo duro y, al mismo tiempo, talón de Aquiles de la nueva configuración política. Mas aún, contradiciendo la tradición pretendidamente institucionalista de la UCR, el regreso de Cavallo desembocó en una nueva vuelta de tuerca del carácter decisionista del gobierno, al habilitar la "cesión extraordinaria de poderes", con el argumento de "la situación de emergencia económica". Ese argumento profundizaba la alteración de la división republicana de poderes, habilitando de hecho la entrada en un Estado de excepción.

Finalmente, De la Rúa se vería obligado a abandonar el poder, tras las masivas protestas (encabezadas por las clases medias urbanas) que siguieron a la ola de saqueos y al decreto del estado de sitio. Tras la jornada más sangrienta vivida en la historia de la democracia desde 1983, que se cerró con un saldo de cuarenta muertos, un nuevo escenario político se abría, marcado por una profunda crisis económica, el cuestionamiento de las formas de representación política y las crecientes movilizaciones sociales.

* * *

La naturalización de la relación entre globalización y neoliberalismo tuvo dos consecuencias mayores: por un lado, contribuyó fuertemente al desdibujamiento de la política entendida como esfera de deliberación y participación, como espacio de disputa y de conflicto, en función de los diferentes modelos de sociedad existentes; a su vez, esta reducción de la

política potenció la desarticulación entre el mundo de la política institucional y las formas de politización de lo social.

Sin embargo, el intento de sutura de la política en el marco del nuevo orden económico originó importantes tensiones y conflictos en la sociedad, que abrieron la brecha para un doble cuestionamiento del modelo dominante. Así, mientras que el primer fenómeno —la suspensión de la política como esfera de deliberación— dio origen a un discurso político centrado en la demanda de transparencia y la apelación al "buen funcionamiento" de las instituciones republicanas, el segundo —la politización de lo social— desembocó en la emergencia de nuevas prácticas políticas, centradas en la acción colectiva no-institucional. Ambas demandas interpelaban al Estado, aunque no lo hacían de la misma manera. Mientras que la primera aspiraba a erosionar las bases del Estado patrimonialista, en función de un discurso moralizador, apoyado en la denuncia de la corrupción de la clase política y la no separación de poderes, la segunda responsabilizaba al Estado por la situación de precarización y exclusión que padecían vastos contingentes de argentinos, vehiculizando demandas de inclusión social. En fin, mientras la primera demanda fue canalizada por los nuevos partidos de centro-izquierda, cuya máxima experiencia (el Frepaso) terminó por ser absorbida y destruida por la lógica del propio sistema que criticaba (la subordinación de la política a la economía como "horizonte insuperable"), la segunda tendió a generar nuevas formas de participación, cuyo corolario fue la innovación de las formas de autoorganización de lo social y la ampliación de las bases asistenciales del Estado.

La importancia de estas brechas aparece más claramente si colocamos el foco de análisis en los espacios de conflicto que abrió el proceso de conculcación de los derechos y la fragmentación de las formas de ciudadanía. Estos procesos de redefinición de los dispositivos y límites de pertenencia al colectivo social estuvieron lejos de ser lineales o unidimensionales; por el contrario, produjeron una nueva dialéctica de lo social, cuyas tensiones y ambivalencias interpelan los límites y las bases del Estado neoliberal.

CAPÍTULO 3

MUTACIONES DE LA CIUDADANÍA

El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo, vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. [...]

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales, con autonomía económica y financiera, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Artículo 14 bis de la Constitución nacional.

PERIFERIA Y FORMAS DE LA CIUDADANÍA

El nuevo escenario social que otorga primacía al mercado como mecanismo de inclusión ha traído como consecuencia la fuerte erosión del modelo de ciudadanía social asociado al Estado de Bienestar. Recordemos que, en la versión ya clásica de Marshall (1998), el modelo de ciudadanía abarca, en una suerte de secuencia histórico-evolutiva, los derechos civiles (libertad de expresión, de convicción, de religión, de poseer propiedades), los derechos políticos (derechos a participar activa o pasivamente, directa o delegadamente, en el proceso de toma de decisiones) y los derechos sociales (acceso al bienestar económico, el derecho a participar de la convivencia social y a vivir una vida digna).

En el marco del Estado de Bienestar, la ciudadanía social estuvo asociada esencialmente a los derechos laborales y, a la vez, garantizada también por políticas universalistas. Así, la intervención del Estado supuso la desmercantilización de una parte de las relaciones sociales y la construcción de una "solidaridad secundaria", por medio del gasto público social, en favor de los sectores más débiles en la confrontación capital-trabajo. Por supuesto, existen diversas variantes del Estado de Bienestar realmente existente, desde los más universalistas, hasta aquellos que desarrollaron modalidades de intervención más corporativas. En América Latina, tocaría al Estado nacional-popular, versión sin duda diferente y matizada del Estado de Bienestar europeo, producir la cohesión social, no sólo proveyendo bienes y servicios, sino como agente de distribución de recursos sociales.

Ahora bien, como lo consignan los trabajos desarrollados en torno a la "marginalidad" a fines de los años 60 (Murmis, Marín, Nun:1968, Quijano:1998),[21] en América Latina el proceso de construcción de la ciudadanía se encontró con límites estructurales. Esto quiere decir que los individuos o grupos sociales se vieron obligados a desarrollar "redes de sobrevivencia" (Lomnitz:1991), ante la deficiencia de los mecanismos de integración proporcionados por el Estado o un mercado insuficientemente expandido. En consecuencia, dada la existencia —endémica— de la precariedad y de situaciones de informalidad laboral, ligadas a dichas redes de sobrevivencia, históricamente el corte entre ocupación y desocupación no aparece del todo claro (Murmis:2000). De modo que la existencia de diferentes niveles y formas de integración y de exclusión ha sido la marca de origen de las sociedades periféricas, lo cual explica —para utilizar la acertada expresión de Marques Pereira—, "la institucionalización de una ciudadanía de geometría variable" (1992, p. 238). Por ello, el proceso de ciudadanización se fue construyendo de manera inacabada y siempre interrumpida, dictaduras mediante, en la intersección de un modelo nacional-popular que extendió en términos político-simbólicos el horizonte de pertenencia a la Nación, y la inclusión efectiva, material, en redes de sobrevivencia, cuya base no eran exclusivamente las instituciones estatales.

Sin embargo, necesario es decir que el caso argentino aparece como un híbrido. En efecto, durante décadas nuestro país

fue la ilustración más acabada del Estado nacional-popular, en el marco de un modelo que combinaba elementos universalistas (educación, salud pública), con componentes corporativistas, a través de los acuerdos entre el Estado y los grupos de interés. Por otro lado, la ampliación de la ciudadanía social, al igual que en las sociedades centrales, aparecía asociada a las conquistas laborales y, por ende, subsumida en los "derechos del trabajador", sintetizados en la Constitución argentina en el artículo 14 bis —citado en el epígrafe de este capítulo—. Así, en nuestro país, el desarrollo de redes de sobrevivencia fue bastante más tardío que en otras sociedades latinoamericanas. En realidad, en un contexto de pleno empleo —y más allá de las asimetrías regionales y los "bolsones" de marginalidad—[22] la pregnancia del modelo nacional-popular fue tal, que durante mucho tiempo se consideró que la Argentina estaba más cerca de las "sociedades salariales" del Primer Mundo (con quienes compartía índices de distribución de la riqueza, tasas de sindicalización y fuerte desarrollo de las clases medias) que de otros países latinomericanos, donde la fractura social aparece como una marca de origen, en muchos casos, multiplicada por las diferencias étnicas.

Ahora bien, en nuestro país, pese a que la sociedad salarial presentaba un mayor desarrollo, el proceso de desregulación produjo una fuerte dinámica descolectivizadora, que significó para numerosos individuos y grupos sociales la entrada en la precariedad, si no la pérdida de los soportes sociales y materiales que durante décadas habían configurado las identidades sociales. Como en otros lugares, la política de flexibilización laboral apuntó a reformular las fronteras del trabajo asalariado, al tiempo que afectó fuertemente la capacidad de representación y de reclutamiento del movimiento sindical. Más aún, en la Argentina, este proceso de cercenamiento de la ciudadanía social se vio potenciado por el comportamiento de los grandes sindicatos nucleados en la CGT, cuya adaptación pragmática a los nuevos tiempos desembocó en el apoyo al modelo neoliberal propuesto por el peronismo triunfante, a cambio de la negociación de ciertos espacios de poder.

Así, el proceso de individualización que acompañó el retroceso de la ciudadanía, afectó particularmente a las clases populares e impulsó el desarrollo de redes de sobrevivencia dentro del

empobrecido mundo popular, lo que fue configurando un nuevo tejido social, caracterizado por la expansión de organizaciones de carácter territorial. Estas nuevas redes territoriales hoy se constituyen en el *locus* del conflicto, pues aparecen como el espacio de control y dominación neoliberal, a través de las políticas sociales compensatorias, al tiempo que se han convertido también, como ya sucedió antes en otros países de América Latina, en el lugar de producción de movimientos sociales innovadores.

Por otro lado, este proceso de desciudadanización comprende no sólo la dimensión específicamente económico-social (referida a la pérdida de derechos sociales y laborales), sino también la dimensión política (la participación y el acceso a decisiones). En efecto, como correlato del nuevo orden económico se consolidó un modelo de dominación política que restringió severamente la participación de los individuos —y de las organizaciones sociales populares—, reduciendo su intervención en el espacio de las decisiones colectivas. El proceso afectó también el ejercicio de los derechos civiles, mediante el cercenamiento y la privación de las libertades individuales, como aparece ilustrado por el notorio incremento de casos de violencia institucional cometidos por las fuerzas policiales, así como por reclamos a raíz del aumento de la "inseguridad ciudadana".

La fragmentación de la ciudadanía

En líneas generales, en la actualidad, gran parte del debate sobre la ciudadanía se asienta sobre dos ejes mayores.[23] En primer lugar, "ciudadanía" alude al estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, lo cual quiere decir que sus beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica. En segundo lugar, "ciudadanía" se refiere a un conjunto de (nuevas) prácticas, que construyen un espacio de actividades en el que los ciudadanos manifiestan su derecho a participar.

Así, lo que está en juego son tanto las fronteras de pertenencia al colectivo social (lo cual, a la hora actual, significa explorar los modelos de sociedad en pugna y las luchas de los ac-

tores sociales por la inclusión y el reconocimiento de las diferencias) como las consecuencias del proceso de fragmentación e individualización de los derechos. También incluye la valoración de las nuevas formas de participación (lo cual significa poner en consideración la emergencia de nuevas prácticas ligadas a la democracia directa y participativa). En el presente apartado, reflexionaremos sobre la primera problemática, haciendo hincapié en el proceso de individualización de los derechos, mientras que dejaremos el segundo eje del debate (la cuestión de las nuevas prácticas y formas de participación) para la parte consagrada a acción colectiva.[24]

En primer lugar, la dinámica de conculcación de derechos sociales redefinió de facto los límites de pertenencia a la comunidad, en el sentido amplio del término. Esto condujo a la proliferación de luchas en torno al reconocimiento de la existencia, doblemente amenazada por los actuales procesos de globalización. En las sociedades periféricas, una buena parte de las acciones colectivas emprendidas por los movimientos sociales expresan una lucha por ampliar y reformular la comunidad, en los dos sentidos referidos por Fraser (1997), a saber, tanto en el plano económico-político, como en el cultural-simbólico. A título de ejemplo, las demandas de las organizaciones piqueteras surgidas en la última década en la Argentina pueden ser comprendidas como el encabalgamiento y yuxtaposición de ambas dimensiones: por un lado, como una lucha orientada a obtener el reconocimiento, que alude tanto a la invisibilidad inicial de los desocupados, como —más recientemente— a la estigmatización social que padecen; por otro lado, como una lucha que apunta a denunciar la estructura de desigualdad y de privación dentro del actual modelo de acumulación, con lo cual desliza entonces la cuestión de la (re)distribución de los bienes sociales. Aunque con mucha menos visibilidad, en esta dirección pueden incluirse también las demandas en favor del reconocimiento de los derechos territoriales y ambientales, protagonizadas por los movimientos campesinos, vecinales e indígenas, así como aquellos reclamos que apuntan a la aceptación e inclusión de la diversidad sexual.

En segundo lugar, el desmantelamiento del modelo de regulación asociado al régimen fordista, también trajo como consecuencia una reformulación del rol del individuo en la sociedad. No por casualidad, parte de la teoría social ha venido analizando dichos procesos en términos de una nueva dinámica de individualización, considerada como la otra cara del proceso de globalización (Giddens, Beck, entre otros). Desde esta perspectiva, la sociedad contemporánea exige que los individuos se hagan cargo de sí mismos y que, independientemente de sus recursos materiales y simbólicos, desarrollen los soportes y las competencias necesarias para garantizar su acceso a los bienes sociales. De manera más general, el punto de partida del proceso de individualización es la estrecha asociación entre nuevo modelo de acumulación y proceso de desregulación. Ciertamente, la desregulación conlleva una demanda de autorregulación, y la autorregulación exige autonomía, la que en diferentes grados y medida atraviesa tanto las sociedades centrales como las periféricas. Como consecuencia de ello, en el nuevo escenario social, "el bienestar ya no aparece como un derecho, sino como una oportunidad" (Alonso:2000, p. 176).

Sin embargo, no es lo mismo hablar de autorregulación en el contexto de un Estado de Bienestar, pese a la fragmentación de la ciudadanía social, como sucede en muchas sociedades europeas, que hacerlo en sociedades que arrastran fuertes déficits de integración, y menos aún, en medio de un proceso de desregulación tan vertiginoso y radical como el que conocieron las sociedades periféricas. Además, a diferencia de los países del centro, altamente desarrollados —en donde los dispositivos de control público y los mecanismos de regulación social suelen ser más sólidos, y los márgenes de acción política, más amplios—, en las sociedades del capitalismo periférico tradicionalmente las dificultades de "devenir-individuo" han sido mayores, con lo cual la implantación de un nuevo orden liberal profundizó los procesos de marginalidad y desintegración social preexistentes, multiplicando las desigualdades y las formas de la pobreza.[25]

En tercer lugar, los procesos de globalización han sido acompañados por nuevos reclamos en el campo de los derechos individuales y culturales. Así, la profundización de los procesos de individualización tuvo un fuerte impacto en la esfera cultural, potenciando o generando —según los casos—

nuevos espacios de reclamo, ligados a la defensa de las culturas locales. Sin embargo, históricamente estos reclamos han sido más centrales en otros países latinoamericanos, atravesados por fuertes conflictos étnicos, como México o Bolivia. En la Argentina, muy probablemente, la extensión de la sociedad salarial y la visión homogeneizadora que ésta tendía a construir del país, neutralizó o desdibujó los reclamos en torno a las diferencias culturales y los derechos territoriales. En realidad, en la Argentina, pese a que el reconocimiento formal de una suerte de ciudadanía pluricultural ya ha encontrado una traducción legal (artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional),[26] su concreción está lejos de plasmarse en la realidad, como bien lo muestra la situación de las poblaciones indígenas y campesinas, que hoy sufren el acoso de los grupos trasnacionales y de los grandes propietarios de la tierra.

Finalmente, el proceso de desregulación e individualización no sólo significó el declive y la fragmentación (política y social) de la ciudadanía, sino también la legitimación generalizada de modelos de ciudadanías restringidos, que no poseen un alcance universalista ni aspiraciones igualitarias. Antes bien, estos modelos establecen las nuevas condiciones de acceso a bienes y servicios sociales básicos dentro de la lógica de mercado. Recordemos que el nuevo escenario confronta a los individuos con la exigencia de tener que procurarse el acceso a ciertos bienes y servicios básicos, que antes estaban total o parcialmente garantizados por el Estado, sin que en esta redefinición del contrato social importen los recursos y capacidades, materiales y simbólicos, con que cuenten los sujetos. Ahora bien, para los sujetos que cuentan con soportes materiales y simbólicos, el mandato neoliberal desembocó en un nuevo proceso de autorregulación individual, en consonancia con el avance de la privatización;[27] sin embargo, para aquellos que no cuentan con los recursos materiales, el modelo apuntó al desarrollo de formas compensatorias, que incluyen muy especialmente la exigencia de autoorganización colectiva o comunitaria.

En resumen, en afinidad con la lógica de mercado, los contornos de los modelos de ciudadanía van a reposar entonces sobre diferentes ejes: la propiedad (individual), el consumo (en sus distintas subespecies) y la autoorganización (colectiva). Esto nos permite afirmar que las figuras de la ciudadanía que se consolidaron en la Argentina durante los 90, son tres: el modelo patrimonialista, el modelo del consumidor y el modelo asistencial-participativo. En lo que sigue, resumiremos los rasgos mayores de estos tres modelos con el apoyo de algunos casos paradigmáticos.

La consolidación de una ciudadanía patrimonialista

La figura más antigua, históricamente consustancial a cualquier régimen liberal es, sin duda, el modelo de ciudadanía patrimonial. Aun así, lo peculiar hoy en día es su expansión, dentro de las clases medias altas y medias en ascenso, producto del proceso de mercantilización de los bienes básicos (educación, seguridad, salud). El modelo de ciudadanía patrimonial se monta sobre dos ejes fundamentales: por un lado, la idea del ciudadano propietario; por otro lado, la autorregulación, como base de la autonomía individual.

En Argentina, como en otros lugares del planeta, la dinámica propia de la globalización neoliberal desembocó en un fenómeno de reprivatización de lo social y mercantilización de los servicios básicos, cuyo correlato más visible ha sido la tendencia a la separación socioespacial y la búsqueda de la homogeneidad, por parte de las clases altas y medias altas (Cohen:1997, Donzelot:1999, Sassen:1999), *en medio del ensanchamiento de las distancias sociales.*

Durante los 90, la ilustración más elocuente del modelo de ciudadanía patrimonial serán las nuevas urbanizaciones privadas, es decir, los enclaves residenciales que cuentan con seguridad privada (*countries*, barrios privados, megaemprendimientos urbanísticos). Este nuevo estilo de vida apunta a construir una sociedad de "semejantes", basado en las fronteras espaciales, el acceso a la propiedad y la afirmación de la homogeneidad social. [28] En efecto, una de sus ideas fuerza es la aspiración a una comunidad transparente, autorregulada, autosuficiente, en contraste con la sociedad abierta, en donde la desregulación se relaciona cada vez más con la anomia y la desorganización social.

Luego de la crisis de 2001, se produjo una inflexión, visible en el incremento de las demandas de seguridad. En efecto, la crisis supuso una vuelta de tuerca del modelo excluyente, en la medida en que puso al desnudo no sólo la cristalización de una nueva lógica social, asociada a la matriz neoliberal, sino también las crecientes desigualdades entre los habitantes frente a las formas que asume la degradación de la seguridad. Este proceso acentuó las dificultades —si no la impotencia— del Estado, vaciado de sus capacidades institucionales tras quince años de neoliberalismo, para dar protección al conjunto de la población, sobre todo en sus categorías más vulnerables.[29]

El corolario de ello ha sido que *la seguridad* se convirtió, más que nunca, en el bien más preciado para vastos sectores de la sociedad. Más aún, en este contexto, la sola posesión de seguridad tiende a convertirse en una marca de estatus, un "plus" que diferencia en términos de oportunidades de vida a aquellos que la poseen, en relación con los que no la poseen. Así, su sola existencia revela la consolidación de diferentes categorías de ciudadanía.

En este sentido, es necesario tener en cuenta que los nuevos procesos de fragmentación social y el retroceso general de las instituciones anteriormente integradoras, fueron generando también una nueva estructura de temores e inseguridades en los sujetos. Así, las respuestas —tanto individuales como colectivas— ante la pérdida de cohesión social nos han ido confrontando con una nueva trama social y psicológica, atravesada por dilemas de confiabilidad e interacción. Consiguientemente, en sintonía con los nuevos tiempos, la adopción de estilos residenciales, basados en la privatización de la seguridad, ilustra el acoplamiento entre un modelo de ciudadanía patrimonial (el acceso a los bienes básicos se restringe a aquellos que cuentan con recursos materiales), con una nueva estructura de temores e incertidumbre, de carácter polar (amigo/enemigo; adentro/afuera). Más aún, leído a partir de sus consecuencias políticas y sociales, este estilo de vida denota sin duda una aspiración comunitaria, cuya base es cada vez menos la defensa de un "estilo de vida verde", y cada vez más el miedo. Como afirma Beck, "la sociedad del riesgo cambia la cualidad de la comunidad". Lejos de proponerse alcanzar ideales de igualdad o solidaridad, "la

utopía de la seguridad resta negativa y defensiva: en el fondo aquí ya no se trata de alcanzar algo 'bueno', sino tan solo de evitar lo peor" (Beck:1998, p. 55).

Por último, los hechos más recientes parecen indicar la consolidación del modelo de ciudadano propietario, a través del reconocimiento de una suerte de "justicia privada", paralela o autónoma respecto del poder estatal. A esto apunta precisamente un proyecto de ley de urbanizaciones privadas, actualmente en tratamiento legislativo, cuya sanción vendría a legitimar el funcionamiento de una justicia propia para los habitantes de barrios privados y *countries*, que violaría tanto normas constitucionales como el Código Procesal Civil y Comercial.

En suma, la desigualdad fue multiplicando sus registros, por medio de la conformación de circuitos cada vez más diferenciados en los que convergían la creciente degradación de los servicios básicos que proporciona el Estado (seguridad, educación y salud) con el avance de la privatización. Convertido en valor de cambio, el acceso a las diferentes calidades de servicios señala las oportunidades de vida al tiempo que marca la emergencia de nuevas fronteras sociales, impulsando el desarrollo de categorías heterogéneas de ciudadanía.

La expansión del modelo del ciudadano consumidor

El núcleo del modelo neoliberal, en su versión argentina, fue la figura del ciudadano consumidor. En efecto, como afirmaba tempranamente Lewcowicz (2004 [1994]), la figura del ciudadano consumidor estaba en la base del nuevo contrato social de la sociedad argentina, luego de la hiperinflación. Tal es su importancia, que adquirió rango constitucional, como lo refleja el artículo 42 de la Constitución reformada en 1994, en donde se detallan sus derechos, seguidos inmediatamente de las obligaciones del Estado. Dentro de este nuevo paradigma, el individuo es definido como consumidor-usuario de los bienes y servicios que provee el mercado. Sin embargo, hay que aclarar que este nuevo paradigma se asienta sobre dos figuras empíricas en muchos casos complementarias pero que son diferentes entre sí: el *consumidor puro* y el *consumidor-usuario*. Mientras el

primero de ellos fue la imagen impulsada por el modelo neoliberal-menemista, el segundo apenas si se halla en estado embrionario. Veamos detenidamente esto.

El modelo del consumidor puro, que proponía una suerte de inclusión preferencial a través del consumo, aparecía intrínsecamente ligado al régimen de convertibilidad. Dicho modelo logró cautivar a diferentes sectores sociales, constituyéndose en la clave de bóveda del régimen menemista. En efecto, favorecido por la estabilidad monetaria, el dólar barato y la apertura a las importaciones, el consumo no sólo benefició a las clases altas sino también a las clases medias en ascenso; esto es, a aquellos sectores a los cuales décadas de inflación habían imposibilitado el acceso a ciertos bienes como la vivienda propia, el crédito y, más claramente, ciertos bienes de consumo propios de las sociedades más desarrolladas, como los electrodomésticos, el mercado electrónico o los viajes frecuentes al exterior. Por otra parte, no es menos cierto que durante los primeros años de la década del 90, la estabilidad monetaria permitió cierto acceso al consumo a los sectores menos favorecidos.

En este sentido, la eficacia simbólica del modelo del consumidor puro residía en su doble funcionalidad. Por un lado, en tanto país, colocaba a la Argentina del lado de los "ganadores" de la nueva era, avalando la creencia de que ésta era una suerte de enclave del Primer Mundo, en un subcontinente cada vez más horadado por todo tipo de males. Por el otro, en el nivel interno, facilitaba el desdibujamiento de la matriz conflictiva de lo social, ocultando y despolitizando los efectos excluyentes del régimen económico en curso. En otros términos, si bien era cierto que este modelo abría espacios de inclusión a través del consumo (que, dicho sea de paso, no estaba asociado al ejercicio de derechos concebidos en términos universales), por otro lado, conllevaba la destrucción de puestos de trabajo y, por consiguiente, su éxito no podía ser desligado del creciente aumento de las desigualdades sociales. Este ocultamiento ideológico nos revela la importancia crucial del consumo en tanto dispositivo de legitimación del modelo neoliberal de los 90, que privilegió fuertemente la "seducción individualista", mediante la revalorización del triunfo individual. En efecto, para algunos, su aceptación formaba parte de la "utopía privatista" a la que adherían fervorosamente; para otros, era el puro resultado de la dinámica neoliberal y privatizadora. En ambos casos, sea por razones de orden ideológico o por puro pragmatismo, la mayoría optó por cerrar los ojos y aceptar las ventajas estabilizadoras del modelo, rápidamente sacralizadas en la política de paridad cambiaria (el "1 a 1"). Así, en medio de la reducción salarial, de la precarización laboral y, más adelante, del aumento de la desocupación y de la inseguridad ciudadana, había un amplio espacio en el cual convergían seducción individualista, indiferencia social y estrategias de consumo.

En esta misma línea debe leerse el significado de la "fiesta menemista": más que una perversidad, ésta fue la expresión hiperbólica del modelo centrado en el consumidor puro que en dosis y grados diferentes encontró una gran aceptación en el conjunto de la sociedad argentina.[30] No por casualidad, la Alianza, que inicialmente había apostado a hacer del "control ciudadano" una suerte de bandera, terminó avalando y llevando hasta el paroxismo el modelo del consumidor puro, anclado en la defensa irracional de la convertibilidad. En fin, lo particular del modelo del ciudadano consumidor puro es que más allá de las críticas (el "voto cuota"),[31] fue avalado por todas las fuerzas del *establishment*; no sólo por el peronismo —consciente de que su prosecusión era la garantía de la alianza con los sectores altos y medios altos—, sino también por las otras fuerzas políticas, que buscaron postularse como nuevas alternativas, como fue el caso del Frepaso y, más adelante, de la Alianza. Así, estas fuerzas no cuestionaron los ejes fundamentales del modelo, sino que promovieron su continuidad hasta su estallido en el año 2001. Finalmente, ese espacio de afinidades electivas, en el cual se instalaron cómodamente el pragmatismo ideológico, la estrategia individualista y la indiferencia social, terminó por resquebrajarse, para sufrir, luego de la devaluación decretada bajo el gobierno de transición de Duhalde, una fuerte contracción de sus márgenes. En efecto, la ruptura del pacto social no sólo puso al descubierto la fragilidad del modelo: también señaló la activación de una nueva dinámica de "ganadores" y "perdedores", a partir de la retracción del espacio del ciudadano-consumidor. Ahorristas y endeudados, actores importantes de las protestas desarrolladas a partir de diciembre 2001, ilustran el costado de los nuevos "perdedores".

Ahora bien, una vez agotada esta primera figura, parecería que es el modelo del consumidor-usuario el que tiende a ocupar el centro de la escena. Recordemos que en la primera parte del artículo 42 se enuncian los derechos del consumidor-usuario, mientras que en la segunda se estipulan los controles que el Estado debe instituir o garantizar para que estos derechos se ejerzan:

> Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
>
> Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios.
>
> La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Sin embargo, pese a los enunciados, la forma que adoptó el proceso de privatizaciones limitó severamente la emergencia del ciudadano-usuario, en tanto conllevó no sólo la destrucción de las capacidades estatales, sino también la conformación de mercados monopólicos, favorecidos por la protección del Estado. Ello explica tanto la escasa capacidad (institucional) de los tardíos entes reguladores —algunos de ellos creados incluso meses después de la privatización del sector—, como la temprana cooptación de las incipientes organizaciones de consumidores, por parte del Estado. Así, antes que garantizar el escenario apropiado para la gestación de un hipotético "control ciudadano", ejercido por el consumidor usuario, el modelo de dominación político se encargó de proclamar su existencia virtual, asegurando, al mismo tiempo, su inviabilidad empí-

rica. En los hechos, como hemos visto, la virtualidad del consumidor-usuario fue compensada por la ostensible centralidad que adquirió el consumidor puro, imagen impulsada por el modelo neoliberal-menemista, por medio del régimen de convertibilidad.

Ahora bien, el declive inevitable de la figura del consumidor puro, asociado al anterior dispositivo de dominación, nos advierte sobre la importancia estratégica que adquiere en la actualidad el modelo del consumidor-usuario. Opacado durante los años del frenesí consumista, conminado al estado embrionario por ser cautivo de los mercados monopólicos, encuentra hoy sus voceros en un conglomerado heterogéneo de organizaciones sociales (asociaciones de defensa del consumidor) que están lejos de constituir un verdadero espacio autónomo. En este sentido, la primera condición para la emergencia del consumidor-usuario es que se restituyan las capacidades estatales, destruidas y simultáneamente reconvertidas al servicio de la lógica del capital, así como el fortalecimiento y capacidad de autodeterminación de las propias organizaciones de consumidores.

A título de ejemplo, podemos ilustrar lo dicho con un caso muy poco conocido, sucedido en la provincia de Tucumán, entre 1993 y 1998. Como cuenta Giarracca (2005), en aquella época "las poblaciones de siete ciudades se organizaron contra la privatización del servicio de agua, altamente sospechada de vicios y corrupción. La confrontación con la transnacional francesa *Compagnie Générale des Eaux*, cuyo nombre local fue 'Aguas del Aconquija', terminó con el retiro de la empresa y, por supuesto, con uno de los tantos diferendos que el país tiene actualmente en el CIADI. El éxito de esta lucha —llevada a cabo unos años antes de la Guerra del Agua de Cochabamba, Bolivia— se debió a la decisión de la población de iniciar una acción de desobediencia civil, de no reconocer la conversión y de no pagar por el servicio de la compañía".

En fin, bien vale la pena preguntarse si la condición de posibilidad del consumidor-usuario no abre nuevas oportunidades y desafíos ciudadanos, en la medida en que su potencial realización puede colocar en el centro la discusión las bases del nuevo "pacto social" posconvertibilidad. Ciertamente, tengamos en cuenta que su "realización" interpela al gobierno ac-

tual y pone en juego nada menos que su sobrevivencia, ya que en los próximos años gran parte de su legitimidad estará ligada a su capacidad de articular con éxito la figura del consumidor-usuario. Por otro lado, no hay que olvidar que el espacio del ciudadano-usuario es más elástico de lo que muchos suponen, ya que la cuestión de los servicios recorre transversalmente la sociedad al tiempo que, como de costumbre, afecta de manera más severa a los sectores económicamente más vulnerables.

Cierto es que, en términos concretos, podría objetarse que la acción del ciudadano-usuario tiene un alcance limitado, pues tal como escribe Gabriel Nardacchione (2000), éste "tiende a desarrollarse en una escena preconstituida por el productor y por fuera del campo de la producción o del conflicto socioeconómico", el que permanece incuestionable y desaparece del eje de la discusión. Cierto es también que la relevancia que adquiere el consumidor-usuario en la nueva matriz social es directamente proporcional al eclipse del modelo de ciudadanía social, consagrado en el hoy olvidado artículo 14 bis. Con todo, ello no puede llevarnos a ignorar la potencialidad que contiene la figura del ciudadano-usuario en el nuevo escenario político argentino y latinoamericano. Como nos lo advierte el ejemplo de Bolivia, la continuidad y difusión de las luchas colectivas —que comenzaron reclamando en el año 2000 a la empresa privatizada que controlaba el agua en Cochabamba— pueden abrir nuevos horizontes, al incluir otros temas y reclamos más universalizables.

En suma, nuevas dinámicas políticas pueden generarse, pese a la tendencia excluyente de nuestras sociedades. Así, dadas las características particulares que asumió el proceso de privatización en nuestro país y los efectos que ésta tuvo (una suerte de "segunda expoliación"), más aún, en el contexto de una sociedad altamente movilizada, no sería descabellado pensar que las demandas del consumidor-usuario pueden saltar por encima de los límites estructurales en los cuales se inserta su acción, para finalmente expandir su plataforma de acción e incluir otras demandas, más amplias y universales, de ciudadanía.

LA METAMORFOSIS DEL MODELO ASISTENCIAL-PARTICIPATIVO

Ahora bien, si el consumidor y usuario debe organizarse para hacer valer sus derechos particulares, bien vale la pena preguntarse qué espera el Estado neoliberal de aquellos individuos que han quedado fuera como producto de la dinámica social excluyente. En otros términos: si la autorregulación es un mandato que recorre a diferentes niveles la sociedad contemporánea, ¿qué sucede con aquellos que no se definen prioritariamente ni como propietarios, ni como consumidores o usuarios? ¿Qué inflexión particular conoce la exigencia de autorregulación y qué lugar les está asignado en una sociedad en la cual las diferentes figuras que adopta la ciudadanía ya no se manifiestan en términos universales?

En rigor, en líneas generales, la figura de ciudadanía propuesta por el modelo neoliberal a los sectores más vulnerables ha sido, sin duda, la no-ciudadanía. Para reducir los efectos de esta negación de la ciudadanía en las sociedades periféricas, se han aplicado programas sociales focalizados, que, apoyados en la autoorganización comunitaria, tienden a promover el desarrollo de una ciudadanía restringida, de muy baja intensidad, bajo la mirada vigilante del Estado y el control constante de las agencias multilaterales de crédito.

No olvidemos que el modelo neoliberal exige mucho de los individuos, pues plantea nada más y nada menos que se autorregulen. Ahora bien, en aquellas sociedades donde la individualización no se ha operado precisamente en el contexto de un Estado de Bienestar, sino más bien en el marco de una cruda desregulación, y donde tradicionalmente han existido individuos que no cuentan con los recursos materiales para autorregularse individualmente (esto es, para integrarse en el mercado laboral o acceder a los bienes que el mercado provee), el último recurso termina siendo la autoorganización comunitaria.

Nuestra hipótesis es que existe una figura de la *ciudadanía restringida*, reservada a los excluidos de la matriz neoliberal, que podemos designar con el nombre de "modelo participativo-asistencial". Este se halla montado sobre tres ejes mayores: el desarrollo de una política focalizada, la omnipresencia del Estado y la participación en redes comunitarias. No por casualidad, el

lenguaje de los organismos internacionales aparece atravesado por esta exigencia de autoorganización comunitaria, en estrecha conexión con la creciente actualidad que toma la noción de "capital social", uno de los núcleos ideológicos del modelo neoliberal (Álvarez:2000). En efecto, aquellas expresiones paradigmáticas del mundo comunitario latinoamericano (como las redes de sobrevivencia y la economía informal), que durante décadas habían sido vistas como obstáculos a la modernización, suerte de rémoras del pasado, fueron reinterpretadas en términos de "capital social". Por ende, una de las recetas "para combatir la pobreza" más repetidas por los organismos internacionales y sus expertos, consiste en impulsar el desarrollo de redes comunitarias locales, con el objetivo de generar nuevas formas de participación ciudadana y estrategias de "empoderamiento"[32] entre los sectores más vulnerables.

Ahora bien, la cuestión de la potencialidad que encierran las redes territoriales y el trabajo comunitario es una discusión abierta y no exenta de complejidades. Es cierto que desde las agencias multilaterales y los organismos oficiales la invocación de estas formas de participación basadas en la autoorganización colectiva apuntan al desarrollo de una ciudadanía de "baja intensidad" (para utilizar libremente una expresión de Guillermo O'Donnell), cuya funcionalidad con el nuevo esquema de dominación no puede ser soslayada.

En este sentido, el modelo asistencial-participativo asociado a la matriz neoliberal, lejos de prescindir del Estado, señala su omnipresencia, aunque mediada por diferentes tipos de organizaciones comunitarias. Así, a través de la articulación entre políticas sociales focalizadas y redes comunitarias, el Estado se instala en el territorio natural de los movimientos sociales urbanos y desde allí apunta a desarrollar una dinámica "resocializadora" (la expresión es de Inés González Bombal), mostrando con ello que su función no sólo apunta a la gestión de las necesidades básicas, sino, de manera más general, a controlar la vida y la reproducción de la vida de millones de personas pobres.

Sin embargo, es necesario introducir matices sobre el carácter unívocamente funcional que asume la autoorganización comunitaria. En este sentido, es bueno recordar que la realidad nunca discurre linealmente, pues si la demanda de autoorganización colectiva es, por un lado, un imperativo impulsado "desde arriba" con claros objetivos de control social, también es cierto que ha sido y sigue siendo el resultado de las luchas "desde abajo" (esto es, una expresión de la creación y recomposición de lazos sociales). Un ejemplo de ello ha sido el surgimiento de organizaciones de desocupados, a partir de 1996-97. Así, en el marco de una sociedad excluyente, estas organizaciones lograron desarrollar nuevas formas de participación, mediante la autoorganización territorial y el desarrollo de prácticas asamblearias, lo cual permitió reconstituir identidades sociales y resignificar espacios locales.[33]

En otros términos, así como las redes comunitarias tienden a ser el nuevo *locus* del control y la dominación neoliberal, en nombre de las nuevas "formas de participación ciudadana", éstas se han convertido, tanto aquí como en otros países de América Latina, en el espacio de producción de movimientos sociales innovadores. Como veremos más adelante, el universo comunitario que va emergiendo en la Argentina, el mundo comunitario "realmente existente", es mucho más abigarrado y complejo de lo que esperaban los organismos internacionales y sus expertos y aun, hay que decirlo, el propio Partido Justicialista.

* * *

Como en otras latitudes, pero con mayor virulencia, nuestra historia reciente ha mostrado que, contrariamente a las creencias de las décadas anteriores, la conquista de derechos ciudadanos está lejos de ser un proceso evolutivo y mucho menos "irreversible". En la Argentina, el proceso de cercenamiento y pérdida de la ciudadanía social fue de gran envergadura, tal como lo muestra la redefinición de las fronteras del trabajo asalariado, a través de la institucionalización de la precariedad y la multiplicación de los estatus laborales, y la expulsión de vastos contingentes de trabajadores del mundo del trabajo. Precarizados, privados de una inserción laboral u obligados a admitir condiciones ignominiosas de trabajo (extensión de las jornadas, trabajo en negro, entre otros), los sujetos fueron despojados de sus derechos sociales y debieron aceptar, en muchos casos, indefensos, la redefinición de las reglas de juego. A su

vez, no es posible negar cuán fuerte ha sido la repercusión del proceso de desciudadanización en la esfera de los derechos políticos y civiles, como lo muestra la dependencia cada vez mayor de los sectores populares respecto del Estado (y, en especial, del partido en el poder), así como los innumerables casos de violencia institucional, que afectan especialmente a los jóvenes de clases populares y de clases medias bajas, amenazados con la exclusión y estigmatizados como la "nueva clase peligrosa".

A su vez, la reformulación de la relación entre Estado y mercado se tradujo en un severo retroceso de los derechos sociales, así como afectó los derechos políticos y civiles. Esto trajo consigo —más como mandato que como propuesta— la institucionalización de figuras de ciudadanía restringida. Claro que la relevancia que adquieren estas neociudadanías restringidas es directamente proporcional al eclipse del modelo de ciudadanía social, consagrado en el artículo 14 bis. Sin embargo, lejos de ir configurando una historia lineal o exenta de conflictos, donde sólo fuera visible la dominación o la hegemonía, algunos de estos modelos (como el del ciudadano-usuario y el modelo asistencial participativo) ilustran —o tienden a ilustrar, según los casos— un proceso cargado de tensiones y contradicciones, que ponen de relieve la emergencia de un nuevo entramado conflictivo (o en algunos casos lo manifiestan potencialmente), al tiempo que señalan el rol crucial que adquiere el Estado nacional en la disputa —siempre desigual— entre diferentes actores sociales y económicos.

Segunda parte

La nueva configuración social

Introducción

La identidad "sustancial" de las clases nunca fue otra cosa que un efecto de retorno de sus prácticas de actores sociales.

Etienne Balibar e Immanuel Wallerstein (1988).

Los cambios sociales y culturales que arrancan en los años 60 y 70 trajeron aparejadas grandes transformaciones en el proceso de construcción de las identidades individuales y colectivas. En efecto, en esta época comienza a registrarse el pasaje de una economía industrial a una economía centrada en los servicios, caracterizada por una presencia cada vez mayor de la mujer en el mercado laboral. A esto hay que agregar la multiplicación de escisiones sociales, reflejada en el paulatino declive de las formas organizativas que caracterizaron la etapa fordista (sindicatos y partidos políticos) y, más aún, en la importancia que adquieren las dimensiones propiamente simbólico-culturales en los procesos de construcción identitaria, ilustrados de manera ejemplar por la emergencia de los nuevos movimientos sociales (feminismo, ecologismo, movimiento estudiantil), y los procesos de modernización cultural.

Posteriormente, hacia fines de la década del 80, el proceso de globalización de las relaciones económicas, en su versión neoliberal, debilitó los marcos regulatorios asociados al modelo de acumulación precedente, garantizados por los Estados-nación, confirmando la entrada en un período de invidualización de lo social. Sin embargo, fue especialmente en los países capitalistas periféricos donde la expansión de las nuevas fronteras del capitalismo más se articuló con el proceso de reestructuración general de la sociedad, a través de la erradicación casi com-

pleta de las instituciones y regulaciones características de la llamada "sociedad salarial". Así, la dinámica de individualización abrió la puerta para la expresión de nuevas desigualdades (superpuestas a las ya existentes), que terminaron por dislocar los patrones sociales, culturales y organizativos que durante décadas habían configurado la acción de las diferentes clases sociales.

En la Argentina, al igual que en otras regiones del capitalismo periférico, la mutación fue mayor. En efecto, en los últimos 30 años, todos los grupos sociales sufrieron grandes transformaciones, tanto en lo que concierne a su composición socio-ocupacional como al peso político y económico de cada uno de ellos en el espacio social. Más simple, lo que cambió es la distribución del poder social y, como tal, el modo en que cada uno se autorrepresenta, piensa y figura su destino social dentro de la sociedad. Cierto es que este proceso de reconfiguración del poder social aparece muy asociado al terrorismo de Estado de los 70 y a sus consecuencias, tanto políticas como económicas y sociales. Sin embargo, a mediados de los 90, esta dinámica encontraría una suerte de vuelta de tuerca —lo que podemos denominar una reproducción ampliada de las asimetrías y desigualdades— que afectaría enormemente las oportunidades de vida y la capacidad de acción de las clases medias y populares. Así, el cambio en el modelo de acumulación produjo una nueva modificación de las relaciones de clase, visible en el proceso de polarización social. Por último, estas transformaciones se tradujeron en una pérdida de la gravitación política y económica de los sectores medios y populares, y su contracara: una creciente concentración de poder de los sectores altos y medios-altos de la sociedad.

En los tres capítulos que siguen nos proponemos pasar revista a este proceso de dislocación y transformación de las diferentes clases sociales, en un escenario marcado por el incremento de las asimetrías económicas, sociales, culturales y políticas. De manera general, nuestro propósito es explorar, en la medida de lo posible, los contornos de la nueva dialéctica entre estructuras y prácticas sociales. Así, comenzaremos con un análisis de las continuidades y rupturas de los sectores dominantes, para adentrarnos luego en la dinámica de fragmentación de las clases medias y, por último, avanzaremos en el estudio de los procesos de pauperización y territorialización de las clases populares.

Una aclaración sobre la pertinencia y el uso de la categoría de clase social. Tal vez el lector se sorprenda de cómo está articulada esta segunda parte del libro, a saber, una presentación basada sobre la gran división tripartita del espacio social, en sectores dominantes, clases medias y clases populares. Algunos objetarán la inutilidad de tal división, dadas las transformaciones económicas, sociales y culturales de las últimas décadas (mencionadas más arriba), que han traído como consecuencia la instalación de fronteras sociales más difusas y una mayor heterogeneidad de las posiciones y situaciones. Cierto es que las mutaciones más recientes introducen nuevos recorridos y rupturas que, a la vez que potencian, complejizan enormemente los aspectos objetivos y subjetivos de los procesos de construcción identitaria, sean individuales o colectivos. Sin embargo, creemos que tanto la multiplicación de los registros de desigualdad, así como la crisis de los lenguajes y discursos articuladores de clase, no desembocan necesariamente en la afirmación del final de las clases sociales. Al contrario, en coincidencia con François Dubet (2004), creemos que es necesario "defender la categoría de clase social", pues ésta conserva su potencialidad analítica y crítica, en la medida en que viene a recordarnos una y otra vez, pese a los cambios, "la presencia y la fuerza que poseen los mecanismos de dominación social".

Capítulo 4

Continuidades y rupturas de los sectores dominantes

En la Argentina, una consecuencia de las múltiples represiones que ejercieron los Videla, Martínez de Hoz y otros, fue que cargaron el dado fuertemente contra buena parte de una sociedad paralizada por el terrorismo de Estado y por una brutal venganza de clase. A partir de entonces no hizo falta (y éste es mi argumento) jugadores particularmente buenos para que ganaran una y otra vez contra los intereses de los sectores populares y medios y, cada vez más, en un acto típico —en estas situaciones— contra las fracciones capitalistas más débiles. Y tanto ganaron algunos que, en varias coyunturas de crisis, ellos pudieron volver a cargar los dados cada vez más a su favor.

Guillermo O'Donnell, 2002.

Introducción

De manera general, la teoría social considera como sectores dominantes a aquellos actores sociales que ocupan un lugar privilegiado —a la vez económico y político— dentro del modelo de acumulación capitalista, vinculado al control de empresas, cuyo carácter puede ser muy variado (nacional o asociado con el capital internacional, o bien, de carácter multinacional). Durante décadas, la pregunta acerca del carácter de los sectores dominantes ocupó un espacio importante en la reflexión de las ciencias sociales latinoamericanas. Gran parte de estos análisis, que provenían de la economía y la sociología política, se articulaban en torno a tres preguntas centrales. En primer lugar, en el marco de un análisis histórico de las relaciones de clase, los estudios ponían el acento en la composición interna del actor y sus relaciones externas, estableciendo cuáles eran los vínculos de cooperación (las alianzas) o de conflicto (de oposición y contradicción) entre las diferentes fracciones de la burguesía y el resto de los actores sociales. En segundo lugar, dadas las condiciones de inserción económica de América Latina en el proce-

so de división internacional del trabajo, los análisis apuntaban a poner de manifiesto los niveles de dependencia o subordinación de la burguesía local con respecto al capital internacional. En tercer lugar, los estudios abordaban la cuestión acerca de si existía o no una clase dirigente, definida ésta por su capacidad de control y dirección del desarrollo general de la sociedad. La última pregunta, leída en clave gramsciana, aparecía como el corolario natural de las dos primeras, sea que se entroncara con el análisis de los procesos de construcción de alianzas de clase, como con una reflexión más acabada sobre las posibilidades de la burguesía local de erigirse en sujeto autónomo.

Buena parte de la literatura latinoamericana pareció concluir en el carácter más bien dominante —antes que dirigente— de la burguesía. Esto sucede también entre aquellos que utilizan la noción de "elite en el poder" (Wright Mills, 1987)[1]. Así, por ejemplo, uno de los pocos estudios sociológicos que hay sobre la composición de la elite es el de José Luis de Imaz, *Los que mandan*, publicado en 1964, precisamente desiste de utilizar la categoría "elite dirigente", para designar el caso argentino. Para otros autores, esta deficiencia aparecía reflejada en la ausencia de un comportamiento "verdaderamente empresarial" de las elites, lo cual terminaba por obstaculizar o impedir que la sociedad se orientara por la senda de un desarrollo capitalista endógeno. Como sostiene Carlos Acuña (1995), lo propio de estos enfoques es que presentaban explicaciones de carácter culturalista (el carácter retrógado o antimoderno del empresariado local), en algunos casos combinadas con argumentos que reenviaban a la teoría de la dependencia, como marco explicativo mayor.[2]

En la Argentina, más allá de los diferentes niveles de adhesión a cierta perspectiva dependentista-marxista que recorrió el espacio intelectual latinoamericano en otras épocas y pese a la escasez de estudios en torno a los sectores dominantes, estas tres preguntas aparecían articuladas en los análisis que sobre las relaciones de clases de la sociedad contemporánea realizaron en su momento distintos investigadores, entre ellos Juan Carlos Portantiero (1973) y, sobre todo, Guillermo O'Donnell (1977), por mencionar algunos de los más relevantes. Igual tentativa de articulación se registra en el brillante estudio histórico

de Jorge Sábato (1988), aun si se concentra en el proceso de formación de las clases dominantes en la Argentina moderna.

Pero éste no es el caso de la época actual, que añade a la ya notoria escasez de estudios sobre el tema, una suerte de apatía o desconfianza generalizada hacia todo tipo de análisis que evoque categorías como la de "clase social" o, más sencillamente, que apueste a una visión más integral de las diferentes dimensiones del actor en juego. En realidad, pese a que la referencia a "los sectores dominantes" constituye todavía un lugar común dentro de las ciencias sociales, lo cierto es que éstas parecen haber renunciado a una propuesta de análisis que involucre las diferentes problemáticas evocadas más arriba, y que engloben, como afirma Carlos Acuña (1994), los planos "estructural, organizativo y político". Los escasos estudios existentes se han abocado a realizar análisis sectoriales, a partir del estudio de algunas de las organizaciones más representativas de estos actores, tales como la Sociedad Rural Argentina (Palomino:1988), la Unión Industrial Argentina (Schvarzer:1991) y, más cercanamente, la Asociación de Bancos Argentinos (Heredia:2003). Por otro lado, durante los 80, los trabajos de investigación apuntaron a desarrollar una visión centrada en la relación de los grupos económicos con el régimen político democrático (Ostiguy:1990; Acuña:1995; Beltrán:1999), enfatizando en algunos casos los enfoques político-institucionales.

En la actualidad, salvo raras excepciones, el estudio de la dinámica de los sectores dominantes parece haber quedado confinado al espacio de la economía y de la sociología económica. Entre los trabajos más destacados se encuentran aquellos que, de manera sistemática, viene realizando el grupo de sociología económica de Flacso, compuesto por Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo y Hugo Notcheff (1998), y más recientemente por Ana Castellani y Martín Schorr. Dicho grupo de investigación desarrolla un abordaje de las clases dominantes en términos de "cúpula económica", definición que incluye tanto a los conglomerados económicos de origen extranjero y los grupos económicos locales (caracterizados por la diversificación económica), como a las empresas transnacionales y las empresas locales independientes (que se insertan en un sector de actividad). Estos análisis han desembocado en una profusa y rica literatura centrada en

el estudio de las fracciones más concentradas económicamente, vinculadas con la modalidad que adoptaron los procesos de privatización operados a comienzos de los 90.[3]

A la luz de lo dicho, el lector podrá imaginarse que nuestra presentación sobre las transformaciones de los sectores dominantes no podrá tener sino un carácter fragmentario y necesariamente incompleto. Esta dificultad proviene sobre todo de la escasa investigación que existe sobre las transformaciones actuales de los sectores dominantes, principalmente en lo que respecta a las dimensiones más sociales y culturales. El capítulo retomará gran parte de los aportes realizados por el grupo de Flacso, así como algunas investigaciones puntuales realizadas sobre las organizaciones sectoriales más representativas de la elite (Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural Argentina, Asociación de Bancos Argentinos). Asimismo, en esta línea, intentaremos plantear algunos interrogantes acerca de los agentes económicos involucrados en las denominadas "nuevas tramas productivas" que hoy asoman, asociadas al nuevo paradigma agrario y la revolución biotecnológica. Por último, sin aspirar a concretar un verdadero análisis de las dimensiones socio-culturales de las relaciones de clase, buscaremos dar algunas pistas —y sólo algunas— acerca de los cambios visibles en los estilos de vida de lo que muy genéricamente hemos denominado "sectores dominantes".

DEL EMPATE SOCIAL A LA GRAN ASIMETRÍA

Entre 1880 y 1930, las clases dominantes argentinas se caracterizaron por un fuerte dinamismo social y económico, estrechamente asociado a las ventajas comparativas que tuvo su inserción internacional, como productora y exportadora de carnes y cereales. En efecto, durante esta etapa de gran prosperidad, las clases dominantes pusieron en marcha un proyecto modernizador, que trajo aparejada la integración socio-económica de vastos sectores de la sociedad. Sin embargo, esta dimensión integracionista que dotaba a la Argentina de altos niveles de homogeneidad social (y no solamente en comparación con otros países latinoamericanos), era acompañada por una tendencia política excluyente, con una definición restrictiva de la democracia, y que

involucraba no sólo a la población de origen inmigrante, sino también a amplias capas de las clases medias y populares nativas.

Luego de la sanción del voto universal y obligatorio, en 1912, una de las grandes dificultades de la elite dirigente sería la dificultad de consolidar en el nivel nacional un partido conservador.[4] Por ello, los portavoces privilegiados de las elites serían, por un lado, las corporaciones tradicionales, paradigmáticamente representadas por la tradicional Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA); por el otro, el Ejército, cuya entrada en la escena política se produciría con el golpe de Estado de 1930. Así, arrancaba el proceso de conformación de una elite oligárquico-militar, cuyo protagonismo en la sociedad argentina —y más allá de las divisiones ideológicas registradas en ciertos períodos—, se extendería durante cincuenta años.

Ciertamente, recordemos que en las primeras décadas del siglo, tanto el modelo de desarrollo económico (agroexportador), como el esquema de dominación política empezaron a mostrar signos de agotamiento. Esto se debía a la complejidad de los cambiantes escenarios internacionales (que perjudicaba notoriamente los términos del intercambio comercial, anunciando con ello el fin de una época de prosperidad fácil), así como a la diversidad de conflictos que recorrían la tumultuosa y modernizada sociedad argentina (entre ellos, la emergencia de un partido político moderno, de fuerte carácter plebeyo; el desarrollo de sindicatos contestatarios, con un importante poder de movilización; la alta tasa de población de origen inmigrante). Frente a estos nuevos desafíos, la elite oligárquica abandonaría prontamente el camino del reformismo institucional para agudizar sus comportamientos autoritarios.

Así, durante los años 30, aparecen claramente cristalizados dos de los núcleos identitarios de los sectores dominantes; a saber, el liberalismo económico y el conservadurismo político. Como consignan tantos autores, la irrupción del peronismo (como antes el yrigoyenismo), con sus novedosas formas de democracia plebeya y sus líderes carismáticos, añadiría un tercer rasgo identitario: el antiperonismo militante. Sin embargo, el pasaje a un modelo nacional-popular implicaría importantes cambios en la estructura económica del país, lo cual pondría en evidencia el declive de la burguesía agropecuaria, como agente del progreso socio-económico, así como la emergencia de un nuevo empresariado nacional, asociado al desarrollo sustitutivo. La CGE, entidad representiva del nuevo actor económico, ilustraba la alianza entre un sector de la burguesía (el empresariado "nacional") y los sectores populares, representados por los grandes sindicatos, y promovida por Juan Domingo Perón desde el aparato del Estado.

Cabe subrayar el rol que desempeñaría la UIA, otra de las organizaciones representativas de una fracción de las clases dominantes. Como señala Jorge Schvarzer, a partir de la década del 20, la UIA supo consolidar un grupo de control con poder económico y fuerte influencia política, que se mantuvo estable hasta su colisión (política) con el peronismo. Luego del golpe de Estado de 1955, se produjo una renovación de sus elites sin que ello significara cambios importantes en sus orientaciones económicas. La UIA estaba formada por grandes empresarios pertenecientes a la elite tradicional argentina, que sin profesar una fe proteccionista, serían beneficiados por el cierre del mercado, operado durante la Segunda Guerra Mundial (Schvarzer, 1991, p. 265).

Así las cosas, el programa de industrialización sustitutiva restaría dinamismo económico a la elite agropecuaria, aunque ésta seguiría conservando una gran centralidad económica y política. En efecto, como señala Guillermo O'Donnell, estos sectores mantuvieron la capacidad para presionar y desarrollar estrategias ofensivas, orientadas a obtener, tras la crisis de la balanza de pagos, masivas transferencias de ingresos en su beneficio (O'Donnell:1977, p. 542). Pero su centralidad seguiría siendo también cultural, pues pese a que las referencias a la burguesía agropecuaria, como núcleo de la elite dirigente, remitían cada vez más al pasado, ésta continuaría ejerciendo un poder de fascinación social por medio de la propiedad terrateniente (la imagen de la pampa y su extensión), como encarnación paradigmática a la vez del pasado glorioso y de la riqueza consolidada.

La entrada en un período de democracia restringida, luego de 1955, coincidió también con el avance de la internacionalización del capital. La situacion posterior no sólo haría ostensible el fracaso constante de las alianzas de clase establecidas, sino también la fragmentación creciente en el interior de los sectores

dominantes. Más aún: el nuevo escenario aceleró la dinámica de polarización política, lo cual terminaría por erosionar las bases de cualquier proyecto político-económico de mediano plazo. Este cuadro de "empate social" (Portantiero:1973) o "hegemónico" (O'Donnell:1977) revelaba así tanto las oscilaciones de los sectores dominantes como el vacío político producido por la caída del peronismo, y la entrada en un período atravesado por la recurrente inestabilidad institucional, producto de la polarización política y de las fuertes pujas intersectoriales.

Un primer intento de poner fin a esta situación tuvo lugar durante el gobierno de Onganía, con la gestión de Krieger Vasena en el Ministerio de Economía; en ese momento se establece una alianza entre el estamento militar y las elites burocráticas, vinculadas con los grandes grupos económicos extranjeros. El resultado fue la implementación de un "Estado burocrático-autoritario" (O'Donnell:1972), combinación aparentemente paradójica entre crecimiento económico y autoritarismo político.

Finalmente, sería durante la última dictadura militar y bajo la gestión del ministro Martínez de Hoz, perteneciente a una de las familias más emblemáticas de la oligarquía ganadera, la que sellaría el final del empate social, sentando las bases de un nuevo régimen excluyente. Como lo muestran diferentes trabajos (Azpiazu, Khavisse y Basualdo:1986; Nun:1987), el proceso de concentración se inicia en los 70, época en la cual se interrumpe la industrialización sustitutiva, al tiempo que se opera una transferencia de excedente desde el Estado a los grandes grupos económicos. Asimismo, este proceso marca el reemplazo del liderazgo de las empresas nacionales, por empresas extranjeras diversificadas y/o integradas.

En efecto, la política económica de la dictadura militar significó el ingreso en una primera etapa de fuerte concentración de los grupos económicos (que produjo la quiebra de otros grandes empresarios), hecho que se iría acentuando luego de la hiperinflación de 1989. En otros términos, la estrecha articulación establecida entre los primeros y el gobierno militar, precedió e impulsó la consolidación de los grupos económicos como actores centrales de la política argentina, al tiempo que vino a confirmar la salida de una situación caracterizada como de "empate social" o "hegemónico". Asimismo, el programa emprendido por la dictadura militar permitiría a los sectores dominantes adaptarse a los cambios, sin tener que renunciar por ello a los elementos centrales de su núcleo identitario (a saber, liberalismo, conservadurismo y antiperonismo).

Ya hemos dicho que la reinstalación del régimen constitucional trajo consigo nuevos desafíos, a partir del abandono de las posiciones golpistas y la aceptación de las nuevas reglas de juego por parte de las elites económicas (véase capítulo 1). Sin embargo, no menos importante es tener en cuenta que este cambio de perspectiva política se llevaría a cabo en un contexto de mayor protagonismo de los grupos económicos. En este sentido, la relación que el nuevo gobierno constitucional entabló con los grandes grupos económicos anticiparía la entrada en una nueva época. Recordemos que, al inicio de su gestión, el gobierno de Raúl Alfonsín intentó llevar a cabo una propuesta de "concertación", suerte de pacto social que aspiraba a involucrar a los principales agentes socioeconómicos (entre ellos, los llamados "capitanes de la industria"). Pese a ello, los sucesivos planes de estabilización sólo lograron un apoyo más bien volátil de las grandes corporaciones económicas y los tradicionales grupos de interés, como la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio (Martínez:1991). Ahora bien, más allá de los manifiestos de buenas intenciones, lo cierto es que un nuevo vínculo se estaba gestando. En efecto, como consigna José Nun (2002), pocos advertirían la brecha que se iba abriendo entre la retórica crítica de Alfonsín contra los grandes grupos económicos y los ostensibles gestos de acercamiento hacia ellos, que privilegiaban cada vez más "los diálogos a puertas cerradas",[5] sobre todo de los agrupamientos informales, que irían ganando cada vez más espacio económico y protagonismo político.

No por casualidad, en adelante, la acción de los sectores dominantes se orientaría muy particularmente a la colonización de los dos grandes partidos políticos existentes, mediante la difusión de un discurso económico liberal, como eje de la solución de los problemas argentinos. Este discurso asumiría un nuevo alcance, luego del fracaso ostensible del Plan Austral, en 1987, momento a partir del cual los sectores dominantes impulsarían una campaña sistemática en favor de la necesidad de

realizar profundas reformas estructurales (Beltrán:1999, p. 75). La propuesta, además de contener medidas concretas de reformas, realizaba una particular lectura política y económica que luego se iría afianzando en la sociedad, responsabilizando al Estado argentino de la crisis actual y haciendo hincapié en el agotamiento del régimen de acumulación vigente, iniciado en el período de la posguerra (Beltrán:1999, p. 76).

Sin embargo, muy probablemente, como bien consigna el epígrafe de este capítulo, el triunfo final de la estrategia de los grandes grupos económicos no hubiera sido posible sin aquel golpe de Estado de 1976, que desembocaría en una verdadera revancha de clase, por medio de la mayor represión política de la historia argentina del siglo XX. La resolución final del empate social, luego del tumultuoso interregno radical, marcaría entonces la entrada en un período signado por las grandes asimetrías, entre las elites cada vez más internacionalizadas del poder ecónomico y los cada vez más fragmentados y empobrecidos sectores populares y medios.

CONCENTRACIÓN ECONÓMICA Y EXTRANJERIZACIÓN DEL CAPITAL

El gobierno de Carlos Menem abrió las puertas al establecimiento de una alianza entre los sectores dominantes, nucleados en los grandes grupos económicos, y la dirigencia política, de origen peronista. En efecto, si el nuevo modelo de acumulación había hallado su momento constitutivo durante la última dictadura militar, fue el gobierno peronista de Menem el que finalmente asumiría sin ambages la remoción de todos los obstáculos que hasta el momento habían impedido su verdadera consolidación, al tiempo que entregaría directamente el diseño y ejecución de la política económica, primero a los grandes grupos económicos (como Bunge y Born), luego, a los expertos procedentes de las usinas ideológicas más reconocidas del neoliberalismo vernáculo.

El correlato económico de esta nueva alianza fue la modalidad que adoptaron las privatizaciones de las empresas públicas. Esa modalidad posibilitó la reconfiguración positiva de los grupos económicos nacionales, que reorientaron sus actividades

hacia los servicios. Recordemos una vez más los principales factores que caracterizaron el conjunto de las privatizaciones, bien resumidos por Daniel Azpiazu (2002): celeridad del proceso privatizador, subvaluación del patrimonio de las empresas privatizadas, alta improvisación en las negociaciones, en fin, debilidades normativas y déficit de marcos regulatorios. Más aún, el saldo de esta reconfiguración abrió las puertas a una época de grandes beneficios, incluso de una "rentabilidad diferencial" (Notcheff:1998), dado el contexto de monopolio en el que se insertaron muchas de las empresas privatizadas.

Por último, la reconfiguración del perfil empresarial incluyó la desaparición de las empresas estatales, lo cual dio paso a un protagonismo mayor de los grupos subsidiarios de empresas transnacionales (caracterizadas por una mayor presencia y una integración entre los diferentes grupos) y de unos pocos grupos económicos locales (con capacidad de articulación internacional), al tiempo que señaló una pérdida de relevancia de las pymes (Bisang *et al.*:1996, p. 205).

No olvidemos que la desregulación económica potenció la dinámica desindustrializadora característica de la economía argentina desde mediados de los 70, acentuando su tendencia concentracionista, así como el proceso de extranjerización. En efecto, esta dinámica implicó el colapso y cierre de numerosas pequeñas y medianas empresas, que se encontraron en condiciones desventajosas para competir frente a la apertura de los mercados. En realidad, durante el primer lustro de la década del 90, sólo una fracción del sector industrial —aproximadamente unas 400 empresas, que representaban el 40% de la producción industrial—, estuvo en condiciones de desarrollar "estrategias de reconversión ofensivas" en el proceso de adaptación a las nuevas reglas de juego, mientras que el 60% del sector industrial, que abarcaba unas 25.000 empresas, no pudieron desarrollar sino estrategias "defensivas" (Bisang *et al.*:1996) o, como bien aclara Alberto Barbeito (1996, p. 217), "de sobrevivencia".

La constitución de una alianza con el peronismo y, a partir de ello, la apertura de nuevas oportunidades económicas, favorecida por el contexto internacional, dio paso entonces a una nueva época. Así, durante los primeros años de la década del 90, varias empresas argentinas decidieron repatriar parte del capi-

tal financiero depositado en el exterior, para invertirlo como capital fijo. Sin embargo, esta tendencia volvió a revertirse a mediados de la década, cuando los grupos económicos locales vendieron parte de los activos a consorcios extranjeros. Como señala Eduardo Basualdo (2001), ello no significaba que los grupos locales no continuaran estando presentes como accionistas de esas mismas empresas. En realidad, durante ese período, parte de esos grupos invertiría en sectores considerados tradicionales (producción agropecuaria) que ofrecerían de ahí en más una alta rentabilidad, al tiempo que se reanudaría la fuga de capitales. En este sentido, vale la pena recordar que, en el momento de la crisis de 2001, el monto depositado en el exterior, perteneciente a ciudadanos o empresas argentinas, era casi equivalente al total de la deuda externa (115 mil millones).

Así las cosas, el período se caracteriza por la fuerte concentración de la riqueza y de la producción y, al mismo tiempo, por el creciente proceso de extranjerización de la economía argentina. Esto último aparece reflejado en las cifras del Indec, que ya en 1997 señalaban que el 71% de los activos de las grandes empresas locales pertenecían a capitales extranjeros (Aronskind:2001, p. 76). Ahora bien, además de las áreas directamente involucradas en el proceso de privatizaciones, los sectores más favorecidos fueron los servicios comerciales, financieros y profesionales. Durante los 90 éstos aumentaron su participación en el PBI del 64,9% al 66,8% (Aronskind:2001, p. 68). Lo destacable, empero, fue el proceso de concentración, ejemplificado de manera paradigmática por las grandes firmas o cadenas en el sector comercial, a partir de la proliferación de hipermercados y shoppings, lo cual perjudicó notablemente los pequeños comercios, en gran medida desplazados del mercado. Como señalan Daniel Contartese, Marcelo Gómez y Daniela Rúfolo (2003, p. 2), mientras en 1984 los negocios tradicionales tenían una participación en el mercado de alimentos del 56,6%, en 2001 ésta era del 17,2%. En el mismo período, los supermercados pasaron del 26,6% a concentrar el 53,3%. Sin embargo, la dinámica de concentración alcanzó a todos los rubros de la vida social y económica, incluyendo también los medios de comunicación, con la conformación de poderosos multimedia, hacia fines de los 90.

EMPRESARIADO, PRIVATIZACIONES Y SECTOR FINANCIERO

Lo dicho anteriormente puede servirnos para avanzar en algunos de los rasgos presentes en los grupos económicos dominantes. El primero de ellos se refiere al carácter dependiente del gran empresariado respecto del Estado; el segundo, a la profundización de una perspectiva "cortoplacista", asociada a la dominación del capital financiero. Veamos brevemente cada uno de ellos.

Mucho se ha criticado la figura del empresario nacional, crecido al amparo del modelo de acumulación anterior, subsidiado y protegido desde el Estado. Por otra parte, la distorsión de este modelo (para algunos, en realidad, su corolario inevitable) aparecía ilustrada por un tipo de empresariado prebendario, vinculado estrechamente al Estado por medio de la prestación de servicios. Ambos modelos de empresariado nacional eran los que, supuestamente, el orden neoliberal, basado en la competencia del mercado, vendría a erradicar. Sin embargo, lo cierto es que una parte importante de los grandes empresarios nacionales supo adaptarse exitosamente a los nuevos tiempos, mientras que los pequeños y medianos empresarios quebraban o eran absorbidos por firmas mayores. En realidad, estos grandes grupos pasaron de una relación de tipo prebendario con el Estado, a la constitución de un vínculo de tipo patrimonial con un Estado neoliberal (asegurándose una alta rentabilidad gracias a mercados cautivos). Una vez más, las privatizaciones fueron el marco ideal para garantizar el acceso y saqueo del Estado por parte de los grupos privados. En definitiva, por encima de las diferencias de los contextos estructurales, el nuevo perfil empresarial parece mostrar menos la ruptura que la continuidad (aunque ésta se diera bajo otras formas y condiciones de acceso al Estado), en un marco de mayor internacionalización del capital y, a la vez, de constitución de conglomerados y nuevas sociedades. [6]

Por otro lado, no es menos cierto que el contexto estructural externo acompañó la consolidación de un nuevo "empresariado absentista", según la categoría acuñada por Zigmund Bauman (1999). Como afirma Ricardo Sidicaro, retomando a Bauman, las

nuevas reglas del capitalismo tendieron a afianzar una relación de "exterioridad" de estos "nuevos empresarios de la globalización, actores a la vez internos e internacionales, en relación con las sociedades nacionales" (Sidicaro:2001, pp. 52-53).[7] Sin duda, la realización mayor de este nuevo empresariado se ha venido operando en el marco de las sociedades dependientes periféricas. Como lo muestra el caso argentino, el pasaje a un nuevo modelo apuntó a la creación de un escenario de fuerte reducción de incertidumbre para la ansiada movilidad de los capitales, gracias a la desregulación y al déficit de controles estatales. Aún más, el gobierno de Menem no dudaría en utilizar el conjunto de herramientas institucionales disponibles (que incluyeron desde los decretos de necesidad y urgencia hasta los "poderes extraordinarios") para intervenir de manera decisiva en favor del capital, descuidando deliberadamente los controles y la formulación de marcos regulatorios, tanto en relación con el movimiento del capital como en lo que respecta a la privatización de las empresas.[8] Asimismo, las características propiamente inestables que adoptó el modelo argentino, sacudido primero por las crisis financieras de otros países "emergentes" (México), luego por la devaluación de la moneda en Brasil, a lo cual se añadía el carácter cada vez más agudo de la recesión económica, radicalizaron la tendencia de la elite empresarial a actuar y pensar en términos "cortoplacistas".[9]

Además de ello, las opciones político-económicas del gobierno menemista impulsaron la radicalización de uno de los rasgos ya presentes en el período anterior, a saber, la valorización del capital financiero, cuyo peso en la economía argentina (y sobre las otras fracciones del capital) fue sin duda en aumento. Como hemos subrayado en el capítulo 2, este proceso no debe imputarse exclusivamente a la dinámica propia de la globalización, sino también a los arreglos políticos específicos y, por ende, a la nueva estructura de alianzas político-económicas puesta en juego.

Favorecido por la estabilidad monetaria, el sector financiero logró expandir notoriamente sus servicios, modernizando su oferta y aumentando el volumen de créditos. Al igual que en otros sectores, esta expansión fue concretándose en un marco de concentración y consolidación de la posición de los grandes

bancos y de su creciente internacionalización. Así, durante los 90, el total de las entidades financieras pasó de 213 a 119 (Aronskind:2001, p. 76). Asimismo, en el año 2000, las organizaciones extranjeras controlaban el 50% de los bancos argentinos y un 51% del total de los activos (M. Bleger, 2000, citado en Heredia:2003).

En este escenario de expansión, el capital financiero contaría con diferentes voceros institucionales, académicos y mediáticos, repartidos en grupos de interés, fundaciones y universidades privadas. En efecto, entre las usinas de difusión de las ideas neoliberales se encontraban fundaciones privadas como la Fundación Mediterránea, el Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA) y la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), de donde salieron gran parte de los equipos técnicos que desempeñarían un rol mayor en el proceso de las reformas estructurales.

Uno de los grupos de interés que ilustrará estas nuevas coordenadas —tanto económicas como ideológicas— sería Adeba (Asociación de Bancos de la Argentina). Como consigna Mariana Heredia, "a diferencia de las asociaciones que representaban a los bancos cooperativos y a los bancos públicos, Adeba no se opuso a la extranjerización. Por el contrario, la asociación bancaria decidió modificar sus estatutos para poder representar también a los bancos extranjeros. Así, en 1998, la entidad aceptó la incorporación del Citybank. Paralelamente y bajo la presión de los miembros, los dirigentes de Adeba y los de la organización madre, de la cual aquella se había desprendido, comenzaron a negociar la fusión. Esta se concretó en 1999 con la creación de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA). Mientras otros representantes del sector financiero desaparecían o se debilitaban, la nueva asociación logró consolidarse como portavoz de 93 de los 96 bancos que operan en el país y que controlan el 80% de los depósitos del sistema".

Recordemos que Adeba es una organización surgida en 1972, cuyos primeros pasos fueron el de resistir a las medidas intervencionistas del tercer gobierno justicialista. Desde sus comienzos, lejos de estructurarse como una organización cerrada sobre el mundo de las finanzas, mantendría contactos fluidos con empresarios de otros sectores y entidades financieras extranje-

ras, además de contar entre sus propias filas con propietarios de grandes grupos económicos. En fin, siguiendo a Mariana Heredia, uno de los elementos novedosos de Adeba es que su ideario propone la articulación entre "el saber de los economistas y la práctica de los hombres de negocios". Esta articulación se expresaría también mediante la organización de "convenciones", de las cuales participaría un sector del mundo académico, el grueso del empresariado y representantes de la clase política dirigente.

En resumen, este conjunto de actores aparecen como la ilustración de un *ethos*, esto es, el conjunto de coordenadas éticas e ideológicas que orientan la acción de un grupo o individuo, asociado a la nueva etapa de acumulación del capital y, muy especialmente, a las exigencias del capital financiero en el contexto de la nueva dependencia. En fin, un *ethos* que en su expresión hiperbólica impulsa no sólo la autonomía de la economía y las virtudes del *management*, sino el desarrollo de prácticas empresariales disociadas del contexto nacional (del conjunto de actores sociales y, en última instancia, de otras fracciones del capital) y cada vez más marcadas por las referencias al mercado global y la internacionalización de la economía.

MODELO AGRARIO Y ¿NUEVOS? PERFILES EMPRESARIOS

Como hemos señalado en el capítulo 1, bien vale la pena tomar nota de que, desde mediados de los 90, asistimos al desarrollo de nuevas tramas productivas en el agro argentino, que han modificado bruscamente el modelo local de organización de la producción. Este nuevo modelo, que se caracteriza por el uso intensivo de biotecnologías, de acuerdo a estándares internacionales (semillas transgénicas a través de la siembra directa), ha colocado a la Argentina no sólo como uno de los grandes exportadores mundiales de cultivos transgénicos, sino como uno de los países mejor posicionados en términos tecnológicos. Dichas innovaciones implicaron un gran desarrollo del sector agroalimentario, incrementando notoriamente su peso relativo en la economía argentina. Por último, estos cultivos no sólo se extendieron en la región pampeana, sino también en las llamadas áreas marginales, como Entre Ríos o Santiago del Estero, entre otras provincias.

Según Roberto Bisang (2003), el creciente desarrollo de la agroindustria (que incluye, además de la producción de soja y oleaginosas, ligadas a las nuevas biotecnologías, otros productos, como vinos finos, cítricos, tabaco y cortes de carne "no tradicionales"), muestra "como tendencia la reformulación del perfil empresarial, traccionado por el mercado internacional".[10] Se trataría aquí de una figura empresarial que, lejos de depender de los subsidios del Estado, se ha desarrollado en el marco de un mercado abierto y competitivo, de alta rentabilidad (pese a las retenciones, que alcanzan el 20%), por medio del aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Este modelo articularía diferentes actores económicos: mientras que en el sector semillero aparecen las grandes empresas multinacionales (como Monsanto y Novartis) y unos pocos grandes grupos económicos locales, en el circuito de producción surgen otros actores económicos, igualmente centrales, entre ellos los "terceristas" (los que cuentan con el equipamiento tecnológico) y los "contratistas", suerte de "productores sin tierra", que rentan la propiedad para su explotación, además de los "productores rentistas".[11]

Así, una hipótesis optimista plantearía que, dada la heterogeneidad de actores que asoman en el nuevo mapa agrario, dicho modelo tendría la particularidad de salir de una dinámica de "ganadores y perdedores", propia de los 90. Más aún, para esta visión dicha trama productiva daría cuenta de la emergencia de una nueva clase empresarial, suerte de "nuevos ricos", que no provienen solamente de los grandes emporios económicos y financieros, sino también de ciertos establecimientos o productores (medianos) del campo. Estos actores habrían acertado en la búsqueda de una "diversificación", mediante una modalidad muy extendida en los 90: el contratismo y el tercerismo. En un texto publicado en 1998, Miguel Murmis ya observaba que la expansión del "contratismo" se registraba no sólo para los megapools de siembra, sino también para el caso de aquellos establecimientos que buscaban expandir y modernizar su dotación de maquinarias, y luego comenzaron a tomar trabajos fuera de la unidad. Sin embargo, el modelo más expandido, agregaba, era el del contratista puro. Señalaba, asimismo, la expansión

del modelo de contratista puro en diferentes regiones —agrarias— del país (Murmis:1998, p. 219). Una hipótesis plausible sería, entonces, que el modelo del contratista encontró otras posibilidades (y potencialidades) a partir de la introducción del nuevo modelo agrario, ligado a las biotecnologías. Retomando a Roberto Bisang, el contratista y el tercerista vendrían a reflejar una nueva tendencia que, en el límite, expresaría un perfil empresarial más de tipo schumpeteriano, que asocia las modernas tecnologías con la búsqueda de nuevos nichos de mercado. Por último, se trataría de un modelo que plantea una relación recursiva entre investigación y producción en el marco de una "sociedad del conocimiento", por medio la experimentación y aplicación de los últimos avances en biotecnología.

Otro elemento novedoso es el surgimiento de organizaciones empresariales vinculadas a este sector agroindustrial, entre las que se destacan Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), así como otras asociaciones que se han venido generando en los diferentes sectores (Maizar, Asagir, entre tantas otras). Estas últimas, a diferencia de las tradicionales (SRA, Federación Agraria Argentina o Coninagro), presentan una integración vertical (que abarca desde la producción primaria hasta sectores de servicios ligados a la nueva trama productiva). Dichas corporaciones, que comienzan a ser reconocidas por el Estado como los nuevos referentes del mundo agrario,[12] se hallan en proceso de formación; muchas de ellas aparecen asociadas a fundaciones que cuentan con sus equipos de "intelectuales orgánicos" (o, en lenguaje más empresarial, sus *think tank*), entre los cuales se encuentran conocidos economistas —tal el caso de Juan José Llach—. Al igual que ABA, estas organizaciones convocan numerosos seminarios y convenciones en donde convergen los diferentes actores involucrados, donde se abordan preocupaciones técnicas, económicas y políticas.

Sin embargo, la discusión acerca del nuevo modelo agrario y sus consecuencias aún no se ha instalado. En realidad, la introducción de nuevas tecnologías y de innovaciones organizacionales en el sector agrario ha motivado algunos debates, en los cuales intervienen no sólo especialistas, sino también organizaciones no gubernamentales y movimientos campesinos.[13] Las hipótesis más optimistas deben ser insertadas y evaluadas en un cuadro mayor. Así, hay elementos que indican que el vertiginoso desarrollo de la agroindustria ha traído aparejada la desarticulación de los sistemas productivos locales, aun si esto se ha realizado en favor del desarrollo de formas organizacionales con escasas relaciones con el contexto local (entre las cuales se incluyen los *pools* de siembra y los fondos de inversión). Como aparece citado en el trabajo de Eduardo Trigo *et al.* (2002, p. 99): según un estudio de Manuel Mora y Araujo, entre 1992 y 1999, el número de explotaciones se redujo un 32%, de 176.000 a 116.000, con un incremento en la superficie media, que pasó de 243 a 357 hectáreas. Asimismo, las técnicas de siembra directa han disminuido entre un 28 y un 37% el uso de mano de obra (GER:2003), lo cual generó no sólo una población de supuestos "rentistas", sino también un fuerte éxodo o desplazamientos voluntarios del campo. A esto hay que añadir, como hemos consignado en otro capítulo, la ola de desalojos en ciertas provincias situadas en la llamada "nueva frontera agrícola" (las áreas marginales), como Santiago del Estero y Salta, entre los casos más conocidos. En esas regiones, el aumento de la rentabilidad en el cultivo de transgénicos parece ir de la mano del avance de la deforestación y la tendencia al monocultivo intensivo, con el consiguiente peligro en términos de degradación de la biodiversidad. Asimismo, no hay que olvidar que el control de los llamados "paquetes agrotecnológicos" está en manos de unas pocas empresas multinacionales. Por último, los datos acerca de la concentración de la producción son más que elocuentes: así, en la Argentina, tan sólo cinco grandes compañías exportan el 78% del trigo, 79% del maíz, 71% de harina de soja, 95% de aceite de soja y 99% de girasol (Pengue:2004).

En resúmen, es demasiado pronto para establecer cuán fuertes o vulnerables son los diferentes actores presentes en la nueva trama productiva; sin embargo, no es menos cierto que la expansión del modelo —y su alta rentabilidad actual— está estrechamente vinculada con cuestiones de orden coyuntural (entre otros, los precios favorables en el mercado internacional). En los próximos años habrá que ver qué dinámicas se establecen entre los distintos actores económicos y qué rol asume el

Estado,[14] para realmente sopesar hasta dónde el nuevo paradigma agroalimentario, asociado a la revolución biotecnológica, es capaz de generar desarrollo —como aseguran sus defensores más entusiastas— o sólo es una burbuja más, un paréntesis cada vez más acotado, dentro de una larga historia de estancamientos y recesiones, cuyo final dejará un nuevo saldo de (pocos) ganadores y (numerosos) perdedores.

Las marcas del mimetismo cultural

Vamos a presentar ahora, aunque sea también de manera fragmentaria, algunos elementos que den cuenta de las transformaciones culturales de los sectores dominantes, en especial, ciertos cambios ligados a las fracciones más tradicionales de la elite. No son los únicos ni son, quizá, los aspectos más relevantes; sin embargo, son los que, por distintas razones, se hicieron más visibles durante la década de los 90. El análisis de estos cambios fue abordado básicamente desde el periodismo de investigación y desde la sociología.

En términos generales y al igual que en otras sociedades, los sectores dominantes argentinos se han caracterizado por el desarrollo de una sociabilidad de tipo comunitario. En realidad, pese a que suscriben un discurso individualista, centrado en la competencia, las clases dominantes —como afirman Monique y Michel Pinçon (2000)—, se han caracterizado por desarrollar un "colectivismo práctico": prácticas y estrategias sociales encaminadas a la conservación de las posiciones y la reproducción social dentro del espacio social. En la Argentina, desde los orígenes de la república moderna, dichas prácticas fueron definiendo los diferentes círculos de pertenencia, que abarcaban los deportes "exclusivos", realizados colectivamente (como el polo y el golf), los lugares de sociabilidad y "de encierro" que permitían la práctica del "ostracismo social" (los clubes selectos, como el Jockey Club, Club del Progreso; más adelante, ciertos *countries*, como el Tortugas), en fin, que incluían también la elección de las instituciones educativas, esto es, las escuelas de "elite". El corolario inevitable de este estilo de vida sería, sin duda, una sociabilidad homogénea, intensa, de carácter mundano,

con rasgos comunitarios, visible en la contigüidad e interpenetración de los diferentes círculos sociales.

Sin embargo, la sociabilidad sin duda comunitaria de la elite oligárquica encontró un límite tangible en el carácter "socialmente abierto" (Sábato:1988) de la sociedad argentina. Así, pese a que la novela del siglo XIX, desde Miguel Cané a Eugenio Cambaceres, se encargaría de mostrar las consecuencias "degenerativas" de este fenómeno (el "arribismo" de los inmigrantes), el carácter aluvional de la sociedad argentina impedía tal cierre, lo cual no tardaría en manifestarse en la composición misma de la elite, nutrida de nuevos ricos, muchos de ellos de sonoros apellidos inmigrantes. Aun así, durante mucho tiempo, la elite logró conservar la exclusividad de ciertos espacios de sociabilidad, dosificando la entrada de nuevos ricos.

Ahora bien, en el marco de los nuevos procesos de articulación entre lo local y lo global, el establecimiento de una alianza con el peronismo triunfante produjo en las elites argentinas, tradicionalmente liberales y profundamente antiperonistas, una importante recomposición. Desde el punto de vista político y cultural, lo más notorio de los 90 es que las clases altas fortalecieron su seguridad ontológica, esto es, su confianza de clase, al encontrar en su adversario histórico, el peronismo, un inesperado aliado. Al mismo tiempo, este encuentro con el peronismo se dio en un contexto de modernización de la elite y de generación de nuevos espacios de sociabilidad, asociados al avance de la privatización de lo social.

Así, en un contexto de alta rentabilidad económica y de fuerte afirmación política, la elite tuvo, sin embargo, que resignar ciertos criterios de afirmación del nivel social, para aceptar la entrada de "nuevos ricos", que el régimen menemista, del cual ella era socia fundamental, iba generando. Pero, contrariamente a otros períodos sacudidos por grandes cambios, y en virtud de la alianza de poder establecida, dicho pasaje estuvo mucho más marcado por la búsqueda por momentos eufórica de las afinidades, antes que por una arrogante afirmación de las diferencias, como había sucedido en otras épocas. El resultado de esta experiencia fue una suerte de ampliación de los espacios de sociabilidad y socialización, que posibilitaron el contacto y vinculación con la clase política y los "nuevos ricos" emergentes.

Además, la alianza establecida con el peronismo en su inflexión neoliberal se realizó en un contexto de modernización y globalización de las elites (visiblemente más "americanizadas") lo cual probablemente facilitó el paso hacia la ostentación desmedida y el exhibicionismo más desenfrenado.

Tempranamente, en 1989, la empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, quien sería nombrada embajadora itinerante durante el menemismo, afirmaba: "Ahora todos los de la clase alta somos peronistas" (citado en Mirta Palomino:2003). Hasta la Sociedad Rural Argentina, cuyo peso gravitacional en la economía argentina era cada vez menor, se incorporaría al clima de fiesta y frivolidad que atravesó la época, resignando gran parte del conservadurismo que, junto con el liberalismo y el antiperonismo militante, habíanse constituido en los pilares de su identidad de clase. Además, los gestos del menemismo para con los sectores tradicionales de la elite fueron ostensibles, abarcando desde el discurso de la conciliación (el abrazo con el almirante Isaac Rojas) hasta el reconocimiento de las reivindicaciones de la SRA, incluidas la liberación de controles y precios, la supresión del impuesto a las exportaciones, y la venta del predio de Palermo a un precio por demás irrisorio.[15] En fin, pese a las renuencias que cada tanto se manifestaban en el interior de la tradicional asociación, para el conjunto de sus miembros resultaba claro que se hallaban frente a un gobierno al cual efectivamente "no podían no apoyar" (Heredia:2003).

El producto fue así lo que Silvina Walger denominó en su libro *Pizza con champán*, publicado en 1994, una "cultura del transformismo", a saber, un estilo de vida marcado por el consumo ostentoso, la frivolidad, los gestos excesivos, que abrazó el conjunto de la clase dominante argentina, en el cual coincidieron no sólo empresarios exitosos y representantes de la clase política, sino también gran parte de la elite más tradicional.

Sin embargo, es necesario destacar una diferencia esencial en lo que se refiere a la transformación cultural de la clase política peronista y la de las fracciones más tradicionales de los sectores dominantes. Para una parte de la clase política, esta reconfiguración cultural supuso un gran quiebre ideológico, a partir del abandono del ideario tradicionalmente peronista y la conversión al neoliberalismo. No pocos de ellos, hasta ayer irreverentes defensores de lo popular, se convirtieron en nuevos ricos, motivo por el cual se apresuraron a abandonar toda referencia a una ética ciudadana o una supuesta moral colectiva, para celebrar hiperbólicamente la asociación entre mercado e individuo, entre *res publica* y asuntos privados. Más aún, en un marco de comunión con las clases dominantes, el elemento plebeyo —tradicionalmente asociado al peronismo— fue expurgado (esto es, desconectado de su sentido originario popular y contracultural, más aún, de su potencialidad política antagónica) y reconvertido en función de un nuevo estilo, asociado al *kitsch* y el consumo ostentoso. Así las cosas, la tan denunciada y a la vez festejada "transgresión"[16] exhibida por la clase política dirigente y sus nuevos ricos, no era sino la inscripción de lo plebeyo transfigurado, esto es despojado de todo antagonismo político, en el espacio de las clases dominantes.

En cambio, para la elite, el espíritu de celebración, visible en la ostentación obscena y la apertura de los lugares antes exclusivistas (el ingreso en los *countries* más elitistas, las fiestas en Punta del Este, la banalización del golf, entre otros), nos habla menos de un quiebre ideológico que de una muestra de mimetización con la nueva clase política, tan segura y gozosa del éxito de su "transgresión".

En todo caso, sorprendida primero frente al viraje neoliberal de su adversario histórico, seguidamente satisfecha ante las multiplicadas muestras de buena fe, atraída incluso por el carácter festivo del nuevo *look* plebeyo, como lo consignan prolijamente las páginas sociales de los semanarios, así como los trabajos de periodismo de investigación, una buena parte de la elite terminará por dejar atrás el antiperonismo, para mirar con buenos ojos la farandulización de los gustos, sin esquivar por ello ni el *kitsch* ni mucho menos la desmesura reinante.

ELITISMO, SOCIALIZACIÓN HOMOGÉNEA Y VISIONES DE LA POBREZA

En los 90 se redefinen los espacios de sociabilidad y de socialización. Esto aparece ilustrado en la expansión de las urbanizaciones privadas. No cabe aquí analizar los pormenores de este

proceso, del cual hemos dado cuenta en otros trabajos (Svampa:2001, 2004). Lo que nos interesa analizar es en qué medida esta nueva dinámica privatizadora afectó las pautas y comportamientos de la elite, lo cual trajo aparejado tanto una apertura social como la reformulación de las tradicionales estrategias de distinción. Recordemos que el impulso mayor de las urbanizaciones privadas ocurrió en un contexto de notorio aumento de las desigualdades sociales: frente a la deserción del Estado y el vaciamiento de las instituciones públicas, se fueron desarrollando modalidades privatizadas de la seguridad y de la integración social, que marcarían nuevas y rotundas formas de diferenciación entre los "ganadores" y los "perdedores" del modelo neoliberal.

Como consecuencia de ello, la autosegregación urbana, un fenómeno típicamente asociado a las clases altas, se haría extensivo a otros sectores sociales. Ciertamente, la difusión de las nuevas urbanizaciones privadas incluyó una variedad de ofertas inmobiliarias, no sólo barrios privados y *countries*, sino también condominios, chacras y megaemprendimientos. En la actualidad, existen más de 600 emprendimientos en todo el país, que incluye los alrededores de las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario (aún si el 90% de ellas se encuentra en la provincia de Buenos Aires). Los nuevos enclaves fortificados incorporaron y modificaron un estilo de vida ya existente, el de *countries* o clubes de campo, estrechamente vinculados al estilo de vida tradicional de las clases altas y medias-altas, caracterizados por una intensa vida social y recreativa. En realidad, la elite participó activamente en la (re)creación de nuevos espacios de sociabilidad, producto de la nueva ola privatizadora, en los cuales confluyeron diferentes fracciones, entre ellas, un contingente de nuevos ricos ligados al poder, pero también franjas importantes de las clases medias consolidadas y las clases medias en ascenso.

Por otro lado, el correlato de esta búsqueda de homogeneidad social, por parte de los sectores altos y medios-altos consolidados, ha sido la transformación del "mercado educativo", visible en la proliferación de centros de enseñanza privados. Claro está que dicha tendencia no excluye una fuerte segmentación dentro del circuito de la educación privada (Del Cueto:2004). Para sopesar las repercusiones de este nuevo estilo residencial desde el punto de vista de las clases medias en ascenso, conviene

recordar que el proceso de autosegregación espacial ha llevado a la constitución de una nueva periferia urbana, que se articula en forma de red o archipiélago, cuyo grado de densidad es variable, según las zonas, en la cual aparecen interconectados *countries* y barrios privados, colegios y universidades privadas, con servicios de recreación y comercialización. Esto se expresa de manera paradigmática en el área norte de los partidos del Gran Buenos Aires. Desde este punto de vista, dichas conexiones, originadas en el interior de esta nueva mancha urbana, refuerzan la homogeneidad de los círculos sociales.

Sin embargo, en el campo educativo, quizá lo más notorio durante los 90 no haya sido solamente la proliferación de colegios privados dentro de la nueva red socio-espacial compuesta por *countries* y barrios privados, sino la creación de un conjunto de universidades privadas, claramente de elite, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la Universidad de San Andrés y la Universidad Austral (esta última, situada en Pilar, la zona que concentra la mayor cantidad de urbanizaciones privadas), así como la Universidad Torcuato Di Tella. A diferencia de aquellas primeras creadas luego de la polémica Ley de Educación Superior sancionada durante el gobierno de Frondizi (quizá más ligadas a una demanda de modernización), en la actualidad las nuevas universidades privadas (como los colegios privados de elite) realizan una apuesta más explícitamente orientada a la creación de una clase dirigente. Esos "centros de excelencia" desarrollan vínculos con prestigiosas universidades de Estados Unidos, muchas de ellas consideradas como usinas de las ideas neoliberales, sobre todo en al área de la economía y la administración. Por último, no hay que olvidar que esos centros privados de elite abren nuevos espacios de vinculación entre la elite consolidada y la emergente.

Por otro lado, en el marco de la gran brecha social afianzada en los 90, se observa que en el interior de los sectores dominantes se desarrollan nuevas "concepciones" acerca de la pobreza. Recordemos que, tradicionalmente, la cultura de la beneficencia era ejercida por las mujeres provenientes de las clases altas, por medio de fundaciones, iglesias, o comisiones informales en los *countries*. Fueron ellas las encargadas de introducir y difundir la figura de la "caridad" como una pauta cultural de

los sectores altos y medios-altos. Sin embargo, pese a que las actividades ligadas a la asistencia social cuentan con una larga historia, en los últimos quince años, en una sociedad en la cual la gran asimetría se ha traducido en el explosivo incremento de empobrecidos y excluidos, el lugar de la "ayuda social" (bajo formas tales como la "beneficencia", el "voluntariado" o el "trabajo solidario") cambió notablemente. Amén de ello, durante los 90, en consonancia con la dinámica neoliberal, el Estado argentino fue consolidando nuevas modalidades de intervención sobre lo social, lo que aparece ilustrado hoy paradigmáticamente por una batería de planes sociales focalizados. Lo particular es que en la implementación de estas políticas de "contención social", que apuntan a incluir al excluido en tanto excluido, recomendadas y controladas por los organismos multilaterales, tienden a participar también una serie de agentes sociales, entre ellos ONG, fundaciones privadas y empresas.

En este contexto, se fueron creando también fundaciones de nuevo tipo, más profesionalizadas, ligadas a la acción del llamado "tercer sector", que agrega a la asistencia social focalizada (la acción comunitaria), ciertos objetivos de formación y capacitación. Esto aparece confirmado por la difusión de la noción de "responsabilidad social empresarial", un concepto de resonancias globales introducido por las empresas multinacionales, que aspira a combinar la filantropía empresaria con una idea más general acerca de la responsabilidad social de las empresas. Este nuevo modelo ha sido propuesto por y para las grandes empresas, que operan en contextos de gran diversidad, de fuerte competencia internacional y, sobre todo, de creciente exposición ante la opinión pública. No es casual que muchas de las grandes empresas que lideran internacionalmente el Movimiento de Responsabilidad Social Empresaria, con fuertes campañas mediáticas y enormes presupuestos, sean responsables de daños ambientales, de explotación de trabajo infantil y subcontratación de trabajo esclavo, sobre todo, en las regiones periféricas, donde los marcos regulatorios son siempre más permisivos que en los países industrializados del centro.

Estas nuevas formas de intervención sobre lo social se inscriben en un determinado marco ideológico y epistemológico, atravesado por las exigencias de individualización y la demanda de

autoorganización de los sectores populares, propias del capitalismo contemporáneo. Ahora bien, como consignan Mario Roitter y Marcelo Carmelo (2005), para el caso argentino sería más pertinente que estas nuevas formas de intervención de las empresas sobre lo social fueran denominadas "acción social empresaria", antes que "responsabilidad social empresaria", pues lo único verdaderamente existente y constatable es que hay acciones (de todo tipo), que se han incrementado a lo largo de los 90, y que muestran una participación creciente de fundaciones pertenecientes a firmas multinacionales de origen extranjero. Cierto es que luego de la crisis de 2001, las acciones sociales empresarias se incrementaron, como lo ilustran desde el "Programa Soja Solidaria" (propuesto por Aapresid y fuertemente criticado), hasta los publicitados "programas de responsabilidad empresarial". Así, en 2005, nada menos que quinientas empresas se habían presentado para el premio "Ciudadanía Empresaria", cuyo lema era "Porque la comunidad es nuestra mayor empresa"...[17]

Pese a ello, en la Argentina, siguiendo a Roitter y Carmelo, más allá de las denominaciones apologéticas y las inflaciones terminológicas, "muy pocas empresas están próximas a satisfacer con sus acciones los atributos que plantea el 'enfoque moderno', aunque gran parte dice haberlo adoptado". Así, amén de las prácticas concretas, lo que resulta preocupante son "los discursos en los cuales se difunde, así como el modelo social implícito que proponen, cuando se considera a estas acciones como un sucedáneo de la redistribución del ingreso" (Roitter y Carmelo:2005, p. 10).

Las marcas de la distinción

El mimetismo cultural de las elites operado en los 90 no significó empero el borramiento absoluto de las marcas de la distinción. Así, la reformulación de las estrategias de distinción puede ser ilustrada por dos aspectos visibles en los espacios de sociabilidad, generados en el marco de las nuevas urbanizaciones privadas: por un lado, la flexibilización de los códigos de pertenencia; por el otro, la reafirmación del estilo de vida asociado a la elite, como símbolo de la distinción. Veamos, para terminar este capítulo, cada uno de ellos.

El primero se refiere a las diferentes estrategias de adaptación de la elite, frente a la flexibilización inevitable de las condiciones de acceso a los espacios de sociabilidad tradicionales. En medio de las transformaciones económicas, la vertiginosa expansión del estilo de vida *country* afectó las condiciones de admisión y, por ende, los códigos de pertenencia. Recordemos que el ingreso en estos espacios exclusivos suele exigir el pago de una cuota (que en los 90 podía alcanzar los 25 mil dólares); sin embargo, en el caso de los círculos más exclusivistas, resultan más importante las restricciones al ingreso, visibles en las condiciones de admisión.[18] Asimismo, el proceso de expansión de los 90 produjo una importante transformación en los *countries*, pues condujo a pensar al espacio de recreación, antes restringido al fin de semana, como un estilo de vida permanente, fuertemente protegido. En consecuencia, pese a que no estuvieron en el centro de la expansión inmobiliaria, no fueron pocos los *countries* antiguos y prestigiosos que, a fines de los 90, desarrollaron una política de expansión, para lo cual adquirieron, cuando era posible, predios vecinos, que fueron rápidamente loteados y vendidos. Así, el *boom* inmobiliario desencadenó una "fuga hacia adelante", que generó la necesidad de marcar un equilibrio entre las estrategias comerciales y las estrategias de distinción. Por ejemplo, a fin de adaptarse a la nueva ola, algunos *countries* elitistas optaron por flexibilizar el pago de la cuota de ingreso; en otros se disminuyó su monto; en fin, otros alternaron el debilitamiento de las condiciones de admisión con su refuerzo y el nuevo cierre, una vez consolidada la estrategia comercial. En los *countries* más exclusivos, la necesidad de mantener el "nivel social" terminó por conciliarse con el ingreso —inevitable, aunque "dosificado"— de los "nuevos ricos", personajes casi siempre provenientes del mundo empresarial, de la política, de la farándula y el deporte. Pese a ello, cada tanto, una negativa contribuía a reafirmar el sentimiento de pertenencia. En fin, una vez consolidada la tendencia, todo parece indicar que las marcas de la exclusividad se han desplazado a algunos *countries* más recientes; muchos más lujosos que sus predecesores y, por ende, menos accesibles a los sectores de clase media en ascenso (profesionales y clases medias de servicios).

En segundo lugar, como hemos señalado más arriba, pese a los cambios registrados en los sectores dominantes, la distin-

ción, esto es, aquello que es considerado como "legítimo" (Bourdieu:1979) continúa haciendo referencia al estilo de vida de la elite oligárquica, tradicionalmente asociada al campo. En este sentido, el discurso publicitario de los 90 respecto de las urbanizaciones privadas no deja lugar a dudas: así, un rápido análisis de las ofertas existentes permite distinguir por lo menos dos formatos claramente diferenciados: en un primer nivel, amplio y más masivo, se halla el "estilo de vida verde", que imita el de las clases medias-altas suburbanas norteamericanas, y que apunta a las clases medias y medias-altas; en un segundo nivel, asoma un estilo más selecto, añorado y "exquisito", propio de la "ruralidad idílica", que alude a la vinculación con el pasado rural del país.

Es este modelo de ruralidad idílica, símbolo de la distinción, en el cual las nuevas fronteras no se relacionan tanto con la expansión del "verde", como con el "campo" y su extensión, el que tiene como destinatario a las clases altas y medias-altas consolidadas. Su ilustración más clara son los nuevos barrios de chacras, que apuntan a recrear parte del estilo de vida de la elite tradicional: aquí, extensión, pasado criollo, ecología e intimidad, se conjugan en un estilo reservado sólo para unos pocos. Ello puede ser compartido por aquellos *countries* que ostentan ciertos elementos de distinción —como un *clubhouse* "de estilo", en algunos casos, un antiguo casco de estancia—, lo cual remite a algún apellido tradicional. En algunos casos, incluye la cercanía de un pueblo que conserva el encanto de otra época, lo cual permite combinar el turismo ecológico con el cultural, esto es, el "campo" con la "pieza de museo".

Asimismo, ciertos elementos de la ruralidad idílica pueden ser invocados a través de algunas actividades deportivas, ligadas de manera connatural al pasado criollo, por ejemplo, el polo, el más aristocrático de todos los deportes. Por último, el modelo de ruralidad idílica puede combinar, como en el caso de los megaemprendimientos (ilustrado por la urbanización Nordelta, situada en el partido de Tigre), la añorada extensión con aquellas imágenes prolijas y recortadas de espacios y jardines propios de los suburbios residenciales norteamericanos, símbolos de la modernidad primermundista. Pero la nueva exclusividad de fines de los 90 aparece representada, antes que nada, con el usu-

fructo permanente de la "tranquilidad", por la extensión del predio y por el resguardo de la privacidad, sin vecinos a la vista, a través de la imagen de la pampa y su extensión.

* * *

Ante la escasez de investigaciones sobre el tema, ya mencionada, este capítulo sólo se ha propuesto realizar una aproximación de tipo exploratorio a las transformaciones más generales y los nuevos rasgos socio-culturales que presentan los sectores dominantes en la Argentina.

Durante los 90, la economía argentina atravesó por un proceso de concentración y de transnacionalización, que castigó a las fracciones más débiles del capital (pequeñas y medianas empresas), al tiempo que expandió y consolidó grandes grupos económicos, y sirvió como trampolín a otros todavía más recientes. Estas nuevas condiciones acentuaron también la importancia del capital financiero en la estructura productiva argentina. Todo ello nos llevó a preguntarnos acerca del alcance de la reconfiguración del perfil empresarial y sus diferencias con aquel otro, asociado a la última etapa del modelo nacional-popular. Por otro lado, consignamos la expansión de un nuevo paradigma agrario, desde mediados de los 90. Frente a aquellos que hablan de la emergencia de un nuevo perfil empresarial, vinculado a la revolución tecnológica y la sociedad del conocimiento, buscamos instalar la pregunta acerca de su realidad y, al mismo tiempo, insertamos esta problemática en un escenario marcado por la fuerte concentración del poder.

Exploramos luego las transformaciones culturales, analizando las prácticas de los actores. Desde el punto de vista cultural, para los sectores dominantes, definidos históricamente como liberales en lo económico y antiperonistas en lo político, la alianza con el gobierno de Menem significó una gran oportunidad histórica. Este giro inesperado alentaría una suerte de mimetización cultural de la elite con la clase política gobernante, una fascinación por lo plebeyo despojado de su dimensión antagónica y contracultural, en una dinámica en la cual se entremezclaban y confundían ética de la ostentación y sentimiento de impunidad, consumos suntuarios y afán de transgresión.

Aunque acostumbradas a la distancia social y, en mucho, a las ventajas de los lugares protegidos, la modificación del espacio social trajo consigo consecuencias importantes para las clases altas, en términos de socialización y sociabilidad. En este sentido, nos resultó importante consignar la existencia de nuevas intervenciones privadas sobre lo social, en el marco de la gran asimetría.

Esta última temática introdujo la necesidad de pensar alguna de las dimensiones de la sociabilidad homogénea y los nuevos espacios de socialización, que comparten tanto los antiguos como los recién llegados a la elite. En realidad, en el período se constata la emergencia de un estilo de vida, tendiente a la homogeneidad social; elemento que de aquí en más la elite compartirá —con matices, como veremos en el próximo capítulo— con otros sectores sociales, no sólo con las clases medias altas, sino también con una franja exitosa de las clases medias. Finalmente, buscamos dar cuenta de las marcas de distinción, en los nuevos estilos de vida, visibles en las referencias al "ruralismo idílico" como símbolo de la consagración social.

En fin, si el triunfo del neoliberalismo se apoyó en la promoción de modelos de ciudadanía restringidos, centrados en la figura del consumidor y el propietario, entonces fueron ciertamente los sectores dominantes los que asumieron de manera exacerbada ambas figuras, mediante el consumo desmedido y la privatización de lo social. Pues si la fiesta, la frivolidad y el exceso, en su versión elitista, ilustraban la consagración de la figura del consumidor, la difusión por momentos frenética de determinados estilos de vida —como el desarrollado durante los 90 en los *countries* y barrios privados, refugio de los llamados "ganadores" del modelo— terminarían por consagrar y expandir la figura del "ciudadano propietario".

Capítulo 5

La fragmentación de las clases medias

Los más decididos soportes de esos valores democráticos no pueden ser otros —en mérito de su educación y de la tradición que les empapa— que los más claros representantes de las clases medias cultivadas. ¿No se les estará pidiendo —con todo lo dicho— demasiado? ¿No podrá exceder esta tarea la voluntad de los nuevos hombres requeridos? No. Las tareas difíciles son para los hombres, y éstos no se han encogido ante su carga en ningún gran momento. Lo cual no impide que se vean y señalen a tiempo las inevitables tensiones internas que esa carga lleva consigo.

CEPAL, *El desarrollo social de América Latina en la posguerra* (1963).

Nadie podrá dejar de percibir lo trágico de esta desfuncionalización que consiste en el hecho de que hombres cuya existencia y autoconsciencia están ligadas a una conducta tradicional determinada, que llevó a sus padres, y quizá también a ellos mismos en su juventud, al éxito y a una autoafirmación suficiente, se vean, con el mismo comportamiento, condenados ahora al fracaso y a la decadencia, en un mundo que se ha transformado en virtud de causas ininteligibles.

Norbert Elías,
La sociedad cortesana.

Históricamente, en nuestro país, las clases medias fueron consideradas como un rasgo particular de la estructura social respecto de otros países latinoamericanos y un factor esencial en los sucesivos modelos de integración social, tanto del oligárquico-conservador, como del nacional-popular. Sin embargo, la crisis de los 80 y el pasaje a un nuevo modelo de acumulación, en los 90, terminaron por desmontar el anterior modelo de integración, echando por tierra la representación de una clase media fuerte y, hasta cierto punto, culturalmente homogénea, asociada al progreso y la movilidad social ascendente. Esta nueva situación está ligada a la instalación de una doble lógica de polarización y fragmentación en el interior de las cla-

ses medias, visible no sólo en la disminución drástica de la llamada "clase media típica", sino sobre todo en la brecha cada vez más pronunciada entre los llamados "ganadores" y los "perdedores" del modelo.

La entrada en una sociedad excluyente trajo consigo una fuerte reformulación de la dialéctica entre estructura y estrategias en el interior de las fragmentadas clases medias. Ahora bien, antes de analizar el modo como la reformulación de las pautas de inclusión y exclusión social impactó en las diferentes franjas de las clases medias, tanto en términos de prácticas, estilos de vida y modelos de socialización, nos detendremos, como en el capítulo anterior, en la presentación de algunos de sus rasgos históricos más importantes.

Rasgos generales de las clases medias

Podríamos resumir las características de las clases medias, tal como éstas han sido tematizados por gran parte de las ciencias sociales, en cuatro rasgos mayores.[19]

En primer lugar, tradicionalmente la categoría "clases medias" ha designado un vasto conglomerado social, con fronteras difusas; esto es una categoría intermedia cuya debilidad congénita estribaría en su misma posición estructural, un tercer actor sin peso específico propio, situado entre los dos grandes agentes sociales y políticos de la sociedad moderna: la burguesía y las clases trabajadoras. Esta debilidad estructural explicaría tanto sus comportamientos políticos como sus rasgos culturales. Por un lado, desde el punto de vista político, sus dificultades en desarrollar una conciencia de clase autónoma se verían reflejadas en una vocación histórica por las alianzas. Por otro lado, desde el punto de vista cultural, las clases medias se verían ilustradas por el desarrollo de conductas imitativas respecto de los patrones culturales propios de las clases superiores. Por último, la consolidación de estas pautas culturales no haría más que facilitar la instrumentalización política de las clases medias por parte de la burguesía.

De manera más específica, la adopción de pautas de conducta propias de las clases superiores expresaría la disociación

entre el *grupo de pertenencia* y el *grupo de referencia*. Estos conceptos, introducidos por el funcionalismo norteamericano, tiene por objeto el análisis de las formas de agrupamiento y de construcción de las valoraciones y actitudes políticas de los sectores medios. El *grupo de referencia* sirve de parámetro a los individuos para valorarse a sí mismos, o a sus actividades, sin que sea necesaria la pertenencia a ellos. En consecuencia, el grado de satisfacción o insatisfacción que se experimenta con el estatus depende más del grupo que se tome como referencia que de un criterio general representativo de la estructura social global (Hyman:1968; Merton:1993).

En resumen, la debilidad estructural es la base de las dificultades analíticas que encierra la categoría "clases medias", lo cual aparece reflejado tanto en términos políticos, mediante la conformación de una mentalidad conservadora y reaccionaria (respecto de los sectores populares), como en términos culturales, a través del desarrollo de una cultura mimética y los consumos ostentosos (respecto de las clases altas).

En segundo lugar, otro de los rasgos mayores de las clases medias ha sido la heterogeneidad social y ocupacional. Desde el comienzo, el criterio de diferenciación más clásico para caracterizar a las clases medias ha hecho hincapié en el proceso de trabajo como variable, a partir de la distinción entre trabajo "manual" y "no manual", que luego adoptaría el nombre de trabajadores de "cuello azul" y "cuello blanco". Sin embargo, el tipo de capacidad y calificación que se ofrece en el mercado constituye un criterio de diferenciación determinante que problematiza, desde el comienzo, la categoría misma de los "cuellos blancos" (Wright Mills:1961). Así, los distintos análisis concuerdan en que el sostenido crecimiento del sector de cuello blanco durante el siglo XX tendió a complejizar y a ampliar las reducidas dimensiones que la clase media (pequeña burguesía basada en la propiedad) poseía. Además, esta característica fundamental contribuiría a abrir la brecha respecto de otros sectores sociales, por ejemplo, los trabajadores fabriles, pues mientras estos últimos se caracterizarían por un importante grado de homogeneidad, dentro de las ocupaciones de cuello blanco encontraríamos una creciente diferenciación, que va desde las tareas de rutina administrativa, la mayor dotación de

beneficios marginales (pensiones y seguros), hasta mayores oportunidades de promoción y alto grado de participación femenina en el empleo.[20]

En tercer lugar, desde sus orígenes, una de las notas constitutivas de la identidad de las clases medias ha sido la movilidad social ascendente. Esto ha contribuido a aumentar la importancia de la educación como canal privilegiado para el ascenso y la reproducción social. Más aún, tradicionalmente la confianza en la movilidad social ascendente ha sido acompañada de una visión optimista del progreso social, que se refleja en la adopción de un determinado modelo de familia, por medio del cual ésta es concebida como un espacio en el cual se producen las condiciones para la movilidad social de sus miembros.

Por último, las clases medias aparecen definidas positivamente por su *capacidad de consumo*, y como consecuencia, por el acceso a un determinado estilo de vida, caracterizado por un modelo-tipo, en el cual se conjugan, para sintetizarlo de manera esquemática, la aspiración residencial (la vivienda propia), la posesión del automóvil y la posibilidad del esparcimiento. De esta manera, como habrían de mostrar numerosos trabajos, las diferencias entre las clases trabajadoras y las clases medias excederían el propio proceso de trabajo, manifestándose también en otros ámbitos y prácticas, como por ejemplo el agrupamiento en zonas de residencia homogénea (Giddens:1991, p. 216) y la formación de grupos de estatus.

En suma, la debilidad estructural estaría en el origen de una serie de características más bien negativas, como la mentalidad política conservadora y el mimetismo cultural; la creciente heterogeneidad social y ocupacional daría cuenta de la imposibilidad de unificar sus intereses de clase y, al mismo tiempo, de la consolidación de un individualismo exacerbado, orientado a la maximización de los intereses particulares; todo ello explicaría la búsqueda de la movilidad ascendente como rasgo constitutivo de las clases medias. Por último, la definición a través del consumo y de los estilos de vida desembocaría en la formación de grupos de estatus.

En consonancia con alguno de los rasgos descriptos más arriba, para un sector de la literatura sociológica, las clases medias irían definiéndose como "clases de servicios". Esta catego-

rización, desarrollada a comienzos de los 80 por Goldthorpe (1995), se apoya en el fuerte incremento registrado en el sector servicios. Para el autor, que retoma la noción acuñada por el austromarxista Karl Renner, la clase de servicios se distingue de la clase obrera por realizar un trabajo no productivo, aunque la diferencia más básica se ve reflejada en la calidad del empleo. En efecto, se trata de un trabajo donde se ejerce autoridad (directivos) o bien se controla información privilegiada (expertos, profesionales). Así, este tipo de trabajo otorga cierto margen de discrecionalidad y autonomía al empleado, pero la contrapartida resultante de esta situación es el compromiso moral del trabajador con la organización, dentro de un sistema claramente estructurado en torno a recompensas y sanciones.

En este sentido, la entrada en una economía de servicios terminó por confirmar la importancia de tal categorización, así como agregó otras dimensiones a esta definición, tal como aparece en los textos de Scott Lash y John Urry (1996), John Savage (1999) y Gosta Esping Andersen (1997). Estos autores apuntan a describir la nueva estructura socio-ocupacional —cuya heterogeneidad se hace visible en la fragmentación cada vez mayor de las clases medias de servicios, mediante el empobrecimiento de ciertos sectores— y la emergencia de un nuevo proletariado de servicios, ligado a tareas poco calificadas, verdaderos "servidores de la clase de servicios en cuestión".

Las clases medias en la Argentina

A lo largo del siglo XX, en virtud de su dinamismo y su *élan* modernizador, las clases medias latinoamericanas se constituyeron en un agente central en el proceso de desarrollo. Para Alain Touraine (1988), esta centralidad se explica por dos rasgos mayores: en primer lugar, se debe a la preocupación que las clases medias manifiestan por la educación. Así, éstas se definen ante todo como una clase educada, con niveles medios y medios-altos de instrucción. A su vez, la educación se constituye en el instrumento por excelencia de la movilidad social ascendente, así como en el criterio distintivo respecto de las otras clases sociales. El arquetipo de dichas clases medias urbanas, dinámicas y modernizadoras, sería el pequeño propietario o el comerciante, o, especialmente, las profesiones asalariadas empleadas en el sector público (los maestros y profesores). El segundo rasgo se halla intrínsecamente ligado al anterior, pues la expansión de las clases medias urbanas está vinculada al desarrollo del Estado. En efecto, en América Latina, las clases medias se expandieron sobre todo en los países donde el Estado intervino activamente como productor de bienes y servicios, en el marco del régimen de industrialización sustitutiva. Tocaría a la versión latinoamericana del Estado Social, esto es, al modelo nacional-popular, consumar esta suerte de paradigma, contribuyendo así a la consolidación de vastas franjas de funcionarios y de profesionales ligados a la administración pública, así como a los servicios de la educación y de la salud. Sin embargo, éste fue precisamente el modelo que entró en crisis a partir de los años 80 y, particularmente, durante los 90, con la aplicación de políticas de ajuste fiscal y de reducción del Estado. Por último, es necesario destacar que estos dos rasgos aparecen más acentuados en países como Argentina, Uruguay y Costa Rica, donde las clases medias estuvieron efectivamente en el "centro" de la sociedad.

Hay, sin duda, un sinnúmero de interpretaciones respecto de las clases medias argentinas. Todas ellas coinciden en afirmar tanto su centralidad como el rol integrador que durante casi un siglo desempeñaron en la sociedad. Así, por encima de la heterogeneidad socioestructural o de las asimetrías geográficas, el "modelo argentino" parecía hacer referencia a dos componentes mayores: por un lado, el progreso y la movilidad social ascendente; por el otro, una cierta homogeneidad racial y cultural. Ambos tópicos encontrarían su encarnación más acabada en las clases medias urbanas, educadas, dinámicas y modernizadoras y, en gran medida, de origen inmigrante.

Recordemos que en 1947, la clases medias urbanas (tanto el sector asalariado como el autónomo) ya constituían el 40,6% de la fuerza de trabajo total; en 1960, el 42,7%; en 1970, el 44,9% y en 1980, el 47,4% (Torrado:1992). Sin embargo, hacia los años 50, las primeras lecturas políticas y sociológicas dejaban traslucir una honda decepción al considerar que las clases medias argentinas habían asumido de manera incompleta el

rol modernizador, a lo que se sumaba, suerte de constante, una posición política conservadora. Ciertamente, la educación, en tanto canal privilegiado para la movilidad social ascendente, era un rasgo constitutivo de la identidad de las clases medias. Pero, desde el punto de vista cultural, éstas parecían caracterizarse por conductas que imitaban los patrones culturales propios de las clases superiores, visibles en el consumo ostentososo (Sebreli:1966); conductas concebidas, al mismo tiempo, como estrategias de diferenciación con respecto a las clases populares. Dicho proceso tendría su expresión mayor a partir de 1945, época en la cual gran parte de las clases medias acentuaría las estrategias de distanciamiento hasta el paroxismo, adoptando un antiperonismo militante.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, desde una perspectiva económica, la acción de gobierno del primer peronismo (1946-1955) no sólo benefició directamente a vastos sectores de la clase trabajadora, sino también a amplios sectores medios, mediante el impulso al sector asalariado, dependiente del Estado, hecho que encontraría una continuación e incremento en la política de las administraciones posteriores. De esta manera, a partir de los años 60, los estratos medios se convertirían en los principales proveedores de una demanda de puestos gerenciales, burocráticos y administrativos, promovida por el modelo sustitutivo. Lo dicho encuentra un correlato en el peso cada vez mayor que irían adquiriendo los sectores asalariados por sobre el sector autónomo dentro del conjunto de las clases medias, lo cual confirmaría la consolidación de una clase media de servicios, ligada al Estado (empleo público) y a los servicios sociales públicos y privados (educación, salud). Así, entre 1960 y 1970, el total de la clase media autónoma pasaría del 14,3% al 11,8%, mientras que la clase media asalariada aumentaría, en ese mismo período del 28,4% al 33,1% (Torrado:1992, p. 71).

¿Cómo explicar, entonces, el antiperonismo militante de las clases medias argentinas? En realidad, el peronismo lesionó a las clases medias a través de sus pautas de comportamiento y sus modelos culturales. Así, fueron sus rasgos plebeyos e iconoclastas (estigmatizados como formas de "barbarie" e "incultura") los que más fastidiaban y afectaban la tranquilidad de las

clases medias, más que nunca identificadas con los patrones culturales y estéticos de la cultura oficial, con el "buen gusto", con la "cultura decente". Por otro lado, la oposición de las clases medias se vio acentuada por el carácter autoritario que tomó el régimen peronista, respecto del mundo reconocido de la cultura. Como no deja de reconocer el propio Arturo Jauretche (1967, p. 216), el peronismo cometió "indiscutibles torpezas" con respecto a las clases medias, pues no sólo afectó sus pautas culturales, sino que les negó una inclusión simbólica dentro del discurso político oficial. En consecuencia, en un contexto de polarización política entre peronismo y antiperonismo, las clases medias optaron por el rechazo y desprecio hacia los sectores populares.

Asimismo, un factor determinante de esta polarización fue también la aceleración de la lógica social igualitaria, producto de la política económica y social del primer peronismo, que desembocaría en una reducción de las distancias económicas entre las clases medias y las clases populares. En suma, el carácter plebeyo y la lógica igualitaria que el peronismo impulsó desde el Estado, generaron en las clases medias la necesidad de producir y reforzar la distancia cultural y simbólica, por medio de nuevos mecanismos y estrategias de diferenciación social.

Hacia los 60, el proceso de modernización cultural produjo cambios importantes, que involucraron diferentes dimensiones de la vida social. Al igual que en otras sociedades, la Argentina asistió entonces a un período de hondas transformaciones de las pautas culturales e ideológicas de las clases medias, que abarcarían numerosos aspectos de la vida cotidiana: desde nuevos hábitos de consumo especialmente orientados al sector juvenil, pasando por cambios importantes en la moral sexual y en el rol de la mujer, por la divulgación del psicoanálisis y el cuestionamiento de modelos familiares y escolares tradicionales, hasta la irrupción de las vanguardias y la experimentación artística. En definitiva, se trataba del surgimiento de una "nueva clase media", cuyo *ethos* específico aparecía intrínsecamente asociado a nuevos valores, nuevas prácticas de consumo y estilos de vida.

Hacia fines de la década, esta apertura cultural comenzó a articularse con la exigencia del compromiso político, que vislumbraba la posibilidad de articulación con los sectores populares (Torti:1999). Finalmente, como no dejaba de advertir

la literatura política de la época, luego de décadas de desencuentros, la alianza entre los sectores medios y los sectores populares se tornaba real y posible, gracias a la peronización de la juventud y de los sectores intelectuales, en gran parte procedentes de las clases medias antiperonistas. En consecuencia, aunque fuertemente marcada por el autoritarismo político, la década del 60 sería sin duda la época de oro de las clases medias, pues éstas habrían de afirmar una cierta autonomía cultural respecto de las clases dominantes (renegando así del llamado "mimetismo cultural"), al tiempo que buscarían una articulación política con los sectores populares peronistas. Como nunca en otro período, las clases medias habrían de desarrollar una gran confianza en su capacidad de acción histórica.

Sin embargo, este clímax de época fue seguido de un gran declive, visible en la tragedia política de los años 70 y, luego, en la fragmentación y empobrecimiento de los 80 y los 90. Ciertamente, el golpe de Estado de 1976 significó la puesta en acción de un nuevo modelo que apuntaba tanto a la represión de los sectores movilizados, como a un nuevo modelo de acumulación económica. La reconfiguración de la sociedad argentina estaba en marcha, aun si las transformaciones de los diferentes sectores sociales recién se tornarían visibles a la salida de la dictadura militar.

HACIA LA HETEROGENEIDAD Y LA POLARIZACIÓN SOCIAL

Durante mucho tiempo, el modelo de integración social existente en la Argentina se asentó en la afirmación de estilos residenciales y espacios de socialización mixtos, que apuntaban a la mezcla entre distintos sectores sociales. El marco propicio para tal modelo de integración mixta eran los espacios públicos. Si la integración social e individual es un proceso que articula relaciones horizontales (en el interior de un grupo social), con lazos verticales (con otros grupos de la estructura social), mediante diferentes marcos de socialización, es necesario reconocer que la ciudad aportaba no pocos de esos espacios públicos, entre ellos la plaza, la esquina del barrio o los patios de un colegio del Estado. Estos lugares públicos proveían al individuo de una

orientación doble: hacia adentro y hacia afuera de su grupo social, y aparecían como contextos propicios para una socialización mixta y exitosa. Pese a sus deficiencias y notorios disfuncionamientos, este modelo de la mixtura social continuó siendo dominante dentro del conglomerado general de las clases medias hasta mediados de los 80.

Ahora bien, a partir de los 90, la entrada en una sociedad excluyente tiró por la borda esta representación integradora de la sociedad argentina, centrada en la primacía de lo público. Con una virulencia nunca vista, la nueva dinámica excluyente puso al descubierto un notorio distanciamiento en el interior mismo de las clases medias, producto de la transformación de las pautas de movilidad social ascendente y descendente. Dichas transformaciones terminaron de abrir una gran brecha en la sociedad argentina, acentuando los procesos de polarización y vulnerabilidad social. En plena turbulencia de estos procesos y frente a la conformación de un nuevo campo de fuerzas social, los sectores medios irían estrechándose, empujados por una fuerte corriente de movilidad social descendente; en medio de la vulnerabilidad, otras franjas tratarían de mantener sus posiciones sociales; mientras que, por último, un contingente menor, caracterizado por una mejor articulación con las nuevas estructuras del modelo, se vería beneficiado por el ascenso social.

Sin embargo, desde una perspectiva histórica, lo que primero impacta es la dimensión colectiva del proceso de movilidad social descendente, que arrojó del lado de los "perdedores" a vastos grupos sociales entre los cuales hay que incluir empleados y profesionales ligados al sector público, cuentapropistas, pequeños comerciantes, en fin, medianos y pequeños productores agrarios (la clase media autónoma). También es cierto que otras franjas de las clases medias, como empleados y profesionales ligados los servicios sociales y a los nuevos servicios de consumo (ocio, esparcimiento, publicidad), gracias a sus calificaciones, tendieron a conservar sus posiciones. Por último, aunque comparativamente minoritarios, en el costado de los "ganadores" de las clases medias se fueron situando diversos grupos sociales, compuestos por personal calificado, profesionales, intermediarios estratégicos, asociados al ámbito privado, en gran parte vinculados a los nuevos servicios, en fin, una fran-

ja que englobaría, por encima de las diferencias, tanto a los sectores medios consolidados como a los sectores en ascenso.

De esta manera, la entrada en una sociedad excluyente reformuló la dialéctica entre estructura y estrategias en el seno de las clases medias. Por un lado, al trastocarse sus condiciones objetivas de existencia, las clases medias empobrecidas debieron desarrollar nuevas estrategias de sobrevivencia, basadas en la utilización y potenciación de competencias culturales y sociales preexistentes, para volver a vincularse con el mundo social. Un esforzado trabajo de reinclusión que conllevaría tanto un duro aprendizaje como un discurso amargo sobre las razones de su expulsión del colectivo de las clases medias. Por otro lado, para un sector de las clases medias consolidadas y en ascenso, las estrategias de inclusión en el nuevo modelo apuntaron a una búsqueda de la distancia, no sólo respecto de los sectores populares, sino de las propias clases medias empobrecidas, mediante el consumo suntuario y los nuevos estilos de vida basados en la seguridad privada. Por último, aunque sensiblemente afectadas desde el punto de vista cuantitativo, las franjas medias de las clases medias habrían de acentuar como estrategia de afirmación la inclusión por medio de los consumos y la relación con la cultura.

Empobrecimiento y multiplicación de estrategias de adaptación[21]

Hemos dicho ya que el proceso de movilidad social descendente asumió una dimensión colectiva que arrojó del lado de los "perdedores" a grupos sociales que formaban parte de las clases medias asalariada y autónoma: franjas de empleados, técnicos y profesionales del ámbito público, ligados a la administración, la educación y la salud; cuentapropistas, empresarios y comerciantes colocados en posición de desigualdad ante la arrolladora apertura a las importaciones y la entrada de nuevas formas de comercialización; propietarios rurales cuyo destino aparecía ligado a economías regionales, y cuyas estrategias de producción eran consideradas poco dinámicas o "inviables".

La segmentación social fue consolidando una fractura intraclase que es necesario leer en dos tiempos diferentes: a fines

de los años 80, el proceso de empobrecimiento de ciertas franjas de las clases medias estuvo vinculado a la inflación y, claro está, a la hiperinflación, esto es, al deterioro salarial y la pérdida de poder adquisitivo. Asimismo, tanto la degradación de los servicios públicos (educación, salud, seguridad) como la privatización de los servicios básicos, contribuyeron fuertemente al empobrecimiento de los sectores medios, en un contexto signado por la precarización laboral y la inestabilidad. Esta conjunción de factores traería aparejada una transformación de las condiciones de vida, un hecho que la sociología se encargaría de describir inicialmente en términos de "diversidad de situaciones" en el interior mismo de las clases medias, a partir del reconocimiento de "la heterogeneidad social de las pobrezas" (Murmis y Feldman:1992). Sin embargo, la heterogeneidad fue acompañada también por una fuerte polarización social. En efecto, las estadísticas indican que los ingresos de todas las categorías ocupacionales cayeron de manera sensible. Por último, dentro de cada categoría se incrementó la distancia entre los ingresos más elevados y los más cercanos al piso salarial. Por ende, la nueva pobreza fue asomando como un universo heterogéneo que reuniría a los "perdedores" de cada categoría profesional (Kessler y Di Virgilio:2003). La caída social produjo también el ingreso de las mujeres al mundo público, aun si la mayoría terminó por obtener pequeños empleos, muchos de ellos domiciliarios o precarizados (Feijóo:1992).

En resumen, la fractura intraclase se hizo mayor a mediados de los 90, cuando el empobrecimiento pasó a vincularse no sólo a la pérdida de poder adquisitivo, sino también al desempleo; en fin, cuando empezó a observarse una suerte de "reproducción ampliada" de las diferencias intraclase, visibles en los estilos de vida, los modelos de socialización y las formas de sociabilidad. En efecto, para diferentes sectores empobrecidos y en contraposición con otros estratos de las clases medias y medias-altas, la instalación en una zona de vulnerabilidad e inestabilidad terminó por consumar un hiato, una distancia mayor, que es necesario comprender en términos de reducción de oportunidades de vida. El hecho es, pues, doble. Por un lado, la fractura social provocó un debilitamiento, si no la ruptura, de los lazos culturales y sociales existentes entre los diversos estra-

tos de la antigua clase media. Por el otro, sin soslayar el hecho de que existen franjas de los sectores medios que aún en plena inestabilidad conservaron sus posiciones, la tendencia más general del período indica una fuerte polarización social.

Ahora bien, existe una rica literatura consagrada al estudio del empobrecimiento de los sectores medios. No olvidemos que los primeros estudios, como el de Alberto Minujín y Gabriel Kessler (1995), ofrecieron verdaderos relatos etnográficos de esta "caída", y ayudaron a descorrer el velo que todavía conservaba una pobreza vergonzante, definida como "doméstica" o de "puertas adentro". Asimismo, esta *nueva pobreza* se caracterizaba por ser, en términos urbanos, más difusa y dispersa. En algunos casos, como el de los jubilados, cuyo empobrecimiento en las últimas décadas ha sido de una notoriedad incontestable, éstos podían estar residiendo en barrios de clases medias y aun de clases medias-altas. Sin embargo, en otras situaciones, el empobrecimiento también estuvo en el origen de una serie de expulsiones que condujeron, tarde o temprano, a una relocalización urbana. Asimismo, no es menos cierto que muchos barrios policlasistas, con una importante presencia de sectores medios, conocieron un fuerte deterioro. La nueva pobreza adoptaría, pues, nuevas dimensiones urbanas.

Así, los primeros trabajos sociológicos nos ayudaron a comprender el carácter "intersticial" o "híbrido" de la nueva pobreza, que daba cuenta de afinidades o semejanzas con los sectores medios consolidados en variables tales como el nivel educativo o la composición de la familia —menos numerosa que la de los llamados "pobres estructurales"—; pero, a la vez, revelaban cada vez más la proximidad con los "pobres estructurales" en términos de ingresos, características del empleo (subempleo) y ausencia de cobertura social. Siguiendo a Kessler y Di Virgilio recordemos que los pobres por ingresos representaban el 3,2% de la población en 1980. Sin embargo, a fines de la década del 90, el 26,7% de la población —reunida en el 18,9% de los hogares, según cifras del Indec— no percibían ingresos suficientes para acceder a la canasta básica de bienes y servicios. En los partidos del Gran Buenos Aires, donde residen aproximadamente 8 millones de personas, la pobreza creció en un 67%, porcentaje dentro del cual se sitúan los ex integrantes de las clases medias,

esto es, los nuevos pobres, quienes se incrementaron en un 338% (Kessler y Di Virgilio:2003).

Desde un punto de vista general, la experiencia del empobrecimiento fue traumática, en la medida en que ésta puso de manifiesto el colapso de los marcos sociales que estructuraban la identidad de los sujetos y orientaban sus prácticas. Así, los primeros testimonios de las clases medias empobrecidas daban cuenta de este trastocamiento del mundo conocido y familiar, que coloca a los sujetos en una situación de "desnaturalización" con respecto de su posición (Kessler:2000). Esta experiencia de desnaturalización, esta trágica "desfuncionalización" (Elías:1996), condujo a la necesidad de redefinir la situación exterior, en condiciones de incertidumbre, lo cual tendría un impacto sobre las identidades sociales (el autoposicionamiento o la exclusión del colectivo de las clases medias), e individuales (pérdida de autoestima). En todo caso, lejos estamos ya de aquellas encuestas de los años 80, que mostraban que más del 70% de la población argentina, entre los que se encontraban obreros calificados, trabajadores autónomos, empleados y profesionales, se posicionaba dentro de los sectores medios, pues la fuerte pauperización de los 90 puso en cuestión esta autoclasificación fundamental (Kessler:2000).

Por otro lado, el empobrecimiento trajo aparejados importantes cambios en las prácticas y orientaciones de la acción, que deben ser interpretados, en un primer momento, como formas de adaptación frente al desajuste visible entre el rol y la posición social anterior. Como consecuencia de ello, lo propio del período fue la multiplicación de estrategias individuales, mediante la utilización de los recursos y competencias culturales y sociales preexistentes (en términos de capital cultural y social), orientadas a obtener ventajas comparativas, por ejemplo, en el seno de las instituciones públicas, como la escuela, los hospitales o la mutual sindical, visiblemente deterioradas o en disfuncionamiento creciente.

La multiplicación de estas estrategias de adaptación tuvo consecuencias en diferentes niveles. Por un lado, hacia afuera, harían manifiesta la existencia de un circuito cada vez más segmentado de servicios (por ejemplo, aquel que diferenciaba entre "mejores" y "peores" escuelas públicas). Por otro lado, frente

a la reducción de las distancias sociales, las estrategias de adaptación servían también para diferenciarse socialmente de los llamados "pobres estructurales", menos provistos en términos de capital cultural y relaciones sociales. Por último, en este nuevo escenario, resultaba difícil separar lo que estas estrategias de adaptación contenían en términos de demandas de derechos individuales y sociales, de aquello que aparecía ligado exclusivamente a un reclamo estatutario (una demanda de respeto y deferencia).

Este primer período en el cual las clases medias en caída comienzan a multiplicar las estrategias individuales de adaptación es también uno de los momentos más marcados por la acción colectiva procedente del sector público, sobre todo, maestros, empleados públicos provinciales, así como jubilados. Sin embargo, paradójicamente los testimonios existentes no parecen indicar un vínculo entre las estrategias de adaptación individual y las demandas colectivas. Quizás ello se deba a que, en este primer período, más allá de las explicaciones generales acerca del declive de las clases medias, los sujetos realizaban un "proceso de enmarcamiento" de la situación, que hacía hincapié en la responsabilidad individual. También es cierto que la "individualización" de la caída entraba en consonancia con la euforia privatizadora propia de la época. Por ende, por una u otra razón, los protagonistas de la caída interpretaban el proceso mucho menos en términos sistémicos que en clave de fracaso personal.

Como hemos señalado, frente al empobrecimiento, los individuos se vieron en la necesidad de redefinir los marcos sociales y culturales de su experiencia. Esto conduciría a la emergencia de un nuevo *ethos* que, en consonancia con la dinámica social, aparecería marcado por la incertidumbre y una perspectiva cortoplacista, que tendía a obturar cualquier planificación reflexiva del futuro. En este contexto, jóvenes y adultos no solo sufrían la "constante coacción al cambio" (Kessler:2004), sino que estaban constreñidos a la búsqueda permanente del intersticio en las instituciones, desde una situación de vulnerabilidad e inestabilidad. Como señala Denis Merklen (2000 y 2005), los sujetos se vieron obligados a convertirse en "cazadores", figura mediante la cual el autor ilustra la lógica de acción individual y colectiva que orienta la vida cotidiana en la ciudad,

semejante a un bosque que esconde un diversificado repertorio de posibilidades, pero que implica desde ya la aceptación del riesgo y la incertidumbre.

EMPOBRECIMIENTO Y EXPERIENCIA DEL TRUEQUE

En términos generales, recién hacia la segunda mitad de los 90 los sujetos sociales incorporarían plenamente un discurso que permitiría evacuar el estigma del fracaso personal, tan subrayado durante los primeros años del modelo. Como señala Inés González Bombal (2002), quien realizó uno de los primeros trabajos sobre el tema, en la medida en que los discursos de la caída comenzaron a enfatizar, antes que las trayectorias individuales o las malas elecciones, los aspectos más estructurales de la crisis (como las reformas económicas, el aumento del desempleo y, de manera general, los efectos desiguales de una globalización neoliberal), las estrategias de sobrevivencia variaron. En consecuencia, se registra "un cambio importante en el posicionamiento de la subjetividad: el sujeto autónomo de la racionalidad micro-económica desaparece y en su lugar emerge la pura víctima de la macro-economía" (González Bombal:2002).

Sin embargo, lejos de conducir a la pura victimización, el proceso tuvo como corolario un nuevo enmarcamiento de la situación que desembocaría en una experiencia pública que daría mucho de qué hablar: el trueque. Recordemos que la actividad del trueque nació hacia 1995, como una organización estructurada sobre la base de redes ("nodos"), en Bernal, provincia de Buenos Aires. En ese año, el trueque reunía sólo a 60 personas. Sin embargo, ya en 1996 eran 1000 socios; 2300 en 1997, y llegarían a 180.000 en 1999. Durante ese mismo año, el trueque experimentó un salto importante, abarcando 320.000 personas, en 500 nodos ubicados en 15 provincias y la Capital Federal. De esta manera, el trueque se convirtió rápidamente en una red extensa de intercambio de bienes, servicios y competencias muy heterogéneas, un "mercado *sui generis*" (Luzzi:2005) que comprendía desde el trabajo manual o artesanal, ligado a la producción de bienes primarios (alimentos) hasta las "nuevas industrias de la subjetividad", relacionadas con las terapias alternativas.

Como afirma Inés González Bombal, "la actividad de 'trocar' aparecía investida de todo un ideario que habla de 'reinventar el mercado', 'reinventar la vida' y se postula como una alternativa a un patrón de desarrollo que ha llevado a la exclusión social a amplios sectores de la población. Para sus ideólogos, el trueque aparecía como un vínculo social de otro tipo basado en la 'confianza y la reciprocidad' como valores fundantes que tendrían el poder de cambiar las relaciones sociales, o para decirlo en los términos que expresa su doctrina: 'barajar y dar de nuevo las reglas del juego social'". Ahora bien, la expansión de esta actividad tuvo varias consecuencias. En primer lugar, permitió una cierta reconstitución de las identidades individuales. En palabras de uno de sus fundadores, 'en este mercado, todos tenemos capital. Un capital que, según mi opinión, es el más importante: el capital humano'"(H. Covas, citado en Luzzi:2005). En consecuencia, la actividad de trocar permitía revalorizar capacidades negadas y descartadas por el mercado formal. En segundo lugar, la experiencia daba cuenta, si bien de manera incipiente, de la emergencia de un espacio de sociabilidad, donde confluían sectores medios empobrecidos con sectores populares, ligados al trabajo manual en la industria, al servicio doméstico y vendedores ambulantes. Por supuesto que este espacio estuvo lejos de desembocar en una experiencia unificadora, pero en tanto lugar de cruce social permitió, sobre todo a las clases medias empobrecidas, experimentar una mayor libertad y reflexividad, sin necesidad de tener "'que seguir aparentando lo que ya no eran'" (Gonzaléz Bombal:2002). Sin embargo, más allá de estos aspectos positivos, las conclusiones de González Bombal hacían hincapié en que el trueque aparecía primariamente como una actividad "refugio" mediante la cual se podía acceder a la satisfacción de las necesidades más elementales, y sólo en un segundo nivel, más acotado en cuanto al número de participantes (suerte de militantes), éste ilustraba una forma de recrear los lazos sociales, una alternativa diferente y solidaria frente al mercado capitalista excluyente.

Es sabido que después del colapso del modelo de convertibilidad (diciembre de 2001), el trueque registró una explosión incontrolada. Así, en 2002, la Argentina poseía la red del trueque más extensa del mundo, superando incluso a Rusia.[22] Los

nodos contaban con 5000 participantes por día, a diferencia de los 20.000 por mes registrados en 2001. De acuerdo a un estudio de Nueva Mayoría (Ovalles:2002, citado en Hintze, 2003), en aquella época funcionaban 5000 clubes de trueque. Del total, el 60% (3000 clubes) estaban en la provincia de Buenos Aires, el 18% (900) en Santa Fe, el 4% (208) en Capital, el 2% (95) en Córdoba, el 1% (65) en Mendoza y el 15% (732) restante en las demás provincias. Como sostenía este autor, "esta cifra comprende el total de clubes del país, no sólo los registrados en alguna de las dos redes: la Red Global del Trueque y la Red del Trueque Solidario, sino aquellos que están al margen de estas estructuras y que son los que mayor crecimiento evidencian".[23]

Ahora bien, lejos de ser la expresión de una adhesión masiva a una nueva economía alternativa, la explosión del trueque estuvo directamente ligada a la crisis económica, que incitó a los individuos a buscar en esta actividad un medio para afrontar la escasez de moneda y el aumento de los precios dentro del mercado formal. El resultado es conocido. Las redes no pudieron procesar este crecimiento explosivo y la mayoría terminaron por estallar en medio de una crisis de inflación de la moneda social (los créditos) y de corrupción (sobreemisión y falsificación de moneda), que puso al descubierto no tanto las divisiones internas entre las diferentes redes, como el déficit de controles endógenos y la ausencia —pese a la marcada tendencia a la institucionalización, en ciertos municipios y provincias— de una regulación exógena, que las propias redes demandaban con premura. Al decir de Mariana Luzzi (2005, p. 150), en un contexto de penuria económica y frente al cierre del mercado formal, muchos se volcarían masivamente al trueque, pretendiendo que éste pudiera cumplir las mismas funciones que el mercado formal. Así las cosas, la experiencia puso de manifiesto el carácter del trueque, revelando que se trataba menos de un espacio de economía alternativa que "de una actividad complementaria del mercado formal".

En resumen, es necesario comprender la experiencia del trueque como un "mercado *sui generis*" y, a la vez, como un "espacio de sociabilidad", de apertura y de cruce entre las clases medias empobrecidas y determinadas franjas de los sectores populares. Una experiencia que expresará también la tensión en-

tre una práctica colectiva y la afirmación de una estrategia individual. Como concluye el trabajo de Mariana Luzzi: "Los clubes del trueque, como proyecto, asumen una forma particular, en la cual se propone una construcción común que no remite a una identidad y una acción colectiva, sino a estrategias individuales. Por una parte, el trueque asume la forma de una actividad colectiva, se presenta como un proyecto asociativo que busca reunir personas en dificultad a través de la valorización de sus capacidades productivas. Por otra parte, el trueque aparece como una nueva forma de acceso a los bienes y servicios, nacida de la articulación de estrategias individuales de obtención de recursos" (Luzzi:2005, p. 170).

Experiencia trunca, que la crisis de 2002 catapultó a la cima, menos como realización de una economía alternativa que como expresión magnificada de la crisis del mercado formal, el trueque terminó por incorporar y exacerbar la lógica perversa del sistema al cual buscaba contraponerse. Su éxito efímero contenía ya los gérmenes de su declive y descomposición, algo que finalmente terminó de concretarse con la paulatina normalización del mercado formal. Cierto es que el trueque no ha desaparecido, aunque hoy existe en una escala diferente, sin la masividad de otros tiempos. En suma, lejos de la experiencia colectiva y de la autoorganización comunitaria de los nuevos movimientos sociales, el trueque fue un intento de las clases medias empobrecidas de recomponer la solidaridad, aunque siempre en el seno de una cultura individualista. De allí sus límites, tanto como sus excesos.

El ascenso y la búsqueda de la distancia social

Hemos dicho que, en un primer momento, el reconocimiento de la producción de nuevas brechas en el seno de las clases medias aparece ilustrado por la expansión de consumos y estrategias de inclusión cada vez más diferenciadas, tanto en términos de capital económico como cultural. Sin embargo, en un segundo momento, la fractura intraclase aparece reflejada en los nuevos estilos residenciales, modelos de socialización y formas de sociabilidad emergentes. Para ejemplificar esta segunda inflexión hemos elegido analizar algunas de las consecuencias sociales y culturales que ha tenido la autosegregación de los sectores medios-altos y medios en ascenso, visible en la expansión de urbanizaciones cerradas (*countries* y barrios privados).

Aunque ya hemos transitado esta vía para dar cuenta de ciertos cambios en las estrategias de distinción de los sectores altos, importa recordar que el centro de la expansión de esta oferta inmobiliaria comprendió no tanto los clubes de campo, exclusivos y elitistas, sino los nuevos barrios cerrados, provistos de seguridad privada, cuyos destinatarios eran las clases medias en ascenso. Desde el comienzo, los destinatarios tipo han sido mayoritariamente matrimonios jóvenes (entre 30 y 45 años) pertenecientes a las *clases medias de servicios* —sobre todo, sectores gerenciales y profesionales—, con hijos pequeños, con buenas credenciales educativas, en general, con ingreso de ambos cónyuges, principalmente ligados al sector privado. En realidad, el éxodo de las franjas ganadoras hacia los paraísos privados no sólo potenciaría la fragmentación de las clases medias. Más aún, este acto de "secesión" (la expresión es de Marie France Prévôt Schapira:1999) conllevaría también la renuncia al rol integrador que tradicionalmente se atribuía a las clases medias, por medio de la elección de formas de vida y de solidaridad que asumían como eje vertebrador tanto la privatización de la vida social como la búsqueda "protectora" de la homogeneidad social. Por último, los nuevos estilos de vida basados en la segregación espacial ilustrarían una estrategia de diferenciación de los sectores medios en ascenso no sólo respecto de los sectores populares, sino también de las mismas clases medias empobrecidas, al tiempo que apuntaban a una integración "hacia arriba", en relación con los sectores altos de la sociedad.

Por ello mismo no sorprende que, durante la década del 90, pocos fenómenos hayan sido más irritantes y, hasta cierto punto, más cuestionados desde una mirada normativa, que las nuevas urbanizaciones privadas. Lo que molestaba no era tanto su evidente sintonía con la dinámica globalizadora excluyente,[24] sino la ruptura que esta forma de habitar suponía respecto del modelo de integración pasado, en la medida en que ponía de manifiesto la progresiva disolución de los vínculos y experiencias sociales que entrelazaban a las típicas clases medias argenti-

nas. Por ello mismo, no era inusual encontrar en el testimonio de los residentes de urbanizaciones privadas, sobre todo aquellos provenientes de las clases medias típicas, educados en la escuela pública y el barrio policlasista, una suerte de nostalgia culposa, aun si ésta era luego rápidamente evacuada en el marco de la nueva sociabilidad homógenea.

Dos temas nos interesa abordar aquí, con respecto a la asociación entre urbanizaciones privadas y clases medias ascendentes: la tendencia a la homogeneidad social y los modelos de socialización resultantes. En efecto, en primer lugar, la seguridad privada impulsa el desarrollo de un estilo de vida, centrado en el contacto con el verde, crecientemente estandarizado por la oferta inmobiliaria, que se caracteriza por la tendencia a la homogeneidad social y generacional (matrimonios jóvenes, con hijos). En términos de sociabilidad, a diferencia del anterior modelo mixto (heterogeneidad social), este nuevo estilo de vida presenta rasgos comunes con el modelo más comunitario y cerrado propio de las clases altas (homogeneidad social), ligado a la exclusividad de los pequeños círculos sociales.

En segundo lugar, las urbanizaciones privadas han permitido la creación de nuevos marcos de socialización que implican un escaso contacto con seres diferentes; algo que los mismos residentes denominan "el modelo de la burbuja". En esta dirección, este estilo de vida genera una nueva dinámica en la gestión nada fácil de la distancia social, basada en el temor y, en el límite, en el rechazo de la diferencia. Por otro lado, esta sociabilidad se desarrolla en un amplio espacio común que tiene como marco natural la red socioespacial en la cual se encuentran barrios privados, *countries* y los diferentes servicios (*shoppings*, multicines, discotecas) y, por sobre todo, los colegios privados.

En resumen, el nuevo estilo residencial tiende a afirmar una inclusión hacia arriba: así, si por un lado los colegios privados y las universidades de elite facilitan la llave de una reproducción social futura, por el otro, los espacios comunes de la comunidad cercada contribuyen a "naturalizar" la distancia social.[25] La red misma se constituye entonces en el foco de pregnancia que va estructurando y homogeneizando los diferentes círculos sociales. Sin embargo, es necesario acotar que, a diferencia de la sociabilidad comunitaria de las clases altas, lo novedoso de este

tipo de sociabilidad homogénea es que se inserta en una red socioespacial más amplia, en la cual existen, por supuesto, diferentes niveles y jerarquías. En la Argentina, como en otros lugares, el fenómeno de las urbanizaciones privadas incluyó, sobre todo hasta 2001, a sectores de clase media, con escaso capital económico, pero con acceso al crédito. Así, como hemos visto en el capítulo anterior, la segmentación del mercado trajo como consecuencia la expansión de distintos tipos de urbanizaciones privadas, lo cual tiende a expresarse en la proliferación de estrategias de distinción, como modo de señalar las diferentes posiciones en el interior de un espacio social jerarquizado. Con todo, pese a la diferenciación interna que vuelve a recordarnos una y otra vez que no se trata de "iguales", las interacciones se llevan a cabo siempre entre "semejantes", quienes por esa misma razón devienen sujetos "confiables".

Por último, como es posible suponer, las formas de sociabilidad "elegida" que se desarrollan en el interior de las redes de *countries* y barrios privados, poco tienen que ver con las formas de sociabilidad "forzada" que las fracciones menos favorecidas de las clases medias desarrollan "hacia abajo", mediante prácticas como el "club del trueque" u otras redes de solidaridad. Más precisamente, la nueva experiencia revela la articulación mayor entre el modelo de ciudadanía patrimonialista, centrado en la autorregulación individual en función de la posesión o el acceso a recursos (capital económico), y el modelo de ciudadano consumidor puro, visible en la tendencia al consumo ostentoso.

En suma, si el distanciamiento respecto de los sectores empobrecidos de las clases medias es notorio, no lo es menos la búsqueda de afinidades electivas con las clases altas. Es que la opción por los *countries* y barrios privados, lejos de reducirse a la sola elección de la residencia, incluye un determinado modelo de socialización y de sociabilidad, basado en la privatización de los servicios y la aspiración a la homogeneidad social. En estos espacios que devienen símbolos de la consagración social, los sujetos que provienen de las clases medias comienzan a "interiorizar" la distancia social, desarrollando un creciente sentimiento de pertenencia y desdibujando los márgenes confusos de una culpa, resabio de la antigua sociedad integrada o, en algunos casos, de un pasado idealizado.

Ahora bien, luego de diciembre de 2001, se registró una fuerte naturalización del estilo de vida asociado a los *countries* y barrios privados. Recordemos que la crisis y el agravamiento de la miseria acentuaron la fragilidad de las situaciones y la inestabilidad de las posiciones sociales. En este sentido, la experiencia de la crisis fue tan radical que puso al desnudo y frente a toda la sociedad el alcance de la mutación llevada a cabo durante los 90. Más aún, trajo la sospecha de que, más allá del ingreso en un período de cierta "normalidad institucional", visible a partir de 2003, la crisis había terminado por instalar una nueva lógica social, que mostraba abiertamente las consecuencias perversas de aquella mutación. En este marco, la seguridad se convirtió, más que nunca, en el bien más valorado para gran parte de la sociedad argentina. Más aún, de cara a los guetos pobres donde residen los excluidos del sistema, de cara a los barrios enrejados de las clases medias empobrecidas, el acceso a la seguridad privada se convirtió en la marca por excelencia de una diferenciación social, un bien cuya sola posesión define no sólo fronteras sociales sino categorías diferentes de ciudadanía. Como es posible imaginar, frente a este nuevo escenario, la mención de los riesgos colaterales o la sola evocación de una nostalgia culposa, a la manera de resabio integrador, se torna completamente anecdótica o superflua...

Así las cosas, en el marco de la sociedad excluyente, lo que comenzó siendo considerado desde una mirada crítica y posiciones normativas (evocando incluso la figura del "traidor de clase"), hoy va cediendo rápidamente ante la naturalización de las desigualdades sociales.

ENTRE EL CONSUMO Y EL VÍNCULO PRIVILEGIADO CON LA CULTURA

El análisis presentado hasta aquí sería incompleto si no tuviéramos en cuenta que entre las clases medias empobrecidas y los sectores exitosos se encuentran las franjas medias de las clases medias. Aunque de modo muy exploratorio, creemos necesario indagar cuáles fueron las estrategias de adaptación y de diferenciación social desarrolladas por esta franja social, suerte de último bastión de las denominadas "clases medias típicas".

En términos generales, dichos sectores, aunque severamente disminuidos en términos cuantitativos y siempre amenazados por la inestabilidad económico-social, buscaron reafirmar una identidad en crisis, básicamente mediante una lógica de acción individualista-estratégica, que apuntó a una integración por medio del consumo. Esta posibilidad aparecía potenciada por la centralidad —convertibilidad mediante— del modelo del "consumidor puro", cuya aceptación iba más allá de cualquier división ideológica. Ciertamente, no hay que olvidar que la clave del éxito del menemismo —sobre todo hasta 1995— residía en el paradigma del consumidor puro, capaz de atraer a vastos sectores, sobre todo en el interior de las fragmentadas clases medias. Contrariamente a ello, el modelo de ciudadanía patrimonialista, en su versión más exacerbada, esto es, la segregación espacial, tendía a constituirse en una suerte de lugar de la división. Como hemos dicho, parte de la crítica deslizada contra aquellos que optaron por la vida en las nuevas urbanizaciones privadas, se debía a que su sola existencia venía a refrendar el final ineludible de las clases medias definidas por su vínculo con lo público y, por ende, por su vocación integradora.

Ahora bien, las imágenes que proponía el régimen neoliberal confirmaban la centralidad del ciudadano-consumidor en detrimento de la figura del productor, al tiempo que permitían una articulación más armoniosa con el proceso de reformulación de las identidades de las clases medias, en el seno de la posmodernidad, mediante la proliferación de nuevos consumos culturales. Más aún, la entrada de lleno en la posmodernidad profundizó una nueva dinámica de configuración de las identidades sociales, más volátiles y débiles que antaño, ancladas en los consumos, cada vez más diferenciados e individualizados.

Por otro lado, el devenir del ciudadano consumidor estuvo acompañado por la introducción de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información; nuevos hábitos y prácticas ligados a una sociedad atravesada ideológicamente por el "discurso único" del neoliberalismo. De modo que la multiplicación de estrategias de inclusión por medio del consumo coincidió con una fuerte desafección en relación con la vida pública, que, en el límite, fomentaba una visión despolitizada de la sociedad, pese a la polarización social creciente. No menos cierto es que los me-

dios de comunicación fueron desplazando a las tradicionales formas de hacer política, a partir de lo cual el vínculo mediático entre los electores y las instituciones partidarias y sus dirigentes iría adquiriendo gran importancia.

Asimismo, la extensión de las críticas hacia la clase política se tradujo, a partir de 1991, en el aumento de votos nulos en las diferentes elecciones, que daría un salto espectacular en las elecciones legislativas de octubre de 2001, involucrando especialmente los sectores de clases medias residentes en grandes aglomerados urbanos. En este escenario, aun los sectores medios progresistas que articulaban una crítica hacia la "clase política", en nombre de la regeneración ética y contra la corrupción, evidenciaban una suerte de resignación fatalista, cuando no de pragmática indiferencia con respecto al fenómeno creciente de la exclusión social. En consecuencia, en medio de una crisis ideológica y la ausencia de programas económicos alternativos, dichos sectores apostaron a las distintas fuerzas de centro-izquierda, entre ellas el Frepaso, para finalmente, en 1999, votar por la Alianza, cada vez con menos fe y escasa convicción, en una suerte de huida frenética hacia adelante.

Por otro lado, los procesos de globalización y las nuevas tecnologías de la información multiplicaron las facetas y las estrategias del devenir consumidor del ciudadano, adoptadas por las clases medias urbanas, en un escenario de posajuste. En nuestro país, tal como ha analizado Ana Wortman (2003, p. 37), la vida urbana de las clases medias en los 90 estuvo marcada por los nuevos consumos culturales, más individualizados: nuevas prácticas culturales, de usos del tiempo, nuevas formas de comer y beber, de presentar lo cultural y lo artístico. En este contexto, "el vínculo de las clases medias con la cultura adquiere nuevas significaciones" (Wortman:2003, p. 36).

Recordemos que, como lo afirmaban tanto Gino Germani como Alain Touraine, desde los orígenes, las clases medias latinoamericanas se caracterizaron por su relación privilegiada con la educación como canal de movilidad social y, por ende, por desarrollar un vínculo privilegiado con la cultura. La Argentina hizo de este principio una religión, más allá de las ambivalencias de las opciones (consumos ostentosos, identificación con la cultura "oficial"). En esta línea, sería necesario

explorar la importancia de un fenómeno que sin duda desborda la sola cuestión de los consumos culturales, para revelarnos el rol que ocupa la cultura en la redefinición de los fragmentados sectores medios argentinos. De manera más amplia, lo que buscamos decir es que desde la perspectiva de distintas franjas de las clases medias la cultura tendió a convertirse en la clave de bóveda, esto es, la pieza fundamental, de una estructura identitaria trastocada, tanto en términos individuales como colectivos. Definida, antes que nada, como competencia del agente, la cultura apareció resignificada bajo la forma de una reflexividad expresiva (a través del arte, la música, el teatro) o de una reflexividad estratégico-cognoscitiva (como recurso adaptativo en medio de una situación de empobrecimiento). En otros términos, el creciente proceso de dualización y polarización social y, más cercanamente, la entrada en un ciclo de fuertes movilizaciones sociales, revelaría hasta qué punto las clases medias presentan una "textura cultural", para utilizar la noción de Klaus Eder (1993).

En este punto, es necesario aclarar los diferentes niveles que incluye esta afirmación. Para hablar en términos de Pierre Bourdieu (1979), la cultura puede ser concebida como una variable o recurso, en términos de capital cultural. Esto sucede, como hemos dicho, con las clases medias empobrecidas, donde la cultura es concebida como capital incorporado o como competencia del sujeto. En esta perspectiva, también puede ser comprendida a través de la dimensión del consumo, como capital objetivado (que puede agregarse al capital incorporado, tal como ocurre en las franjas de clases media-media o en ascenso). Pero también se puede concebir a la cultura como algo más que una variable dependiente, esto es, como una textura que atraviesa y constituye los espacios de acción de las clases sociales.

Nada ilustra mejor la importancia de la textura cultural que la intensa actividad artística y cultural que desarrollarían las clases medias en medio de una de las peores crisis de nuestra historia. En efecto, las jornadas de diciembre de 2001 introdujeron un giro novedoso respecto del rol de las clases medias en nuestro país. Las intensas movilizaciones sociales tuvieron entre sus protagonistas a diferentes sectores de las clases medias, que abarcaban un conglomerado amplio de "perdedores" del

modelo (clases medias precarizadas, desempleados), al que se sumaron los "nuevos perdedores" que dejó el estallido del modelo de convertibilidad (ahorristas, endeudados); por último, también participaron sectores de las clases medias profesionales, que conservaron sus posiciones aun durante la debacle.

El nuevo escenario político, sobre todo con el surgimiento de las asambleas barriales, replanteó el debate acerca del compromiso, a la vez político y social, de las clases medias argentinas, cuestionando la disociación típica de los 90. Así, las asambleas barriales reposicionaron a las clases medias, especialmente las de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar importante de la escena política. En este sentido, las asambleas surgieron también como un espacio de reconstitución de la identidad política de las clases medias, tentativa que reconocía como punto de partida, sin embargo, su fragmentación y heterogeneidad actual, en contraposición con cierta homogeneidad cultural y mayores perspectivas de integración social que habían tenido en el pasado. Asimismo, las asambleas barriales generaron un espacio de cruce novedoso entre los distintos sectores de esas fragmentadas clases medias y los sectores populares, cuyos contactos se habían vuelto cada vez más escasos.

Por otro lado, estos sucesos no sólo tornaron visibles, sino que potenciaron la expresión de importantes fuerzas culturales, cuyos protagonistas centrales fueron diferentes sectores de las clases medias. Nos referimos a la expansión de colectivos de arte y fotografía (Grupo de Arte Callejero, Et-cétera, Arte Arde, entre otros), grupos de información alternativa (desde Anred —creada en 1997— hasta la agencia La Vaca, Indymedia Argentina, Agencia Rodolfo Walsh, entre las más conocidas), que hoy circulan por diferentes espacios y organizaciones sociales.

La participación de estos grupos culturales en el proceso asambleario desarrollado durante 2002 en las grandes ciudades, fue muy importante. En efecto, el marco propicio para los cruces sociales y las intervenciones de estos grupos fueron las asambleas barriales y algunas otras experiencias puntuales, como el caso de la fábrica textil recuperada Brukman, en la ciudad de Buenos Aires. Pese al declive y reducción del movimiento de asambleas, muchos de estos grupos culturales continúan generando redes y foros de intercambio y de comunicación, intervenciones artísticas y, más aún, espacios de economía social. En la actualidad, estos grupos, organizados bajo la forma de "colectivos", con una fuerte vocación por la autonomía, constituyen una de las dimensiones más novedosas de la acción colectiva en la Argentina contemporánea.

* * *

Repasemos algunas de las figuras y situaciones que hemos desarrollado más arriba. Por un lado, las nuevas estrategias de adaptación de las clases medias empobrecidas dieron cuenta de la centralidad que adquirían el capital y las competencias culturales, los que no tardarían en ser concebidos como atributos identitarios de un estrato social híbrido, ubicado en los intersticios entre una clase media exigua y unos sectores populares cada vez más pauperizados. Asimismo, los diferentes estudios mostraron que, una vez asumida la caída social, más aún, frente a la imposibilidad de retornar al estatus anterior, la experiencia del empobrecimiento conducía a la progresiva recomposición de una cultura individualista en el seno de nuevas formas de solidaridad. La experiencia del trueque, iniciada en 1995, por encima de sus avatares actuales, puede ser leída en estos términos.

Por otro lado, la demanda de autorregulación de las franjas "ganadoras" de las clases medias terminó por cristalizar en nuevas formas de sociabilidad, asentadas en la valorización de la performance individual y en la asunción de nuevos estilos de vida, fuertemente contrastantes con los modelos anteriores. Más aún, el abandono del espacio público supuso la adopción, por momentos compulsiva, de un modelo de ciudadanía patrimonialista, centrado en la producción de la distancia social y espacial.

Por último, los sucesos de 2001 volvieron a situar —al menos por un momento— en el centro de la preocupación el rol articulador de las clases medias. Como veremos en la última parte de este libro, es muy probable que muchas de las preguntas e inquietudes que atravesaron aquel año extraordinario que fue 2002 se hayan desdibujado. Sin embargo, ese conjunto de manifestaciones múltiples pusieron en evidencia —y dejaron como legado— la importancia de la textura cultural en el proceso de redefinición de las clases medias movilizadas. Así, más allá

de la evidente afinidad entre cultura posmoderna y nuevas clases medias, es importante subrayar el rol de la cultura en la constitución de las clases sociales, sobre todo, en el pasaje a la acción colectiva. Lo cual nos hace pensar que la cultura, como último bastión de una identidad perdida o en crisis, se resignifica como eje de reconstrucción de la subjetividad y, a la vez, como expresión de la resistencia colectiva.

En fin, probablemente las clases medias nunca hayan sido un actor único, pues carecen de unidad en términos estructurales; sin embargo, casi todos acordaban en reconocer la existencia de ciertos lazos culturales y políticos que, por encima de la heterogeneidad social, hacían de ellas un agente significativo de la vida social. Sin embargo, los diferentes cambios que sufrieron en las últimas décadas, y muy particularmente durante los 90, pusieron de manifiesto la disolución de esos lazos, lo que sumado a la creciente diferenciación socio-económica, torna más difícil pensarlas como un actor con capacidad de desempeñar un rol articulador en la sociedad.

Capítulo 6

La transformación y territorialización de los sectores populares

El mundo obrero (en tanto haya existido como "mundo", en todo caso lo era sobre la base y en la medida de esta preponderancia de lo colectivo) ¿no ha sido minado por un proceso de individualización que disuelve su capacidad para existir como colectivo? ¿No solamente como un colectivo global (la clase obrera con C mayúscula), sino también como un conglomerado de colectivos correspondientes a diferentes formas de condiciones relativamente homogéneas capaces de unificarse en torno a objetivos comunes? [...] ¿Qué le sucede al individuo, y qué puede hacer, cuando es desarticulado de los colectivos protectores? La historia de la clase obrera muestra que los individuos trabajadores han podido acceder a cierta independencia sobre la base de organizaciones colectivas y de su inscripción en colectivos. El análisis de la reestructuración actual de las relaciones muestra que es un proceso inverso el que domina las recomposiciones en curso.

Robert Castel,
"¿Por qué la clase obrera perdió la partida?".

El diablo sabe por diablo, pero más por peronista.

Washington Cucurto,
Cosa de negros.

Durante décadas, y gracias a la extensión de la condición de asalariado, en la Argentina hubo una fuerte tendencia a interpretar las transformaciones de los sectores populares urbanos en sintonía con la historia de los sectores sindicales, y éstos, a su vez, a la luz de los avatares del peronismo. Sin embargo, los cambios económicos y sociales que arrancaron en los 70 y se acentuaron en los 90, reconfiguraron el mundo popular urbano, cuya identidad colectiva se había estructurado en torno a la dignidad del trabajador. Marcado por la desindustrialización, la informalización y el deterioro de las condiciones laborales, este conjunto de procesos fue trazando una distancia creciente entre el mundo del trabajo formal y el mundo popular urbano,

cuyo corolario fue tanto el quiebre del mundo obrero como la progresiva territorialización y fragmentación de los sectores populares. Este proceso, que la sociología argentina contemporánea ha sintetizado como "el pasaje de la fábrica al barrio", señala el ocaso del universo de los trabajadores urbanos, y la emergencia del mundo comunitario de los pobres urbanos.

En este capítulo abordaremos algunas de las dimensiones de las transformaciones sufridas por los sectores populares. La presentación estará basada en el desarrollo de tres ejes mayores, que lejos de ser independientes entre sí, constituyen la trama mayor del mundo popular actual. Nos referimos a las transformaciones y quiebre del mundo obrero, así como a la emergencia de un nuevo tejido territorial; dos cuestiones centrales que no pueden ser abordadas independientemente del análisis de las mutaciones —y la persistencia— del peronismo. Por ello, como ya lo hemos hecho en los capítulos anteriores, realizaremos en primer lugar un breve recorrido por la historia de las clases populares en la Argentina, a partir de la irrupción del primer peronismo.

La doble configuración de "lo popular"

La teoría social clásica ha elaborado la noción de "clases obreras o trabajadoras" para designar al sector social que ocupa una posición desventajosa en la estructura productiva, caracterizado por la no propiedad de los medios de producción y, en consecuencia, obligado a vender su fuerza de trabajo en el mercado. A esta noción estrictamente económica, el análisis sociológico suele añadir otras dimensiones igualmente constitutivas; por un lado, la dimensión cultural, que incluye tanto los modelos de socialización como los estilos de vida; por otro lado, la dimensión política, que alude a las formas de organización y la acción colectiva resultante. En consecuencia, en términos análiticos, la acción de las clases trabajadoras en tanto actor de clase, comportaría la articulación de estas tres dimensiones —la económica, la cultural y política—, en tanto esferas propiamente diferenciadas y contrapuestas al otro gran actor de clase, la burguesía o clase dominante.

Sin embargo, la aplicación de este esquema, elaborado en función del desarrollo industrial propio de las sociedades centrales, reveló rápidamente sus insuficiencias en las sociedades periféricas, donde los sectores subalternos constituyen, desde los orígenes de la modernización, un conglomerado más amplio y heterogéneo que el de la sola clase obrera, minoritaria respecto de otras categorías sociales, como el campesinado, las poblaciones indígenas o los sectores informales. Éste es el caso de los países latinoamericanos, región en la cual la existencia de un proletariado multiforme y heterogéneo, en el cual se entrecruzan y al mismo tiempo se escinden estructuras y estilos de vida tradicionales y modernos, correspondientes a diferentes modelos culturales y formas del desarrollo económico, constituye una marca de origen, que se continúa durante todo el proceso de modernización sustitutiva y adquiere una nueva configuración en el escenario actual.

Asimismo, la condición dependiente de las sociedades periféricas en relación con los países centrales, tornaría aún más indecidible y compleja la problemática acerca del carácter de clase del proletariado latinoamericano. Como afirma Alain Touraine (1988), en las sociedades dependientes, las luchas suelen ser multidimensionales. Esto es, la acción de los sectores populares no estaría determinada de manera exclusiva por el conflicto de clase, sino también por las luchas por la integración nacional y, al mismo tiempo, contra la dominación extranjera. En razón de ello, desde el comienzo, lo popular tendería a designar una resistencia cultural y política, tanto frente a la acción de una clase dominante con notorios resabios feudales, como frente a la dinámica imperialista de los capitales extranjeros.

Finalmente, entre las décadas de 1930 y 1950, el carácter subalterno y la dependencia terminaron por habilitar el llamado nacionalista y desarrollista del proletariado latinoamericano. Este doble llamado encontró su expresión política en el populismo, fenómeno estructurado institucionalmente en torno a un líder carismático y un proyecto nacional basado en una coalición de clases sociales. Así las cosas, dicho proceso signó el éxito de la noción de "pueblo" por sobre la de "clase social". Más simple, el concepto de "pueblo", realidad difícil de acotar y multidimensional, construida en el cruce siempre ambiguo entre lo social y lo político, entre la clase y la nación, pasó a ser una categoría central del lenguaje político y las ciencias sociales latinoamericanas, designando a los sectores populares como sujeto social y actor colectivo.

Ahora bien, desde la perspectiva del marxismo, hacia los años 60, se elaboraron otras nociones para dar cuenta del carácter multidimensional de la realidad social latinoamericana. Así, la teoría de la marginalidad (Marín, Murmis, Nun, Quijano), a la que ya hemos hecho referencia en el capítulo 3, consideraba que la especificidad latinoamericana en relación con las sociedades centrales, residía en la "masa marginal" o "polo marginal": esto aludía a los múltiples tipos de relación con los medios de empleo, subrayando el carácter deficitario de los mecanismos de integración sistémica proporcionados por un mercado y/o por el Estado. Desde el punto de vista sociológico y económico, estas lecturas tenían el mérito de llamar la atención sobre la existencia de formas de integración y de exclusión diferenciadas, aun si su potencialidad política era cuestionable.[26]

No obstante, la heterogeneidad de situaciones sociales dentro del mundo urbano latinoamericano terminó siendo un rasgo poco tenido en cuenta en el contexto del modelo de acumulación sustitutivo, frente a la poderosa eficacia simbólica de la interpelación populista. Esto aparece ilustrado de manera emblemática por el caso argentino, puesto que en un contexto de pleno empleo —y más allá de las asimetrías regionales y los bolsones de marginalidad— la pregnancia del modelo nacional-popular fue tal, que durante mucho tiempo se consideró que nuestro país estaba más cerca de las "sociedades salariales" del Primer Mundo, que de otros países latinomericanos.

Sin embargo, en las últimas décadas, el proceso de desmantelamiento del modelo nacional-popular ha sido de tal envergadura que significó para numerosos individuos y grupos sociales la entrada en la precariedad, si no la pérdida de los soportes sociales y materiales que durante décadas habían configurado las identidades sociales. Como en otros lugares, la política de flexibilización laboral apuntó a la "reformulación de las fronteras del trabajo asalariado" (Palomino:2005), al tiempo que afectó

fuertemente la capacidad de representación y de reclutamiento del movimiento sindical, acelerando con ello el quiebre del mundo obrero. Asimismo, este proceso de pérdida y despojo de derechos se vio agravado por el comportamiento de los grandes sindicatos nucleados en la CGT, cuya adaptación pragmática a los nuevos tiempos desembocó en el apoyo al modelo neoliberal propuesto por el peronismo triunfante, a cambio de la negociación de ciertos espacios de poder. En consecuencia, el pasaje a un nuevo modelo de sociedad supuso una fuerte transformación de las pautas de integración y exclusión social, lo cual se tradujo en la desvinculación de amplios contingentes de trabajadores y la rápida puesta en marcha de un modelo caracterizado por la precarización, la inestabilidad laboral y una alta tasa de desocupación. Así las cosas, estos procesos tienden a actualizar dramáticamente ciertas tesis de la teoría de la marginalidad, elaboradas hace más de cuarenta años, en un contexto de fuerte fragmentación y territorialización de los sectores populares. Sin embargo, antes de detenernos en este proceso, analicemos cuáles fueron los ejes centrales de esa configuración de "lo popular".

Peronismo, integración y sectores populares[27]

En nuestro país, a diferencia de otros países latinoamericanos, "lo popular" no se identificó con una cultura indígena o campesina, ni tan sólo con una forma de resistencia anticapitalista. Proceso siempre relacional y conflictivo, lo "popular", en la Argentina, se definió efectivamente en oposición a otros grupos sociales. Le tocaría al peronismo, entre 1946 y 1955, llevar a cabo este proceso de configuración de las clases populares, mediante la integración socio-económica y simbólica en términos de "pueblo trabajador", visible en la extensión y reconocimiento de los derechos sociales, asociados al trabajo asalariado. Este proceso conllevó la legitimación de la acción sindical, así como la valorización del mundo del trabajo y, de manera más precisa, de los valores obreristas (James:1990). A esto hay que agregar que el discurso oficial apuntó a desvincular la idea del progreso de la imagen de un país pastoril, agrario, para ligarla a la representación de una Argentina industrial, cuyo paradigma era el trabajador industrial. En consecuencia, la idea de progreso, componente central del imaginario social argentino, se fue dotando de nuevos contenidos, al ser asociada con otros actores sociales, las clases populares definidas como clases trabajadoras.

Pese a que la experiencia concreta y central del "pueblo" estuvo anclada en la figura del trabajador, ésta no encontró una expresión política completamente "clasista". Es que, en el lenguaje político del peronismo, el trabajador era tanto un "trabajador" como un "descamisado", esto es, a la vez un explotado y un humillado. Además, por lo que hemos dicho más arriba, no se puede reducir la problemática de la dominación social a la sola inteligibilidad clasista. En realidad, y parafraseando a Silvia Sigal y Juan Carlos Torre (1969), la conciencia clasista en la Argentina se obtuvo más en la "plaza" que en la "fábrica", lo cual implica reconocer que, a pesar de su centralidad en la experiencia peronista, el trabajo, en tanto tal, no desempeñó un rol determinante a la hora de definir la dominación social. En consecuencia, en nuestro país, la noción de "pueblo" adoptó un registro político, vertebrada desde el Estado, sobre todo por medio de la fuerte articulación entre los sectores sindicales y los sectores urbanos.

Por otro lado, la definición por oposición condujo a un proceso de polarización política entre peronismo y antiperonismo, que habría de recorrer largas décadas de la política argentina, desembocando en una fuerte esencialización de las identidades sociales. Este proceso de polarización política tuvo una traducción socio-cultural, en la medida en que fue acompañado, desde las clases altas y medias, por la multiplicación de las estrategias de diferenciación social respecto de los sectores populares. Por su parte, desde éstos, la oposición condujo a la exacerbación de los rasgos plebeyos del peronismo. Esto último se hizo visible tanto en la apelación a la cultura del trabajo y el obrerismo, como —muy especialmente— en el lenguaje herético e iconoclasta del peronismo con relación a la cultura oficial, todo lo cual implicó "un trastocamiento de los supuestos concernientes a las relaciones sociales, las formas de deferencia y los acuerdos sobre el 'orden natural de las cosas' y el sentido de los límites de ciertos sectores sociales" (James:1990).

Sin embargo, esa experiencia fuertemente plebeya no terminó por emplazarse ni en una conciencia de clase dura ni en una dimensión comunitaria fuerte, pues una y otra fueron diluidas dentro de una identidad más laxa, definida a la vez por lo político (la identificación con el peronismo) y por el consumo (la vinculación con el estilo de vida de las clases medias). Así, aun cuando es posible hallar elementos comunitarios y clasistas de la conciencia obrera en la Argentina, su debilidad relativa hizo improbable una primacía de la conciencia clasista sobre otras dimensiones.

Por otro lado, si los sectores populares remitían en lo político a una afirmación plebeya, sus aspiraciones de consumo, residenciales y educativas apuntaban más bien al estilo de vida propio de las capas medias, como bien han subrayado Leandro Gutiérrez y Luis A. Romero (1995). En este sentido, la aceleración de la lógica igualitaria en el plano de lo social supuso la extensión del imaginario propio de las clases medias, lo cual encontró eco en las clases trabajadoras "integradas", que, a semejanza de lo ocurrido en ciertas sociedades centrales de la posguerra —Estados Unidos, Europa—, tendieron a autoposicionarse dentro del colectivo heterogéneo de los sectores medios. Asimismo, la presencia de una inmigración extranjera y la ausencia de verdaderas familias obreras (esto es, dos o más generaciones socializadas en una conciencia clasista), no permitieron su verdadera consolidación. Además de la fuerte impronta del imaginario de las clases medias, una importante movilidad geográfica y social impidió el nacimiento de una verdadera comunidad popular, con un estilo de vida propio, esto es, la constitución de un grupo social cerrado y altamente combativo, como en el caso paradigmático de la clase obrera inglesa.[28]

Por último, es necesario tener en cuenta que el modelo del peronismo histórico presentaba dos vías heterogéneas, pero en gran parte complementarias, de integración social: la primera se apoyaba sobre la figura del *trabajador*, mediante la afirmación de los sectores obreros como fuerza social nacional y de la consolidación de valores como la justicia social y la dignidad del trabajo; la segunda apuntaba a la figura del *pobre*, históricamente desposeído, por medio de las políticas sociales compensatorias. En consecuencia, esta doble vía conllevaba tanto la puesta

en ejercicio activo de los derechos del trabajador y del seguro social (por medio de las obras sociales) como el mantenimiento y el reforzamiento de principios asistencialistas y clientelares (como aparecía reflejado en las provincias del interior o a través de la Fundación Eva Perón). Sin embargo, la figura del pobre se constituía como una prolongación casi natural de la imagen del "pueblo-trabajador", pues ahí donde la intervención social del Estado se manifestaba como insuficiente, la beneficencia emergía con el fin de colmar tales vacíos sociales. Pero mientras que el Estado regulador se erigía como mecanismo "impersonal" de redistribución, la beneficencia guardaba un carácter personalizado y discrecional. La posterior crisis y quiebre de las bases industriales del peronismo potenciaron sin duda los elementos claramente asistencialistas, ya presentes en la matriz original.

Ciertamente, la desarticulación del mundo de los trabajadores urbanos, iniciada en los 70 y consumada en los 90, trajo aparejados profundos cambios en la experiencia popular peronista. Recordemos que, básicamente, el peronismo fue el gran lenguaje político que permitió, desde la experiencia popular, desactivar (a veces mediante una cultura plebeya, otras veces mediante las referencias igualitarias) la verticalidad del vínculo social. Desde 1945, pasando por el largo período de proscripción política y aun durante los 80, con la primera gran derrota electoral del Partido Justicialista, el peronismo continuó siendo en los sectores populares una estructura activa que poseía la capacidad de organizar la experiencia cotidiana, a la vez política y privada. Sin embargo, durante los 90, el peronismo dejó de ser el principio de articulación entre una identidad obrera, un sentimiento nacional y una conciencia popular. Cada uno de estos elementos fue debilitándose y disociándose de los otros: la identidad obrera, relativamente débil en la Argentina, entró en crisis con la transformación del mercado laboral, la precarización y la inestabilidad de las trayectorias laborales. El sentimiento nacional fue diluyéndose, en tanto y en cuanto las demandas populares no encontraron correlato en un programa de políticas públicas, que apuntara a la integración social y nacional. La conciencia popular fue desdibujándose a medida que la heterogeneidad social fue multiplicando los registros de desi-

gualdad, y que las divisiones ideológicas comenzaron a reducirse a diferencias respecto de la implementación de políticas, o cuestiones de orden ético en torno de un único modelo socioeconómico. En fin, el peronismo fue perdiendo la capacidad de articular las diversas dimensiones de la experiencia social y política. De esta manera, dejó gradualmente de ser un mecanismo activo de comprensión de lo social, a partir del cual los sectores populares inteligían la dominación; más aún, una manera consensual y plebeya de ver el mundo "desde abajo", para reducirse a un dispositivo de control y dominación política de los sectores populares, por medio de las diferentes y nuevas formas de intervención territorial. Veamos, entonces, el alcance de esas mutaciones.

DESCOLECTIVIZACIÓN Y TRANSFORMACIONES DE LA SUBJETIVIDAD POPULAR

A partir de los años 70, la dinámica desindustrializadora y el empobrecimiento del mundo popular originaron un proceso de descolectivización, que fue traduciéndose en profundos cambios dentro del tejido social popular. Este proceso, que afectó a las clases trabajadoras argentinas, no ocurrió en una secuencia única, sino más bien fue desarrollándose en diferentes fases o momentos. A su vez, la dinámica descolectivizadora tuvo profundas implicancias, tanto en el plano objetivo como en el subjetivo, en el nivel social como en el cultural.

En primer lugar, desde un punto vista objetivo, para un sector de los trabajadores menos calificados de la clase trabajadora formal (Beccaria:2002), el proceso de descolectivización arrancó en 1976, con la última dictadura militar y se fue acentuando a lo largo de los primeros gobiernos democráticos. Así, ya en este período, no fueron pocos los trabajadores que se vieron excluidos del mercado formal, y que comenzaron a desplazarse hacia actividades propias del sector informal, a partir del trabajo por cuenta propia o en relación de dependencia. En términos de acción colectiva, este proceso de pauperización de las clases populares aparece ilustrado por las tomas ilegales de tierras (asentamientos), que se desarrollaron desde fines

de la dictadura militar y durante los primeros años del gobierno de Alfonsín. Ahora bien, como sostiene Denis Merklen (2001, 2005), los asentamientos expresan la emergencia de una nueva configuración social que pone de manifiesto el proceso de inscripción territorial de las clases populares. Ligadas a la lucha por la vivienda y los servicios básicos, esas acciones fueron construyendo un nuevo marco y, a la vez, un entramado relacional propio, cada vez más desvinculadas del mundo del trabajo formal. Una de las primeras consecuencias de esta inscripción territorial es que el barrio fue surgiendo como el espacio natural de acción y organización, y se convirtió en el lugar de interacción entre diferentes actores sociales reunidos en comedores, salas de salud, organizaciones de base, formales e informales, comunidades eclesiales, en algunos casos, apoyadas por organizaciones no gubernamentales. En fin, el surgimiento de nuevos espacios organizativos dentro del barrio conoció un nuevo impulso, aunque fugaz, durante los dos episodios hiperinflacionarios de 1989 y 1990, visibles en la proliferación de ollas y comedores populares.

A esta primera ola desindustrializadora, le sucedió una segunda, ya bajo el gobierno de Menem, a partir de 1990-1991, a raíz de la implementación de una serie de reformas estructurales encaminadas a abrir la economía, privatizar las empresas públicas, descentralizar la administración pública y controlar la mano de obra mediante la flexibilización laboral. Esta segunda ola, de carácter más vertiginoso y general, afectó tanto a los trabajadores del cordón industrial del Conurbano Bonaerense, en donde residían gran parte de las firmas industriales del país, como a los empleados dependientes de la órbita del Estado. Durante este período, los individuos tendieron a buscar un refugio en las actividades informales y precarias, acentuando con ello la inestabilidad de las trayectorias laborales. En parte, sobre todo en las provincias, la dinámica descolectivizadora fue contenida por el aumento del empleo público (Beccaria:2001) y la distribución discrecional de recursos provenientes de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional). Este momento se caracterizó también por intensos procesos de movilización colectiva, sobre todo encabezados por los empleados

del Estado, los docentes y los jubilados. La mayor expresión de estos conflictos fue sin duda el "santiagueñazo", estallido social ocurrido en 1993, que promovió la intervención activa del Estado nacional, el cual distribuyó ingentes recursos y creó empleo público.

Por último, en 1995, con el "efecto Tequila", se inició una tercera ola, que abrió una nueva etapa de crisis económica y desempleo. Sin embargo, la recesión económica se instaló sobre todo a partir de 1998 (Bayón y Saraví:2002), lo cual terminaría por acelerar el proceso de expulsión del mercado de trabajo y el aumento de la inestabilidad laboral. El período señala también la emergencia de nuevas formas de resistencia colectiva surgidas en el interior del país, donde se producen los primeros piquetes y el levantamiento de comunidades enteras, que luego desembocarán en el surgimiento de un conglomerado de organizaciones de desocupados.[29] Ambos procesos encontrarán una nueva vuelta de tuerca durante la crisis de 2001-2002.

El proceso de descolectivización fue diferente, según las regiones y las provincias. Así, mientras la desindustrialización tocó tempranamente los grandes polos de desarrollo económico, como Córdoba, Rosario y el Conurbano Bonaerense, no sucedió lo mismo en ciertos enclaves productivos en el interior del país, que fueron afectados más tarde, en los 90, a raíz del proceso acelerado de privatizaciones y la crisis de las economías regionales. No por casualidad, los primeros piquetes y movilizaciones tuvieron lugar en las lejanas localidades petroleras (Cutral-Co y Plaza Huincul, en Neuquén; Mosconi y Tartagal, en Salta), allí donde la experiencia del desarraigo fue vertiginosa y radical, visible en el brusco desmantelamiento de los marcos culturales y sociales que habían orientado la vida de varias generaciones de trabajadores.

Asimismo, este conjunto de transformaciones se inserta en un escenario laboral que da cuenta del aumento de la productividad, producto tanto de la modernización tecnológica como de la ostensible reducción de los costos de la mano de obra, a través del deterioro de las condiciones de trabajo, vía la implementación de la flexibilización y la precariedad laboral. Así, como señala Beccaria (2002), la mayoría de los nuevos empleos creados en los 90 se caracterizan tanto por la precariedad,

como por su escasa o nula cobertura social y desprotección con relación al despido. En fin, las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, indican que en la última década, el "costo laboral" descendió nada menos que un 62%.

En términos de subjetividad política, la descolectivización se revistió de otras dimensiones. El rol que desempeñaron los sindicatos en este proceso de desestructuración subjetiva fue mayor. En efecto, la subordinación de una gran parte de los sindicatos (a excepción del sector estatal) a las orientaciones del gobierno justicialista no tardó en generar una gran desorientación en los individuos, algunos de ellos desgarrados por los dilemas planteados por la identidad peronista y, al mismo tiempo, sometidos a la dura tarea de preservar los marcos sociales y familiares que procuraban sostener una cierta "rutina" o "normalidad" cotidiana. En todo caso, no fueron pocos aquellos que, provenientes del mundo popular, resultaron abandonados literalmente por sus sindicatos, a la hora de afrontar el desmantelamiento —muchas veces abrupto— del modelo de relaciones sociales en el cual se habían socializado (aumento de la precariedad, rotación laboral, informalidad o desocupación plena, sin más).

Por otro lado, en términos subjetivos las transformaciones del mundo popular tampoco son ajenas a los importantes cambios que afectan los procesos de redefinición de la subjetividad en las sociedades contemporáneas. En efecto, los cambios estructurales de las últimas décadas generaron un proceso de desinstitucionalización que repercutió sobre las identidades laborales, al tiempo que produjo una fuerte crisis de las identidades políticas, tal como éstas eran entendidas tradicionalmente. Sin embargo, a estos procesos hay que sumar las consecuencias que tuvo la expansión de las industrias culturales en el proceso de socialización de las clases populares, en la medida en que esas industrias fueron portadoras de nuevos modelos de subjetivación que no estarían anclados ni en la relación con el trabajo ni en la conciencia política peronista, sino más bien en la pura identificación con nuevas pautas de consumo.

Nada ilustra mejor las transformaciones de los procesos de subjetivación e integración del universo popular que la situa-

ción de las jóvenes generaciones. En efecto, la experiencia de los jóvenes pone de manifiesto, con mayor radicalidad, la desaparición de los marcos sociales y culturales que definían al mundo de los trabajadores urbanos y la emergencia de nuevos procesos, profundamente marcados por la desregulación social, la inestabilidad y la ausencia de expectativas de vida, así como por la gran difusión de las nuevas subculturas juveniles, producto de la globalización de las industrias culturales y la influencia de los medios masivos de comunicación. Así, los modelos de subjetivación que fueron cobrando importancia en los procesos de construcción de las identidades se distancian de los roles sociales y profesionales (con los cuales se establece una relación instrumental), y remiten cada vez más a nuevos registros de sentido centrados en el primado del individuo, en la cultura del yo y en los consumos culturales. El resultado de ello ha sido la emergencia de identidades sociales más volátiles y más débiles que antaño, menos definidas por la pertenencia a colectivos sociales y políticos, si bien fuertemente marcadas por una matriz conflictiva de las relaciones sociales.

A fin de comprender sólo algunas de las transformaciones aquí enunciadas emprenderemos un doble camino: el primero de ellos nos llevará a abordar los cambios en las subjetividades dentro del mundo popular, a partir del declive del mundo obrero y la importancia creciente de otros ejes de identificación; el segundo buscará internarnos más bien en la trama social del mundo organizacional de los pobres urbanos.

Las nuevas relaciones laborales: juventud y límite de la inserción

En la sociedad actual, los jóvenes constituyen el sector más vulnerable de la población, pues vienen sufriendo los múltiples efectos del proceso de desinstitucionalización (crisis de la escuela, crisis de la familia), así como la desestructuración del mercado de trabajo que caracteriza a la Argentina en los últimos quince años. En mayo de 1995, cuando el país alcanzó su primer record histórico de desempleo (18%), la desocupación de los jóvenes del Área Metropolitana de Buenos Aires alcanzaba el 34,2% (Jacinto:1997). En noviembre de 1999, los jóvenes desocupados (de entre 15 y 24 años) duplicaban la tasa nacional de desempleo, alcanzando el 27%. Las cifras indicaban también que el 40% de los jóvenes estaban bajo la línea de pobreza. Sin embargo, datos más recientes señalan que 6 de cada 10 jóvenes son pobres; esto es, 5.500.000 personas entre 15 y 29 años (Alerta Argentina:2004). Por otro lado, en muchos casos, a la falta de calificación laboral se le suma la ausencia de oportunidades educativas, en un contexto en el cual la escuela —cuyo deterioro y crisis es visible— también aparece como un fiel reflejo de una integración cada vez más lejana. El resultado ha sido el incremento de la deserción escolar, que estadísticas recientes sitúan en un 25% para los jóvenes entre 15 y 19 años de todo el país. En provincias del noroeste, como en Tucumán, según el Indec, la cifra alcanza el 34%.

Así las cosas, el mundo laboral en el cual deben insertarse los jóvenes aparece sacudido por diferentes transformaciones: económicas (desindustrialización y pasaje a una economía de servicios); laborales (cambios en el interior de las empresas; reemplazo por un modelo posfordista de organización del trabajo) y sindicales (descrédito y pérdida de peso de los sindicatos). Salvo excepciones, este mundo laboral no tiene otra cosa para ofrecer que diversos grados de vulnerabilidad, sobre todo si se toma en cuenta que las nuevas políticas de empleo desarrolladas por las empresas han apuntado a la población joven, considerada como "más maleable" y menos "problemática" que las franjas etarias socializadas en el modelo anterior de relaciones laborales. Por ello, en la medida en que la deseada capacidad de adaptación juvenil encuentra su correlato en la escasa resistencia y la falta de organización político-sindical, los jóvenes se constituyeron en el *target* ideal de la política de flexibilización y precariedad laboral.

Este proceso ha tenido varias consecuencias, sobre todo en lo que se refiere a la conciencia de los derechos sociales. Por un lado, la noción misma de "derechos sociales", tan cara a los trabajadores de otras épocas y tan recurrente en el lenguaje sindical peronista, tiende a desdibujarse aceleradamente. Por otro lado, tanto la fragmentación salarial como la existencia de un contingente vasto de desempleados que oficia como fuerza dis-

ciplinadora, conspiran contra su posible reactualización. Por último, también hay que señalar que el rápido desdibujamiento de la existencia de derechos sociales se halla ligado a la consolidación de la inestabilidad laboral, que, en algunos casos, abarca ya dos generaciones. Así, para muchos de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, la inestabilidad laboral no constituye algo nuevo, en la medida en que ésta ya ha sido experimentada por los padres, desde mediados de los 80. En este contexto, los jóvenes tienden a naturalizar la situación de inestabilidad, sin avizorar en su futuro otra cosa que la precariedad duradera (Kessler:2004, p. 33).

En fin, los jóvenes ingresan en el mercado laboral en una época en la cual el debilitamiento del peronismo en la cultura popular coexiste con la fuerte afirmación de una cultura de masas comandada por un mercado globalizado. A la erosión de los clivajes políticos tradicionales la acompaña la caída de las antiguas estrategias de distinción cultural. Así, el proceso de subjetivación se realiza en un escenario atravesado por la incertidumbre y la inestabilidad, prontamente naturalizado, que impulsa a los jóvenes de los sectores populares (así como a aquellos de las clases medias empobrecidas), a desenvolverse como verdaderos "cazadores" (Merklen:2000) en una ciudad cada vez más caracterizada por la multiplicación de fronteras sociales, en la cual el individuo debe procurarse recursos para sobrevivir, sin posibilidad alguna de planificación reflexiva de la vida. En no pocos casos, la desaparición de los marcos normativos también ha contribuido a crear una frontera difusa entre la legalidad y la ilegalidad, en una realidad por demás híbrida en la cual se yuxtaponen la experiencia de la desorganización social y la multiplicación de las estrategias de sobrevivencia (Kessler:2004).

En lo que respecta específicamente al mundo laboral, los efectos de la nueva política empresarial se reflejan de manera paradigmática en los sectores "modernos" de la economía, cuya expansión se vio favorecida en los 90. Esto puede ser visto a través de dos ejemplos: por un lado, las fábricas automotrices (que durante el período de convertibilidad gozaron de un régimen de protección especial); por el otro, los grandes supermercados. Más aún, pese a la distancia abismal que existe entre estos

dos sectores tanto en términos de legado sindical e identidad laboral como en tradición de lucha,[30] podemos afirmar que ambos registran una evolución similar, en lo que respecta a las dificultades de emergencia de una subjetividad popular anclada en la identificación con el mundo del trabajo.

Así, la evolución del sector automotor, rama de la metalurgia históricamente considerada como la "columna vertebral del peronismo", suerte de paradigma de la aristocracia obrera, ilustra algunas de las consecuencias que este nuevo modelo de relaciones laborales tiene, a partir de la emergencia de un nuevo perfil de trabajador. En efecto, frente a las nuevas condiciones de trabajo que se imponen en el sector, los jóvenes suelen definirse a distancia de los tres ejes mayores que constituyeron la identidad del trabajador metalúrgico tradicional: esto es, no sólo a distancia de la política (peronista) y del sindicato (que aparece muy desprestigiado), sino también del trabajo en sí, con el cual mantienen una relación instrumental. Así, en la medida en que el trabajo ofrece un horizonte de integración relativa y muy inestable, la fábrica deja de ser el lugar en el cual se inscriben las expectativas de vida de los trabajadores. Más aún, despojado de sus atributos anteriores (la estabilidad) y cada vez más excepcionalmente considerado como motor del progreso social, el espacio laboral tiende a ser desvalorizado en términos de "cultura del trabajo" y, por ende, como fuente de "dignidad" y "orgullo del trabajador".

Como pudimos observar en un estudio de caso realizado entre 1996 y 1998, en la Unión Obrera Metalúrgica de la seccional de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela (Svampa:2000), esta realidad suele crear fuertes tensiones entre el sindicato y los jóvenes trabajadores. En efecto, allí donde los delegados sindicales perciben con mayor temor la impronta revulsiva de la desintegración del viejo modelo es en el terreno de las nuevas "bases" sociales: esa masa despolitizada, apática y difusa, que no es ni peronista, ni sindicalista, y que, en verdad, tampoco se identifica con el colectivo "trabajadores". Por ello mismo, y pese a las brechas abiertas en el modelo sindical tradicional, a raíz de las nuevas modalidades de trabajo, el sindicato busca proyectar un modelo identitario definido por la adhesión al peronismo, el orgullo de ser metalúrgico y la apelación al legado sindi-

cal. Así, las estrategias de persuasión dirigidas a los jóvenes trabajadores incluyen un discurso, a la vez de corte pedagógico y normativo, en torno de los derechos del trabajador: la cultura del trabajo, el orgullo sindical, la solidaridad social y, por supuesto, el reconocimiento del lugar que estaría ocupando todavía el peronismo en la vida de los trabajadores, los cuales se constituyen en la contracara inevitable de la despolitización juvenil y de la afirmación individualista del consumo. Sin embargo, todo ello se da en un marco de hondas transformaciones económicas, sociales, organizativas e industriales, que desbordan de manera elocuente la voluntad política de los actores, al confrontarlos a un escenario cotidiano en la cual se multiplican los accidentes de trabajo, la aceptación de pautas flexibilizadoras y, en no pocos casos, los despidos masivos. Ante tamaño desajuste entre discurso normativo y realidad laboral, no resulta extraño que la situación adquiera connotaciones verdaderamente esquizofrénicas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la irrupción del neoliberalismo en el mundo laboral fue tan violenta que, ciertamente, parecen quedar pocos vestigios acerca de esa supuesta edad de oro que representó el modelo peronista, que articulaba, entre otros elementos, bienestar social, derechos sociales y orgullo del trabajador industrial. Uno de los rasgos más notorios es que los jóvenes tienden a reorganizar su subjetividad en función de otros ejes, que le procuran una mayor sensación de realización personal: por ejemplo, la identificación con algún tipo vestimentario o un ritmo musical otorga la ocasión para definir positivamente nuevas afiliaciones y pertenencias, desde las cuales afirmarse e involucrarse imaginariamente. Asimismo, en esta línea, los jóvenes trabajadores tienden a desarrollar un tipo de solidaridad expresiva, que pone de relieve la importancia de los lazos afectivos (los sentimientos) sin tanto acartonamiento como sus mayores, pero sin que ello desemboque necesariamente en la construcción de una solidaridad de tipo laboral. En suma, la acción más "espontánea" y expresiva de los jóvenes señala menos una confrontación generacional que un abismo entre dos universos sociales y culturales: detrás y más allá de las críticas que los "viejos trabajadores" o el sindicato desliza hacia los jóvenes trabajadores, lo que se esconde y se

manifiesta a la vez es la profundidad del cambio vivido, pues lo que desapareció en el tránsito de una generación son los marcos sociales y culturales que definían al mundo de los trabajadores urbanos.[31]

Pero si la política de flexibilización logró imponerse —pese a la resistencia sindical de ciertos sectores de la UOM, uno de los sindicatos considerado como el portador de la conciencia obrera (peronista)—, la figura más acabada del nuevo modelo de organización del trabajo y relaciones laborales aparece ejemplificada por el sector supermercadista. Allí, el alcance del proceso de individualización de las relaciones laborales, tan asociado a la política de preferencia generacional, se vio facilitado por la existencia en el sector de un sindicato altamente negociador y pragmático, como la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS). Recordemos que, durante los 90, las nuevas estrategias de comercialización tuvieron como correlato la caída del pequeño comercio y una creciente concentración del mercado de la alimentación por parte del sector supermercadista, en su mayoría perteneciente a grupos extranjeros. Dicho sector, tradicionalmente más flexible y poco organizado, se reveló en sí mismo como una cantera ilimitada e inagotable para la implementación del nuevo modelo organizativo. Los estudios existentes sobre el sector son contundentes al respecto. En efecto, a las nuevas modalidades laborales basadas en la polivalencia y la flexibilidad contractual, salarial, organizacional, se sumó la expansión de una cultura empresarial que coloca en el centro del dispositivo de control la figura a la vez inasible y todopoderosa del "consumidor" o "cliente", cuya sola invocación permite recubrir y ampliar la dominación social del capital sobre el trabajo (Contartese, Gómez y Rúfolo:2003). Jornadas extensísimas, sin pago de horas extras; eliminación de los feriados, fuerte rotación de puestos, controles omnipresentes, forman parte de una historia que, si bien es reciente, se halla plagada ya de largos e innumerables abusos, algunos de los cuales han llegado a adquirir cierta trascendencia mediática. En suma, la convergencia de todos estos elementos, a lo que se agrega la tradición pragmática y "empresarial" del sindicato, explican tanto la dificultad de la emergencia de una identidad colectiva (un "nosotros") (Abal Medi-

na:2004), como también las escasas posibilidades de una subjetivación positiva por medio del trabajo.

En definitiva, en la medida en que el trabajo, concebido de ahora en más como precario e inestable, deja de ser el principio organizador en el proceso de afirmación de la subjetividad, otros componentes, ligados al consumo y, sobre todo, los gustos musicales, adquieren mayor peso. Así, una de las consecuencias de la nueva dinámica laboral es que los modelos de subjetividad emergentes se construyen a distancia del mundo del trabajo, y remiten cada vez más a nuevos registros de sentido centrados en las dimensiones más expresivas del sujeto. Claro que el trabajo continúa siendo (y no podría ser de otro modo) factor de integración social, pero lo que aparece relativizado es su importancia como principio de individualización y como espacio de construcción de un colectivo social, un "nosotros". Minado por un proceso de individualización que atraviesa todos los niveles de la experiencia, lo que queda del mundo obrero se debate así en la dificultad de existir en términos colectivos.

CULTURA POPULAR Y ESTIGMATIZACIÓN DE LA JUVENTUD: EL HORIZONTE DE LA EXCLUSIÓN

Hemos dicho ya que el declive y la desagregación del mundo de los trabajadores urbanos coinciden con el fuerte avance de la industria cultural y de la influencia de los medios masivos de comunicación en un mercado cada vez más globalizado. Esto cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta que los jóvenes pertenecientes a los sectores populares, a diferencia de sus abuelos y en muchos casos, de sus padres, han sido socializados en un medio urbano. Así, aun en aquellos jóvenes cuya situación es de mayor vulnerabilidad y desorganización social y, en el límite, de anomia, las demandas de consumo son las mismas que las de los jóvenes que provienen de otros sectores sociales, con mayores oportunidades de vida (Kessler:2004). Por ello, es probable que el estilo de vida de un joven proveniente de los sectores populares se distancie enormemente del universo de sus mayores y se encuentre más cercano al de un joven que vive en la periferia de las grandes metrópolis, con quien

puede compartir ciertos códigos propios de la cultura urbana actual, un universo expresivo en el cual se instalan las nuevas "industrias de la subjetividad".[32] Gustos musicales, lenguaje expresivo, diferentes tipos de vestimentas e identificaciones y, en muchos casos, pasión futbolera, van configurando las nuevas "narrativas" identitarias juveniles. Sin embargo, pese a esta tendencia homogeneizadora, producto de la difusión transversal de los consumos, los modos de apropiación son divergentes, pues también dependen del grupo social de pertenencia.

Sin duda, la oposición a la policía constituye uno de los elementos centrales de la "narrativa" identitaria de las jóvenes generaciones. Esta oposición a la presencia y acción de la policía remite a una experiencia común de persecución y rechazo que sufre gran parte de la población joven en la Argentina, sobre todo, la proveniente de los sectores populares y de las clases medias bajas. Este tópico tiene su origen en la última dictadura militar,[33] pero encuentra una fuerte continuidad en los años de la democracia, de la mano del sistema represivo institucional, encarnado por las siempre inquietantes fuerzas policiales (provinciales y federal). No olvidemos que, desde 1983 en adelante, los jóvenes han sido y continúan siendo las víctimas privilegiadas del ensañamiento policial en los barrios, o a la salida de recitales, a través del gatillo fácil y la represión.[34] En consecuencia, el rechazo a la policía, una de las instituciones más cuestionadas de las últimas décadas, posibilita una identificación de base entre los jóvenes, más allá de la diversidad de los orígenes sociales o de los círculos de pertenencia: una experiencia que, por medio de diferentes lenguajes, tiende a poner al descubierto y a denunciar la estigmatización de la juventud como "clase peligrosa", en el límite, encarnación de la "clase sobrante" en el marco de una sociedad excluyente. [35]

Dicha política de represión y ensañamiento para con los más jóvenes se ha ido cristalizando en una suerte de *ethos* antirrepresivo, cuyo paradigma es el rock barrial o "chabón" de los 90, y más cercanamente, la "cumbia villera". Veamos, aunque sea esquemáticamente, los diferentes sentidos y significados que expresan estos nuevos ritmos musicales.

Como afirman Pablo Semán y Pablo Vila (1999, p. 233), el rock "chabón", propio de los 90, inaugura un nuevo período en

el cual se destaca la presencia de músicos procedentes de los sectores populares (y no casi exclusivamente de los sectores medios y medios altos, como es el caso del rock, entre los 60 y los 80). Siguiendo a dichos autores, el rock "chabón" se define como "el rock de aquellos jóvenes a los que les duele que el mundo de sus padres no exista más, de los jóvenes que encuentran alternativas a su no-lugar en el modelo socio-económico vigente en la expresión musical, en la barra de la esquina, o en pedir prepeando las monedas para la cerveza o la entrada al recital, porque piensan, con algún criterio de realidad, que no podrían encontrar tales alternativas en ninguna versión de la política organizada tal cual está estructurada en la Argentina contemporánea". Con sus letras, que aluden al barrio, a las peleas callejeras, a la oposición a la policía, el rock "chabón" está lejos de encarnar una música de "ganadores". Más bien, al igual que el tango, es un ritmo musical que evoca a los "perdedores" del sistema, a las "víctimas jóvenes de una reestructuración social violenta, abrupta y traumática" (Semán y Vila:1999, p. 249-251). Por último, bien vale la pena subrayar el carácter transversal (clases populares y clases medias) de esta música, que engloba una retórica ambigua y contestataria bastante despolitizada (donde se unen el rechazo a los políticos y una actitud antisistema), así como estilos rockeros muy disímiles entre sí.

Diferente es el caso de los ritmos "bailanteros" (cumbia, cuarteto, "cumbia villera", entre otros), cuyos modos de apropiación, depende del sector social de que se trate. Los sectores medios (o, excepcionalmente, los sectores altos) suelen realizar una apropiación de segundo grado, que lleva implícito un reconocimiento (el carácter festivo de la música, ligado —supuestamente— a su origen plebeyo) y, a la vez, una toma de distancia, donde persiste el reflejo estigmatizador (su carácter de música "villera", propia de las villas miseria).

Una atención especial merece el fenómeno de la "cumbia villera", género surgido a fines de los 90, en el Conurbano Bonaerense. La "cumbia villera" es un ritmo popular urbano que registra una influencia de la cumbia colombiana y del *reggae* y, muy especialmente, del rap —una de las expresiones más importantes de la cultura urbana de los sectores excluidos en las

sociedades actuales—. Según Elisa Martín (2002, p. 26), su irrupción reciente, seguida de una gran mediatización, ha generado diferentes lecturas; desde aquellas que la consideran un discurso de los marginales prontamente absorbido por el mercado, o una expresión de la "decadencia moral y cultural del país", hasta aquellos otros que romantizan la actitud de rebeldía que conlleva, en continuidad con el rock chabón o barrial.

Desde esta perspectiva, la "cumbia villera" —pese a su carácter no sólo popular, sino marcadamente plebeyo— no puede ser interpretada como un movimiento de resistencia cultural, esto es, como una expresión de los sentimientos de injusticia y desigualdad de parte de los sectores subalternos. Cierto es que vehiculiza temas o tópicos propios de las clases subalternas; sin embargo, tiende a neutralizar su potencialidad al exaltar un modo de vida que, como afirma Miguel Brenner (2001), conduce a legitimar la exclusión y la marginalidad. En este sentido, se caracteriza por un discurso que constituye un "nosotros" negativo, y termina por vaciar de significado el reclamo.

Analicemos algunos de los tópicos centrales de la "cumbia villera". El primero de ellos se refiere a la mujer, la cual aparece constantemente denigrada y ridiculizada, sobre todo en el plano sexual. La virulencia de estos ataques, lejos de ser casual remite a complejos procesos sociales: nos referimos, por un lado, al fuerte trastocamiento del universo masculino, cuya identidad estaba anclada en el trabajo y en el reconocimiento de su rol como proveedor principal; por otro lado, a la emergencia y afirmación de un protagonismo femenino, como lo atestiguan los movimientos sociales existentes, no sólo en la Argentina, sino en otras regiones de la periferia globalizada. Este doble fenómeno nos ayuda a entender entonces por qué en la última década, dentro del fragmentado espacio popular, se han generado expresiones musicales sexistas, que contienen elementos de una increíble violencia verbal contra la mujer. Más aún, las referencias que aparecen en las letras de la "cumbia villera" apuntan a denigrar y ridiculizar la creciente autonomía (sexual) de la mujer, precisamente en un momento en el cual es notoria su mayor participación —y autonomía— en el campo social y político. En un extremo, aunque realizado en tono festi-

vo, este proceso de impugnación de la mujer refleja la crisis del universo masculino y su imposibilidad de salir del viejo contexto y, por ende, de redefinir positivamente la situación.[36] En fin, esta imagen negativa de la mujer aparece como la contracara de un proceso de desestructuración y crisis del imaginario masculino; algo que, necesario es decir, está lejos de ser privativo del caso argentino, pues también constituye un elemento vertebrador de otras expresiones de la cultura urbana popular (como sucede con el rap).

El segundo tópico que aparece en la "cumbia villera" es el repudio a la policía, el que, como hemos dicho, es un tópico constitutivo de la juventud argentina. Así, aun si en la "cumbia villera" muchas de las referencias se insertan en un esquema de oposición concreto (ladrones/policías), su sola mención tiende a evocar una vivencia más amplia, referida a la persecución y represión que sufren los jóvenes. Sin embargo, a diferencia del discurso propio de las organizaciones de derechos humanos (movimientos en contra de la violencia policial) o de otras organizaciones sociales (como H.I.J.O.S. o las diferentes agrupaciones piqueteras), donde el talante antirrepresivo aparece politizado y en perspectiva histórica (la relación entre la última dictadura militar y el aparato policial), la interpelación antirrepresiva propia de la "cumbia villera" no hace más que diluir su potencial antagónico, en la medida en que ésta se inserta en un discurso de exaltación de un modo de vida (el descontrol, la droga, el delito), mediante la afirmación festiva y plebeya del "ser excluido", cristalizado a través de las imágenes estereotipadas (y estigmatizantes) del "villero" o el "pibe chorro".

En resumen, los jóvenes de los sectores populares aparecen como la ilustración más acabada de un conjunto de procesos: por una parte, devienen los destinatarios privilegiados del nuevo modelo de relaciones laborales (más flexibles, con pocos vestigios de un pasado de integración social y laboral); por otra parte, aparecen como la expresión por antonomasia de la "población sobrante" (la clase peligrosa). Entre esos dos polos que definen tanto el límite de la inserción como el horizonte de la exclusión, se van configurando los nuevos marcos de referencia de las conductas juveniles, donde conviven desorganizadamente y a veces en tensión, diferentes principios y

valores: la naturalización de la situación alterna con el talante antirrepresivo; el rechazo a los políticos, con una actitud antisistema, pocas veces politizada; la conciencia del horizonte de precariedad durarera, con una necesidad de descontrol de las emociones y las sensaciones.

LAS MUTACIÓN ORGANIZACIONAL: HACIA EL MUNDO COMUNITARIO DE LOS POBRES URBANOS

Como ha sido dicho tantas veces, en la Argentina, el nuevo régimen de acumulación terminó de liquidar la estructura salarial anterior, que ofrecía —diferencias mediante, protección social, estabilidad laboral y derechos sociales. Durante este período de grandes mutaciones, la sociedad argentina no contó con centros de formación o reconversión laboral, al tiempo que fue notable la ausencia de políticas estatales en la materia, todos mecanismos que hubieran compensado, en parte, los efectos de las progresivas medidas de flexibilización laboral o los despidos masivos que acompañaron a los procesos de privatización y de reconversión de empresas en el nuevo contexto de apertura comercial. Asimismo, recordemos que los grandes sindicatos nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) no se opusieron a las reformas, que virtualmente minaban sus bases de afiliación, sino que negociaron con el gobierno su supervivencia material y política y optaron por readecuarse al nuevo contexto económico y social.

Por otro lado, las redes de reciprocidad y las organizaciones de base existentes, orientadas a la gestión de las necesidades más básicas, fueron ciertamente insuficientes. En realidad, el conjunto de redes y organizaciones territoriales preexistentes remitían tanto a la acción del Partido Justicialista como a la historia de los movimientos de asentamientos.

En efecto, en primer lugar, el Partido Justicialista, desde sus orígenes movimientistas, se caracterizó por desarrollar y sostener una multiplicidad de organizaciones heterogéneas dentro del mundo popular. Aun durante los 90, esa vasta "organización informal" estaba constituida por una densa colección de redes personales, que operaban desde los sindicatos, los clubes,

las ONG y, con frecuencia, desde la casa de los militantes (Levitsky:2001, p. 8). Esas redes desarrollaban varias actividades, desde las específicamente políticas, hasta las sociales y recreativas. En segundo lugar, el proceso de tomas de tierras que se desarrollaron desde fines de la dictadura militar fue originando también un conjunto de organizaciones territoriales, asociadas a la lucha por la propiedad de la tierra y a la organización de la vida del barrio alrededor de los servicios básicos (calles, agua, energía eléctrica, la sala de salud, entre otros) (Merklen:2000). Como en otros países de América Latina, estas acciones fueron consolidando un modelo de acción territorial, típico de los movimientos sociales urbanos, cuyas demandas estarán orientadas fundamentalmente hacia el Estado.

Ahora bien, el reconocimiento de una cierta continuidad no nos exime de analizar las rupturas registradas en el mundo popular y sus formas organizacionales, del que sólo una visión más abarcadora de la problemática (relativa tanto a las transformaciones de los sectores populares, como a los vínculos entre las esferas micro y macrosocial), puede dar cuenta acabadamente.[37] En efecto, a partir de 1987, año en que Antonio Cafiero asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires, hasta el presente, los diferentes gobiernos (en su mayoría de signo justicialista) fueron multiplicando las formas de intervención más específicamente políticas en el mundo popular, que encontrarían su expansión durante el gobierno de Menem. Los primeros ensayos de asistencia alimentaria de los 80 fueron seguidos por una política más sistemática de ayuda social, que incluía la salud y la infancia. Asimismo, no hay que olvidar que entre 1991 y 1997, en la medida en que el paisaje urbano fue perdiendo sus rasgos tradicionales, hasta convertirse en un verdadero cementerio de industrias y pequeños comercios, la política en los barrios tendió a recluirse en su dimensión más asistencial, despojándose de sus lazos tanto con la militancia política como con el mundo sindical. Las razones de tal inflexión son variadas y complejas: el telón de fondo es, sin duda, el triunfo del peronismo en su versión neoliberal. En este sentido, la inflexión debe explicarse también a la luz de los cambios impuestos por el nuevo modelo de gestión.

En la primera parte de este libro, cuando abordamos los

rasgos mayores del modelo de dominación política, hicimos referencia a un modo de "hacer política" vinculado al discurso neoliberal y el mandato de los organismos multilaterales, elemento central de un nuevo modelo de gestión. Ese modelo se basa en tres presupuestos centrales: la división del trabajo político por medio de la profesionalización de las funciones, la política de descentralización administrativa y la focalización de la ayuda social. Estos tres ejes de la política neoliberal fueron la clave para la reformulación desde el Estado de la relación con las organizaciones sociales, peronistas y no peronistas. Así, el pasaje de la fábrica al barrio se fue consolidando a través de la articulación entre descentralización administrativa, políticas sociales focalizadas y organizaciones comunitarias, lo cual trajo consigo una reorientación de las organizaciones locales.

En efecto, las nuevas estrategias de intervención territorial fueron produciendo un entramado social en el cual se insertaron las organizaciones comunitarias, fuertemente dependientes de la ayuda del Estado. En este nuevo contexto, muchas organizaciones, embriones de movimientos sociales urbanos, terminaron por perder su potencial político o su originaria vocación por la autonomía, subsumidas o neutralizadas por el nuevo estilo de gestión. En rigor de verdad, muy pocas organizaciones contaban con los instrumentos necesarios como para insertarse dentro del nuevo campo político-social, preservando un espacio de relativa autonomía y una identidad propia. Como señala Pablo Forni (2001), una mirada retrospectiva muestra que las organizaciones comunitarias que lograron sobrevivir en un contexto de hegemonía del peronismo y, al mismo tiempo, de precariedad y escasez de recursos, lo hicieron gracias a que establecieron lazos con fundaciones y ONG, y/o porque tendieron a articularse en redes, junto con otras organizaciones comunitarias.

El impacto de este nuevo modelo de dominación política no fue menor, tal como aparece ilustrado por el movimiento villero, cuyo *ethos* estaba vinculado de manera indisoluble a la lucha por las tierras. Como ha sido analizado por Sabina Fréderic para el caso de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, a partir de 1990, la política local se abocó a cuestionar la movilización, instrumento y base de la acción del movimiento

villero en su relación con el gobierno local, como mecanismo de construcción de la política (Fréderic:2004, p. 101). Así, la nueva política local produjo hondas transformaciones: por un lado, impulsó la consolidación de una clase política más diferenciada en el ámbito local (una elite de gestores), respecto de los vecinos y los villeros; por otro lado, promovió una nueva figura de mediador, el "militante social" de los barrios. Siempre siguiendo a Sabina Fréderic, esta nueva división del trabajo terminó por ampliar y reproducir los efectos desmovilizadores: así, mientras que el trabajo específicamente político quedaba en manos de "los profesionales", instalados en el municipio, la acción del nuevo "militante social", de carácter asistencial, quedaba prácticamente encapsulada en el territorio.

Sin embargo, "desde arriba", la política de focalización fue acompañada también por una "recentralización" de la ayuda social, como lo ejemplifican los ATN discrecionalmente distribuidos desde las oficinas del Ministerio del Interior a las diferentes provincias y el ya olvidado Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense (FRHCB). Recordemos que los fondos de inversión social en América Latina surgieron como una estrategia compensatoria a lo que dio en denominarse "las consecuencias sociales negativas del ajuste estructural" (Chiara, Danani y Filc:2000). Es en este contexto donde fue creado en 1992 el FRHCB, dada la insuficiencia de los recursos de coparticipación federal para afrontar las necesidades del Conurbano, cuya población presenta índices muy bajos de cobertura de servicios públicos y una alta proporción con necesidades básicas insatisfechas (Chiara, Danani y Filc:2000, p. 232)[38].

El proyecto fue convertido en ley cinco meses después de que Eduardo Duhalde asumiera como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y tuvo vigencia hasta diciembre de 1997. La ley decretaba que el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias sería destinado al fondo de financiamiento de programas sociales en el Conurbano Bonaerense. Igualmente, la oposición de algunos gobernadores hizo que este porcentaje fuera sustituido por una suma fija de 650 millones de pesos/dólares, equivalente al 10% de la recaudación total. Estos fondos, controlados por un ente autónomo, dependiente directamente del gobernador, se destinaron a la realización de

obras públicas. Así, durante este período, el FRHCB se convirtió en el principal productor de intervenciones sociales en la Región Metropolitana de Buenos Aires, con un fuerte impacto sobre las condiciones de vida de los sectores populares, así como sobre la reorganización de las relaciones políticas, tanto en el ámbito provincial como en el municipal.

En efecto, desde el punto de vista político, el FRHCB permitió a Duhalde afianzar su liderazgo a partir del disciplinamiento y la reorganización de las relaciones políticas en la provincia. La personalización y monopolización del gasto social contribuyó también a cimentar su popularidad y sobre todo, a impulsar la de su esposa, Hilda Duhalde, quien a partir de 1993 y desde el entonces Congreso Provincial de la Mujer, fue asumiendo competencias del área de programas sociales del ente, a cargo de las relaciones con las organizaciones intermedias, así como de la gestión del financiamiento iniciados por éstas (Chiara, Danani y Filc:2000, pp. 247-248). Sin duda, estos esfuerzos tuvieron su corolario a mediados de los 90, con la creación de una red de "manzaneras" (Plan Vida), que produjo una reorganización de la política en función del mediador barrial, cuyo alcance en términos de "red de resolución de problemas", tanto como su eficacia simbólica (la identificación con un estilo "evitista"), fue analizada sobre todo por Javier Auyero (1997).

En otras palabras, el Partido Justicialista, desde las distintas instancias del Estado (nacional, provincial, municipal), tanto por intermedio de las nuevas estructuras de gestión (descentralización y nueva división del trabajo político), como de los "viejos" estilos centralizados, comandó la reorientación organizacional del mundo popular. Así, tras la crisis del mundo de los trabajadores urbanos fue asomando cada vez más un mundo caracterizado por redes y organizaciones territoriales, atravesado por nuevas formas de "clientelismo afectivo". Por clientelismo afectivo entendemos un tipo de relación que expresa la convergencia aleatoria entre la dimensión utilitaria de la política, generalmente reforzada por la omnipresencia de demandas dirigidas hacia las instituciones políticas, y la dimensión afectiva, manifiesta en las diferentes modalidades de identificación con los líderes.[39] El clientelismo afectivo se fue convirtiendo en una manera relativamente estable de definición del

vínculo político "desde abajo" en el período pospopulista. Más aún, éste triunfó allí donde el peronismo fue debilitándose como marco de interpretación de la vida política y social, es decir, a partir del abandono de políticas públicas integradoras, reduciéndose cada vez más a la articulación entre un conjunto de políticas sociales asistenciales que invocaban una visión consensual o no conflictiva de la política, y un conjunto de eficacias simbólicas que interpelaban los orígenes familiares, la tradición local, las imágenes de la lealtad o, más simplemente, el recuerdo de que "los otros son peores".

En resumen, trabajosamente, en medio de la crisis y la desaparición de las instituciones típicas de la sociedad salarial, estas redes territoriales se fueron densificando y orientando cada vez más a la gestión de las necesidades básicas, configurando de manera incipiente los contornos de un nuevo proletariado, multiforme y heterogéneo, caracterizado por la autoorganización comunitaria.

MUNDO PERONISTA, BRECHAS CULTURALES Y NUEVAS MILITANCIAS

Las mutaciones del mundo popular urbano ocurridas durante los 90 conllevaron también una transformación del peronismo, no sólo en el nivel organizacional, sino en el plano de la subjetividad. En rigor, la transformación del peronismo en los sectores populares encuentra tres grandes inflexiones: una primera se produce durante la etapa inicial del gobierno de Menem (1989-1995), y aparece asociada al debilitamiento del peronismo en términos socio-culturales; una segunda inflexión arranca en 1996/97, y está directamente vinculada al desarrollo de formas de (auto)organización de lo social y nuevas figuras de la militancia territorial, por fuera de y confrontadas con la estructura del partido peronista. Por último, una tercera inflexión se produce a partir de 2002, como producto de la masificación de los planes sociales en el empobrecido mundo popular.

La primera inflexión es de índole socio-cultural y presenta dos aspectos íntimamente ligados: el debilitamiento del peronismo en términos identitarios y la difusión de culturas alternativas, que conducirá a la multiplicación de los grupos de pertenencia. La primera brecha socio-cultural aparece manifiesta en la dificultad de transmisión del peronismo en el marco familiar, que remite tanto a las consecuencias sociales que tendría el viraje neoliberal del Partido Justicialista, al tiempo que nos advierte sobre la importancia creciente de otros ejes de construcción identitaria. Ya hemos hecho referencia al debilitamiento de las identidades definidas en torno al trabajo y la política, y a la reorganización de la identidad alrededor de otros ejes, como el consumo. En efecto, más allá de la socialización aún observable en el nivel electoral, a mediados de los 90 se fue diseñando un corte claro que remite tanto al desapego creciente de los jóvenes hacia la política como al hecho de que el peronismo dejó de ser, para ellos, el núcleo de una vivencia social. A su vez, este proceso de debilitamiento del peronismo en la cultura popular coincide con el fuerte avance de la industria cultural en un mercado cada vez más globalizado.

Por otro lado, la segunda brecha, también de orden socio-cultural, fue introducida por las religiones alternativas. Esto se comprende mejor si tenemos en cuenta que, durante mucho tiempo, la hegemonía del peronismo en los sectores populares se tradujo en una suerte de homogeneización político-cultural, expresada en la subordinación y, en el límite, en la deslegitimación de otras prácticas o creencias populares. Además, recordemos que, desde sus orígenes, el peronismo estuvo estrechamente asociado a los valores de la cultura católica, más allá de los duros enfrentamientos entre Iglesia y Estado registrados en las postrimerías del segundo gobierno de Perón. A fines de los años 60, esto es, luego del Concilio Vaticano II, la convergencia entre peronismo y catolicismo se expresaría también a través de las nuevas tendencias, desde el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo hasta la Teología de la Liberación latinoamericana. Durante los 70, esta articulación entre peronismo popular y Teología de la Liberación fue visible en las experiencias de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), así como en el peronismo revolucionario. La máxima expresión de esta convergencia entre catolicismo y revolución fue el sacerdote Carlos Mujica —asesinado en 1975 por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina)—, cuya acción social estaba ligada al movimiento villero de la ciudad de Buenos Aires.

A esta escalada represiva, desarrollada en el nivel continental por los diferentes gobiernos autoritarios que se instalaron en la región, le siguió una fuerte embestida institucional, llevada a cabo por el Vaticano. En efecto, la Teología de la Liberación, caracterizada por su "opción por los pobres", fue sistemáticamente perseguida y sus principales teólogos fueron disciplinados, durante el pontificado de Juan Pablo II. Amén de ello, en la Argentina, la política institucional del Vaticano coincidió con la llegada de Menem al poder. Aun así, no es casual que en los 80 y 90, en un panorama que mostraba a la vez el viraje neoliberal del peronismo y la hegemonía de las corrientes más ortodoxas dentro de la Iglesia Católica, las CEB apoyaran y contribuyeran a la emergencia de nuevas organizaciones sociales, construidas a distancia del peronismo neoliberal y sus estructuras clientelares.

Ahora bien, lo notorio durante los 90, fue el vertiginoso crecimiento de las religiones pentecostales y evangelistas dentro de los sectores populares, lo cual quebró la ilusión del monopolio de lo popular por parte del peronismo, estrechamente asociado al catolicismo. Más aún, en la Argentina, en la medida en que el peronismo iba perdiendo la capacidad de ensamblar la experiencia popular en una sola cultura política, expulsando los elementos renovadores (CEB), las nuevas religiones fueron constituyendo otros focos de pregnancia significativa.

Dichos cambios socioculturales, suerte de resquebrajamiento o de brechas dentro del peronismo popular, dan cuenta menos del final del mundo peronista que de su mutación, al tiempo que ponen en evidencia la heterogeneidad creciente del mundo popular. Sin embargo, ni la interpelación de los más jóvenes, seducidos por las nuevas imágenes del consumo, ni la expansión de las religiones-movimiento, significaron un cuestionamiento mayor del peronismo en términos políticos. Lo mismo sucedía con el universo abigarrado de las religiones, ya que, como señalan algunos estudios (Semán:2000), existe una afinidad electiva entre el *corpus* doctrinario de aquéllas y los supuestos culturales de los grupos populares. No por casualidad, muchos de los/as pastores/as poseen antecedentes de trabajo territorial dentro del partido peronista. Por otro lado, leída desde el presente, la expansión de las nuevas religiones revelaba

una suerte de paradoja: pues si las religiones-movimiento aparecían como portadoras de la posibilidad de recomponer el lazo social como lazo comunitario, frente al avance de una dinámica privatizadora y sus previsibles consecuencias disgregadoras para la solidaridad social, no es menos cierto que ellas ilustraban una determinada visión de lo comunitario que implicaba una resignificación desde la esfera privada, despojada de una dimensión específicamente política. En otras palabras, esta nueva resignificación del lazo social desde lo privado no entraba en contradicción con las prácticas políticas del peronismo. Estas podían convivir y, más aún, articularse con la cultura política peronista.

No sucedería lo mismo respecto de "la segunda inflexión", que desbordó claramente la esfera cultural-religiosa, para insertarse en el registro organizacional-político. Esta aparece ejemplificada por el surgimiento y expansión de las organizaciones piqueteras, muchas de ellas definidas por fuera y más aún, en confrontación con las estructuras tradicionales del Partido Justicialista. Sin embargo, lo más importante no es tanto que las nuevas organizaciones confronten o negocien con el peronismo, sino las condiciones —los supuestos— desde los cuales se entabla dicha relación, pues la acción de las organizaciones piqueteras tuvo como punto de partida la resignificación política de la militancia socio-territorial preexistente. Pero, una vez dicho esto, uno podría preguntarse cuáles son los rasgos novedosos de esta militancia territorial, ligada a las organizaciones de desocupados, habida cuenta de la tradición organizativa existentes en los asentamientos, así como de la histórica presencia del peronismo en los barrios. Tratemos, pues, de responder por partes esta pregunta.

Recordemos que, pese a que la militancia socio-territorial tuvo un cierto desarrollo durante los movilizados años 60 y 70 —sobre todo, asociado al trabajo de base realizado por sacerdotes tercermundistas y militantes católicos de clase media—, ésta adoptará nuevos rasgos a partir de los años 80 y más claramente, durante los 90, a raíz del agravamiento de las condiciones de vida de los sectores populares y su desconexión con el mundo del trabajo formal. De esta manera, en el marco de una matriz social más comunitaria, el trabajo territorial fue adquiriendo

una cierta "autonomía relativa" respecto de los sindicatos y la militancia política tradicional. Sin embargo, las nuevas estructuras de gestión desarrolladas a lo largo de los 90 apuntaron a reformular la relación con las organizaciones populares preexistentes, y tendieron a definir el grado o los límites de esa "autonomía relativa", en el marco de una militancia local, de tipo social y deliberadamente despolitizada. Ya hemos señalado, siguiendo a Sabina Fréderic, cómo el discurso oficial, mediante la puesta en marcha de la nueva política social focalizada, apuntó a proyectar la idea de que el nuevo "militante social" ofrecía un perfil más profesional, menos "contaminado" por el mundo de la política. Así, el predominio de las mujeres no era casual, como bien lo ilustran las "manzaneras", mediadoras del Plan Vida, que dependía directamente de Hilda Duhalde. Más simple, a diferencia del militante político de las décadas pasadas, la nueva figura del militante social tenía la ventaja de presentar un perfil "despolitizado" y, por ende, menos problemático, condición *sine qua non* en un contexto de transformaciones del peronismo desde arriba y de creciente empobrecimiento desde abajo. Cierto es que esta despolitización y encapsulamiento de la militancia en los barrios no estaba exenta de tensiones. Cada tanto, algún hecho dramático que ocurría en los barrios permitía que los "antiguos" militantes políticos peronistas asomaran el rostro, desafiantes, reivindicando la memoria de las luchas y el sentido mismo de la práctica política.[40]

A mediados de la década del 90, y pese a los esfuerzos del Partido Justicialista por "encapsular" —la expresión es de Marcela Woods (1998)— la acción política en los barrios, esta dinámica territorial estará en el origen de un nuevo *ethos* militante, que tendrá por protagonistas a las incipientes organizaciones de desocupados. En el origen de esta brecha política cobra relevancia el carácter abusivamente clientelar y manipulador del peronismo, así como la escasez de recursos, en un contexto de cruda descolectivización y pauperización masiva de los sectores populares. En este escenario, el clientelismo afectivo se fue transformando y, al mismo tiempo, encontrando obstáculos, atrapado en una dinámica paradójica que muestra la convivencia entre un sistema clientelar múltiple, que tendía a impulsar las conductas oportunistas, y un discurso anticlientelar que comenzaba a difundirse en el ámbito barrial y que apuntaba al Partido Justicialista. En el marco de esta nueva situación, en la cual la extensión de la crisis no constituye un dato menor, y en un escenario atravesado por las nuevas movilizaciones que se producían en el interior del país (los primeros piquetes y puebladas de las localidades petroleras), la figura del militante social, dependiente del aparato del Partido Justicialista, terminó por mostrar sus límites.

Finalmente, la redefinición activa de la situación vendría de la mano de militantes de la izquierda (ex delegados sindicales y dirigentes de asentamientos), por fuera del Partido Justicialista[41]. Fueron ellos quienes encabezaron las primeras marchas, junto con las mujeres (esposas o jefas de hogar), algunas de las cuales provenían de la militancia social, impulsada por el Partido Justicialista en los 90, desde las nuevas estructuras de gestión estatal. De esta manera, a partir de 1997, en especial, el territorio del Conurbano Bonaerense, sede de las primeras organizaciones de desocupados, se fue erigiendo en un escenario de confrontación y, a la vez, de reconocimiento y negociación, con los punteros barriales del Partido Justicialista y las nuevas estructuras de gestión del Estado, en sus diferentes instancias (municipal, provincial, nacional). En fin, más allá de sus diferentes alineamientos políticos y sindicales, las organizaciones van a reconocer como fuente originaria el "trabajo territorial", asentado sobre un modelo de representación que algunos sintetizarán en la figura del "delegado de base" y otros del "dirigente comunitario" o simplemente "referente territorial".

En un doble registro, que señala a la vez líneas de continuidad y de ruptura, la acción barrial ligada a la gestión de las necesidades básicas se irá dotando de (nuevos) registros de significación, esta vez específicamente políticos. Continuidad: porque, en definitiva, la militancia social (impulsada en los 90, desde las nuevas estructuras de gestión) va a consumir —aún en la actualidad— una buena parte de la energía de las agrupaciones. No es raro, entonces, que en el marco de una pauperización creciente de los sectores populares, la tarea asistencial reclame urgencia y, más aún, acción inmediata, visible en la centralidad que cobran el comedor, la salita de salud y la panadería comunitaria. Ruptura: pues la politización del modelo de

intervención territorial tendrá como corolario la emergencia de un nuevo *ethos* militante, ejemplificado por formas de organización política y acción colectiva, cuyas marcas mayores serán la acción directa, la autoorganización, así como una importante dinámica asamblearia.

En consecuencia, durante los años 90, el peronismo, en tanto lenguaje político desde el cual los sectores populares inteligían la dominación social, se desdibuja aceleradamente, al tiempo que diferentes organizaciones territoriales, a través de nuevas formas de acción colectiva, vehiculizan fuertes apelaciones a la dignidad y la lucha. Así, entre 1997 y 2002, el surgimiento de nuevas organizaciones de tipo territorial, aunque no llegó a cuestionar la hegemonía del peronismo, puso en evidencia no sólo el deterioro de la relación entre el peronismo y el mundo popular, sino también la posibilidad de la politización de lo social. Más aún, esta nueva experiencia se va a apropiar y va a actualizar las apelaciones más plebeyas del mundo popular, tan asociadas al peronismo de otras épocas, como expresión auténtica de la gente "de abajo".

Sin embargo, la posterior evolución de las organizaciones de desocupados no es ajena a la tensión originaria, que instala la acción territorial en el doble registro de la continuidad y la ruptura. Una nueva etapa se abrió así con la masificación de los planes sociales, a partir de 2002. En efecto, independientemente de la afirmación de la emergencia de nuevas prácticas políticas (véase la parte III de este libro, consagrada a la acción colectiva), resulta difícil minimizar el impacto que la nueva política social implementada luego de la crisis de 2001-2002 ha tenido en el empobrecido mundo popular. Recordemos que, a partir de este período, el gobierno nacional lanzó un nuevo programa social, el Plan Jefas y Jefes de Hogar, que en marzo de 2005 alcanzaba, según estimaciones oficiales, a 1.561.000 desocupados (Lozano:2005). Es importante señalar que sólo cerca del 10% de esos planes son directamente controlados por las organizaciones piqueteras.

Ahora bien, los nuevos planes conllevaron un fortalecimiento de la matriz asistencial del modelo neoliberal. Por una parte, la entrega de subsidios compensatorios (planes sociales) muestra una clara continuidad con las políticas anteriores, pues

tiende a fijar su "inclusión" como excluidos. Esto se ve complementado con el otorgamiento de subsidios para los emprendimientos productivos (orientados a la autoconstrucción y pequeñas unidades de producción), que exige la autoorganización de los pobres, lo cual complejiza y transforma así el modelo de ciudadanía asistencial-participativo que el neoliberalismo reserva a los excluidos.

En definitiva, durante los 90 y en plena reforma neoliberal, la persistencia del peronismo "desde abajo" fue acompañada de grandes transformaciones. Vaciado de sus contenidos fundacionales, éste dejó de ser una contracultura política y pasó a expresar una lógica de dominación, asentada casi exclusivamente en las multiplicadas formas del clientelismo afectivo. En este sentido, tocaría a las organizaciones de desocupados la tarea de abrir una brecha en este transformado mundo popular, por fuera del peronismo, tornando posible que emergieran nuevas prácticas políticas, a través de la resignificación de la militancia territorial, cuyos ejes serían precisamente la crítica al clientelismo y la afirmación de la dignidad. Sin embargo, durante el gobierno provisional de Duhalde (2002-2003) y luego, con Néstor Kirchner (2003), el peronismo retomó la iniciativa en la tarea nada fácil de recomponer las relaciones con los sectores populares, con la idea de "recuperar" y, al mismo tiempo, cerrar el espacio abierto por las nuevas organizaciones territoriales. Paradójicamente, la crisis de 2001 otorgó al peronismo una nueva oportunidad histórica, pues le permitió dar un enorme salto a partir de la masificación de los planes asistenciales. Por otro lado, este proceso se vio fortalecido por la dinámica de reperonización de importantes organizaciones piqueteras (Federación de Tierra y Vivienda, Barrios de Pie), caracterizadas por una fuerte matriz populista.

En fin, una vez más, recordemos que el pasaje que va "de la unidad básica al comedor comunitario" (Grimson:2003) arranca en los 80, con los primeros planes sociales que instaura el gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires, y en el nivel nacional, el gobierno de Alfonsín; pero éstos forman parte de una política más sistemática a lo largo de los 90, y finalmente, entran en una nueva etapa en el año 2002, a partir de la masificación de los planes sociales, realizada bajo el gobierno de

Duhalde y reconfirmada por Kirchner. En este nuevo escenario, los dispositivos del clientelismo afectivo se potenciaron y, a la vez, se transformaron, asegurando así la reproducción del peronismo "desde abajo". Así, olvidadas la promesa de universalización de los planes y, al mismo tiempo, canalizada políticamente la "ilusión populista" que ilustran determinados sectores organizados, el peronismo logró, una vez más, legitimar su vínculo con los sectores populares.

* * *

Nunca está de más recordar cuán necesario resulta contextualizar y comparar los efectos de las nuevas políticas neoliberales en diferentes países de América Latina. Con esto queremos decir que, pese "a los aires de familia" (Torre:1998), el impacto que la implantación del modelo neoliberal tuvo sobre el mundo popular latinoamericano, tan marcado por la experiencia populista, está lejos de ser el mismo en todos lados. En Bolivia, donde existió un movimiento obrero combativo y persisten estructuras comunitarias fuertes, la resistencia popular fue importante. Más aún, durante los 90, el neoliberalismo revitalizó elementos comunitarios preexistentes, que terminaron por ser repolitizados, para formar parte de un proyecto antagónico respecto del modelo de acumulación vigente. En Chile, en cambio, el modelo neoliberal —considerado "exitoso" en términos generales— terminó por liquidar y neutralizar los fuertes elementos comunitarios presentes en ciertas experiencias políticas, que durante los 80 habían sido consideradas como portadoras de elementos antagónicos o alternativos (el caso del movimiento de pobladores).

En la Argentina, la reconfiguración de la matriz popular en términos territoriales/comunitarios apareció como una exigencia —y una creación, a la vez desde arriba y desde abajo— para contener el conflicto social, frente a la destrucción del mundo obrero popular. En medio de cambios de todo orden, el *ethos* de las clases populares, ligado a la lucha sindical y la toma de tierras, sufrió un impacto mayor, en virtud de su vínculo estrecho e ineludible con el Partido Justicialista que, desde los diferentes niveles del Estado, sería el encargado de llevar a cabo

las llamadas reformas estructurales. Así, a fines de los 90, la nueva matriz popular indica tanto el declive del mundo obrero (la dificultad de construir un "nosotros" desde la esfera del trabajo), como la emergencia de un conjunto heterogéneo de organizaciones territoriales que poco tienen que ver con el mundo de los trabajadores urbanos que se extendió entre los años 40 y los 70, y mucho más con el mundo comunitario de los pobres urbanos, al igual que en otros países de América Latina.

Dichas organizaciones comenzaron a desarrollarse en los 80, pero registraron una nuevo impulso durante la crisis hiperinflacionaria del 89, al tiempo que sufrieron una fuerte reorientación durante los 90, cuando se implementó un nuevo modelo de gestión. En fin, aquéllas se tornaron definitivamente visibles luego de la gran crisis de 2001. En la actualidad, este nuevo tejido territorial, cuyos contornos asoman a partir de la multiplicidad de las redes de sobrevivencia y la experiencia de la segregación socioespacial, abarca un conjunto muy vasto y heterogéneo de organizaciones, desde ONG fuertemente disímiles (según los rubros y el carácter de ellas); organizaciones religiosas, en su gran mayoría jerárquicas y verticalistas; diferentes agrupaciones piqueteras, que realizan un trabajo de organización territorial, a la vez social y político; en fin, comedores y sociedades de fomento, muchos de ellos fuertemente vinculadas al poder político. Sin embargo, más allá del carácter político o despolitizado de la acción, del alcance innovador o meramente reproductivo de las organizaciones, el nuevo modelo coloca en el centro la figura del militante social, mediador imprescindible en el mundo de las necesidades básicas, cuyo conocimiento, en toda su extensión y complejidad, es todavía una tarea pendiente.[42]

En suma, en el marco de este proceso de reconfiguración territorial, surge un nuevo proletariado, multiforme, plebeyo y heterógeno, que no sólo es el asiento de prácticas ligadas al asistencialismo y al clientelismo afectivo, promovidas centralizada o descentralizadamente desde diferentes instancias y organizaciones, sino también el *locus* de nuevas formas de resistencia y prácticas políticas.

Tercera parte

La acción colectiva: de la crisis a las nuevas formas de resistencia al modelo neoliberal

Introducción

La consolidación de nuevas pautas de inclusión y exclusión social, en el marco de la puesta en marcha de políticas neoliberales, tuvo una repercusión importante en el plano de la acción colectiva. Así, en América Latina, durante los 80 y la primera mitad de los 90, en contraste con el proceso de concentración creciente de las decisiones en las elites de poder internacionalizado, los sistemas de acción colectiva pasaron por un momento de inflexión —de crisis y debilitamiento—, visible en la fragmentación de las luchas, la focalización en demandas puntuales, la presión local o la acción espontánea y semiorganizada (Calderón y Dos Santos:1995).

En la Argentina, este proceso de mutación estructural, así como el cambio de las orientaciones políticas tradicionalmente atribuidas al peronismo, afectó al conjunto de los actores que habían protagonizado las movilizaciones más importantes del período inmediatamente anterior. Este arco incluía desde los poderosos y pragmáticos sindicatos, pasando por las incipientes organizaciones territoriales, fuertemente dependientes del Estado, hasta las asociaciones de derechos humanos.

Ya hemos dicho también que 1989 señaló el final de un ciclo no solamente en términos económicos y políticos, sino también respecto de la acción colectiva. Volvamos sobre los hechos esenciales. En primer lugar, el año se abrió con el ataque a La Tablada. Recordemos el impacto que tuvo la acción militar rea-

lizada por un sector del MTP (Movimiento Todos por la Patria), cuyo corolario fue el cuestionamiento de un modelo de militancia y, al mismo tiempo, de un estilo de construcción política, asociado a los 70. Complementariamente, la nueva política local se orientó al cuestionamiento de las movilizaciones sociales como metodología de acción, indisolublemente ligadas al *ethos* militante de las organizaciones territoriales (movimientos villeros, asentamientos).

En segundo lugar, pese a las grandes movilizaciones en contra, el gobierno cerró aquel año con la firma del primero de los dos decretos presidenciales que amnistiaban a los militares, responsables del mayor exterminio de la población argentina durante el siglo XX. La medida, con la que estaban en alto desacuerdo distintos sectores sociales, golpeaba el corazón mismo de los organismos de derechos humanos. Este proceso tendría por consecuencia la desmovilización de las organizaciones de derechos humanos, ya castigadas por una dinámica de fragmentación interna, que databa de la época de Raúl Alfonsín (Jelin:1995), así como una reorientación de las acciones hacia la condena social y la profundización de la reconstrucción de la memoria de la represión.[1]

En tercero y último lugar, los cambios respecto del actor sindical no fueron menores. Cierto es que, en muy poco tiempo, los sindicatos debieron afrontar el desafío de redefinir su rol en la sociedad, así como su relación con el poder político (peronista), y ello, en medio de una dinámica de desindustrialización y de los nuevos cambios en la organización del trabajo. Este conjunto de procesos no tardaría en dejar a la vista de todos el alcance de tal redefinición política. Por un lado, los grandes sindicatos nucleados en la CGT optarían por la adaptación pragmática a los nuevos tiempos. Así, a cambio de la negociación de ciertos espacios de poder, los grandes sindicatos darían su apoyo al gobierno peronista y, por ende, contribuirían activamente a la legitimación del modelo neoliberal. Otros sindicatos, más hesitantes, procuraron abrir frentes internos de discrepancia (Movimiento de Trabajadores Argentinos, Unión Obrera Metalúrgica), sin abandonar del todo la CGT, ni cuestionar —por sobre todas las cosas— el vínculo con el Partido Justicialista. Por último, la crisis del modelo combativo de sindicalismo fue co-

rroborada por el fracaso de aquellos gremios que se abocaron a rechazar la puesta en marcha del programa de ajuste y de privatizaciones, mediante la movilización masiva, como instrumento privilegiado de lucha.

Cierto es que la realidad misma del sindicalismo varió notablemente durante este período. Pero además de ello, hay que tener en cuenta el efecto desestructurante de la difusión del discurso neoliberal, sobre todo en los trabajadores de las empresas en proceso de privatización. Dicho discurso se asentaba sobre un esquema binario o polar: por un lado, proyectaba la sobrevaloración de la modernización tecnológica y la racionalidad administrativa, en coincidencia con la propuesta de incentivos (premios por productividad); por el otro lado, apuntaba a la desvalorización de las capacidades del Estado (que arrastraba un déficit crónico), lo cual iba acompañado por un estereotipo negativo del empleado público. Sin duda, este discurso ayudó a corroer las bases de una resistencia sindical, sin que por ello sea posible minimizar las súbitas conversiones ideológicas de dirigentes de procedencia justicialista (en nombre de una "ética de la responsabilidad"), como tampoco la brusca salida de los combativos referentes de la izquierda (en nombre de una "ética de la convicción").

En consecuencia, a principios de los 90 el panorama revelaba la crisis de las formas de acción colectiva, cuyo efecto más inmediato sería el repliegue de las organizaciones de derechos humanos, la cooptación o el hostigamiento de las organizaciones territoriales independientes, en fin, la adaptación pragmática y la subordinación de los grandes sindicatos a la política neoliberal del partido peronista. Sin embargo, en el marco de la crisis, y más allá de las expresiones de apatía individual o de desafección política, lo propio del período es la generación de múltiples formas de resistencia al modelo económico, a partir de repertorios de lucha, asociados a la acción directa y a nuevos formatos organizativos. Así, en esta etapa van a emerger nuevos movimientos de matriz sindical, que cuestionarán las consecuencias del ajuste y, de manera más general, el modelo neoliberal; asimismo se desarrollarán un gran número de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos cívicos; por último, estarán aquellas acciones, de matriz territorial, ligadas a

nuevas formas de autoorganización barrial o a la lucha por la tierra y la defensa del hábitat.

No es nuestra intención, en los tres capítulos que siguen, realizar una presentación exhaustiva de las diferentes formas de acción colectiva que han atravesado la historia del país desde 1989 a esta parte. Más bien, daremos cuenta de algunos casos emblemáticos, que nos pueden servir para ilustrar el carácter de las acciones emergentes, en las cuales se entremezclan viejos y nuevos actores. Para ello, proponemos hablar de tres fases de resistencia. La primera se extiende entre 1989 y 1995, tiene como actor central a los sindicatos del Estado, liderados por ATE y Ctera, sobre todo en el interior del país. Este momento está marcado por el surgimiento de una nueva alternativa gremial, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la cual se convertirá a lo largo de los 90, junto con la Corriente Clasista y Combativa (CCC), en la encarnación más acabada de resistencia sindical al modelo neoliberal. Al mismo tiempo, en esta etapa surgen nuevas expresiones de resistencia, como el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MML), y se incrementan las luchas por la tenencia de la tierra, llevadas a cabo por comunidades indígenas y organizaciones campesinas. Una segunda fase se inicia en 1996-97, a partir del levantamiento de las localidades petroleras del interior, seguido de las movilizaciones territoriales en el Conurbano Bonaerense. Esta segunda fase de la resistencia al modelo neoliberal colocará en el centro de la escena a nuevos actores sociales, las organizaciones de desocupados. Una tercera fase se abre luego de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, y traerá consigo una mayor visibilidad y un crecimiento de las organizaciones de desocupados, así como el ingreso en la escena de otros actores sociales: asambleas barriales, fábricas recuperadas, ahorristas, colectivos culturales, partidos de izquierda. Sin embargo, este período tiende a cerrarse a mediados de 2003, momento en el cual las aspiraciones de solidaridad e igualdad son relegadas en nombre de la "vuelta a normalidad" y las demandas de seguridad, en medio de una fuerte campaña de estigmatización y cuestionamiento de las organizaciones piqueteras. Este período se caracteriza también por la proliferación de demandas sindicales y el surgimiento de multisectoriales en defensa del hábitat.

En el capítulo 7 abordaremos la primera fase de resistencia, concentrándonos especialmente en las acciones de tipo sindical, y en el 8 daremos cuenta del surgimiento y desarrollo de las organizaciones de desocupados, las que constituyen sin duda una de las experiencias más novedosas y disruptivas de las últimas décadas. Por último, en el capítulo 9 haremos una presentación más general, acerca de los diferentes actores y conflictos surgidos a partir de 2001, hasta el presente.

CAPÍTULO 7

CRISIS ESTRUCTURAL Y NUEVAS FORMAS DE RESISTENCIA

Al igual que el clientelismo, el largo arraigo de los vínculos corporatistas entre sindicatos en México y en la Argentina jugó un papel instrumental en la implementación de las reformas, mostrando que los sindicatos no sólo movilizan sino que también desmovilizan y que, en ausencia de su colaboración, las tareas de la transformación económica son potencialmente más arduas.

Juan Carlos Torre,
El proceso político de las reformas económicas en América Latina.

DIMENSIONES Y EXPRESIONES DE LA ACCIÓN COLECTIVA

Durante dos siglos, la historia de las luchas y formas de resistencia colectiva estuvieron asociadas a las estructuras organizativas de la clase obrera, considerada ésta como el actor privilegiado del cambio histórico. De manera más precisa, la acción organizada de la clase obrera era conceptualizada en términos de "movimiento social", en la medida en que ésta aparecía como la expresión privilegiada de una nueva alternativa social, diferente del modelo capitalista vigente. Sin embargo, la pérdida de centralidad del conflicto industrial y la multiplicación de las esferas de conflicto pusieron de manifiesto la necesidad de ampliar las definiciones y las categorías analíticas.

Para dar cuenta de esos cambios, se instituyó la categoría —a la vez empírica y teórica— de "nuevos movimientos sociales", a fin de caracterizar la acción de los movimientos feminista, ecologista, estudiantil y pacifista, entre los más importantes. Estos movimientos resultaban ser novedosos respecto del movimiento obrero clásico en varios sentidos. Por un lado, expresaban una nueva politización de la sociedad, a través de la puesta en público de temáticas y conflictos que tradicionalmente se habían considerado como propios del ámbito privado (la democratización de la relación entre géneros, el respeto de la diferencia, del medio ambiente, el rechazo del modelo discipli-

nario ligado a la sociedad industrial, entre otros). Por otro lado, estos movimientos aparecían como portadores de nuevas prácticas, orientadas al desarrollo de formas organizativas más flexibles y democráticas, que cuestionaban fuertemente tanto los estilos de construcción política de la socialdemocracia (y sus poderosos sindicatos), como los procedentes del modelo leninista (el centralismo democrático), asociado a los partidos de izquierda. Por último, a diferencia del movimiento obrero tradicional, las formas de acción colectiva emergentes tenían una base social policlasista, con una importante presencia de las nuevas clases medias. Para algunos, éste era uno de los elementos centrales que explicaban la autolimitación de los nuevos movimientos sociales, cuyos objetivos apuntaban menos a la toma del poder que al fortalecimiento de la sociedad civil y a la creación de esferas de contrapoder.

En función de estos cambios, no fueron pocos los autores que se embarcaron en la tarea de desarrollar nuevas conceptualizaciones y paradigmas, subrayando el carácter plural de las luchas sociales y culturales y cuestionando la perspectiva historicista y esencialista de la matriz marxista, que concluía tanto en la inevitable centralidad de la clase obrera como en una supuesta predeterminación de los sujetos desde lo social.

Ahora bien, como hemos dicho, en América Latina el referente empírico del movimiento social histórico no fue propiamente hablando la clase obrera, sino más bien "las clases populares", en plural, y en un sentido amplio. En efecto, recordemos que en estas latitudes históricamente lo popular ha designado, desde el principio, un conglomerado que reúne mundos heterogéneos, entre los que se cuentan indígenas, campesinos, trabajadores informales y clase obrera urbana. Por ello mismo, la acción colectiva ha estado marcada desde el inicio por una multiplicidad de dimensiones y llamados, en nombre de la clase, la nación y el antiimperialismo, sin que ninguno de ellos lograra un primado estructural sobre los otros. Ya hemos dicho que tocaría al populismo dar expresión política a esta abigarrada realidad popular, a través de la noción unificadora de pueblo, concepto que designaba tanto un sujeto colectivo imaginario homogéneo, como un sector social real heterogéneo. El modelo nacional-popular apuntaría también a la homogeneización de los sujetos sociales,

mediante la inclusión simbólica de los bordes o márgenes de la nación, como lo ilustra el indígena, incorporado al lenguaje populista como "campesino" (Gilly:1997). Sin embargo, para una gran parte del pensamiento social, el problema mayor, esto es, la construcción de un sujeto histórico, aludía tanto a la heterogeneidad social como a la falta de autonomía del movimiento sindical, frente al llamado político del líder desde el aparato del Estado.

Fue entre los años 70 y 80 cuando en gran parte de América Latina se llevó a cabo el pasaje de la movilización del "pueblo" a los "nuevos movimientos sociales", visible en un conjunto de acciones colectivas, marcadas por su carácter local y puntual. En el espacio urbano, la época estaría recorrida por la emergencia de nuevas luchas, ligadas a las condiciones de vida y, por ende, al reclamo de la tierra y la vivienda y de los servicios públicos. En este sentido, los llamados "movimientos sociales urbanos" venían a poner de manifiesto los límites del proyecto de modernización nacional-popular, visibles en la pauperización económica y marginalidad urbana de amplios sectores populares. En todo caso, el proceso daba cuenta del nacimiento de una nueva matriz de acción territorial, con componentes altamente pragmáticos y una fuerte orientación de demandas hacia el Estado.[2]

En la Argentina, esta situación aparecía ilustrada tanto por los movimientos vecinales (González Bombal:1988), de corte municipalista (vinculados a los aumentos de los impuestos, desarrollados al final de la última dictadura militar), como por los movimientos de reivindicación de la tierra y la vivienda (movimiento villero, asentamientos). Fueron muy especialmente estos últimos los que encontraron un fuerte impulso durante los años 80, a partir de las tomas de tierras, en su mayor parte en las zonas marginales, privadas de servicios públicos. Muchas de estas tomas fueron cuidadosamente planificadas y contaron con el apoyo y participación de diferentes actores sociales (ONG, comunidades eclesiales, militantes políticos). Más aún, como afirma Denis Merklen (2001), en sus años fundacionales, el imaginario de los nuevos pobladores contenía fuertes referencias a la noción de ciudadanía e integración social, tal como aparecía ejemplificado por el trazado urbano (propio de un barrio), que buscaba diferenciar el asentamiento de la "villa", figura de la segregación socioespacial fuertemente estigmatizada.

Por último, la acción colectiva registró nuevas inflexiones a partir del desarrollo de las organizaciones de derechos humanos (Jelin:1989). Estos movimientos fueron portadores de nuevas demandas de justicia, centradas en las denuncias de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. Con los años, su productividad se haría visible tanto en la ampliación de la plataforma de demandas como en la consolidación de un campo multiorganizacional (con diferentes grados de institucionalización).

En todo caso, tanto los movimientos sociales urbanos como los de derechos humanos mostraban un claro contraste en relación con el movimiento sindical tradicional, en la medida en que colocaban al Estado en el centro de los reclamos: sea como garante de los derechos básicos (a la tierra, a la vivienda, a los servicios públicos), o como responsable de la privación de los derechos cívicos (violación de los derechos humanos y desaparición de personas, por parte de un Estado terrorista). Asimismo, en ambos movimientos se destacaba el fuerte compromiso de las mujeres, aun si inicialmente la intervención pública de éstas no provenía de convencimientos ideológicos previos, ni de cálculos estratégicos respecto de la dictadura militar ni de una apuesta feminista (Jelin:1996, pp. 200-201).

Es necesario aclarar que estos movimientos coexistían con las organizaciones sindicales, muchas de las cuales habían sufrido una feroz represión durante los movilizados años 70 (un alto porcentaje de los detenidos-desaparecidos provenían de las expresiones más combativas del medio sindical). Ahora bien, el movimiento sindical argentino, tradicionalmente peronista, cuyas luchas daban cuenta de una amalgama particularmente compleja entre la resistencia y la integración (James:1990), sufriría cambios notorios en los años de la democracia, visibles en la pérdida de representatividad y su creciente descrédito frente a los ojos de la sociedad.

En realidad, la Argentina de los años 90, época en la cual se confirma el pasaje a un nuevo tipo de sociedad, evoca la imagen de un país atravesado por una multiplicidad de acciones colectivas, en fin, un escenario político y social donde la categoría "pueblo" continuaba resonando tanto como la de "nuevos movimientos sociales". Sin embargo, como en otras latitudes,

los grandes cambios estructurales impactaron en los repertorios tradicionales de acción colectiva, poniendo en entredicho las dos figuras recurrentes de lo popular: "el pueblo" y "los nuevos movimientos sociales".

Este proceso de mutación estructural tuvo también su correlato teórico-conceptual, en tanto puso en evidencia la insuficiencia de ciertos paradigmas y categorías de análisis de la acción colectiva. Así, a mediados de los 90, mientras que desde el campo de la Historia asomaría el concepto pretendidamente neutro de "sectores populares" (Gutiérrez y Romero:1995), indicando con ello que lo popular devenía cada vez más una situación, definida por la precariedad, antes que un actor social; por su parte, desde el campo de la Sociología y la Ciencia Política, los análisis apelarían cada vez más a la noción de "protesta", para dar cuenta del carácter evanescente, puntual y focalizado de las acciones, poco articuladas entre sí, cuya ilustración paradigmática sería el "santiagueñazo" (1993).[3]

Las declinaciones del sindicalismo peronista

Entre 1989 y 1995 se desarrolla un ciclo de acciones protagonizadas por los empleados públicos, los docentes y los jubilados, todos ellos actores perjudicados por la política de ajuste estructural. Pese a haber sido lideradas por el actor sindical, estas acciones se realizaron por fuera de la CGT. Es cierto que, en ese período, la realidad misma del sindicalismo mutó considerablemente. En efecto, el giro liberal del gobierno de Carlos Menem y el colapso del antiguo modelo, produjeron importantes cambios en el mundo sindical tradicionalmente peronista. Sorprendidos por la política de alianzas del Partido Justicialista, afectados por problemas de representatividad que, sin constituir una especificidad nacional, potenciaban aun más la crisis, pocos sindicatos se encontrarían en condiciones para enfrentar la ofensiva empresarial y las consecuencias de la flexibilización laboral. Además, a diferencia de épocas recientes, dentro del peronismo, el proceso en marcha marcaba la fuerte hegemonía de las estructuras partidarias por sobre las estructuras sindicales, confirmando —una vez más— que el tipo

de vínculo populista se asentaba sobre la clara subordinación de los actores sindicales al líder político. En fin, como afirma Torre (1998, pp. 82-83), las reformas estructurales y el nuevo estilo decisorio produjeron un efecto desmovilizador, sobre todo en aquellos intereses cuya voz se había construido desde el Estado, antes que desde "el *ethos* organizacional" propio de las luchas sociales.

Como consecuencia de ello, el espacio de acción sindical se redujo notablemente. Así, la expansión de nuevas formas de contratación precarias e inestables, la tercerización de servicios, el cuestionamiento de las formas de negociación colectiva y su reemplazo por los acuerdos individuales y por empresa, los aumentos por productividad, en fin, los cambios implicados por la irrupción de nuevas formas de gestión y organización del trabajo repercutieron profundamente en las formas de representación sindical. El proceso de adaptación y, por ende, las negociaciones, se realizaron entonces en un contexto de desestructuración del escenario laboral y de ruptura de las lealtades sindicales.

En este escenario se fueron perfilando los nuevos alineamientos sindicales. Siguiendo a Albert Hirschman (1992), podemos decir que, en primer lugar, fue erigiéndose un poderoso bloque representado por los voceros de la *lealtad*, encarnado por la CGT, bajo la conducción de Alberto Cassia, Gerardo Martínez y Rodolfo Daer, sucesivamente. Allí estaban los gremios que apoyaron las reformas encaradas por el gobierno, aunque con diversos grados de acatamiento y diferentes estrategias de adaptación.[4] Estos sindicatos cubrirían un amplio arco que iba desde los exitosos portavoces del "nuevo sindicalismo" empresarial, hasta los partidarios de una "vinculación orgánica" con el partido en el poder.

Siguiendo a Palomino (2005), es necesario recordar que a cambio del apoyo al gobierno y sus políticas neoliberales, la CGT obtuvo la confirmación de una buena parte de sus prerrogativas corporativas, a saber: la afirmación del monopolio de la representación sindical, basada en la personería gremial; el control de los fondos de obras sociales; el mantenimiento de su rol en las negociaciones colectivas (cuando éstas se llevaban a cabo); la participación en las listas partidarias del PJ

(sobre todo en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, donde la mayoría de los legisladores son de extracción sindical). Por otro lado, algunos sindicatos de la CGT pudieron intervenir activamente en el campo empresarial, a través de las privatizaciones de la empresas públicas la reforma previsional y las reformas del seguro de los accidentes de trabajo. Entre los beneficiados por estas reformas estuvieron el Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE), la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

En segundo lugar, encontramos el ala disidente de la CGT oficial, el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos), encabezado por el jefe de los camioneros, Hugo Moyano. Allí estaban los que, cada tanto, hacían escuchar su *voz*, y pugnaban, en último análisis, por revivir el modelo sindical asociado a una política sustitutiva de importaciones y a un Estado fuerte. Pese a protagonizar una serie de movilizaciones y medidas contestatarias junto con la CTA y la CCC, el MTA nunca rompió definitivamente con la Confederación General de Trabajadores (CGT) —aun si adoptó durante un período el nombre de "CGT disidente"— y menos aún con el Partido Justicialista. En realidad, este segundo alineamiento ponía de manifiesto el colapso del modelo nacional-popular y, al mismo tiempo, su defensa y su nostalgia. Un discurso que no vacilaría en hacer la crítica al nuevo modelo (colocándose, en ese sentido, en una posición antineoliberal), aunque sin abandonar la demanda de "unidad sindical" ni mucho menos la disciplina partidaria. Finalmente, este sector disidente pasó a liderar la CGT, a partir de su reunificación en 2003, bajo el gobierno de Néstor Kirchner.

La crisis del sindicalismo tradicional puede ser ilustrada a través de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), sindicato que fuera la encarnación más acabada del régimen anterior de relaciones laborales, tanto en términos de estándares salariales, como de legado político y organizativo. Sin embargo, durante los 90, la imagen de la "Patria Metalúrgica" pareció estallar en mil pedazos. Por un lado, tengamos en cuenta que, dentro del sector industrial, la UOM es un sindicato que tradicionalmente agrupa

numerosas ramas y actividades, desde la siderurgia (que sufriría los efectos de la privatización), el sector metalmecánico (sobre todo, el automotor, que tuvo momentos de expansión), hasta la industria liviana ligada al mercado interno (sumamente afectada por la apertura de las importaciones). En consecuencia, la crisis en la UOM no sólo estaba relacionada con la centralidad que el gremio tuvo en otras etapas, sino con la heterogeneidad de las actividades que abarcaba. Por otro lado, dicha crisis expresaba de manera paradigmática la convergencia negativa de una serie de transformaciones mayores: mientras que la dinámica de desindustrialización erosionaba de manera radical sus bases de apoyo, los cambios implicaban una drástica modificación del modelo de relaciones laborales, acompañados también por la introducción de nuevas formas de organización del trabajo.

Ahora bien, pese a que posee la estructura de la "unión" —una de las formas de organización piramidal más jerárquicas y centralizadas—, la UOM está compuesta por seccionales que trabajan con escasa coordinación entre sí. No olvidemos que la subordinación de los sindicatos a un nuevo paradigma organizacional se tradujo en nuevas estrategias de disciplinamiento. Mientras que la Ley Nacional de Empleo estableció contratos flexibles y temporarios que limitaron mucho la estabilidad laboral, el decreto de desregulación de la economía de 1991 impulsó la firma de convenios por empresa y apuntó por ende a descentralizar la negociación colectiva, organizada por sector o rama de actividad. Así las cosas, la UOM, que tradicionalmente alentó un discurso de defensa de la unidad sindical, por medio de la centralización de la acción y de la negociación colectiva, emergió pues como uno de los gremios más damnificados por este proceso. En resumen, a las dificultades provocadas por la desregulación creciente del sistema de relaciones laborales, agravadas por los no menos importantes cambios tecnológicos y organizativos (traducidos en un cambio en la "cultura laboral"), hay que agregar las consecuencias del proceso de desindustrialización (cierre masivo de empresas), así como los efectos de la privatización y reestructuración de un sector representado por el gremio: la siderurgia, a través de SOMISA.

Por último, en términos políticos, la UOM se encontró, como pocos sindicatos, fuertemente atravesada por los nuevos dilemas a los cuales la confrontaba el peronismo. Pese a ello,

en sintonía con el MTA, mantuvo una posición más bien componedora, sin desligarse de la CGT (durante años ocupó en ella la Secretaría de Relaciones Internacionales[5]), encabezando, en determinados períodos, una suerte de "comisión de enlace" entre las distintas organizaciones pertenecientes al campo antineoliberal.

A lo largo de los 90, más allá de la figura de la lealtad y la disciplina partidaria, la evolución de la UOM nos advierte sobre la presencia de conductas diferentes, nada unívocas, que dieron como resultado grados importantes de variación, en función del legado organizacional de cada seccional, así como de la rama de actividad correspondiente. Cierto es que en muy pocos casos se eligió "la salida", como sucedió con la UOM de Villa Constitución, que decidió acompañar la experiencia de la CTA. También es cierto que hubo claras declinaciones por parte de sectores considerados hasta hacía poco tiempo combativos, aunque en muchos casos el escenario permaneció inmodificado, dada la reproducción de las prácticas burocráticas y los estilos mafiosos. Pero entre los que decidieron quedarse, hubo ciertos sectores y seccionales que continuaron desarrollando un particular empeño en defensa del estatuto salarial, vinculado al "obrero metalúrgico".[6]

Pese a ello, hay que aclarar que allí donde hubo resistencia y crítica a los nuevos estándares laborales, ésta encontró límites claros, como lo testimonia de manera ejemplar el conflicto entablado entre la UOM y el SMATA, en 1996, a propósito de la representación de los obreros de la Fiat. Para entender este conflicto, es necesario aclarar que la UOM representaba a una parte importante del sector automotor, que, beneficiado por una política de promoción y exenciones, conoció una cierta expansión a mediados de los 90. Pero, mientras que la UOM apuntaba a firmar convenios "marco", que incluían toda la rama o sector, SMATA realizaba acuerdos por empresas, lo cual lo colocaba en mayor sintonía con los nuevos tiempos. Estos límites saltaron a la luz a raíz del conflicto que enfrentó a la UOM con SMATA, por la representación de los trabajadores de Fiat.

Recordemos brevemente los hechos. En 1995, Fiat, en ese entonces la quinta empresa automotriz del mundo, decidió reinstalarse y reconstruir su emporio industrial en el país. Para

ello inició negociaciones con la UOM, a fin de firmar el convenio colectivo que regiría a los operarios de la planta proyectada en Córdoba, que prometía la creación de 5000 puestos de trabajo. Tras ocho meses de negociaciones, ambas partes llegaron a un preacuerdo, que en el caso de la UOM quedó a consideración de la estructura jerárquica de la organización, la que determinó que se intentara renegociar algunas cláusulas sobre condiciones de trabajo y escala salarial. Sin embargo, frente a la intransigencia de la UOM, que en enero de 1996 planteó revisar esas cláusulas, Fiat buscó nuevos interlocutores, y una semana después firmó un convenio con SMATA, el cual se constituyó en un modelo de flexibilidad laboral. Dicho convenio no sólo fue rápidamente homologado por el Ministerio de Trabajo, sino que tuvo un "efecto de arrastre" en otras empresas automotrices que buscaban instalarse en el país (Toyota y Chrysler), que lograron firmar convenios aun más flexibles que sus competidoras, garantizando así entre un 30 y 40% de reducción de los costos laborales, además de disminuir la representación sindical en las empresas.[7]

En fin, aun en sus sectores más resistentes, la experiencia de la UOM se vio atrapada entre dos actitudes: en términos gremiales, como señalan Raúl Bisio y Ada Freytes Frey, la adecuación o "sinceramiento" de la UOM a las nuevas relaciones laborales terminó por darse en el marco de las negociaciones realizadas en el nivel de empresa, que dispusieron la introducción de innovaciones organizativas y la reducción del número de categorías socio-profesionales, a cambio de contrapartidas salariales —vía adicionales o recategorización de puestos— (Bisio y Freytes Frey:1997, pp. 184-185). En términos políticos, si bien rechazó su evolución hacia otros modelos de representación sindical, así como evitó asumir el riesgo de una oposición abierta, el gremio nunca renunció a las determinaciones centrales de su identidad política (peronista). Así las cosas, sus oscilaciones políticas, producto de la necesidad de adecuar identidad peronista y conciencia gremial, buscaron no desbordar los límites impuestos por la disciplina partidaria. En todo caso, esto dejaba en claro que la UOM, al igual que sus pares del MTA, depositaba las perspectivas de transformación más en un posible cambio político en la dirección del gobierno, que en la posibilidad

de un reequilibrio de fuerzas a través de las luchas sociales. Para muchos de ellos, esa posibilidad finalmente se abriría en 2003, con la asunción de Kirchner.

DE LOS AVATARES DE LA RESISTENCIA SINDICAL A LOS ESTALLIDOS SOCIALES

El giro neoliberal arrojó a vastos sectores del sindicalismo hacia el costado de los nuevos "perdedores", sobre todo, aquellos cuya base de sustentación social se encontraban en los sectores público e industrial. Sin embargo, la dinámica destructiva de la modernización excluyente alcanzó a diferentes categorías sociales, entre las cuales se encontraban trabajadores industriales, empleados públicos nacionales y provinciales y docentes de los diferentes niveles de enseñanza, como también comerciantes, pequeños productores y empresarios locales de todo el país.

Cierto es que la resistencia tendió a concentrarse en los sindicatos cuya base eran los empleados públicos, quienes pese a sufrir severamente el deterioro de sus condiciones laborales, la pérdida de poder adquisitivo y las consecuencias desorganizativas de la descentralización administrativa, pudieron contar con un núcleo estable de trabajadores. Sin embargo, la movilización no fue el resultado mecánico de un cambio en las condiciones objetivas. Por el contrario, los hechos indican que las transformaciones estructurales fueron procesadas de manera diferente y en tiempos distintos según las regiones. Pero además de ello, la importancia de las variables políticas y los alineamientos ideológicos no pueden ser desestimados, tal como lo muestra el caso de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio que permaneció dentro de la CGT y desarrolló en el nivel nacional una estrategia desmovilizadora, contrapuesta a la posición confrontativa de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Ahora bien, durante los primeros años del régimen menemista, los conflictos se manifestaron en el nivel local y regional, de manera puntual y dispersa, revelando una escasa articulación entre ellos. En realidad, como hemos analizado en otro texto (Svampa y Pereyra:2003), esta diseminación y asincronía

de los conflictos era consecuencia del proceso de descentralización administrativa, pues éste abrió un espacio entre la política nacional y la política provincial marcado por las diferentes temporalidades así como por las múltiples instancias de negociación, que permitieron tal dispersión al tiempo que dificultaron que se desarrollara una estrategia global de confrontación con el modelo económico.[8] De esta manera, los conflictos se expresaron en acciones evanescentes, aisladas, "estallidos sociales"; ciclos de movilización que parecían no venir de ningún lado y que, pese a su intensidad, al día siguiente eran reabsorbidos sin haber producido aparentes "cambios de rumbo" (Svampa y Pereyra:2003, pp. 26-31). Estos "estallidos sociales" que se sucedieron en diferentes provincias tenían como trasfondo la acción sindical de ATE y otros sindicatos opositores (entre los que estaban aquellos que compondrían la CCC), pero también revelaban un fuerte anclaje comunitario. Éste es el caso de las acciones que encabezaron los empleados públicos en diferentes provincias (Río Negro, San Juan, Córdoba, Jujuy, entre otras), y que tuvo su máxima expresión en el "santiagueñazo" (1993), aquel "día de furia" de los empleados estatales, a quienes el Estado provincial adeudaba varios meses de salario, y que terminó con la quema de las tres sedes del poder y la persecución de los "políticos corruptos" (Farinetti:2000). Este episodio marca una inflexión importante en las formas de acción colectiva en la Argentina contemporánea: ocurrido durante el primer período presidencial de Carlos Menem, en una provincia que presenta fuertes estructuras jerárquicas y tradicionales y una asentada matriz clientelar, el "santiagueñazo" es el antecedente más importante en la historia del progresivo y profundo distanciamiento entre el sistema político y la sociedad, que caracteriza los avatares de la política argentina de las últimas décadas.

Además de las asincronías y diferentes temporalidades de las movilizaciones en las provincias, la estrategia de confrontación sindical se encontró con otros escollos. Por ejemplo, la política de privatización, sobre todo, durante la primera fase de reforma del Estado, ilustrada por aquellos sindicatos que opusieron resistencia, como fue el caso de los trabajadores telefónicos de Entel (que realizaron un paro de 16 días, en 1990), o el gremio de los trabajadores ferroviarios. En realidad, las dife-

rentes estrategias de oposición sindical se estrellaron contra una férrea voluntad de disciplinamiento, por parte de un gobierno que rápidamente asoció su supervivencia a la aplicación del programa de reformas estructurales. En este sentido, hay que recordar que la aplicación drástica de la política gubernamental fue facilitada por la existencia de una suerte de protoconsenso neoliberal, que se había instalado en vastos sectores de la sociedad. Como hemos dicho, este discurso crítico no sólo apuntaba a subrayar el déficit astronómico de las empresas estatales, sino las "consecuencias perversas" del modelo estadocéntrico visible en las deformaciones de un Estado "elefantiásico", así como en la consolidación de un estereotipo negativo del empleado público, muy difundido en la época. Como recuerdan particularmente los ex empleados de YPF en Neuquén o Tartagal, las marchas y protestas que ellos realizaron a comienzos de los 90 en contra de la privatización no fueron acompañadas por la población, que, por lo general, no vio en ellas sino el reflejo de intereses corporativos, y en casos como el de los trabajadores petroleros, el reclamo de un sector privilegiado dentro del Estado.

Dos conflictos mantuvieron una relevancia nacional durante los primeros años del gobierno de Carlos Menem; el de los empleados públicos, afectados por el proceso de descentralización administrativa y el congelamiento de la carrera pública, y el de los jubilados, perjudicados por la política de ajuste y la reforma provisional. Pero ni uno ni otro tuvieron gran impacto en las provincias, donde la reforma de la administración pública provincial se postergó hasta 1995.[9] Recordemos que, en el marco de la política de descentralización, las escuelas secundarias pasaron a depender de la órbita de las provincias en 1991 (Ley de Transferencia de los Servicios Educativos). Por su parte las escuelas primarias ya dependían de las provincias, desde las reformas introducidas por la última dictadura militar. En consecuencia, solamente el sistema educativo universitario quedó dentro de la órbita del Ministerio de Educación nacional, caracterizado en este sentido como un "ministerio sin escuelas".[10] En realidad, que recién hacia 1997 cuando la protesta de los maestros se tornó visible en el nivel nacional, con la instalación de la "Carpa Blanca" frente al Congreso de la Nación, en demanda de una ley de financiamiento educativo. Esta novedosa forma de protesta apuntaba sin duda a la articulación de una propuesta más general, ligada a la defensa de la educación como un "derecho cívico". Pese a las simpatías y acompañamiento con que contó, luego de un largo período (casi dos años) de desgaste y cuasibanalización, la protesta tuvo una resolución poco afortunada, en la cual desempeñó sin duda un papel importante el contexto de expectativa y apoyo que el propio gremio de docentes (Ctera) había depositado en el nuevo gobierno, de la Alianza (1999). Sin embargo, los conflictos sociales ligados al sector docente se fueron expandiendo hacia el final del período de la convertibilidad, momento en el cual se sumarían las universidades nacionales, que protagonizaron movilizaciones masivas, ante la embestida del efímero ministro de Economía Ricardo López Murphy, quien había anunciado un recorte importante del presupuesto educativo. Frente a ello, el declinante gobierno de Fernando De la Rúa retrocedió en su propuesta y optó por reemplazar al ministro, trayendo nuevamente al centro de la escena al llamado "autor del modelo", el economista y político neoliberal Domingo Cavallo.

HACIA UNA NUEVA ALTERNATIVA SINDICAL: LA CTA

Volviendo a los inicios del régimen menemista, es necesario tener en cuenta que, pese la escasa articulación entre las protestas, el proceso de resistencia no tardó en desembocar en el surgimiento de otras alternativas sindicales, como es el caso de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Ambas organizaciones encabezaron la oposición sindical al modelo neoliberal, mediante una estrategia de confrontación que contemplaba tanto la multiplicación de los tipos de protesta (marchas federales, cortes de ruta, petitorios), como la constitución de amplias multisectoriales que nucleaban a diferentes sectores sociales perjudicados por las reformas estructurales (Federación Agraria, Apyme). No por casualidad esta búsqueda de articulación desembocaría, a partir de 1996-97, en la organización de los incipientes

movimientos territoriales de desocupados, proceso que estas dos organizaciones lideraron junto con sectores independientes de la izquierda.

En este escenario, en el cual convergían consenso neoliberal en germen con el compromiso y lealtad de la CGT para con el gobierno peronista y la escasa capacidad de interpelación de los sindicatos que se opusieron a la implementación del modelo, se fue insertando la apuesta de la CTA de construir una nueva central sindical autonóma y alternativa, pluralista y no partidaria. El desafío, hay que decirlo, se enfrentaba a numerosas dificultades, pues en la Argentina, el espacio para desarrollar una acción sindical autónoma situada más allá de la subordinación al sistema político o de la acción corporativa ha sido siempre muy reducido. Así, las corrientes del sindicalismo clasista, que hacia fines de los años 60 lograron arraigarse en diferentes sindicatos industriales y estatales, tropezaron en distintos períodos con los problemas de la identidad política y la vigencia de los modelos sindicales impuestos a partir del peronismo (Torre:1989, Svampa:2003a). Sin embargo, apelando a la autonomía sindical y a la democracia de base, la CTA apuntó a redefinir su perfil institucional, lo cual suponía, desde el comienzo, la tarea nada fácil de construir una identidad sindical disociada de la identidad partidaria (justicialista), siendo que una gran parte de sus dirigentes proviene de la matriz peronista. El proyecto, encabezado por Víctor De Gennaro, nuclea principalmente al gremio de ATE y a Ctera (docentes), a los que hay que sumar otros sindicatos, como la UOM de Villa Constitución y el gremio de empleados judiciales.

Aunque comienza a perfilarse en 1991, en rigor la CTA nace en 1992 y se conforma como central sindical en 1997. En ese lapso, la CTA recorrió un largo camino, jalonado por diferentes acciones reivindicativas que abarcaron desde la lucha por el millón de firmas en contra de la jubilación privada, la Marcha Federal del 6 de julio de 1994,[11] varios paros nacionales, realizados con la CCC y, en algunos casos, con el MTA. En 1997, la CTA acompañó la protesta docente de la Carpa Blanca; más tarde desempeñó un rol protagónico en la conformación del Frenapo (Frente Nacional contra la Pobreza) y en la realización de la consulta popular por la instalación de un seguro de empleo

y formación para los jefes de familia desocupados que se haría en 2001. En diciembre de 2002, lanzó un llamado a la creación de un movimiento político-social. En fin, actualmente, según declaraciones de su secretario general, la CTA posee más de 1.300.000 afiliados y acoge más de 2000 organizaciones en su seno (*La Nación*, 2/4/2005).

En realidad, desde varios puntos de vista, la CTA se ha convertido en una organización sindical de nuevo tipo. Así, aunque en términos organizativos es una instancia de tercer grado (esto es, una central que nuclea sindicatos del sector —organizaciones de segundo grado—, los que a su vez incorporan organizaciones de primer grado o de base), su estatuto, a diferencia de la CGT o de otras centrales sindicales —como la CUT brasileña—, permite la incorporación de organizaciones de primer grado. Las autoridades son elegidas por el voto directo de los afiliados.[12] Dicha propuesta se halla en consonancia con la estrategia multisectorial que la CTA ha propiciado desde sus comienzos: hacia afuera, esto le ha permitido articular acciones con diferentes actores, por medio de la conformación de frentes gremiales —con la CCC— y/o multisectoriales, con sectores que van desde la Federación Agraria Argentina hasta la Apyme (Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas), o, en ciertos casos, como a través del Frenapo, con algunos partidos políticos. Hacia adentro, la estrategia hizo posible la expansión de su plataforma de representación, al incluir en su seno desde organizaciones de base ligadas a pequeños propietarios rurales y organizaciones de inquilinos, hasta trabajadores desocupados.

En esta dirección, hay que señalar que la CTA estuvo entre las primeras organizaciones que percibió la potencialidad organizativa de los desocupados. Esta estrategia se diferencia netamente de las posiciones respecto de los desocupados adoptadas por ciertos partidos de izquierda, cuya visión organizativa y política está más anclada en las representaciones del mundo industrial. Contrariamente a ello, la CTA percibió tempranamente el proceso de inscripción territorial de las clases populares, como aparece resumido en la consigna "La nueva fábrica es el barrio". Ya en el congreso celebrado en 1996, cuando adoptaron el nombre de Central de los Trabajadores Argentinos, sus dirigentes definieron a la desocupación "como el pro-

blema principal de la crisis social argentina" (Armelino:2005, p. 10). Los primeros intentos organizativos de "sindicalizar" al sector, mediante encuentros y congresos de desocupados, tuvieron lugar en Neuquén, en 1996, poco antes de los hechos de Cutral-Co, y en La Matanza, en 1997. Finalmente, esta búsqueda daría sus frutos en 1998, con la creación de la Federación de Tierras y Viviendas (FTV), una amalgama bastante heterogénea de agrupaciones de base muy diversas, que reúne organizaciones campesinas, comunidades indígenas, trabajadores y desocupados de asentamientos y movimientos de inquilinos, entre otros.[13]

Así, desde el comienzo, el objetivo de la CTA ha sido el de construir un movimiento social y político, como herramienta para el cambio social. Por ello mismo, la idea de crear multisectoriales es, antes que nada, una apuesta de orden estratégico, que se propone a la vez como una "alternativa sindical diferente", y como una "nueva construcción política". En realidad, para muchos de sus dirigentes, ambas propuestas son indisociables, pues la primera es la condición de posibilidad de la segunda, que a su vez es un requisito para el éxito de la primera.

Por otro lado, el trabajo de articulación multisectorial ha sido acompañado por la elaboración de una propuesta social, a cargo del Instituto de Estudios y Formación (IDEF), dirigido por el economista Claudio Lozano. En este sentido, la CTA ha venido trabajando desde sus inicios en el armado de un programa social y económico de reformas. Como afirma Martín Armelino, "la primera experiencia de ese tipo fue la conformación del Congreso del Trabajo, la Producción y la Cultura (CTP), a mediados de 1993, bajo el que se realizaron encuentros regionales con la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y Fedecámaras. O también la realización, entre 1998 y 2000, del 'Encuentro para un Nuevo Pensamiento', en el que participaron militantes e intelectuales" (Armelino:2005, p. 11). Por ello mismo, la acción de la central se encaminó a desarrollar una serie de propuestas redistributivas, orientadas a la (re)creación de un Estado Social, a partir de la redistribución justa del ingreso y una participación política amplia de todos los sectores

sociales. Es en el marco de una "protesta con propuesta" (Armelino:2005) donde debe situarse también el planteo del Frenapo (Frente Nacional contra la Pobreza), espacio en el cual confluyeron activamente las diferentes líneas internas que componen la CTA (entre ellas, ex frepasistas, ARI, comunistas, peronistas), además de otras organizaciones sociales. Recordemos que, a comienzos de 2000, la CTA elaboró un documento con propuestas para salir de la crisis económica y social, donde planteaba la necesidad de una suerte de ingreso ciudadano, por medio de tres programas principales: subsidio universal a la población menor de 18 años; asignación no contributiva para todas las personas mayores de 65 años que no hubieran logrado cumplir con los requisitos exigidos por el régimen jubilatorio; un seguro de empleo y formación para las jefas y jefes de hogar desocupados. Para ello, la CTA instrumentó junto con otros actores sociales y políticos, nucleados en el Frenapo, una consulta popular que se llevó a cabo entre el 14 y el 17 de diciembre de 2001 y que recogió más de 3 millones de votos por el "si". Sin embargo, esta primera gran oportunidad por instalar la cuestión se diluyó ante la crisis y apertura de un nuevo escenario, signada por el agravamiento de la situación social y las grandes movilizaciones. Frente a este nuevo escenario, la CTA tuvo problemas para redefinir su intervención, mientras sus premisas eran retomadas parcialmente y distorsionadas por el gobierno peronista, que decidió implementar un programa social masivo para los desocupados: el Plan jefas y jefes de hogar.[14]

En fin, nadie podrá negar la importancia que ha tenido la CTA en el proceso de resistencia al modelo neoliberal durante los años 90. Por otro lado, ninguna organización sindical asumió tan temprana y lúcidamente como la CTA la premisa de que los partidos políticos habían perdido el monopolio de la representación política, De esta premisa surge su propuesta de politizar lo social, y la de construir lo político desde lo social.

Finalmente, la creación del "movimiento social y político" se concretó luego del Encuentro Nacional de la CTA realizado en diciembre de 2002. Sin embargo, este "salto a la política", largamente demorado y esperado por sus militantes, muy probablemente influido por el triunfo del PT (Partido de los Trabajadores) en Brasil, suerte de modelo totalizador, está lejos de

haberse concretado. Más aún, los primeros hechos políticos tras el llamado a conformar un "movimiento social y político" parecen indicar una suerte de diáspora representativa, visible en la proliferación de estrategias políticas individuales, por parte de conocidos referentes de la CTA, realizadas a través y a partir de diferentes estructuras partidarias.

LA EXPERIENCIA DE ACUMULACIÓN DE LA CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA

No podemos terminar este apartado consagrado a la resistencia sindical sin hacer referencia a la experiencia de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), ligada al Partido Comunista Revolucionario (PCR), de tendencia maoísta, nacida al calor de las luchas de los trabajadores del SEOM (Sindicato de Empleados y Obreros Municipales), en Jujuy, bajo el carismático liderazgo de Carlos "Perro" Santillán. La CCC no es una central sindical, sino que se propone como una corriente político-sindical, que trabaja con programa propio en el seno de los distintos gremios y centrales. Esta corriente reivindica la tradición clasista de los años 60 y 70, representada por el dirigente obrero René Salamanca, de SMATA, desaparecido por los militares en marzo de 1976. La CCC desarrolla su acción en un conjunto de organizaciones de primer grado, esto es, sindicatos de base y comisiones internas en fábricas, y ha venido participando activamente en el proceso de recuperación de fábricas quebradas o vaciadas por sus propietarios, antes de 2001, como ha sido el caso en *Renacer* (Tierra del Fuego), y la recuperación —trunca— del Ingenio La Esperanza, en Jujuy.[15]

En la actualidad, la CCC cuenta con tres ramas: la sindical, que fue creada en 1994; la de jubilados, inicialmente conducida por Raúl Castells (hasta 2001, cuando se apartó y fundó su propio movimiento); y una tercera, la más masiva, de desocupados, creada en 1998, y dirigida por Juan Carlos Alderete. Pese a que no posee una implantación social en todo el país, la CCC llegó a constituirse en un actor a escala nacional a lo largo de los 90. Esto se debe a su protagonismo en diferentes conflictos regionales, tanto en Jujuy como en el populoso distrito de La

Matanza, donde mostró su capacidad de articulación con otras fuerzas, en especial con sindicatos de la CTA-ATE y con organizaciones de derechos humanos.

Las nuevas organizaciones de base de la CCC se desarrollan y fortalecen en un escenario caracterizado por una larga tradición de protesta y lucha sindical, más aún, de confrontación constante con los poderes provinciales. Este es el caso del SEOM, el sindicato de empleados municipales de Jujuy, liderado por Carlos "Perro" Santillán, cuya historia se remonta a la época del alfonsinismo, época en la cual se formó el Frente de Gremios Estatales, junto con ATE. Durante los 90, Jujuy fue una de las provincias más afectadas en términos de crisis financiera e inestabilidad política: así, entre 1990 y 1994 hubo cinco gobernadores, ninguno de los cuales pudo terminar su mandato constitucional. El Frente de Gremios Estatales, en el cual convergen el SEOM y ATE, lideró el proceso de oposición a la política provincial, protagonizando importantes marchas, muchas de las cuales terminaban en escaramuzas con la policía o en evidentes situaciones de represión. Este escenario de abierta confrontación con el poder provincial debe ser completado con las movilizaciones que encabezaría el sacerdote Jesús Olmedo desde La Quiaca, especialmente entre 1993 y 1994, denunciando la desocupación. En fin, el período más agudo de la protesta en la provincia del Jujuy sería entre 1997 y 1998, cuando se desarrollaron numerosas movilizaciones multisectoriales en localidades cercanas a la capital jujeña, especialmente en Ledesma, San Pedro y Palpalá. Éstas tuvieron su punto álgido a fines de mayo del 97, cuando se produjeron 19 cortes de ruta simultáneos, fenómeno que es conocido con el nombre de "jujeñazo" (M. Rodríguez Blanco: 2002, Santillán:1998).

La otra implantación importante se desarrolla en el distrito más populoso del Conurbano Bonaerense. Allí también la acción de la CCC se nutre de otros antecedentes, relacionados con la lucha por la tierra y la vivienda. Tal es el caso del barrio María Elena, donde reside el dirigente Juan Carlos Alderete, máximo referente de la corriente de desocupados. Entre 1998 y 2001, ésta desarrollaría una estrategia de construcción de poder territorial, basada en la politización de dos temáticas, a saber, la desocupación y el hambre. Durante ese período, la co-

rriente adquirió un protagonismo nacional, junto con la FTV, la organización territorial ligada a la CTA, con la cual llevó a cabo numerosas movilizaciones y largos cortes en la ruta 3, cuyo corolario fue la nacionalización del conflicto piquetero, esto es, el reconocimiento, de parte del gobierno nacional, de las organizaciones de desocupados como un interlocutor político-social importante. Esta asociación estrecha con la FTV llegó a su fin hacia mediados de 2003, época en la cual la CCC se acercó a las organizaciones piqueteras opositoras, con quienes comenzó a coordinar acciones y planes de lucha. En la actualidad, la rama de desocupados de la CCC continúa siendo una de las más numerosas dentro del heterogéneo espacio piquetero.

Por último, en términos ideológicos, la CCC presenta una matriz ambivalente, atravesada por la tensión —siempre irresuelta— entre una visión anticapitalista (que plantea la ruptura revolucionaria, tanto sobre la base de una estrategia insurreccionalista como mediante la construcción de un "doble poder") y el legado nacional-popular (visible en la evocación del "primer peronismo" y las referencias a Eva Perón, así como a un gobierno de "unidad popular").

En fin, una de las notas más sobresalientes de la CCC es su estilo de construcción política, centrado tanto en la masividad como en la difusión de la práctica asamblearia. Esto le permite, más allá de que sus orientaciones políticas generales sean dictadas por el PCR, desarrollar estructuras masivas y participativas de diferente naturaleza (sindical, estudiantil, desocupados, entre otros).

CONFLICTIVIDAD Y NUEVAS EXPRESIONES COLECTIVAS EN EL MUNDO RURAL

En el presente apartado nos interesa resumir, aunque sea de manera esquemática, algunas de las experiencias más relevantes surgidas en el campo de la acción colectiva, en especial, en el sector agrario. Recordemos que el decreto de desregulación económica de 1991 marcó el final de un tipo de relación entre el Estado y el agro argentino. Con este decreto se disolvieron aquellas redes y organismos que regularon las actividades

agropecuarias durante décadas (Junta Nacional de Carnes, Junta Nacional de Granos, mercados concentradores, entre otros). Estas medidas, que hicieron del sector agropecuario argentino uno de los más desregulados del mundo (Teubal y Rodríguez:2001, p. 74), fueron acompañadas por un discurso modernizador, acerca de la necesidad de la renovación tecnólogica. Como anticipamos en el capítulo 2, ello fue la plataforma de grandes cambios en los sistemas de organización y explotación tradicionales que favorecieron la concentración del proceso de producción, afectando, por ende, a pequeños y medianos productores, campesinos y trabajadores rurales.

La introducción de un modelo agrario excluyente estuvo en el origen de diferentes movilizaciones y conflictos, que fueron cobrando visibilidad a partir de 1993, año en el cual se llevó a cabo una importante Marcha Agraria desde distintos puntos del interior del país hasta Plaza de Mayo. En 1994, los sectores del agro, representados por la FAA, liderada por Humberto Volando, participaron también de la Primera Marcha Federal, que nuclearía a gran parte de los sectores opositores al modelo neoliberal.

Sin embargo, desde 1995, la gran novedad del período fue la emergencia de un movimiento agrario iniciado por mujeres. Como ha sido estudiado por Norma Giarracca y su equipo de investigación, (2001), el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MML) tiene por protagonistas a mujeres chacareras de varias provincias. Este movimiento arrancó en una pequeña localidad de La Pampa, a partir de una acción espontánea realizada por Lucy de Cornelis (luego presidenta del movimiento), quien en un gesto de desesperación apeló a la radio local para convocar a la población a oponerse al remate de sus tierras. Esta acción espontánea marcó el inicio de un movimiento que rápidamente se extendería a diferentes provincias del país (Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Formosa, Córdoba), donde se llevaron a cabo distintas acciones para impedir el remate de las tierras endeudadas.

Recordemos que el nuevo modelo agrario trajo aparejada una fuerte exigencia de modernización en el agro, lo cual generó una tendencia al endeudamiento en pequeños y medianos productores. Finalmente, la deuda terminó por convertirse en

una pesada carga, a la luz de las altas tasas de interés y de la caída de los precios internacionales de los productos agrícolas, y muchos productores vieron amenazada su propiedad. A esto hay que agregar que no pocos de los propietarios endeudados creyeron y aceptaron este discurso "modernizador" que propiciaba el gobierno, como fue el caso de las "pioneras" del MML (Giarracca:2001).

Como ya había sucedido en los 70 con las organizaciones de derechos humanos, como ocurriría luego con las organizaciones de desocupados, las mujeres se encontraron en mejores condiciones que los hombres para redefinir la situación en medio de la crisis. Así, en una primera etapa las demandas del MML se centraron en el pedido de suspensión de los embargos y/o ejecución de chacras endeudadas, el congelamiento de los juicios en trámite y el análisis de la legitimidad de las deudas (Bidaseca y Mariotti:2001). Poco después, el proceso de politización llevaría a alguna de estas mujeres a realizar un cuestionamiento mayor de la política neoliberal del gobierno, más allá de los reclamos sectoriales, respecto de la política agropecuaria. La politización del movimiento estuvo ligada sin duda a las distintas acciones e instancias de articulación que el MML inició con organizaciones afines a la problemática de la tierra, tanto en el interior del campo militante (por ejemplo, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Mocase) como en el exterior, a través de las relaciones que entabló con Los Sin Tierra en Brasil y el Barzón en México (Giarracca:2001). Sin embargo, el MML es un movimiento heterogéneo según las provincias y los estilos de liderazgo, como lo muestra el movimiento de Olavarría, que defiende los valores de la tierra desde una óptica tradicionalista (Piriz, Ringuelet y Valerio:1999). Por último, hay que subrayar las particularidades del caso, pues se trata de la movilización de un sector históricamente asociado al mundo masculino. En este sentido, la irrupción de un protagonismo femenino en el marco de las luchas agrarias no dejaría de generar tensiones de género, sobre todo con la tradicional y masculina FAA, más allá de las coincidencias propias del espacio militante.

También las comunidades indígenas y campesinas protagonizaron luchas rurales. La implementación de una política que favorecía claramente la concentración de la producción agravó

la presión de los grandes propietarios sobre las comunidades indígenas (las que, por lo general, no cuentan con los títulos de propiedad), así como sobre pequeños propietarios.

Recordemos que, como hemos mencionado en el capítulo 3, en nuestro país se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a vivir en las tierras ocupadas por sus antepasados y a desplegar sus prácticas culturales y modos de vida (derecho veinteñal). Así lo estipulan la Ley Indígena 23.302, el artículo 75, inciso 17, de la Constitución nacional y todos los tratados y convenios internacionales de rango constitucional, como el 169 de la OIT. Pese a ello, las demandas de los indígenas están lejos de haber sido satisfechas y las comunidades padecen aún la incertidumbre sobre la entrega de títulos (GER:2004, Alerta Argentina:2004). Entre las numerosas expresiones que hoy existen en el seno del mundo indígena, podemos mencionar el Consejo Asesor Indígena (CAI), en la provincia de Río Negro. Surgido en 1988 —cuando la legislación provincial aprobó la Ley Integral del Indígena, que incorporaba en el artículo 6 su reconocimiento—, durante los 90, el CAI fue algo más que un ente dependiente del Estado provincial: impulsó y participó activamente en acciones puntuales por la defensa de pobladores que se encuentran con problemas legales por la propiedad de la tierra (Gutiérrez:2001).

En fin, dentro del espacio de las organizaciones que se reivindican como campesinas, uno de los ejemplos más relevantes es el Mocase, que surgió de un conjunto de asociaciones de pequeños productores a mediados de los 80. Actualmente el Mocase es una de las organizaciones campesinas más afirmadas del país y con mayores vínculos en el campo de las redes globales (por ejemplo, Vía Campesina) y de los movimientos sociales en la Argentina (en especial, con organizaciones de desocupados). Estos reclaman al Estado, entre otras cosas, una política que permita la comercialización de sus productos y una mayor distribución de la tierra (GER:2001). Durante los 90, se destaca también el surgimiento de otras organizaciones de pequeños productores, entre ellas el Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor)[16] y el Movimiento Agrario Misionero (MAM).

En los últimos años, las dificultades que deben afrontar estas organizaciones se han multiplicado. Además de los pro-

blemas derivados de la contaminación con agrotóxicos y la destrucción de puestos de trabajo en el agro, en las áreas marginales los campesinos enfrentan una política de cercamiento de campos, por parte de los grandes productores. En efecto, como coinciden distintos analistas y organismos de derechos humanos, la expansión de los cultivos de soja transgénica en las llamadas áreas marginales se halla en el origen de una política de "desplazamientos voluntarios" y, más aún, de desalojos violentos de campesinos e indígenas, llevados a cabo por guardias privadas, con la complicidad de diferentes instancias del poder (local, provincial). Un ejemplo de ello es que servicios de seguridad privada contratados por grupos latifundistas persiguen y hostigan constantemente a campesinos del Mocase (Alerta Argentina:2004). Otra de las amenazas que penden sobre estas organizaciones es la probable constitución y entrada del país en el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), que, bajo la égida de Estados Unidos, los insertaría en una situación de asimetría mayor, amenazando directamente su supervivencia.

NUEVAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Hemos dicho que los indultos produjeron un hondo impacto en las organizaciones de derechos humanos, cuyo grado de heterogeneidad y fragmentación se había hecho más visible durante los últimos años del gobierno de Alfonsín. Siguiendo a Sebastián Pereyra (2005), podemos afirmar que durante los 90, luego de los indultos concedidos por el gobierno de Menem a los militares que habían participado de la represión ilegal, el problema de los derechos humanos encontró tres reformulaciones importantes. En primer lugar, dentro de las organizaciones históricas se abrió una discusión sobre el carácter de la democracia y el incumplimiento de sus promesas (no sólo con respecto a la violación de los derechos humanos, sino relativas al carácter excluyente que asumía el modelo económico), lo cual fue instalando una brecha cada vez mayor entre un ala maximalista y las corrientes más institucionalizadas. En segundo lugar, se produjo "el desplazamiento hacia la búsqueda de una condena social y hacia la profundiza-

ción de la reconstrucción de la memoria colectiva acerca del significado y las consecuencias del terrorismo de Estado" (Pereyra:2005). De esta manera, la falta de condena judicial no hizo sino acentuar la necesidad de profundizar la disputa en el terreno cultural. La emergencia de la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), en 1995, aparece claramente ligada a la lucha contra el olvido social y la impunidad concedida por el Estado. En tercer lugar, el último eje de reformulación se centró en la crítica y denuncia del funcionamiento de las instituciones policiales dentro del sistema democrático. Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se fueron orientando hacia esta temática, así como surgieron otras de nuevo tipo, entre ellas la Comisión de Familiares de Víctimas de la Violencia Institucional (Cofavi), y sobre todo, la Coordinadora contra la Represión Policial y Institucional (Correpi), esta última centrada en los casos de "gatillo fácil".

En realidad, durante los 90 aumentan las demandas en torno a la defensa de los derechos individuales, a partir de los casos de violencia institucional y policial. Entre los primeros hechos de gran repercusión pública está la masacre de Ingeniero Budge (1987), la muerte de Walter Bulacio, ocurrida en dependencias policiales, a la salida de un recital (1991), y el asesinato de Miguel Bru (1993). Otros casos paradigmáticos son los crímenes del soldado Omar Carrasco en Zapala (1994), de Sebastián Bordón (Mendoza, 1997) y del fotógrafo José Luis Cabezas (1996). El crimen de María Soledad, ocurrido en Catamarca en 1993, dio origen a nuevas formas de protesta (las "marchas de silencio") que desafiaron a los poderes feudales de las provincias. Finalmente, los atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la Asociación Mutual Israelita de la Argentina (AMIA), los más importantes de la historia argentina, con más de un centenar de muertos, cuyos familiares se han constituido en demandantes de justicia, al conformar una organización, "Memoria Activa".

Las demandas de justicia de los movimientos cívicos no asumen una forma programática que pueda ser fácilmente traducible a doctrinas o tradiciones partidarias previas (Landi y González Bombal:1995). Pero todas estas organizaciones, que surgieron de casos particulares, reflejan una situación de impunidad. Por ende, la tematización de la impunidad emergió

como el marco común que fue nucleando las diferentes demandas de justicia, aun si ésta va alternando o actuando junto con un reclamo ligado a la inseguridad (Pereyra: 2005).

Por último, en el campo de las organizaciones de derechos humanos, se destaca el nacimiento de H.I.J.O.S., cuyo carácter innovador tendrá un fuerte impacto en el conjunto del espacio militante. Como hemos dicho, la agrupación surge en 1995, en un escenario que confirma la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar. Sin embargo, 1995 es también el año en el cual se registran las confesiones del capitán Adolfo Scilingo, publicadas en el libro *El vuelo*, del periodista Horacio Vertbisky, que sacudieron la sociedad argentina.[17]

La agrupación H.I.J.O.S. está compuesta casi exclusivamente por jóvenes de entre 20 y 25 años, procedentes de las clases medias. Su discurso se centra en la articulación de varios temas, entre otros el lazo entre las luchas sociales de los años 70 y las luchas actuales, así como en la continuidad del aparato represivo, ilustrada por los numerosos casos de violencia policial ejercidos contra los jóvenes (Bonaldi:2004). A partir de 1997, la agrupación cobraría notoriedad con la introducción de un nuevo formato de protesta, cuyo carácter espectacular y fuertemente expresivo no pasará inadvertido en la sociedad: los "escraches". Bajo la consigna "Si no hay justicia, hay escrache", la agrupación H.I.J.O.S. —acompañada por grupos de arte político—, orientará la acción colectiva, ya no hacia el Estado (que asegura la impunidad), sino hacia los responsables de la represión, con el fin de lograr la condena social. En efecto, en una suerte de ritual burlesco, a la vez teatral y musical, el "escrache" denuncia al criminal en su propio domicilio o en su lugar de trabajo, para ponerlo en evidencia ante el conjunto de la sociedad.

Otro de los aspectos novedosos que presenta H.I.J.O.S. es el formato organizativo que asumen. No sólo se caracterizan por la acción directa, sino por introducir un estilo de construcción colectiva más bien flexible y horizontal y un sistema de toma de decisiones centrado en la búsqueda del consenso. En este sentido, como ha sido señalado oportunamente por numerosos analistas (Inzúa:2001, Bonaldi:2004, Zibecchi:2003), la agrupación H.I.J.O.S. da cuenta del surgimiento de un nuevo patrón de

organización colectiva. En los años siguientes, este formato organizativo y expresivo se convertiría en una suerte de marco común en el seno de pequeñas y medianas organizaciones o de colectivos militantes, tanto en el interior del espacio piquetero (los Movimientos de Trabajadores de Desocupados), como sobre todo de los numerosos colectivos culturales, que se difundieron desde 2001-2002. En fin, H.I.J.O.S. aparece como la bisagra entre las organizaciones existentes y aquellas que asomarán, a partir de 1997-1998, sobre todo en el escenario del Conurbano Bonaerense. Marcados por pertenencias diversas y dobles militancias, los integrantes de H.I.J.O.S. anuncian la emergencia de un nuevo *ethos* militante, en el cual convergen el talante antirrepresivo, la acción directa y la búsqueda de organizaciones más flexibles, basadas en la democracia por consenso.

* * *

Como consta en el epígrafe de este capítulo, las declinaciones del sindicalismo peronista desempeñaron un rol instrumental en la implementación de las reformas neoliberales en la Argentina, "mostrando que los sindicatos no sólo movilizan sino que también desmovilizan y que, en ausencia de su colaboración, las tareas de la transformación económica son potencialmente más arduas" (Torre:1998, p. 85). Tanto es así, que muy probablemente la disociación entre la dirigencia de los grandes sindicatos nucleados en la CGT y las movilizaciones sociales no encuentre parangón con ningún otro período de nuestra historia. Nos referimos al ciclo de acciones que arranca en 1989 y tiene por protagonistas a los empleados públicos, los docentes y los jubilados, todos ellos actores sociales perjudicados por la política de ajuste estructural, cuyos planes de lucha se realizaron por fuera de la CGT.

Cierto es que los cambios de orientación del gobierno peronista obligaron a los sindicatos a redefinir sus relaciones con lo político. Pero además la realidad misma del sindicalismo sufrió grandes mutaciones, a partir de las transformaciones laborales y la entrada acelerada en una era de flexibilización y desempleo. Hemos ilustrado las consecuencias de este conjunto de transformaciones en el caso de la UOM, hasta

hace poco tiempo considerada como la encarnación más acabada del poder sindical.

La constitución de un núcleo sindical antineoliberal, distanciado del tradicional sindicalismo peronista, y la creación de multisectoriales serán algunos de los grandes desafíos que asumirán tanto la CTA como la CCC. Sin embargo, durante el período, los conflictos tendieron a manifestarse en el nivel local y regional, con escasa articulación entre ellos, como consecuencia de la descentralización administrativa, que abrió un espacio entre la política nacional y la política provincial.

Además de las acciones desarrolladas por los sindicatos, el período da cuenta de la emergencia de nuevas formas de acción no institucional y organizaciones, ligadas a una matriz territorial, como aparece ilustrado por las Mujeres Agropecuarias en Lucha, diferentes agrupamientos campesinos (Mocase, Mocafor) y las comunidades indígenas (CAI). Otra de las características novedosas es el surgimiento de nuevas asociaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos, frente a los casos de violencia institucional. Por último, el reconocimiento público de lo ocurrido durante la dictadura por parte de algunos militares, sumado a la aparición de nuevos actores (H.I.J.O.S.) con su propio repertorio de protestas (los "escraches"), contribuyó a (re)colocar el tema de los derechos humanos entre los asuntos de interés público.

En fin, todo da cuenta de la conformación de un vasto arco antineoliberal, en el cual se va situando un conglomerado heterogéneo de organizaciones sociales, cuya visibilidad y capacidad de articulación en el nivel nacional fue muy difícil, pese a la intensidad de las luchas.

Capítulo 8

Las dimensiones de la experiencia piquetera[18]

Sólo el voluntarismo universalista de un movimiento social capaz de superar los límites de las organizaciones tradicionales, en especial integrando plenamente el movimiento de desocupados, estaría en condiciones de combatir y contrarrestar los poderes económicos y financieros sobre el lugar mismo, de ahora en más internacional, de su ejercicio.

Pierre Bourdieu,
"Contre-feux (2001) Pour un mouvement social européen".

Las condiciones de emergencia de las organizaciones de desocupados

Históricamente, la emergencia y el desarrollo de un movimiento social de desocupados no ha aparecido como algo necesario ni evidente, ni mucho menos sostenido en el tiempo. La literatura sociológica ha insistido, más bien, en el conjunto de dificultades, tanto de carácter objetivo como subjetivo, que caracteriza la acción de los desocupados y que impide que éstos se conviertan en un verdadero actor colectivo. A la problemática vinculada con el hecho de que los desocupados se hallan "fuera" de la estructura social, que no ocupan "ningún lugar", que son por ello "irrepresentables", muchos añaden la heterogeneidad de las bases y de las trayectorias sociales.

La crisis de los años 30 generó una amplia ola de desocupación que afectó a todos los países, sin excepción. Como consecuencia de esta primera ola de hiperdesempleo, surgieron diferentes movimientos y sindicatos de desocupados, tanto en Estados Unidos como en Europa. Sin embargo, esta primera gran crisis desembocó en la intervención social del Estado y, posteriormente, en el desarrollo de economías de bienestar que lograron absorber e integrar gran parte de la masa de desempleados. En la actualidad, en la medida en que la desocupación se ha convertido en un rasgo estructural del modelo posfordista, visible en la

existencia de un número importante —aunque variable, según los países— de desempleados, son muchas las sociedades que han profundizado una política de control del desempleo, por medio de agencias de empadronamiento, seguros de desempleo, centros de formación y de reinserción. Aquellos países centrales que cuentan con una experiencia en este campo, avalada por una política de Estado, han buscado desarrollar una red de contención del desempleo, que han ido ajustando durante la crisis de los años 80 y 90. Por otro lado, no es menos cierto que en otras latitudes, la desocupación, como problemática —y más allá de las dificultades de su tematización, y del efectivo surgimiento de nuevas organizaciones— ha sido por lo general integrada en la plataforma de demanda de los grandes sindicatos o centrales de trabajadores.

En otros capítulos hemos destacado que, durante décadas, la sociedad argentina, más allá de las asimetrías regionales, registraba una tendencia a la integración social. En realidad, hasta no hace mucho tiempo, la Argentina fue uno de los pocos países latinoamericanos donde aquello que algunos estudiosos han dado en llamar "sociedad salarial" (Castel:1995) tuvo un desarrollo importante —sobre todo en los polos industriales—, aun si éste no podría ser asimilado al que conocieron ciertos países europeos. En líneas generales, esta integración se realizó en un contexto de pleno empleo, a través de un conjunto de instituciones que fue posibilitando la incorporación de un amplio sector de los trabajadores urbanos, en términos de derechos sociales, protección social y estabilidad laboral. De otro lado, esta cierta "excepcionalidad" argentina daba cuenta, también, del escaso desarrollo de redes de contención comunitarias, en comparación con otros países latinoamericanos, al tiempo que mostraba una expansión igualmente inferior del trabajo informal, como "actividad refugio", asociado tradicionalmente con las estrategias de sobrevivencia.

Sin embargo, el proceso de reformas estructurales —que arranca en los 70 pero que encuentra su realización a partir de los 90— implicó el desmantelamiento de las estructuras de la sociedad salarial, desarrolladas por el modelo nacional-popular. Ya hemos señalado que lo vertiginoso de estas transformaciones se expresó por un inédito proceso de descolectiviza-

ción. Esto afectó tanto a las grandes zonas industriales como a las economías regionales y provinciales, y se aceleró aún más luego de 1995, enfrentándonos con lo considerado tradicionalmente como "lo irrepresentable": los desocupados. Ahora bien, la sociedad argentina no contaba con redes de contención ni con centros de formación o reconversión laboral, pero tampoco el Estado se propuso desarrollarlos cabalmente, a la hora de aplicar crudas medidas de flexibilización o despidos masivos. Ya hemos visto también que los sindicatos, nucleados en la otrora poderosa CGT, de filiación justicialista, no sólo no acompañaron a sus afiliados sino que avalaron el programa de reformas estructurales. Por último, el tejido comunitario de la sociedad argentina, pese a sus incipientes desarrollos desde la década de los 80, aparecía como insuficiente —y demasiado atravesado por los intereses del Partido Justicialista— para amortiguar el peso de tantas caídas.

Este conjunto de hechos y factores nos permite comenzar a responder por qué en la Argentina existe un movimiento de desocupados cuya expansión y relevancia lo ha llevado a erigirse en una suerte de caso único en el mundo. Pero esta tentativa de respuesta sería a todas luces insuficiente si no tuviéramos en cuenta que la emergencia de un movimiento de desocupados, con las características actuales —esto es, un conjunto de organizaciones "piqueteras"— se explica también por la existencia de una tradición política organizativa, en gran parte asociada a las vertientes más clasistas, cuyos militantes se decidieron a actuar y a construir por fuera de las estructuras sindicales vinculadas con el Partido Justicialista.

En lo que sigue, presentaremos los rasgos principales de la organización y movilización de desocupados. Para ello, dividiremos la presentación en tres partes. En la primera parte abordaremos los orígenes, así como las corrientes fundamentales que atraviesan el espacio de las organizaciones de desocupados. En la segunda, nos ocuparemos tanto de señalar las dimensiones de la heterogeneidad, como aquellos repertorios comunes que caracterizan la experiencia de las organizaciones piqueteras (la acción directa, la dinámica asamblearia, el trabajo comunitario). Este enfoque es crucial para entender el éxito organizativo de la experiencia piquetera frente a las dificultades que generalmen-

te supone la movilización de los desocupados. En la tercera parte, daremos cuenta de la conflictiva relación con el Estado y los diferentes posicionamientos políticos de las organizaciones.

El doble origen del movimiento piquetero

El movimiento piquetero nunca fue uno ni homogéneo, sino que estuvo marcado por diferentes tradiciones organizativas y corrientes político-ideológicas. En rigor, el proceso de conformación del movimiento piquetero reconoce dos afluentes fundamentales: por un lado, las acciones disrruptivas, evanescentes y por momentos unificadoras, de los cortes de ruta y levantamientos populares registrados en el interior del país a partir de 1996, resultado de una nueva experiencia social comunitaria vinculada al colapso de las economías regionales y a la privatización acelerada de las empresas del Estado realizada en los años 90; por otro lado, la acción territorial y organizativa gestada en el Conurbano Bonaerense, y ligada a las lentas y profundas transformaciones del mundo popular, producto de un proceso de desindustrialización y empobrecimiento creciente de la sociedad argentina que arrancó en los años 70.

No es posible comprender la genésis ni el posterior desarrollo del movimiento piquetero si no establecemos esta doble filiación. Así, los conflictos generados en el interior del país representaron el punto inicial en el cual una nueva identidad —los piqueteros—, un nuevo formato de protesta —el corte de ruta—, una nueva modalidad organizativa —la asamblea— y un nuevo tipo de demanda —los planes sociales— quedaron asociados, originando una importante transformación en los repertorios de movilización de la sociedad argentina. En fin, la acción colectiva con epicentro en algunas regiones del Conurbano Bonaerense contribuyó de manera decisiva al desarrollo de los modelos de organización, a escala nacional, así como también a la producción de los nuevos modelos de militancia, íntimamente asociados al trabajo comunitario en los barrios.

Mientras que el primer afluente nos emplaza en la perspectiva de la ruptura, el segundo tiende a marcar la perspectiva de la continuidad. En realidad, podríamos decir que la acción pi-

quetera nació allí donde se desarticularon los marcos sociales y laborales de manera brusca y vertiginosa, allí donde la experiencia de la descolectivización adquirió un carácter masivo, afectando a trabajadores calificados que contaban con carreras laborales estables, e incluían familias y hasta generaciones completas socializadas en el marco de la estabilidad y el bienestar social; allí donde el desarraigo tanto como la desocupación reunieron en un solo haz un conglomerado heterogéneo de categorías sociales. Así, la cuna del movimiento piquetero se encuentra en las lejanas localidades petroleras, Cutral-Co y Plaza Huincul (1996-97), en Neuquén, y sobre todo, Mosconi y Tartagal, en Salta (a partir de 1997); esto es, poblaciones cuya vida estaba estructurada en torno de YPF, la mayor empresa productiva del Estado.

Los largos cortes de 1996 y 1997 ocurridos en Cutral-Co y Plaza Huincul (Neuquén) y en Tartagal y Mosconi (Salta) tuvieron una importancia fundamental porque, en primer lugar, marcaron el pasaje a la acción de nuevos actores constituidos en el interior del país, a saber: multisectoriales conformadas por sectores desigualmente afectados por la desestructuración de las economías locales. Fue sin duda el encuentro entre diferentes sectores sociales, todos ellos afectados por un inédito proceso de descolectivización, frente a un Estado nacional en retirada, lo que constituye el punto de partida de una experiencia unificadora, en medio del desarraigo social. Así, en esos cortes confluyeron desocupados, comerciantes, pequeños empresarios, sindicatos y políticos locales. Fue esa dimensión comunitaria la que posibilitó la convergencia entre los cortes —los piquetes— y las puebladas, herederas de los estallidos en las provincias, que se producirán como respuesta a las represiones de los piquetes, para luego constituirse de manera progresiva en horizontes potenciales de cada corte.

Sin embargo, puebladas y piquetes tuvieron una impronta fuertemente sindical relacionada, por un lado, con la constante movilización de los gremios de docentes y estatales en todo el país; y por otro lado, con el hecho de que varias líneas sindicales, opositoras al régimen de Menem —la CTA y la CCC— en la segunda mitad de los 90, decidieron volcarse progresivamente hacia la organización de desocupados —y levantar sus bande-

ras—, hecho que marcaría el salto hacia la masividad de las organizaciones piqueteras.

Ahora bien, a diferencia de las movilizaciones que se produjeron en las localidades o regiones afectadas por el proceso de privatización de las empresas del Estado y la descentralización administrativa, las acciones de protesta en el Conurbano Bonaerense, en Rosario o en Mar del Plata, se relacionan con un proceso económico y social de más largo plazo, ligado tanto a la desindustrialización como al lento y creciente deterioro de las condiciones de vida de las clases populares y las clases medias-bajas, que había arrancado a mediados de los 70.

Como ya hemos analizado en otro capítulo, una de las primeras consecuencias de esta inscripción territorial fue que el barrio emergió como el espacio natural de acción y organización, convirtiéndose en el lugar de interacción entre diferentes actores y organizaciones de base, comunidades eclesiales y, en algunos casos, de organizaciones no gubernamentales. En los años sucesivos, en la medida en que se fueron agravando las condiciones de vida de las clases populares y se acentuó la distancia con el mundo del trabajo formal, la militancia territorial fue revistiéndose de nuevas dimensiones. Las organizaciones de desocupados que ejemplifican cabalmente el modelo "territorial" de militancia y organización son la FTV, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y los diferentes MTD (Movimientos de Trabajadores Desocupados que durante un tiempo convergerían en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón), hoy reflejados en el MTD Aníbal Verón y el Frente Darío Santillán.

Así, en determinadas zonas del Conurbano Bonaerense y a diferencia del primer afluente —que expresa la convergencia entre "piquetes" y "puebladas"—, el segundo afluente inscribe la experiencia de las organizaciones de desocupados en un modelo de acción territorial que, en algunos casos, remite a una historia previa, ligada a la lucha por la propiedad de la tierra y a la organización de la vida del barrio alrededor de los servicios básicos (calles, agua, energía eléctrica, la sala de salud, entre otros).

Entre 1991 y 1997, en la medida en que el paisaje urbano iba perdiendo sus rasgos tradicionales, hasta convertirse en un verdadero cementerio de industrias y pequeños comercios, la

política en los barrios fue recluyéndose en su dimensión más reivindicativa, despojándose de sus lazos tanto con la militancia política como respecto del mundo sindical. Ya hemos dicho que las razones de tal inflexión son variadas y complejas: el telón de fondo es, sin duda, el triunfo del peronismo en su versión neoliberal y los cambios en la estrategia de intervención social del Estado y del Partido Justicialista respecto de los sectores populares (el pasaje de lo sindical a lo territorial y la despolitización de la militancia, concebida como un trabajo social —la "militancia social"—, por medio de una política social focalizada).

Sin embargo, fue la politización de una experiencia de trabajo barrial lo que constituyó el núcleo de la acción contestataria y, rápidamente, el punto de partida para la organización y la acción masiva. Ciertamente, a partir de 1996-1997, los piqueteros abrieron una brecha en el mundo descolectivizado del nuevo proletariado marginal, al cuestionar el clientelismo peronista, e introducir apelaciones a la dignidad, ligadas a la acción colectiva. En este sentido, la visibilidad que el trabajo territorial fue adquiriendo a través de las primeras ollas populares y cortes de ruta, pusieron al descubierto el alcance de las transformaciones y el empobrecimiento operados dentro del mundo popular. Las primeras definiciones marcaron a fuego no sólo el horizonte de las organizaciones sino más específicamente el estilo de intervención y la lógica de construcción política. Así, las organizaciones de desocupados, más allá de sus actuales alineamientos políticos y sindicales, reconocen como fuente originaria el "trabajo territorial", asentado en un modelo de representación que algunos sintetizarán a partir de la figura del "delegado de base" y otros en la del "dirigente comunitario" o simplemente el "referente territorial".

De esta manera, una parte de aquella Argentina sacrificada en nombre del modelo neoliberal e ignorada por los medios de comunicación, irrumpió en las rutas del país, impidiendo la libre circulación de personas y mercancías, en demanda de puestos de trabajo. De aquellos primeros cortes, protagonizados por los pobladores de comunidades enteras, surgió el nombre "piquetero" —aquel que organiza los piquetes, los cortes en las rutas—; nombre que, además de atraer la atención —de los medios y del sistema político— por su fuerza expresiva, representó

una alternativa para todos aquellos para los cuales ser definidos como "desocupados" les resultaba intolerable. Así comienza la historia de pequeñas organizaciones locales de desocupados que más tarde pasaron a integrar —la mayor parte de las veces— "federaciones" de escala nacional. Poco a poco, pese al déficit comunitario, la autoorganización compulsiva de lo social abrió las puertas a nuevas experiencias, asociadas a la vivencia del barrio, la ruta y la calle, lugares desde los cuales los individuos buscaron reconstruir su identidad y reencontrar su dignidad. La acción colectiva trajo así consigo la idea de que otra identidad —y otro destino— era posible para quienes habían perdido su trabajo y habían visto interrumpida su carrera laboral. Un nuevo motivo de dignidad —que reemplazaría entonces la perdida dignidad del trabajo— podía comenzar a buscarse explorando y explotando la categoría "piquetero" y enterrando la de "desocupado".

En resumen, la génesis del movimiento piquetero no se relaciona con un único proceso. El movimiento piquetero no es el producto exclusivo de los piquetes y puebladas que sacudieron a las lejanas provincias argentinas en los últimos años, pero tampoco brotó naturalmente de los asentamientos originados en los 80 en la provincia de Buenos Aires. Es la convergencia de estos dos afluentes lo que va a permitir la formación, la expansión y aun la posterior potenciación del movimiento piquetero. La confluencia entre, por un lado, acción disruptiva, dinámica asamblearia e identidad piquetera, originaria de los piquetes y puebladas del interior del país y, por otro lado, los modelos de organización y militancia territorial, desarrollados de manera paradigmática en determinadas regiones, sobre todo en La Matanza y el eje sur del conurbano bonaerense.

ORIENTACIONES Y FASES DEL MOVIMIENTO PIQUETERO

Las organizaciones de desocupados más importantes pueden comprenderse a partir de tres lógicas principales: una lógica sindical, una lógica político-partidaria y una lógica de acción territorial. En primer lugar, las formas de organización de los piqueteros reconocen una fuerte impronta sindical

marcada ya sea por la intervención directa de sindicatos en la organización de desocupados —como es el caso de la FTV, ligada a la Central de Trabajadores Argentinos— o, simplemente por la presencia de referentes que han tenido una trayectoria de militancia sindical.

En segundo lugar, los partidos políticos de izquierda que han aportado sus estructuras a los movimientos marcan la presencia de otra lógica distinta de organización. Así, el Polo Obrero (dependiente del Partido Obrero, de raíz trotskista), Barrios de Pie (Partido Patria Libre), Movimiento Territorial de Liberación (Partido Comunista Argentino) o el Movimiento Teresa Vive (ligado al trotskista Movimiento Socialista de los Trabajadores), representan ejemplos paradigmáticos en los cuales, la organización de desocupados es subsidiaria de sus orientaciones políticas. Aquí, la política en sentido institucional y electoral aparece como un objetivo claro a ser alcanzado.

En tercer lugar, muchas organizaciones piqueteras se generaron en torno de liderazgos de tipo barrial, en general también con antecedentes militantes, pero desvinculados de las lógicas sindical y partidaria. Por ejemplo, los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) que integraron hasta 2003 la Coordinadora Aníbal Verón o, incluso, los diferentes movimientos de desocupados que se conformaron en el interior del país —como la emblemática Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi en Salta— y que decidieron no integrar ninguna de las grandes corrientes de nivel nacional.

En muchos casos, las lógicas de construcción política aparecen fuertemente entremezcladas en las organizaciones. Tal es el caso de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de origen sindical, al tiempo que la mayor parte de sus referentes son también militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR) de filiación maoísta. El Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), agupación independiente, de inspiración guevarista, o aun el controvertido Movimiento de Jubilados y Desocupados (MIJD), que exhibe un fuerte estilo movimientista, de gran exposición mediática, representan también casos en los cuales la lógica territorial y política aparecen entremezcladas y en tensión permanente.

Ahora bien, la expansión territorial y el reconocimiento de las organizaciones piqueteras como interlocutor político no

fueron fáciles. En primer lugar, las incipientes organizaciones piqueteras entablaron una relación conflictiva con el gobierno peronista de Menem y en muchos casos emergieron de una lucha "cuerpo a cuerpo" contra sus estructuras clientelares locales (entre 1996 y 1999); desarrollaron luego una vertiginosa autonomía durante el gobierno de De la Rúa, período en el cual se constituyeron en un verdadero movimiento social organizado (1999-2001); y fueron las protagonistas de las grandes movilizaciones de 2002, confirmando de esta manera su centralidad en el escenario político argentino, tanto durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde, como actualmente bajo la gestión de Kirchner (2003-), más allá de las divisiones y diferentes posicionamientos registrados en el último período.

A todo esto, la única política sistemática del Estado nacional para hacer frente a la progresiva crisis de empleo fue el lanzamiento, en 1996, del Plan Trabajar, política que mantuvo siempre (aun en su nueva formulación de 2002, el Plan Jefes y Jefas de Hogar) una marcada ambigüedad al no constituir ni un seguro de desempleo, ni una política asistencial, ni una política de reinserción laboral, sino todas esas características a la vez.[19] Los "planes" (subsidios) y la asistencia alimentaria fueron el núcleo de la política de contención del gobierno, y se convirtieron, con el correr de los años, en el centro de la negociación con las organizaciones para poner fin a los cortes de ruta. Así, los 200.000 subsidios vigentes en 1997 eran 1.300.000 en octubre de 2002. Como ya hemos señalado, actualmente el Plan Jefas y Jefes de Hogar alcanza a más de un millón y medio de familias, mientras que el Plan Manos a la Obra y otros planes sociales llegan a 450.000 mil personas (Lozano:2005). Sin embargo, sólo cerca del 10% de estos planes sociales son directamente controlados por las organizaciones piqueteras, pues el 90% restante depende de los consejos consultivos, que registran una escasa autonomía de los poderes locales, en gran parte ligados al Partido Justicialista. En la actualidad, la política asistencial del gobierno se ha encaminado a incrementar la cantidad y el monto de los subsidios para emprendimientos productivos y para la (auto)construcción de viviendas.

La etapa fundacional del movimiento arranca entonces con la primera ola de movilizaciones, a saber, con los legendarios

cortes de ruta y puebladas de Neuquén, Salta y Jujuy, en 1996 y 1997, y se cierra en 1998, cuando se conforman orgánicamente las dos grandes corrientes sindicales del movimiento piquetero en el oeste del Conurbano Bonaerense (partido de La Matanza), en la provincia de Buenos Aires, que más adelante aportarán masividad y escala nacional a las movilizaciones. Nos referimos a la FTV y la CCC, que desde ese año y hasta fines de 2003 constituyeron un sólido bloque, caracterizado por una fuerte tendencia a negociación y a la institucionalización. En este primer período emergen también los llamados grupos independientes o autónomos (MTR y diferentes MTD) en el sur del Conurbano Bonaerense, los cuales, a falta de soportes, serán los más castigados en la confrontación siempre desigual con las estructuras clientelares del Partido Justicialista.

También en esta primera etapa se va consolidando un determinado vínculo con el Estado. Así, frente a los reclamos de los desocupados, el gobierno —en sus diferentes instancias—, va a alternar la represión (sobre todo en las provincias petroleras) y la criminalización de la protesta social (procesamiento de los dirigentes y manifestantes, acusados del delito de cortar rutas), con la multiplicación y focalización de sus modos de intervención territorial: subsidios financieros a cambio de una contraprestación laboral (planes sociales). La centralidad de la política asistencial generaría una fuerte dependencia de las organizaciones piqueteras en relación con el Estado, pues los planes sociales constituyen hasta el día de hoy el recurso primero y fundamental de esas organizaciones para responder a las necesidades de sus miembros y, al mismo tiempo, para dotarse de una estructura mínima que les permita actuar y desarrollarse en otros niveles.

La segunda etapa señala la entrada de las organizaciones piqueteras en la escena política nacional, en tanto actor central de las movilizaciones sociales. El convulsionado período, caracterizado por una intensa ola de protestas, arranca en 1999, en las postrimerías del segundo gobierno de Menem, y se cierra a fines de 2001, poco antes de la caída del gobierno la Alianza (1999-2001). Durante esta segunda etapa, de crecimiento y visibilidad, las organizaciones piqueteras fueron desarrollando una creciente autonomía de acción. Pero, a diferencia de los

primeros estallidos —entre 1996 y 1997—, el ciclo ascendente de 2000, 2001 y 2002 se concentraría en los espacios tradicionales de la política nacional —Capital Federal, el Conurbano Bonaerense y grandes ciudades—. Esta etapa se cerraría con la realización de las dos asambleas piqueteras en el partido de La Matanza, en julio y septiembre de 2001, que para las corrientes más masivas —en ese entonces el bloque matancero, liderado por la FTV y la CCC— representaban la posibilidad de unificar el movimiento y consolidar sus liderazgos. Sin embargo, el fracaso de estas cumbres puso de manifiesto las diferencias de las organizaciones, tanto en términos de expectativas como de objetivos, dando por tierra toda posibilidad de conformar un movimiento piquetero unificado. Consolidada la fractura, a principios de diciembre de 2001, aparece en escena el Bloque Piquetero Nacional, que lideraría la oposición a las políticas del gobierno nacional, sobre todo, luego, durante el gobierno provisional de Duhalde y los primeros tiempos de la gestión de Kirchner.

La tercera etapa se abrió entonces con los sucesos de diciembre de 2001. Recordemos que las jornadas del 19 y 20 de diciembre impulsaron la apertura de un nuevo escenario político, marcado por la movilización de diferentes actores sociales. Este nuevo ciclo de movilizaciones catapultó a las organizaciones piqueteras al centro de la escena política, al tiempo que les permitió desarrollar un vínculo con otros sectores, en especial, con las clases medias movilizadas. Asimismo, dicho período se caracterizó también por la masificación de los subsidios o planes sociales, cuyo objetivo a corto plazo era el de paliar la grave situación social que atravesaba el conjunto de la población, luego de la devaluación de la moneda, y en medio de la crisis económica y el aumento del desempleo. En junio de 2002, un grave hecho de represión ocurrido en el Puente Pueyrredón, a las puertas de la ciudad de Buenos Aires, ilustraría trágicamente la centralidad política de las organizaciones piqueteras Esos hechos, que culminaron con el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán,[20] dos jóvenes piqueteros, a manos de las fuerzas represivas, conmocionaron a la sociedad argentina, generando masivas marchas de repudio. Como es sabido, este episodio tuvo como consecuencia la reorientación de la política del gobierno nacional, que debió llamar a elecciones presidenciales anticipadas.

La cuarta etapa se inicia entonces en 2003, con el gobierno de Kirchner, cuyos primeros gestos políticos contribuyeron a generar una gran expectativa de parte de amplios sectores sociales, al tiempo que impulsaron una sucesión de realineamientos dentro del diversificado espacio piquetero. De esta manera, pese a que el presidente Kirchner se encontró con un conjunto de organizaciones piqueteras muy fortalecidas, sobre todo luego del gran protagonismo que éstas asumieron a lo largo de 2002, el cambio del escenario político le otorgó un margen de acción bastante más amplio que el de los gobiernos anteriores, a partir del cual pudo desarrollar diferentes estrategias, que han venido incluyendo desde la integración de determinadas organizaciones, pasando por la división y el control, hasta el disciplinamiento y criminalización de las movilizaciones piqueteras. Por último, este escenario se complejiza si agregamos la emergencia de un espacio piquetero oficialista, conformado por grupos afines al populismo (FTV, Barrios de Pie y nuevas organizaciones, como el MTD Evita).

La heterogeneidad de la experiencia piquetera

Las bases sociales de las organizaciones de desocupados están atravesadas por una triple escisión, o clivaje, a la vez social, generacional y de género. Así, en primer lugar, la heterogeneidad es social, pues si bien es cierto que los desocupados comparten ciertas condiciones de vida y experiencias comunes básicas, individualmente provienen de trayectorias y saberes muy dispares, y sus recursos culturales y simbólicos son también disímiles. En líneas generales, podríamos afirmar que, en la Argentina, la experiencia de la descolectivización se sitúa entonces entre dos extremos: ésta puede ser de larga data, esto es, estar en el origen de una trayectoria por momentos errática, signada por la precariedad y la inestabilidad (alternancia de períodos de empleo —formal o precario— con períodos de desempleo); o bien, la experiencia más reciente, estar asociada a una carrera laboral más estable que se interrumpe abruptamente. De todos modos, tanto desde una perspectiva de corto como de mediano plazo, la erosión de los tradicionales marcos sociales y cultura-

les que estructuraron el mundo obrero industrial, marcado por la experiencia de la integración a la vez política (la identidad peronista), económica (el acceso al consumo) y social (los derechos sociales, protección social, estabilidad laboral) devino inevitable.

En segundo lugar, existe un clivaje de género; más de la mitad de los adherentes y militantes de las organizaciones piqueteras son mujeres, y sobre ellas reposa gran parte de la organización administrativa y laboral, así como la tarea de contención afectiva y psicológica. Sin embargo, pese al protagonismo innegable que han asumido desde el principio, son muy pocas las mujeres que en la actualidad aparecen como las voceras de los movimientos. Esto no se debe solamente a los rasgos patriarcales del mundo popular, sino también al hecho de que son los hombres los que reenvían a una historia militante (que puede provenir del campo sindical o político), mientras que las mujeres más maduras y destacadas suelen contar con una experiencia organizativa más anclada en el espacio barrial, en tanto "militantes sociales", en ciertos casos ligadas anteriormente al Partido Justicialista. Sin embargo, esto no significa que las mujeres no asuman importantes responsabilidades en el interior de las organizaciones. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que los jóvenes constituyen una parte importante (cerca del 70%) de las bases sociales de las organizaciones. En un fuerte contexto de crisis económica, los jóvenes (hombres y mujeres) son el objeto de una triple exclusión: la mayor parte de ellos han tenido escaso contacto con las instituciones educativas y políticas; sufren frecuentemente el acoso y, en el límite, la represión de las fuerzas de seguridad; por último, la mayoría no ha pasado por experiencia laboral alguna, lo cual explica la escasa presencia de una cultura tradicional del trabajo. En consecuencia, las organizaciones piqueteras se ven obligadas a proponer otros lugares de producción de la disciplina y la solidaridad; por un lado, el trabajo comunitario, ligado muy estrechamente a la satisfacción de las necesidades más inmediatas (huertas comunitarias, comedores, panaderías, entre otros), por el otro, la experiencia asamblearia. Pero el barrio no es el único lugar de producción identitaria, sino también la acción colectiva, tan-

to en la ruta como —en los últimos años— las movilizaciones en las calles y espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y las capitales de provincia.

LOS REPERTORIOS COMUNES DE LA EXPERIENCIA PIQUETERA

Más allá de las diferencias políticas o de la hetereogeneidad social, la experiencia piquetera ha ido definiendo un repertorio común, a saber, nuevas formas de acción y organización colectivas: en primer lugar, la acción directa, ligada al piquete o corte de ruta; en segundo lugar, el funcionamiento asambleario, que incluye referencias a la pueblada; por último, el trabajo territorial, desarrollado a partir de la instalación de una demanda y la institucionalización de los planes sociales.

Riquezas y ambigüedades de la acción directa

Desde un comienzo, los piquetes —los cortes de ruta— fueron la forma central en la cual los reclamos de distintos sectores sociales afectados por el proceso de desestructuración económica adquirieron visibilidad. En un principio, los piquetes eran multisectoriales (como lo ilustran los primeros cortes en el interior del país), pero estuvieron indisociablemente ligados a los reclamos de los desocupados, configurando sin duda uno de los ejes centrales de la historia piquetera.

En tanto metodología de acción directa de ocupación del espacio público, el *piquete* puede tomar un carácter parcial o total, puede expresarse mediante el bloqueo a una empresa ("corte de acceso", como sucede en las zonas petroleras) o puede tomar la forma de un "acampe" frente a oficinas gubernamentales (como sucede en las ciudades), seguido de una toma o ocupación. Más aún, a partir del año 2002, el piquete, en tanto formato modular, fue desplazándose hacia formas más clásicas de la movilización colectiva (marchas y ocupaciones de calles).

Sin embargo, lo propio del piquete es haber establecido un nuevo umbral de significación del conflicto social, en donde se expresaban y convergían la desocupación extrema y el hambre.

En este sentido, la participación de las mujeres en los piquetes fue fundamental, como la expresión más auténtica e incuestionable de una situación de emergencia familiar y social. Así, las mujeres —en su mayoría acompañadas por sus hijos—, no sólo se encontraron en el centro de la nueva protesta (siendo las "pioneras", junto con militantes y ex delegados sindicales), sino que —como ya había sucedido con las Madres de Plaza de Mayo (y, en otra escala, con las Mujeres Agropecuarias en Lucha)— en tanto vehículo "desideologizado", contribuyeron de manera crucial a politizar los reclamos, basándolos en el hambre y la desocupación.

Ciertamente, la "nueva política de los cuerpos" (Pérez:2001) instaló las demandas en una dimensión material —el hambre, la urgencia de las necesidades básicas—, conjugada con otros temas altamente disruptivos —la desocupación masiva y la exclusión—. Esto explica su carácter altamente movilizador y por momentos irreductible, así como las resonancias ambiguas que su alta visibilidad —y más allá de la molestia objetiva— produce en diferentes sectores de la población. En realidad, en su carácter radical, el piquete tiende a poner de relieve la irracionalidad del actual modelo de acumulación, que demanda el sacrificio de una mayoría en nombre de la inclusión de una minoría. Desde adentro, el piquete tiende a configurarse como el lugar de producción de una identidad positiva; desde afuera, tiende a aparecer como el espacio de producción de una alteridad amenazante, que da cuenta de la existencia de "otros mundos", cuya proximidad se advierte como peligrosa, sobre todo en contextos de alta inestabilidad y movilidad social descendente como el que atraviesa la Argentina.

En los últimos años, la reiteración del piquete como metodología de acción, por un lado, y la institucionalización de los planes sociales, como demanda, por el otro, han contribuido a la construcción de estereotipos negativos sobre los cuales se han deslizado las lecturas reduccionistas y unilaterales del fenómeno piquetero, que tienden a ignorar las otras dimensiones —menos visibles y por ende menos espectaculares— de la acción colectiva (como el trabajo comunitario en los barrios).

Inflexión asamblearia y prácticas políticas

Desde el origen, las organizaciones piqueteras desarrollaron una fuerte impronta asamblearia. Dicha dinámica posee una inflexión ordinaria y otra mítica o extraordinaria. La expresión más ordinaria está asociada al desarrollo de prácticas de democracia directa, visible tanto en los diferentes niveles organizativos (local, regional, nacional), como en los diversos espacios de acción (la organización y vida cotidiana en el barrio, los piquetes y las movilizaciones). Sin embargo, el tipo y el grado de cristalización del modelo asambleario en los distintos espacios de acción está relacionado directamente con la lógica de construcción política de cada corriente. Así, las variantes existentes son numerosas, pues están desde aquellas corrientes que colocan el modelo asambleario en el centro de la práctica política (entre ellos, los grupos independientes —MTR, MTD, aunque también la CCC), y apuntan a profundizar las formas de la democracia directa; aquellas otras que insertan el formato asambleario dentro de modelos tradicionales de liderazgo, más bien de tipo movimientista (MIJD, FTV); finalmente, aquellas que tienden a limitar la potencialidad de la dinámica asamblearia a través de la creación de estructuras centralizadas de autoridad, en muchos casos, dependiente de los partidos políticos (PO, MTL, MST).

La dinámica asamblearia es, desde varios puntos de vista, un lugar de potenciación de la política: ella apunta a instaurar un espacio de deliberación y de toma de decisiones más democrático y participativo, contribuye a formular un sentido más colectivo de lo político y posibilita una reconstrucción de la identidad individual mediante la revaloración de las competencias y las experiencias, tan castigadas por el proceso de descolectivización que está en la base de la desocupación y la precarización laboral. Por otro lado, la real potencialidad de las prácticas de democracia directa depende, en mucho, del tamaño de las organizaciones. En la medida en que éstas se constituyen en actores masivos, el esfuerzo por mantener una dinámica asamblearia que conjugue horizontalidad y diversidad de competencias se torna más complejo y aleatorio; y ello, más allá del esfuerzo que cada una de las corrientes realice por crear instancias de coordinación o de centralización organizativa.

Autoorganización colectiva y trabajo territorial

Como hemos dicho, a partir de 1996, los piqueteros abrieron una brecha en el mundo descolectivizado de los sectores populares, al crear redes de solidaridad, mediante la movilización y la autoorganización colectiva. Poco a poco, pese al déficit comunitario, la autoorganización de lo social abrió las puertas a nuevas experiencias, asociadas a la autogestión comunitaria. El punto de partida de esta experiencia de "recolectivización" fue la resignificación de los planes sociales. Esto sucedió a partir de 1999, cuando las organizaciones piqueteras lograron el control directo de los planes sociales, y pudieron orientar así la contraprestación exigida (cuatro horas diarias de trabajo) hacia el trabajo comunitario en los barrios. Luego de ello, se comenzó a discutir un problema fundamental relativo a los planes sociales: ¿qué se entiende en este contexto por trabajo "genuino"? La respuesta a esta gran pregunta pondría al descubierto, desde otro punto de vista, las grandes diferencias que aún en términos estratégicos recorren a las organizaciones piqueteras.

En el interior del país, la distribución masiva de planes permitió hacer frente a situaciones de desprotección total. Sin embargo, en varios casos los planes fueron recibidos como salarios y la obligación de desarrollar una contraprestación laboral fue rápidamente asumida. Así, se produjeron situaciones paradójicas, pues fueron las propias organizaciones las que crearon los marcos necesarios para poder llevar adelante los proyectos, dando origen a verdaderas experiencias de autogestión. La experiencia de la UTD de Mosconi, en Salta, es un modelo de autogestión comunitaria, que ha tenido una importante repercusión en otras organizaciones independientes. Asimismo, el desarrollo de ciertos proyectos —específicamente de huertas comunitarias y panaderías— se orientó a la (re)construción de minieconomías de subsistencia que permitieron hacer frente a las situaciones de hambre.

Por otro lado, en las líneas nacionales, la inclusión de los planes sociales en las lógicas de construcción política fue menos una decisión de las organizaciones que un producto de la

presión de las bases frente a los contextos de urgencia y necesidad. Sin embargo, su aceptación supuso que implícita o explícitamente cada una de las organizaciones se diera debates o tomara decisiones respecto de sus formas organizativas, de las claves de sus inscripciones territoriales y, fundamentalmente, de la manera en que se retematizaba la noción de trabajo. Cierto es que, para gran parte de las organizaciones, la fuerte herencia de la sociedad salarial —en su impronta fabril— marca todavía la concepción de lo que se entiende por "trabajo genuino" y el horizonte de su reconstrucción. Así, la experiencia de la autogestión aparece asociada de manera natural a la esfera de la fábrica, pero no necesariamente al impulso de una economía social alternativa. En realidad, han sido sobre todo las organizaciones independientes las que se han reapropiado de los planes sociales, integrándolos a sus propios proyectos de construcción política. De esta manera, la resignificación de los planes sociales forman parte de una estrategia mayor, la de crear nuevos lazos culturales y sociales dentro del mundo popular, con vistas al desarrollo de formas de economía alternativa y solidaria.[21]

Por último, hay que tener en cuenta que para todas las organizaciones piqueteras los planes asistencial-laborales representan una condición de posibilidad de su existencia. Esto se explica porque históricamente todos los cortes de ruta fueron negociados a cambio de "paquetes de planes" provinciales o nacionales, o en algunos casos, contra la entrega de mercadería. Así, los planes significaron una solución de compromiso, una especie de débil equilibrio logrado en el contexto de la necesidad y de una importante debilidad relativa. En la medida en que la movilización fue cada vez más masiva y recurrente, durante la segunda mitad de los 90 algunos grupos lograron consolidar volúmenes importantes de planes. Por otro lado, las organizaciones —sobre todo, sus bases— comenzaron a percibirlos como derechos adquiridos, antes que como prestaciones asistenciales.

Sin embargo, luego de la crisis de diciembre de 2001, con la masificación de los planes asistenciales se registraron cambios importantes. No olvidemos que los planes sociales aumentaron de 300 mil o 700 mil (según los gobiernos) a casi dos mi-

llones. Aunque resulte paradójico, la gran crisis otorgó al peronismo una nueva oportunidad histórica, pues le permitió, a través de la masificación de los planes asistenciales, recomponer las relaciones con los sectores populares y recuperar parte del espacio organizativo, que en los últimos años habían ocupado las movilizadas agrupaciones piqueteras. Ciertamente, resulta difícil minimizar el impacto que ha tenido la nueva política social implementada en el empobrecido mundo popular, pues en un nuevo contexto de masificación, los dispositivos del clientelismo afectivo se potenciaron y, a la vez, se transformaron, asegurando así la posibilidad de la reproducción del peronismo "desde abajo".

En resumen, la política iniciada en 2002 conllevó un fortalecimiento de la matriz asistencial del modelo neoliberal. Por su carácter masivo, la introducción de este nuevo plan social —en su tipo, el de mayor envergadura en América Latina—, produjo una inflexión importante dentro del mundo organizacional de los pobres urbanos. Es cierto que, a corto plazo, el objetivo del Plan Jefas y Jefes de Hogar era doble: por un lado, paliar la grave situación de urgencia y necesidad social que atravesaba una parte importante de la población; por el otro, contener la agravación del conflicto social, frente a los reclamos cada vez mayores del conjunto de las organizaciones piqueteras. Desde la perspectiva del gobierno, una de las consecuencias "indeseadas" de esta política era así la expansión del volumen de adherentes dentro de las organizaciones piqueteras, a través de la multiplicación de planes y ayuda alimentaria. Sin embargo, a mediano plazo, uno de los objetivos deliberados de esta política de masificación de los planes sociales era recomponer los históricos y deteriorados lazos del Partido Justicialista con los sectores populares.

Por último, la experiencia de la masificación trajo aparejado también un peligro importante para las organizaciones piqueteras. No olvidemos que, en sus orígenes, el desarrollo del movimiento piquetero estuvo acompañado por la generalización de la crítica y el cuestionamiento al sistema clientelar peronista. Así, a contracorriente de lo profetizado por voceros de diferentes partidos de izquierda, la emergencia de nuevas organizaciones y prácticas políticas demostró que la resignifica-

ción de los planes sociales era posible, lo cual fue un claro signo de que los riesgos de caer en "la trampa asistencialista del Estado" podían eludirse. En consecuencia, en la medida en que se profundizaba la distancia entre las organizaciones piqueteras y las formas de representación del peronismo político y sindical, los riesgos permanecieron latentes. Sin embargo, con la masificación de los planes sociales a partir de 2002, dichos riesgos comenzaron a hacerse manifiestos, a causa del nuevo impulso que cobró la figura del mediador dentro de la matriz territorial. Así, la actual política asistencial conllevó distorsiones que afectaron no sólo a la tradicional estructura punteril peronista, sino también a las propias organizaciones piqueteras, que, sumergidas de lleno en la política asistencial, hoy ven acentuadas su relación de dependencia con respecto al Estado y exacerbados los problemas referidos a la consolidación de las nuevas prácticas políticas.[22]

ESTADO, POLÍTICA Y MOVIMIENTOS PIQUETEROS

Como en otros países, en la Argentina la implementación de un modelo neoliberal se tradujo en el aumento de las desigualdades, la concentración económica y la exclusión de vastos sectores de la población. Este modelo de sociedad excluyente se ha venido sosteniendo sobre dos ejes fundamentales: por un lado, el Estado fue desarrollando estrategias de contención de la pobreza, por la vía de la distribución —cada vez más masiva— de planes sociales y de asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas y movilizadas; por el otro, el Estado se encaminó a reforzar el sistema represivo institucional, apuntando al control de las poblaciones pobres y a la represión y criminalización del conflicto social.

De esta manera, las relaciones entre los sucesivos gobiernos y los movimientos piqueteros no han recorrido un carril único. Más bien, desde el comienzo éstas han venido combinando diferentes estrategias, que alternan la negociación y la cooptación, con dosis importantes de control, disciplinamiento y represión. Por un lado, los mecanismos de negociación fueron institucionalizándose mediante la distribución de paquetes de planes sociales y ayuda alimentaria y, más recientemente, de herramientas y subsidios para los proyectos productivos. La negociación, a su vez, fue acompañada por el endurecimiento del contexto represivo —propio de la matriz neoliberal—, visible en los numerosos episodios de represión a lo largo de la historia del movimiento piquetero. En efecto, la vertiginosa pérdida de derechos (sociales, laborales) fue acompañada por el aumento y pertrechamiento de las fuerzas represivas (Policía Federal, Provincial, Gendarmería nacional y Prefectura). El ejemplo más elocuente es el de Gendarmería Nacional, que pasó del cuidado de las fronteras al control y represión de los conflictos sociales provinciales, desde 1993 en adelante. Por ejemplo, la localidad salteña de General Mosconi estuvo literalmente sitiada por la Gendarmería entre mayo de 2000 y diciembre de 2001. La violencia de Estado se concretó en fuertes situaciones de represión que culminaron en asesinatos, que arrancaron en Cutral-Co (abril de 1997), Corrientes (diciembre de 1999), General Mosconi (diciembre de 2000, junio de 2001), Buenos Aires (diciembre de 2001, junio de 2002) y, más recientemente, en Jujuy (Ledesma, octubre de 2003). A su vez, desde 1996 en adelante, dichas estrategias han sido convenientemente acompañadas por una sostenida política de judicialización del conflicto social, tanto en el nivel nacional como en las respectivas jurisdicciones provinciales, que hoy se traduce en más de 4000 procesamientos, entre dirigentes y militantes.[23]

La hipótesis de la integración e institucionalización comenzó a perfilarse como una tendencia importante a partir del gobierno de Kirchner, alimentada por el accionar de ciertas organizaciones sociales que vieron en el nuevo presidente la posibilidad de un retorno a las "fuentes históricas" del justicialismo. Por último, a la integración e institucionalización hay que sumar la estrategia de control y disciplinamiento, dirigida sobre todo hacia los grupos más movilizados: los que componen el Bloque Piquetero Nacional, CCC, el MIJD y las organizaciones independientes (MTR, MTD Aníbal Verón, Frente Darío Santillán, UTD de Mosconi), entre otros.

La política del actual presidente, Kirchner, consistió en poner en acto, simultáneamente, el abanico de estrategias disponibles para integrar, cooptar, disciplinar y/o aislar al conjunto del movimiento piquetero, discriminando entre las diferentes

corrientes y organizaciones. El balance que puede hacerse de sus dos primeros años de gestión indica que dichas estrategias han sido "exitosas", tanto en términos de integración e institucionalización de las corrientes afines, como de aislamiento de las corrientes opositoras. Para ello, el gobierno se apoyó en el estado de la opinión pública, fuertemente apuntalado por los grandes medios de comunicación, que no vacilaron en realizar una verdadera cruzada antipiquetera, teñida de un claro maniqueísmo cuando no de una antigua retórica sarmientina, que alienta la reactivación del fantasma de la barbarie (las clases peligrosas). En ese sentido, pese a su promesa de "no reprimir", el gobierno nacional impulsó la estigmatización de la protesta —contraponiendo la movilización callejera a la exigencia de "normalidad institucional"—, al tiempo que promovió la difusión de una imagen de la democracia, supuestamente "acosada" por las agrupaciones piqueteras. Sin embargo, en 2004, a partir de los hechos acaecidos en torno a la discusión del Código Contravencional de la ciudad de Buenos Aires, ocurridos el 16 de julio, se registró un giro importante en la política del gobierno, visible en la sistemática judicialización y agravamiento de las figuras penales impuestas a las y los detenidos, así como en el accionar de las fuerzas represivas en diferentes situaciones y contextos. (Gendarmería Nacional, grupos especiales, Policía Federal y policías provinciales)

Como veremos en el próximo capítulo, el resultado de esta pulseada política, que tuvo como escenario privilegiado la ciudad de Buenos Aires, fue tal, que hoy podemos afirmar que existe en la Argentina un peligroso consenso negativo contra las organizaciones piqueteras, que tiende a avalar sin cuestionamientos la criminalización del reclamo (agravamiento de las imputaciones penales infligidas a los manifestantes y encarcelamiento de manifestantes, que en marzo de 2005 alcanzaban la veintena), así como a soslayar la existencia de episodios represivos, desplegados en distintas situaciones y lugares, a partir de agosto de 2004.

Ahora bien, no es posible dejar de lado la contribución de los movimientos piqueteros a esta situación de aislamiento y deslegitimación. Para comenzar, el cambio de escenario político produjo un realineamiento de las organizaciones, así

como potenció el proceso de fragmentación organizacional. En realidad, el cambio en las oportunidades políticas, los diagnósticos y sucesivos realineamientos que produjo en el interior del espacio piquetero, terminaron por actualizar y poner en evidencia las diferentes matrices ideológicas de los movimientos. En función de ello, es posible diferenciar tres configuraciones mayores: las agrupaciones filopopulistas, las organizaciones ligadas a los partidos de izquierda y, por último, lo que podemos denominar como el espacio independiente de las nuevas izquierdas.

El primer realineamiento abarca a las agrupaciones de matriz nacional-popular,[24] las cuales desarrollaron una fuerte expectativa (re)integracionista, apostando a la reconstrucción del Estado nacional, desde un nuevo liderazgo, encarnado por el presidente Kirchner. Esta ala del movimiento piquetero se apoya en el clima ideológico que recorre el continente y alienta la idea de conformar un polo latinoamericano, que incluye experiencias como la de Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Kirchner en la Argentina, el Frente Amplio en Uruguay y, eventualmente, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales en Bolivia. Entre estas organizaciones se encuentran la FTV, así como la organización Barrios de Pie y grupos de reciente creación, tal el MTD Evita, que conformaron un frente piquetero oficialista. Dichos grupos no sólo sobreestimaron la capacidad innovadora del nuevo gobierno, sino que terminaron por resignar su autonomía, como lo muestra la subordinación fiel a las consignas —movilizadoras o desmovilizadoras— que imparte el gobierno.

Un segundo posicionamiento aparece ilustrado por las organizaciones ligadas a los partidos de izquierda (que incluyen sobre todo las diferentes variantes del trotskismo, además de una agrupación independiente, de estilo personalista y movimientista, como el MIJD), que impulsaron una lectura del gobierno de Kirchner en términos de continuidad con los anteriores ("más de lo mismo"), mostrando con ello serias dificultades para reconocer el cambio de oportunidades políticas. Esto condujo a que dichas organizaciones actualizaran hasta el paroxismo una estrategia centrada en la movilización callejera, como eje prioritario de la construcción y concientización política, cuyas consecuencias a mediano plazo se tornaron negativas tanto

en términos de capacidad de presión (hacia el gobierno), como de movilización (el desgaste inevitable de las bases sociales). En el límite, los partidos de izquierda dieron muestras de un dogmatismo ideológico y una creciente instrumentalización partidaria, que contribuyó activamente a cuestionar parte del capital político y simbólico del movimiento piquetero.[25]

Por último, dentro del espacio piquetero se destaca una tercera posición, suerte de nueva izquierda anticapitalista que, representada por diferentes organizaciones independientes, comprende un arco ideológico que va del guevarismo, la izquierda radical, hasta las formas más extremas del autonomismo. En este espacio heterogéneo, en el cual se encuentran muchas de las organizaciones históricas más innovadoras (como el Movimiento Teresa Rodríguez, y el Frente Darío Santillán, entre otros), los movimientos desarrollaron una acción más defensiva, buscando no caer en la lógica de acción política que proponía el gobierno. Al mismo tiempo, pese a sus divisiones internas, tendieron a privilegiar la problemática barrial, orientada hacia la creación de ámbitos de formación política y esferas de producción de nuevas relaciones sociales.

Así, pese a los logros efectivamente realizados en términos de autoorganización de los sectores populares, las actuales dificultades de las organizaciones piqueteras son numerosas y complejas. Entre otras, la fragilidad de las instancias de coordinación política, en un contexto de fragmentación del espacio piquetero, hoy compuesto por más de un centenar de organizaciones. Sin embargo, a la luz de los hechos acontecidos durante 2005, la coordinación entre los grupos constituye una condición necesaria, aunque no suficiente, para romper el cerco informativo e interpretativo, y menos aún, el "sentido común negativo" que se ha instalado en torno del fenómeno piquetero (que involucra la totalidad del arco piquetero, incluidas las corrientes oficialistas), en un creciente marco de aceptación de las distancias sociales instaladas en los 90 y, por ende, de desdibujamiento de las demandas de la ciudadanía.

No olvidemos, por otro lado, que los logros de las organizaciones piqueteras, en términos de autoorganización de los sectores populares, han sido significativos. Muchas agrupaciones han avanzado hacia experiencias de autogestión, que incluyen

desde la pequeña producción (talleres, panaderías, huertas), hasta la alfabetización y la salud. Asimismo, la apelación a formas de democracia directa viene impulsando no sólo la democratización de las relaciones sociales (y de género), sino que ha tenido una clara influencia en otras experiencias de autoorganización (asambleas barriales, fábricas recuperadas por los trabajadores). Sin embargo, estas dimensiones de la experiencia piquetera, menos "espectaculares" que la acción callejera, tienden a ser minimizadas por los medios de comunicación y, en gran medida, ignoradas por la opinión pública.

* * *

Cierto es que las organizaciones piqueteras contienen una fuerte presencia de componentes pragmáticos, que por momentos parece vincularlas más a una dinámica acorde a un "movimiento social urbano", de tipo reivindicativo, que a aquella propia de un movimiento social antagónico, portador de nuevas orientaciones socioculturales o un contraproyecto social. En realidad, la gran problemática no es precisamente la creación de nuevas formas de organización y relaciones sociales (pues hay que decir que en este plano la Argentina ha dado grandes muestras de creatividad en los últimos años), sino, sobre todo, la consolidación de estas nuevas prácticas políticas, en un contexto atravesado por la figura del militante social, por la multiplicación de demandas clientelares, en fin, por visiones instrumentales de la política.

Pese a ello, a partir de grandes dificultades y en medio del aislamiento y de la estigmatización, de límites coyunturales y/o estructurales, existen movimientos que en una lucha desigual, día a día, entre la ruta y el barrio, continúan generando prácticas novedosas y disruptivas, nuevas formas de reapropiación del territorio, de subjetivación y de recreación de los lazos sociales. Esto se refleja sobre todo en las organizaciones que se destacan por la trayectoria y solidez de sus núcleos históricos, así como también en aquellas que, aun siendo más recientes y en medio de las dificultades actuales, hacen hincapié en estilos de construcción democráticos, procurando dinamizar y multiplicar el trabajo en los barrios. Así, con todas sus dificultades y logros,

sus ambivalencias y complejidades, las organizaciones piqueteras continúan representando esa parte todavía no resignada de un mundo popular, cada vez más sumergido en la naturalización de las desigualdades sociales.

Capítulo 9

El retorno de la política a las calles (2002-2005)

La autonomía no es un cerco sino que es una apertura, apertura ontológica y posibilidad de sobrepasar el cerco de la información, del conocimiento y de la organización que caracteriza a los seres autoconstituyentes como seres heterónomos. [...] La autonomía significa alterar el sistema de conocimiento y de organización ya existente; significa constituir un propio mundo según otras leyes.

Cornelius Castoriadis,
Los dominios del hombre.

INTRODUCCIÓN

A fines de 2001, la Argentina se sumergió en una de la más graves y profundas crisis de toda su historia. A partir de la instalación del llamado "corralito", que limitaba el retiro de efectivo y la disponibilidad de los depósitos bancarios, en sólo un mes el país vivió una sucesión de hechos extraordinarios que daban cuenta de la magnitud del derrumbe: la anunciada ola de saqueos, que abarcó a gran parte del país; el decreto del estado de sitio; los masivos "cacerolazos" en la ciudad de Buenos Aires; la represión abierta y brutal, que tuvo un saldo de 40 muertos; la renuncia de De la Rúa y la cinematográfica huida en el helicóptero desde la Casa Rosada; en fin, la sucesión de cinco mandatarios presidenciales en sólo diez días...

Sin embargo, 2002 no fue solamente el año de la crisis y la descomposición social. En realidad, los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001 abrieron también un nuevo ciclo de movilización, marcado por el regreso de la política a las calles, de la mano de una multiplicidad de actores sociales. En medio de un clima de gran efervescencia social, los barrios, las calles, las plazas, los locales y fábricas recuperadas fueron dando forma a un nuevo espacio público, donde tuvieron lugar los primeros cruces e intercambios entre un conjunto heterogéneo de actores sociales movilizados. Las grandes ciudades, en es-

pecial, Buenos Aires, devinieron pues la expresión paradigmática de la recuperación del espacio público por parte de los sectores movilizados.

El 2002 fue así un año a todas luces *extraordinario*, con toda la carga ambigua del término, pues el país se sumergió en una crisis generalizada, al tiempo que fue descubriéndose como una sociedad profundamente movilizada que, entre la indignación y la reacción desesperada, buscaba recuperar su capacidad de acción, mediante la creación de lazos de cooperación y solidaridad, fuertemente socavados luego de una larga década de neoliberalismo.

En consecuencia, la Argentina, que hasta hacía poco tiempo había sido considerada como "el mejor alumno" de los organismos multilaterales de crédito, prontamente se erigió en una usina de acciones colectivas, en uno de los "laboratorios sociales" más novedosos y visitados de la periferia globalizada. No era para menos: el nuevo escenario otorgaría mayor visibilidad a los movimientos sociales existentes, sobre todo a las organizaciones piqueteras, muchas de las cuales fueron estableciendo vínculos con sectores de las clases medias movilizadas, al tiempo que comenzarían a interactuar e insertarse en las redes promovidas por los movimientos críticos de la globalización neoliberal.

Asimismo, esta apertura promovió la emergencia y expansión de otras formas autoorganizadas de lo social, como las asambleas barriales, las cuales se constituyeron como las legítimas herederas de las jornadas de diciembre de 2001, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en ciertos lugares del Conurbano Bonaerense. En este contexto de fuertes movilizaciones también fueron adquiriendo un rol destacado las fábricas quebradas y recuperadas por sus trabajadores. En efecto, aunque ya se habían dado diferentes casos en la década del 90, las fábricas recuperadas tendrían un poder de multiplicación y una mayor visibilidad a partir de diciembre de 2001. Recordemos que en el marco de la recesión económica de fines de los 90 y, sobre todo luego de la crisis de 2001, no fueron pocos los empresarios que realizaron un vaciamiento de las empresas, mientras que otros abandonaron la actividad económica, manteniendo los activos fijos, pese al cierre de las fábricas. Ante esta

situación, los trabajadores eligieron el único camino posible para conservar la fuente de trabajo, a saber, resistir ocupando las instalaciones y poniendo en producción las empresas.

Asimismo, se expandieron los colectivos culturales y de información alternativa. Al igual que en el caso anterior, si bien muchos de éstos ya existían, a partir de 2001, no sólo se multiplicaron, sino que desarrollaron nuevas formas de intervención político-cultural, a la vez expresivas y comunicativas, sobre todo en el marco de las asambleas barriales y las fábricas recuperadas. Como ya hemos anticipado en otro capítulo, la proliferación de este tipo de colectivos puso de manifiesto hasta qué punto la cultura constituye un eje de reconstrucción de la experiencia individual y, a la vez, una expresión de resistencia colectiva, sobre todo para las clases medias movilizadas.

Por otro lado, el establecimiento del "corralito" y la posterior salida del régimen de convertibilidad, dieron origen a una serie de movilizaciones protagonizadas por grupos de ahorristas perjudicados por el congelamiento, la pesificación y la reprogramación de los depósitos producidos entre fines de 2001 y enero de 2002. Las diversas asociaciones que se fueron constituyendo desde comienzos de 2002 —tanto en el nivel nacional como en el regional y local— protagonizaron una serie de protestas virulentas contra las instituciones bancarias (sobre todo aquellas de capital extranjero) que se negaban a restituir los depósitos, contra las autoridades públicas que dictaron o mantuvieron las medidas y, por último, contra el Poder Judicial (en sus distintas instancias), al cual llamaron a pronunciarse sobre la legalidad y constitucionalidad de las normas en cuestión.

En fin, a este cuadro hay que agregar la gran expansión de las redes del trueque, producto del colapso de la economía formal, así como la súbita visibilidad de los cartoneros, cuya sola presencia en la ciudad venía a refrendar, de una vez por todas, la entrada del país en la extrema pobreza latinoamericana.

Conscientes de que no podremos abordar la totalidad de estas experiencias, hemos decidido detenernos sólo en algunas: el movimiento de asambleas barriales, los colectivos culturales y las organizaciones de desocupados. Sin duda, un estudio completo debería abarcar también los grupos de ahorristas, sobre los cuales existe muy poca investigación realizada,[26] así como la

experiencia de las fábricas recuperadas, un proceso sin duda abierto y multidimensional, para el cual ya existen numerosos textos y abordajes.[27]

Analizaremos entonces en primer lugar las asambleas barriales; su evolución y dificultades; para detenernos luego en un balance acerca del legado de éstas y la significación de los colectivos culturales. En fin, a partir del cambio de escenario político, en 2003, buscaremos explicar las razones y el alcance del actual proceso de estigmatización que sufren las organizaciones de desocupados. Cerraremos este último capítulo con una breve referencia a las movilizaciones sociales emergentes.

Las asambleas barriales: una experiencia política "fuerte"

Poco tiempo después de los grandes "cacerolazos" de fines de diciembre de 2001, los actores movilizados comenzaron a reunirse en asambleas. Hacia mediados de enero de 2002, esta nueva práctica asociativa fue multiplicándose, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en ciertos lugares del Conurbano y ciudades del interior. En este sentido, las asambleas barriales fueron las legítimas herederas de aquel mandato destituyente ("que se vayan todos"), que se había expresado en las jornadas de diciembre. Ciertamente, esta consigna revelaba el alcance de la ruptura producida en términos de representación y concepción de la política, y el desplazamiento hacia nuevas formas de protagonismo, constituidas a distancia del mundo de la política institucional. Sin embargo, la crisis y las movilizaciones que le siguieron fueron también portadoras de demandas constituyentes, que buscaban articular la organización social con la exigencia de fundar una nueva institucionalidad, mediante una democracia directa y participativa.

La significación de las asambleas barriales puede leerse en diferentes planos. De manera general, las asambleas barriales expresaron la emergencia de un nuevo protagonismo, a la vez indisolublemente político y social, que apuntaba a quebrar el fatalismo discursivo-ideológico de los 90. Como corolario, las asambleas trajeron consigo la promesa de la creación de espacios de solidaridad y de confianza, a partir de los cuales (re)cons-

truir los lazos sociales, tan socavados y mercantilizados tras una década de neoliberalismo.

En segundo lugar, las asambleas barriales fueron conformándose como un espacio de organización y de deliberación que se pensaba en ruptura con las formas tradicionales de representación política y en favor de otras formas de autoorganización de lo social, con aspiraciones a la horizontalidad y proclives al ejercicio de la acción directa. En este sentido, retomaron y tendieron a radicalizar gran parte de las prácticas políticas y autoorganizativas desarrolladas sobre todo por los movimientos de desocupados durante la segunda mitad de los 90.

En tercer lugar, estas nuevas experiencias reposicionaron a las clases medias de la ciudad de Buenos Aires en un lugar relevante de la escena política. En efecto, las asambleas barriales surgieron también como un espacio de reconstitución de la identidad política de las clases medias, en una tentativa que reconocía como punto de partida, sin embargo, su fragmentación y heterogeneidad actual, en contraposición a cierta homogeneidad cultural y mayores perspectivas de integración social que las del pasado.

Por último, las asambleas barriales fueron generando importantes espacios de cruce, encuentro y discusión entre sectores sociales diferentes, que carecían de vinculaciones previas. Esta experiencia de cruce social fue doble, tanto hacia adentro como hacia afuera del propio movimiento. Así, hacia adentro, la experiencia daba cuenta de un grado de heterogeneidad social importante. En efecto, el espacio reunía comerciantes, empleados y profesionales, del ámbito público y privado, ligados a la administración, la educación y la salud; muchos de ellos empobrecidos, y algunos con alto grado de inestabilidad laboral; así como un conjunto de desocupados de diferentes procedencias, además de jóvenes con expectativas radicales, muchos de los cuales realizaban en este espacio su primera experiencia política. A esto hay que añadir las diferencias interbarriales, pues mientras que en algunos lugares había una clara presencia de clases medias profesionales, cuyo protagonismo aparecía asociado a la vida de la rica y cosmopolita ciudad de Buenos Aires, en otros el perfil dominante eran los jóvenes y sectores medios empobrecidos. En fin, como primer corolario, las asambleas

emergieron, grados de heterogeneidad social mediante, según los barrios, como un ámbito de cruce entre actores sociales con diferentes horizontes y oportunidades de vida.

Por otro lado, hacia afuera, las asambleas posibilitaron la emergencia de nuevos espacios de articulación (sobre todo, en los primeros meses de 2002), donde se llevaron a cabo intensos debates en torno al significado de la política. No olvidemos que la consigna "que se vayan todos, y que no quede ni uno solo" tuvo un fuerte carácter destituyente que anunciaba de manera unívoca el final de todos los contratos (político, económico, social), poniendo en entredicho la verdadera representatividad del sistema institucional, a través de la acción directa y de la democracia asamblearia.

Ahora bien, a la hora de caracterizar positivamente el lugar de la política, no todos los vecinos convertidos en "asambleístas" coincidieron en las definiciones acerca del vínculo político ni tampoco acerca del alcance del cuestionamiento al sistema de representación. Así, al calor de los debates, fueron cristalizando algunos núcleos de tensión cuyo desarrollo conflictivo condujo en la mayor parte de los casos a una crisis y estallido del movimiento.

En términos generales, podríamos afirmar que rápidamente se perfilaron dos concepciones acerca del vínculo político. Para ilustrar la manera como las diferentes experiencias piensan el vínculo político, permítasenos utilizar libremente una imagen del filósofo Simmel (1986), considerado el pensador de la "disociación" por excelencia, y que creemos ilustra los aspectos más novedosos y extremos de este proceso: nos referimos a las imágenes del "puente" y de "la puerta". Digámoslo brevemente: mientras que "el puente" contiene la idea de vínculo y ligazón, a través del reconocimiento del movimiento de separación como momento instituyente, la alegoría de "la puerta" implica la afirmación de la escisión y conlleva la imagen del repliegue, del cierre, aun si parte de una apertura originaria. Así, a través de la figura del "puente" se vislumbraban aquellas posiciones de centro y centro-izquierda que, en medio del desencanto, postulaban la necesidad de recomponer del sistema político, a través de una democracia más participativa, y apuntaban por ello a recuperar los espacios del Estado. En cambio, la

imagen de la "puerta" alude a aquellas posiciones que postulaban la separación con respecto al sistema político representativo, en sus diferentes modalidades, a través de la multiplicación de formas de democracia directa.

El desarrollo de la dinámica asamblearia puso al descubierto las diferentes concepciones del vínculo político en pugna. En efecto, con el correr de los meses, estas tensiones y antagonismos fueron enmarcándose dentro de un eje mayor, que señalaba la oposición entre la demanda de autonomía y la exigencia de heteronomía política. Originariamente, la demanda de autonomía expresaba un rechazo generalizado hacia la clase política y sus expresiones institucionales. En esta definición negativa confluían tanto vecinos independientes, partidarios de una reforma del sistema institucional (el puente), como aquellos proclives a un compromiso más radical, pero que no se identificaban con ninguna organización partidaria ni sindical (la puerta). Sin embargo, y aun desde una perspectiva defensiva, la autonomía asamblearia fue emergiendo como un fuerte principio organizativo y práctico, visible en el constante esfuerzo por "mantener a raya" y controlar las tentativas hegemonizadoras, incansablemente protagonizadas por los militantes de los partidos de izquierda (en especial, los provenientes de las diferentes vertientes del trotskismo). Asimismo, esto apareció reflejado en los espacios de articulación interasamblearios que se constituyeron en los primeros tiempos y que rápidamente fracasaron.

Pero, al poco tiempo, en la medida en que fue enfrentándose a otros dilemas, la demanda de autonomía se fue erigiendo en una dimensión estructuradora del movimiento: por ejemplo, a la hora de definir los vínculos con el Estado (sobre todo, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires) y, más aún, con el orden legal existente, a partir de las ocupaciones de locales abandonados. En efecto, hacia mediados de 2002, estas discusiones encontraron una inflexión importante al momento de decidir cómo sostener las actividades asamblearias, sin contar con un local propio o soportes partidarios. Se plantearon varias alternativas: continuar sesionando en el espacio público (la calle); dar un paso "más allá" y avanzar en la toma de un local desocupado (lo cual suponía la aceptación de determinados costos, en relación con la Justicia —sumarios judiciales, posibilidad

de desalojos violentos—); o bien aceptar el ofrecimiento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para continuar funcionando en los centros de gestión y participación —CGP— (con el consiguiente riesgo tan temido de la institucionalización, y en el extremo, la cooptación).

Las respuestas que cada asamblea vecinal de la ciudad de Buenos Aires dio a estos dilemas están lejos de expresar un patrón único. Pero lo cierto es que, en casi todos los casos, el despliegue y la aparente resolución de estas tensiones originarias contribuyó a pautar los límites mismos del movimiento. Así, un año después de las jornadas de diciembre, el estallido de estos dilemas mostró un escenario muy diferente al de los primeros meses: luego de feroces pujas, algunas asambleas habían sido hegemonizadas por ciertos partidos de izquierda; en otras, los partidos habían encontrado su propio "corralito" frente a la resuelta afirmación de autonomía, y las asambleas habían adoptado una dinámica similar a la de ciertos MTD, o bien se habían orientado hacia un tipo de movimiento más socio-cultural; por último, una porción importante terminó por disolverse, tras encontrar escollos insuperables no sólo en las disputas ideológicas internas, sino también en la imposibilidad de dotar de cierta eficacia política a las demandas de creación de una nueva institucionalidad.

En consecuencia, los debates de índole política acerca de la representación y las formas de la democracia fueron reemplazados por otras actividades, centradas en la urgencia de la crisis y la necesidad de la solidaridad material. Algunas experiencias de vinculación resultaron emblemáticas, como la campaña de vacunación de cartoneros, llevada a cabo por una de las asambleas más activas de la zona norte de la capital. Las ollas populares y los merenderos se multiplicaron, sobre todo a partir de la toma de edificios que varias asambleas de la capital llevaron a cabo, entre junio y septiembre de 2002. Así, la apuesta por el desarrollo de vínculos con los sectores vulnerables tendió a actualizar una cierta concepción acerca del rol intermedio o "articulador" de las clases medias, aunque también trajo al centro del debate la discusión en torno al carácter asistencialista o solidario de la acción. "Hacia afuera", hubo una multitud de acciones de solidaridad política, tanto

en apoyo a los trabajadores desocupados como de los trabajadores de fábricas recuperadas.

Pero, sin duda, uno de los rasgos fundamentales que emergió de la desigual experiencia asamblearia fue la autonomía. Al calor de las discusiones y prácticas, paradójicamente a través del mismo proceso de fragmentación y debilitamiento del movimiento asambleario, la demanda de autonomía se fue precisando, enriqueciéndose, hasta adquirir un espesor indudable y constituirse, en definitiva, en una suerte de variable de configuración política. En resúmen, desde el punto de vista político, las asambleas mostraron una mayor resonancia con ciertas concepciones de izquierda, cuyas claves conceptuales residen tanto en la afirmación de la autonomía, como en el desarrollo de redes horizontales y flexibles, refractarias a cualquier instancia articulatoria superior.[28]

EL FINAL DE LOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS

Entre diciembre de 2001 y abril de 2003 —fecha de las elecciones presidenciales— se sucedieron varios hechos importantes que pusieron de relieve el alto grado de fragmentación, así como la negativa predisposición a la articulación entre los distintos actores sociales movilizados, muchos de los cuales sucumbieron a las pugnas políticas o partidarias, cuando no a la feroz competencia de liderazgos. Poco antes de las elecciones generales, en febrero de 2003, el gobierno realizó una fuerte embestida contra los actores sociales movilizados: desalojos de espacios recuperados por las asambleas barriales y de fábricas gestionadas por los trabajadores (Brukman), y encarcelamiento de conocidos dirigentes piqueteros del interior del país. Estas acciones represivas apuntaban tanto a instalar la idea de que las elecciones generales venían a clausurar un ciclo social y político, así como pretendían borrar las "marcas" visibles de la autoorganización y autogestión de la sociedad.

Lo novedoso era, sin embargo, que esta arremetida del gobierno se realizaba en el marco de una indiferencia cada vez mayor de parte de amplios sectores sociales hacia las movilizaciones. A principios de 2003, todo parecía indicar que el es-

pacio de resonancia abierto entre los movimientos piqueteros y las clases medias progresistas, luego de los asesinatos del Puente Pueyrredón (26 de junio de 2002), comenzaba a estrecharse de manera vertiginosa. Pese al descrédito de los partidos tradicionales, una demanda de "normalidad institucional" iría ganando las voces de aquellos que unos meses atrás habían acompañado las movilizaciones, exigiendo "que se vayan todos". Asimismo, una suerte de hastío ciudadano frente al corte de calle como forma de protesta, fue tomando mayor visibilidad. En fin, las razones son múltiples: para algunos resulta evidente que tanto el divisionismo como la falta de cooperación interna entre los actores movilizados indicaban una tendencia hacia el encapsulamiento y la autorreferencialidad que antes se había objetado a la repudiada "clase política". Otro dato no menor es que, pese a su debilidad, el gobierno provisional de Duhalde supo construir las alianzas políticas y económicas necesarias para controlar una situación social altamente explosiva, y pudo así arribar, a mediados de año, a una relativa estabilidad macroeconómica.

Por otro lado, a diferencia de 1999, los resultados de la elección presidencial, en abril de 2003, indicaron un bajo porcentaje de ausentismo y de votos en blanco. Además, dieron cuenta de que aun las bases sociales de las corrientes piqueteras que habían llamado al voto en blanco o "programático", se habían inclinado por los candidatos menos conservadores del peronismo, entre ellos, el actual presidente, Kirchner. Por último, aquellos partidos de izquierda que, como las diferentes variantes del trotskismo, combinaron el llamado insurreccional con la estrategia electoral, terminaron cosechando uno de los peores resultados de su historia. En suma, las elecciones presidenciales colocaron un gran interrogante acerca de la "eficacia" de las intensas movilizaciones de 2002, en su cuestionamiento a la representación política, y también pusieron de manifiesto un escenario político amenazado de ahora en más por una suerte de "peronismo infinito", fortalecido esta vez por el colapso de los restantes partidos tradicionales.

Así, podrán aventurarse diferentes hipótesis e interpretaciones sobre lo ocurrido en aquel año extraordinario que fue 2002, marcado por una cierta resonancia entre clases medias movili-

zadas y sectores populares organizados. Podrá analizarse una y mil veces la manera como las asambleas barriales surgidas sobre todo en la Capital Federal comenzaron a declinar, atrapadas en una lógica de confrontación entre las tendencias autonomistas y las presiones de los partidos de izquierda por hegemonizar el proceso. Pero lo cierto es que los actores movilizados, asambleístas y piqueteros, no lograron dotar de contenidos precisos a las demandas de creación de una nueva institucionalidad que partía de la sociedad. Con el correr de los meses, esa percepción intensa del tiempo que había abierto paso a una nueva situación, y era alimentada por la esperanza de un cambio mayor, se vio comprimida y reducida a una perspectiva más bien cortoplacista de la política, lo cual sin duda tuvo consecuencias importantes tanto en el estilo de construcción como en la lógica de acción de las organizaciones. Esta perspectiva fue ilustrada muy especialmente por los partidos de izquierda, que desarrollaron una retórica triunfalista, sin advertir que la apelación a un nuevo levantamiento insurreccional ("Por un nuevo argentinazo"), como ya había sucedido con la consigna "que se vayan todos", iba paulatinamente vaciándose de sentido y cristalizando en una suerte de pulsión repetitiva. En realidad, el primer aniversario de aquellas jornadas, todavía recorrido por la fuerza de las consignas ("piquetes más cacerolas"), marcó menos el clímax que el límite y el cierre de la situación extraordinaria.[29]

En fin, es sabido que toda gran crisis está recorrida por demandas ambivalentes y hasta contradictorias. La crisis de 2001, mucho más que la de 1989, englobó la totalidad de la vida política, social, económica y hasta cultural. También conllevó una demanda doble: por un lado, implicó una apelación a la creación de una nueva institucionalidad, que daba prioridad a la autoorganización de lo social, a distancia del mundo institucional; por otro lado, trasmitía un llamado a la normalidad, que podía entenderse como una demanda de intervención estatal (el regreso del Estado) para garantizar el orden, la ejecutividad y la seguridad. Finalmente, la exigencia de normalidad se fue imponiendo como corolario, en un marco de repliegue de los actores movilizados, hasta ir desembocando en una lectura unilateral de lo efectivamente ocurrido. Pronto, demasiado pronto, algunos olvidarían que el año 2002 fue el de la recuperación del protagonismo, de la capacidad de acción, a través del retorno de la política a las calles, para retener sobre todo el recuerdo del caos y del gran cataclismo. Así, aquel año extraordinario logró perder la ambigüedad —y el "aura"— que lo había caracterizado, para reducirse a una sola y posible lectura, perjudicando notoriamente la percepción de los grupos movilizados.

En coincidencia con esta demanda, Kirchner buscó encarnar la nueva expectativa, esto es, la de encontrar un principio de estabilidad después del cataclismo vivido. No es extraño que, frente al déficit de legitimidad con el cual fue ungido (sólo el 20% de los votos), se encaminara a articular aspectos de esa demanda (como aparece explicitado en la consigna "Por un país en serio"), todo ello en un clásico estilo personalista, que vuelve a mostrar la productividad de los giros y las conversiones político-ideológicos del peronismo. Así, la dirección que tomó su gestión lo fue invistiendo de una creciente legitimidad, a partir de gestos políticos cargados de alto valor simbólico: el descabezamiento de las cúpulas militares, la política de derechos humanos respecto del terrorismo de Estado de los 70, las primeras y tensas negociaciones con el FMI, en fin, la depuración de la Corte Suprema de Justicia. Por ello mismo, no es extraño tampoco que para todo un conjunto de las clases medias, los actores sociales movilizados, sobre todo los piqueteros, ingresaran en el dominio de "la anormalidad", y comenzaran a ser vistos más como un efecto perverso de una determinada política económica que como la expresión de nuevas formas de hacer política.

En fin, el cierre de los tiempos "extraordinarios" tuvo su confirmación con el ascenso de Kirchner al gobierno. Cierto es que la recomposición —aunque relativa, precaria y transitoria— del sistema institucional estaba lejos de dar cuenta de la formación de un nuevo bloque dominante, pero en todo caso todo parecía indicar que la crisis de hegemonía quedaba atrás y que aun si las instituciones y, sobre todo, el modelo socioeconómico permanecían igual, la escena política había cambiado.[30]

EL LEGADO DE 2002: *ETHOS* MILITANTE Y COLECTIVOS CULTURALES

Una vez reconocidas las dificultades —y límites— que sin duda marcaron al movimiento asambleario, una vez aceptado el cambio en las condiciones políticas, nada sería más fácil —pero tampoco más apresurado— que extraer una serie de conclusiones negativas o fatalistas acerca de lo efectivamente ocurrido durante 2002. En realidad, más allá de las altas expectativas que el ciclo de movilización abierto en diciembre de 2001 despertó en ciertos sectores sociales y en numerosos observadores externos, el saldo acumulado es sin duda positivo y ello pese a todas las dificultades señaladas.

Cierto es que las asambleas barriales estuvieron lejos de constituir la matriz de una experiencia unificadora. Atravesadas por núcleos de tensión y una serie de demandas ambivalentes, tendieron a volcar gran parte de su energía política en una acción propiamente destituyente. En muchos casos, la defensa de la diversidad se hizo en aras de la fragmentación, y la multiplicación de redes difusas y flexibles, en detrimento de toda posibilidad de verdadera articulación política. El resultado que muchos esperaban, esto es, el surgimiento de un nuevo sujeto político, finalmente no tuvo lugar. Y con ello, pareció diluirse la posibilidad de creación de una nueva institucionalidad.[31]

Con todo, nadie podría desestimar los logros de esta nueva experiencia, pues más allá de las defecciones, de los repliegues y las dificultades, parte de lo efectivamente sedimentado del proceso asambleario radica en la emergencia de un nuevo compromiso militante, orientado hacia el cruce social y la multipertenencia. En este sentido, al igual que en otros países de América Latina y de Europa, las asambleas barriales de la ciudad de Buenos Aires han venido a confirmar la gestación de un nuevo modelo de militancia, marcado por la acción directa, la democracia por consenso y la construcción de colectivos y estructuras de organización flexibles y antiburocráticas, de carácter local o barrial. Otro elemento relevante se refiere a la incipiente emergencia de lazos y redes que recorren y articulan tanto los movimientos sociales al interior del espacio latinoamericano como a estos últimos dentro de redes globales.

Por otro lado, uno de los legados más relevantes del período es la visibilidad y multiplicación de colectivos culturales. Cierto es que en nuestro país los grupos de carácter cultural comenzaron a desarrollarse en la segunda mitad de los 90, como es el caso del Grupo de Arte Callejero —GAC— y Et-cétera. Algo similar podría decirse de los grupos de cine militante —como Cine Insurgente y grupo Alavio— o de Red Acción, una agencia de noticias alternativa nacida en Avellaneda, en 1997, hoy Anred. Sin embargo, no fue hasta diciembre de 2001, cuando el país ingresó en un período marcado por intensas movilizaciones sociales, que estos grupos se potenciaron, tornándose visibles en un número creciente de experiencias: colectivos de información alternativa (como La Vaca, Indymedia Argentina, Agencia Rodolfo Walsh, La Fogata, Cono Sur), grupos artísticos de lo más variados, como el Taller de Serigrafía Urbana o Arte Arde: en fin, nuevas agrupaciones piqueteras de carácter más local, con fuerte tendencia a constituirse en colectivos autónomos.

La participación de estos colectivos culturales en el proceso asambleario fue muy relevante, pues crearon nuevos sentidos políticos y culturales, al tiempo que asumieron el rol de reproductores de los acontecimientos, en un escenario de clara intensificación de los conflictos sociales. El marco propicio para los cruces sociales y las intervenciones de estos grupos fueron las asambleas barriales, las movilizaciones piqueteras y otras experiencias puntuales, como el caso de la fábrica textil recuperada Brukman, en la ciudad de Buenos Aires.

Así, por ejemplo, un mes después de las jornadas de diciembre de 2001, nació Argentina Arde,[32] un espacio asambleario de coordinación de colectivos de documentación e información, cuya tarea se abocó a la generación de acciones y formas de intervención que "contribuyeran a la difusión de visiones alternativas, compartiendo experiencia y socializando las luchas aisladas".[33] Aunque la experiencia fue breve, la constitución de este espacio abrió la posibilidad de reflexionar y poner en práctica una concepción diferente acerca de la función de los medios de comunicación. Así, los integrantes de Argentina Arde se consideran continuadores de una tradición militante, que se reconoce en las obras del cinesta Raymundo Gleyzer y del escritor Rodolfo Walsh, para quienes la contrainformación era una he-

rramienta más de transformación social. En razón de ello, los colectivos de contrainformación no sólo se proponen romper el cerco informativo instalado por los grandes medios de comunicación y dar visibilidad a las nuevas formas de protesta y autoorganización, sino también formar en el uso de esas mismas herramientas a las propias organizaciones de base.[34] Actualmente, luego de muchos avatares y de un gran desarrollo del campo, los sectores que han venido bregando por la formación de un espacio social y político de confluencia de los medios alternativos, se han nucleado en el Foro de Medios Alternativos (Fodema, 2004).

Por otro lado, los grupos de arte político se hicieron visibles mediante numerosas intervenciones (como la Semana Cultural, en Brukman, 2002). Si bien no contaron con una experiencia de coordinación común, el Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) brindó la ocasión de un debate acerca de las dimensiones del nuevo arte político ("Arte light o Arte Rosa Luxemburgo", discusión reproducida por la revista *Ramona*, N° 33). La nueva trama inspiró a grupos muy diferentes, desde Belleza y Felicidad —una expresión de la vanguardia artística durante los 90—, algunos de cuyos integrantes impulsaron, junto con el escritor Washington Cucurto, un proyecto editorial que trabaja con cartoneros (Eloísa Cartonera), hasta el Taller Popular de Serigrafía, que suele realizar intervenciones en asambleas barriales y MTD de la ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, los grupos culturales de la Argentina presentan fuertes similitudes con los colectivos surgidos en los últimos años en otras latitudes, que hoy forman parte de las nuevas redes de los movimientos "alterglobalización". Dichos colectivos se constituyen como "grupos de afinidad", construidos sobre la base de competencias compartidas, antes que por una "experiencia común de socialización"[35] (Mac Donald:2003). En este sentido, lo propio de estos grupos (los cuales constituyen sin duda una de las dimensiones más novedosas de los movimientos antisistema), es la afirmación de la subjetividad, a través de la acción directa, y el rechazo a la creciente mercantilización de la vida social. Sin embargo, a diferencia de sus pares europeos y norteamericanos, en la Argentina —como en otros países de

América Latina— no siempre la acción de estos colectivos se agota en la dimensión cultural-expresiva. En realidad, en muchos casos la dimensión experiencial aparece subordinada o estrechamente vinculada a los avatares de las luchas político-sociales, en el marco del desarrollo de relaciones de afinidad y redes de solidaridad con otras organizaciones sociales movilizadas, muchas de las cuales se hallan constantemente amenazadas por la represión (piqueteros, trabajadores de fábricas recuperadas, poblaciones indígenas, minorías sexuales, entre las más importantes). Así las cosas, la radicalización expresiva, lejos de autonomizarse o perder de vista el adversario, tiende a redefinirse en el marco de las luchas cotidianas llevadas a cabo por otros movimientos u organizaciones. En la actualidad, pese al declive y reducción del movimiento de asambleas, muchos de estos grupos continúan generando redes y foros de intercambio y de comunicación e intervenciones artísticas en diferentes tramas sociales. A su vez, no son pocos los que han internacionalizado y globalizado su experiencia, a través del contacto con otras organizaciones y espacios de resistencia, tanto en América Latina como en Europa.

Por último, bien vale tener en cuenta que las movilizaciones han fortalecido una dinámica recursiva que apunta —aunque de manera muy incipiente— a erosionar las relaciones tradicionales de género: así, las mujeres, que desde el inicio tuvieron un protagonismo central, por ejemplo, dentro del movimiento piquetero, comenzaron a aventurarse en el campo de la representación, tratando de superar la trampa de la autolimitación femenina, así como los importantes dispositivos patriarcales, tan presentes en el universo popular.

Ambivalencias y complejidades de las organizaciones piqueteras

A esta altura, creemos necesario volver sobre las organizaciones piqueteras, a fin de analizar algunas de las consecuencias de la puja política entablada con el gobierno de Kirchner, a partir de 2003. En realidad, para encarar con la debida seriedad este tema será necesario volver sobre algunos de los rasgos comunes al conjunto de las organizaciones de desocupados.

En varias oportunidades hemos afirmado que, en nuestro país, una de las mayores experiencias de resistencia al neoliberalismo nació en los márgenes, en los límites, en el extremo de la descolectivización masiva. En efecto, fueron los desocupados, aquellos que estaban fuera del sistema, los que desde el fondo de la descomposición social fueron gestando nuevas formas de lucha y autoorganización territorial. Sin embargo, una vez dicho esto, es necesario recordar que este proceso tiene como telón de fondo un importante pasado de integración social, asociado a la vigencia de los derechos sociales.[36] Por ello mismo, la experiencia argentina termina por ser muy ambivalente, pues si bien es cierto que en la práctica nace en el extremo de una descolectivización acelerada, en los discursos recoge diferentes tradiciones y memorias, sobre todo la asociada a la tradición nacional-popular, que alimenta la esperanza de volver a ser lo que se era, a saber, un "pueblo trabajador".

Así, pese a que mucho se ha dicho sobre la naturaleza del nuevo actor, la mayor parte de las categorías empleadas traicionan la complejidad del sujeto. En realidad, para comprender la realidad emergente del proceso social consumado en los 90 es necesario abandonar las viejas categorías sociopolíticas (así como las visiones normativas) y partir de una lectura que privilegie una doble mirada, esto es, que tenga en cuenta tanto la conformación de las bases sociales como la dinámica organizativa interna. Ni pueblo o clase trabajadora como antaño, tampoco ejército industrial de reserva, ni nuevo lumpemproletariado, las bases sociales que componen las organizaciones piqueteras presentan un carácter multiforme y heterogéneo, que suma y yuxtapone nueva y vieja informalidad con tradición obrera y militantismo político; rabia juvenil y con talante antirrepresivo y anticapitalista, protagonismo femenino con trabajo comunitario.

En suma, vistas "desde abajo", las organizaciones piqueteras son muy ambivalentes, con diferentes inflexiones políticas, que van de la demanda de reintegración al sistema, a la afirmación de una radicalidad anticapitalista. A la vez, es un fenómeno fuertemente plebeyo, proclive a la acción directa, que apunta a la afirmación de lo popular, en cuanto ser negado, excluido y sacrificado en aras del modelo neoliberal.

Por otro lado, más allá de los planteos estratégicos y de sus diferentes dimensiones, las organizaciones piqueteras son estructuras organizativas con diferentes niveles de participación. En este sentido, existe claramente un núcleo en el que se sitúan los voceros o referentes (pues, más allá de los estilos de construcción y la flexibilidad de las organizaciones, todo movimiento posee dirigentes); un primer círculo, en donde se hallan militantes y cuadros intermedios (en general, delegados barriales), que comparten la visión estratégica del movimiento y los estilos de construcción política; luego, una serie de anillos o círculos más alejados del centro, en los cuales se sitúan otros militantes y simpatizantes, con menor nivel de involucramiento y participación, y, por último, una gran periferia, constituida por familias completas que se acercan no por una cuestión de convicciones ideológicas, sino en función de sus necesidades más elementales. El gran desafío de los movimientos, esto es, de aquellos que componen el núcleo organizativo y el primer círculo de militantes (cuya identificación, hay que subrayar, es estrecha, en función del fuerte anclaje territorial del movimiento) es, sin duda, la politización de esa amplia periferia, suerte de actualización de la figura del "humilde" o "el pobre", al cual antaño se dirigía el discurso y la práctica del peronismo histórico, en su versión "evitista".

Gran parte de las ambigüedades, dificultades y desafíos políticos residen en la manera como se articulan y relacionan estos diferentes niveles organizacionales con lo que hemos llamado "la periferia". Ello ha venido alimentando una serie de interrogantes, dudas y cuestionamientos que ponen en tela de juicio tanto la naturaleza de la acción como el horizonte político de las organizaciones. Más aún, sobre estas dificultades se han montado diferentes lecturas que recorren hoy la sociedad argentina y que están en la base de un fuerte discurso criminalizador. Lo particular de dichas críticas es que apuntan a negarle el carácter de movimiento social "auténtico" o bien, a despojarlo de su dimensión específicamente política. Podemos sintetizar dichas críticas en tres argumentos: la hipótesis miserabilista, la hipótesis de la manipulación política y la crítica normativa.

En primer lugar, la hipótesis miserabilista parte de la idea de que la política no puede nacer del reino de la necesidad. En

consecuencia, tiende a destacar el carácter defensivo y reivindicativo de la acción piquetera, circunscribiendo, de esta manera, sus logros y objetivos. Este argumento suele combinarse con otro, más ortodoxo, que subraya las "limitaciones" propias de las bases sociales (consideradas "lúmpenes"), para explicar tanto su escasa capacidad de interpelación social como los obstáculos en el proceso de formación de un verdadero movimiento social. En segundo lugar, siguiendo esta línea interpretativa, no son pocos los que instalan en la base del cuestionamiento la hipótesis de la manipulación política, aludiendo a la "injerencia" de partidos y/o dirigentes (de izquierda), ideologizados, cuando no provenientes de otros sectores sociales.

Es cierto que las organizaciones piqueteras nacen como una respuesta defensiva frente a los efectos destructivos del modelo neoliberal, en medio de un marco de precariedad e indigencia (la desocupación y el hambre). Pero estas condiciones iniciales no implican necesariamente una suerte de límite ontológico para la política, como señalan algunos invocando el pensamiento de Hanna Arendt (1988 y 1996). En realidad, sólo aquellos que —desde el punto de vista teórico— adhieren a una visión miserabilista de los sectores populares, en desmedro de la complejidad de los procesos sociales, pueden concluir que el destino de un movimiento originado en el mundo de las necesidades básicas sea una suerte de acción defensiva, reivindicativa, que no puede alcanzar la "verdadera" dimensión de la política (leída ésta como autodeterminación y como creación de mundos alternativos). Sin embargo, las condiciones socioestructurales nos advierten sobre el alto grado de fragilidad de las construcciones colectivas, sobre la vulnerabilidad del lazo social solidario, en fin, sobre las dificultades de consolidación de las nuevas prácticas políticas en un medio permanentemente atravesado tanto por los llamados al individualismo como, sobre todo en la actualidad, por las diversas formas de clientelismo existente.

En tercer lugar, en los últimos tiempos tiende a instalarse una mirada normativa, que coloca el acento en la exigencia de "lo políticamente correcto". Esta visión simplificadora está difundida en ciertos sectores de las clases medias progresistas (ONG y sectores académicos) y, como ya ha sucedido en otras épocas,

suele proyectar las propias expectativas políticas —y normativas— sobre las organizaciones piqueteras (exigiéndoles que hagan lo que se espera de ellas: para el caso, que se comporten de manera "políticamente correcta", siguiendo prolijamente los manuales de ONG, expresándose en un lenguaje "ideológicamente correcto" y, de ser posible, renunciando a la acción no institucional). En este sentido, lo que evidencia esta visión es la dificultad de elaborar o pensar la complejidad actual de las organizaciones de desocupados, que son, como hemos indicado, movimientos impuros, plebeyos y orientados a la acción directa. Como consecuencia de ello, esta mirada normativa tiende a refugiarse y legitimar sólo aquellas pocas experiencias más acordes a una visión más estilizada y estetizada de la pobreza.

ENTRE LA CRIMINALIZACIÓN Y EL CUESTIONAMIENTO DEL RELATO IDENTITARIO

Finalmente, los efectos estigmatizadores de esas tres críticas se actualizaron y difundieron entre 2003 y 2005, durante una fuerte campaña antipiquetera que se desarrolló en el marco de la pulseada política que enfrentó las organizaciones piqueteras con el gobierno nacional, los sectores de derecha y los grandes medios de comunicación. Ahora bien, para comprender el alcance de esta campaña, es necesario volver sobre los componentes identitarios que han ido surgiendo de esta experiencia de autoorganización y acción colectiva. Recordemos que, tal como lo analizamos en otro lado (Svampa y Pereyra:2003), por encima de la fuerte heterogeneidad social, de género y generacional, y más allá de las diferencias que pueden encontrarse entre las distintas organizaciones piqueteras, la historia parece indicar que ha ido constituyéndose una identidad piquetera, cuyo anclaje no es otro que un cierto relato, constituido a partir de 1996, en el que se narra la experiencia de los piqueteros. Todos los testimonios —no sólo las entrevistas sino también las crónicas periodísticas— coinciden en que ese relato comienza con el corte en Cutral-Co y Plaza Huincul, donde surge el nombre "piqueteros". Esa narración, esencial sobre todo en las fases constitutivas de los movimientos, vincula tres términos fundamentales: en pri-

mer lugar, un nombre, "piqueteros", referido al agente principal de las acciones que la historia narra; en segundo lugar, y diremos que como eje central, se encuentran precisamente esas acciones que son los cortes de ruta —los "piquetes"— y, en tercer lugar, la historia se complementa con los motivos y las consecuencias de esas acciones, lo que remite centralmente tanto al vínculo entre modelo económico y crisis, cuanto a la demanda de trabajo y la recepción y administración de planes asistenciales. Ese relato es el que da sentido a los acontecimientos que recorren la historia piquetera y que finalmente explica el surgimiento de las organizaciones de desocupados como una consecuencia de la desestructuración productiva del país.

Sin embargo, la historia piquetera no fue definida de esa manera desde el principio, sino que atravesó un camino sinuoso —cruzado por otros relatos posibles—, hasta que se produjo cierta estabilización. Así, se habló de un "rebrote subversivo" en Cutral-Co, de "francotiradores de las FARC" en General Mosconi y desde un "complot piquetero" hasta una "matanza entre piqueteros" en el Puente Pueyrredón. Estas operaciones fueron, empero, desbaratadas por los hechos posteriores. Ahora bien, otro proceso comienza en 2003, a partir del cambio registrado en la estructura de oportunidades políticas. En realidad, el escenario remite a una contienda política por demás compleja, donde intervienen y se entrecruzan activamente las presiones del poder económico y sus voceros políticos y mediáticos, con la política de control y disciplinamiento del gobierno peronista actual para con los sectores excluidos (Svampa:2004).

Más allá de las dificultades visibles de un conjunto importante de las organizaciones piqueteras para reposicionarse frente al cambio del escenario político, respecto de 2002, esta contienda desigual se fue traduciendo en un corrimiento del significado de la protesta social. Más simple: en poco tiempo, los piqueteros dejaron de ser la mayor expresión de la resistencia al modelo neoliberal, para convertirse en una de las consecuencias "perversas" del mismo modelo. La centralidad que adquirió la problemática de la (in)seguridad con la entrada de Juan Carlos Blumberg en escena,[37] en 2004, sirvió también para recrudecer el lenguaje, como bien lo reflejan los titulares —casi el lenguaje de guerra— de los diarios nacionales a partir de 2003.

Así, en el contexto actual, es posible advertir que el relato sobre una identidad piquetera se ha visto sacudido por los efectos estigmatizadores que ha tenido la difusión de un sentido común antipiquetero en la sociedad argentina. Más aún, asistimos a la instalación de un marco de interpretación de la acción piquetera que busca desestabilizar este relato identitario, estableciendo un nuevo corte, diferente de los anteriores, esta vez, entre "lo auténtico" (las primeras manifestaciones piqueteras y los levantamientos comunitarios) y, por otro lado, "lo inauténtico" (su evolución a partir de 2002). Es aquí donde se expanden y se combinan los tres argumentos que hemos enunciado al principio de este apartado (la hipótesis de la manipulación, la visión miserabilista y la crítica normativa).

El impulso que tomó la criminalización del conflicto social en los últimos tiempos no es ajeno a este proceso, pues a través de su constante judicialización se apunta a desdibujar el reclamo esencial de los desocupados (los derechos básicos conculcados), reduciendo la protesta a una acción "ilegal", al tiempo que se invisibilizan otras dimensiones constitutivas de la experiencia piquetera, por ejemplo, el trabajo comunitario en los barrios.

Ahora bien, frente a ello, en un escenario de fuerte confrontación y pulseada política, las organizaciones piqueteras han venido afirmando mucho más sus componentes plebeyos. Esta afirmación de lo plebeyo, que apunta a reivindicación de lo popular, en cuanto ser negado y excluido, ha acompañado la irrupción y desarrollo de los movimientos piqueteros. Recordemos que en la Argentina, lo plebeyo como voluntad de autoafirmación de lo popular ha emergido como resultado de un conflicto con otros sectores sociales (clases medias y altas), que asimilan el carácter impugnador de lo plebeyo con la incultura, al tiempo que reclaman la superioridad de sus modelos culturales y estilos de vida. En este sentido, la presencia de lo plebeyo remite a la historia de otros movimientos populares, tanto del yrigoyenismo como, sobre todo, del peronismo. Lo particular, sin embargo, es que en la actualidad esta reivindicación del carácter plebeyo e iconoclasta de lo popular ya no se realiza desde el aparato del Estado (como sucedía con el peronismo histórico), sino que interpela y desafía al propio peronismo institucional que hace tiempo decidió enterrar su tradición contestaria y

contracultural. Por otro lado, su emergencia se da en un contexto de gran crisis, más aún, de descenso y caída social de numerosos sectores sociales. Por ello mismo, la potenciación de lo plebeyo tiende a alimentar el "voyeurismo" y el rechazo de las clases medias, tan necesitadas de construir contrafiguras negativas a partir de las cuales afirmar una supuesta superioridad de clase. No es casual entonces que los componentes plebeyos se hayan exacerbado, a partir del ingreso de los movimientos en la escena nacional, que alcanzaría un clímax entre 2003 y 2004. Así, fue en el marco de una fuerte puja, visible en los conflictos por la ocupación del espacio público en la ciudad de Buenos Aires, donde lo plebeyo volvió a convertirse en un principio de (auto)afirmación de lo popular.

En resumen, la entrada en los espacios más tradicionales de la política nacional, sobre todo a partir de 2002, tuvo efectos sumamente contrastantes. Por un lado produjo adhesiones e importantes cruces sociales, sobre todo, con parte de los sectores medios movilizados, ligados al proceso asambleario, los colectivos culturales y los partidos de izquierda. Por otro lado, esta presencia inquietante y a la vez perturbadora de lo plebeyo en el centro político de la Argentina, terminó por instalar una vez más la imagen del "aluvión zoológico" como elemento importante de la dinámica recursiva entre movimientos populares y opinión pública, base sobre la cual gobierno, sectores conservadores y grandes medios de comunicación se montaron para construir el consenso negativo con relación a las movilizaciones sociales. Lo dicho aparece patentizado en un discurso social y periodístico que vehiculiza una cierta lectura político-cultural, que coloca el acento en la inferioridad antropológica y cultural y, por ende, en la peligrosidad de los sectores populares. Ello ha actualizado en amplios sectores medios y altos una (histórica) actitud de desprecio hacia lo plebeyo, tanto como acentúa el temor a las "clases peligrosas", a través de los dos estereotipos negativos, el "piquetero violento" y el "piquetero plebeyo". En fin, este repudio hacia las organizaciones piqueteras reactiva la imagen fundadora de la Argentina moderna, "civilización o barbarie", que históricamente ha estado en la base de diferentes dispositivos simbólico-políticos para justificar la exclusión de lo popular.

Lo dicho no significa negar las dificultades internas que atraviesan las organizaciones piqueteras, que hemos abordado en el capítulo anterior. Antes bien, nos interesa llamar la atención sobre el modo como se han combinado y actualizado ciertos elementos presentes en diferentes tradiciones, en el proceso de redefinición identitaria de las organizaciones de desocupados: por un lado, la puja política llevó a los actores más poderosos (gobiernos, sectores conservadores, medios de comunicación) a actualizar el estigma de la barbarie, asociado a la representación de las nuevas clases peligrosas. Por otro lado, como hemos visto en el capítulo anterior, el gobierno peronista y las agrupaciones populistas que lo apoyan, actualizaron ciertos elementos de la tradición nacional-popular, sobre todo, aquel que hace referencia al vínculo populista, caracterizado por la subordinación de los actores sociales al líder. En definitiva, tanto la actualización de la memoria de las clases medias y altas (la estigmatización de lo plebeyo), como ciertos elementos de la memoria nacional-popular(la dependencia respecto del líder), han venido a cuestionar el relato identitario —el piquetero—, quizá demasiado centrado en la "memoria reciente", a saber, centrada en la dimensión mítica que tomaron los piquetes y puebladas de los 90 y, sobre todo, las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

De los reclamos de seguridad a la defensa del territorio

Con el retorno de la política a las calles y en el marco de una sociedad fuertemente movilizada, la imagen que nos devuelve la Buenos Aires posterior a la devaluación es la de una ciudad atravesada y desgarrada cotidianamente por los conflictos sociales. No por casualidad, una de las cuestiones centrales que se ha instalado en los últimos tiempos es la disputa por la ocupación del espacio público. Así, la puja que estaba detrás del Código Contravencional, aprobado recientemente por la ciudad de Buenos Aires, era la definición misma de las condiciones "legales" de acceso al espacio público desde una concepción autoritaria y represiva, que apunta a disciplinar y/o expulsar a los

actores sociales que cotidianamente ocupan sus calles, en reclamo de derechos o en la búsqueda de la sobrevivencia. Esta tendencia al cierre del espacio público se refleja en los artículos más polémicos, referidos a la prohibición de la oferta de sexo en la vía pública, la penalización de la venta ambulante y de aquellas manifestaciones que no soliciten autorización previa ante las autoridades. Pese a la vaguedad de su formulación, esta útima reglamentación aspira sin duda a limitar las marchas y/o manifestaciones de los distintos grupos u organizaciones (en especial, las organizaciones de desocupados). Así, con todas sus ambivalencias, la situación actual parece dar cuenta de un desdibujamiento de aquellas demandas de solidaridad (tan centrales durante 2002), y su desplazamiento por reclamos de orden y seguridad.

Los reclamos en torno a la seguridad encontraron una ilustración en las movilizaciones lideradas por Blumberg. Esa figura, a la que algunos quisieron convertir en una suerte de fiscal de la república, pero que rápidamente se convirtió en un intolerante defensor de políticas de mano dura, encabezó marchas en la ciudad de Buenos Aires que, en el origen, eran muy ambivalentes, pues no sólo traían consigo una visión punitiva o represiva de la Justicia y la seguridad, sino también una legítima demanda de ciudadanía, que ponía el acento en la transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones republicanas.

Estos reclamos se dirigen directamente al Estado, como responsable de la situación de inseguridad. Para entender ello, es necesario recordar que durante los 90, el Estado sufrió una reducción drástica en su rol de productor de la cohesión social (la privatización de bienes y servicios básicos, que afectó no sólo la calidad de la salud, la educación, sino también la seguridad, en sus aspectos más elementales). Con el correr de los años, la pérdida de recursos y competencias del Estado, sumada al cuadro de desindustrialización y desempleo, trajo aparejado, entre otras cosas, un incremento notorio de la violencia social y la experiencia de la inseguridad ciudadana. Por último, la crisis abierta en 2001 pondría al desnudo el carácter virulento que estas formas de la violencia social podían traer consigo, visibles en el aumento de los secuestros extorsivos y los robos seguidos de muerte.

En fin, como en otros países latinomericanos (México y Paraguay, donde hubo marchas similares), estas movilizaciones tienden a ser portadoras de una concepción represiva de la seguridad, en desmedro de una visión más integral de la misma. Durante 2004, en plena campaña antipiquetera, estas marchas y convocatorias, apoyadas e impulsadas por los grandes medios de comunicación, generaron una rápida respuesta de parte del poder político, que endureció la legislación penal y diseñó un importante programa de seguridad, que dispone una mayor presencia policial en la vía pública, así como una depuración de las fuerzas policiales, sobre todo en la conflictiva provincia de Buenos Aires.

Por último, es necesario tener en cuenta que la Argentina es un país extenso, atravesado por múltiples conflictividades y, por ende, recorrido por diferentes movilizaciones y demandas. Así, por ejemplo, además del reverdecimiento de las luchas sindicales en distintos sectores (trabajadores del subterráneo, hospitales públicos, entre otros), de la multiplicación de demandas de trabajo por parte de trabajadores desocupados a las empresas multinacionales en las provincias petroleras (en especial, en Salta y Santa Cruz), el nuestro es un país en donde se extienden cada vez más aquellas acciones ligadas a la defensa del hábitat. Estas nuevas formas de participación ciudadana, que se definen por la defensa del territorio y de los bienes naturales, están vinculadas al actual proceso de expansión de la frontera minera y energética, impulsado por la fuerte desregulación económica de los años 90. Se trata de movimientos que se oponen a la instalación de empresas trasnacionales, cuyo impacto en términos ambientales, sanitarios, productivos y económicos, sería desastroso para la vida de la comunidad.

Uno de los casos emblemáticos es el conflicto que mantiene la población de Esquel, situada en la provincia de Chubut, con la empresa minera canadiense Meridian Gold. En octubre de 2002, se presentó un informe de impacto ambiental (IIA) para la explotación de una mina de oro en Esquel. Gracias al alerta dado por técnicos y ambientalistas de la región, la comunidad de Esquel se movilizó contra la explotación de una mina de oro a cielo abierto, riesgosa para la salud. Finalmente, los vecinos autoconvocados de Esquel organizaron un plebiscito en

marzo de 2003, que arrojó un rotundo "no" a la minería tóxica. Poco después, el Parlamento chubutense sancionó una ley que prohíbe la minería tóxica.

Como afirma Pablo Bergel, el "efecto Esquel" ha despertado otras regiones. A mediados de 2005, un reclamo similar tuvo lugar en Río Negro, en la llamada Línea Sur, donde se conformó una "Asamblea de autoconvocados de Río Negro, Chubut, Neuquén y Patagones" que nuclea comunidades indígenas, organizaciones sociales y vecinos autoconvocados, en contra de la minería tóxica. A fines de julio de 2005, el movimiento de asambleas de autoconvocados logró que el Parlamento provincial sancionara la ley que prohíbe la minería de oro con cianuro y mercurio. Asimismo, acciones de este tipo tuvieron lugar en Calingasta, en San Juan, sin que las autoridades provinciales hayan autorizado el plebiscito con relación a la mina cuestionada. El "efecto Esquel" se ha hecho sentir también en Santa Marta de Catamarca, donde la asamblea de autoconvocados de los Valles Calchaquíes denunciaba la falta de agua a causa de la minería.

Otro reclamo ligado a la defensa del medio ambiente es el que ha movilizado a los vecinos de Gualeguaychú, en la Argentina, y de la localidad de Fray Bentos, en Uruguay, en contra de la instalación de empresas papeleras concedida por el gobierno uruguayo, cuyos efectos contaminantes ya han sido claramente probados. También la existencia de ambiciosos proyectos energéticos que ponen en riesgo la calidad de vida de ciertas comunidades ha abierto nuevos frentes de conflicto. Entre ellos se destaca el proyecto que prevé crear seis represas sobre el río Corcovado (situado a cien kilómetros de Esquel, en Chubut), que ha generado la resistencia de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza, cuyas tierras quedarían inundadas con la construcción de las represas.[38]

Estas movilizaciones dan cuenta de la importancia de los nuevos núcleos de conflicto, centrados cada vez más, como sucede también en otros países de América Latina, en la defensa del hábitat y la protección de la biodiversidad y los recursos naturales no renovables, frente al avance de las empresas trasnacionales. En resumen, la potencialidad de estas movilizaciones multisectoriales es enorme: para comenzar, confrontan directamente con los agentes del capitalismo global (empresas energé-

ticas y mineras transnacionales), poniendo en juego un complejo entramado social, en el cual se encuentran involucrados actores sociales, económicos y políticos (locales, regionales, estatales y globales). Dichos conflictos abren una disputa en torno a lo que se entiende por modelo de desarrollo sustentable. Por otro lado, el proceso de construcción revela una articulación multisectorial y formas de participación asamblearias, lo cual sin duda se conecta tanto con el proceso de politización abierto en 2002, como con los levantamientos comunitarios registrados en los 90, ligados a la crisis y desmantelamiento de las economías regionales.

En fin, la nueva etapa parece señalar que, gracias a la existencia de un marco regulatorio extremadamente favorable, forjado en los 90 y continuado en la actualidad, los agentes del capitalismo global encontraron la puerta abierta, —nuevamente, demasiado abierta— para concretar la expansión por las llamadas áreas marginales, en las cuales se encuentran importantes reservas energéticas y mineras. Por ende, la nueva resistencia ciudadana aparece marcada por la defensa del territorio, de los bienes naturales y del hábitat.

* * *

En este último capítulo, hemos intentado dar cuenta de las diferentes dinámicas de acción colectiva, en el marco de un nuevo ciclo de movilización, abierto por las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Por un lado, analizamos los avatares y legado de las asambleas barriales, en la ciudad de Buenos Aires, a lo cual caracterizamos como una experiencia política "fuerte", en tanto conllevó el cuestionamiento del sistema de representación y el desarrollo de formas directas y participativas de la democracia. Planteamos también la visibilidad y expansión que adquirieron en este escenario los grupos culturales, asociados a la vez a una lógica de reconstrucción identitaria de las clases medias en crisis, como también a una lógica de resistencia colectiva global, a partir del cruce y articulación con otros actores sociales (organizaciones piqueteras y fábricas recuperadas, entre otros). Por otro lado, volvimos sobre las organizaciones de desocupados, con el objeto de analizar las bases y alcances de

las lecturas estigmatizadoras, que se pusieron en marcha en 2003, en el marco de una pulseada política desigual con el gobierno nacional.

Dijimos entonces que las dificultades de los movimientos de desocupados no pueden ser disociadas de la demanda de "normalidad" que recorre a la sociedad argentina. La centralidad que esta demanda fue adquiriendo en la agenda política, sobre todo con el ascenso de Kirchner, tuvo una traducción política visible en la exigencia de "institucionalización" de las organizaciones sociales movilizadas y en la tendencia al cierre del espacio público. El escenario de esta batalla política fue la ciudad de Buenos Aires. Fue en sus calles, en sus plazas, en sus edificios públicos, más aún, frente a la propia Legislatura porteña, a la hora de discutir el Código Contravencional propuesto para la ciudad de Buenos Aires (16 de julio de 2004), donde tuvo lugar esta puja desigual entre los que llamaban a la institucionalización y exigían el repliegue de las fuerzas movilizadas (la demanda de lo instituido) y los diferentes actores movilizados, vendedores ambulantes, mujeres en estado de prostitución, travestis y organizaciones de desocupados (la demanda de los excluidos). El corolario fue el avance de la judicialización y criminalización en el tratamiento de los conflictos sociales, y la instalación de un fuerte consenso antipiquetero, sostenido y avalado por amplias franjas de la opinión pública.

Por último, hay que decir que la campaña de estigmatización desarrollada contra las organizaciones piqueteras coincidió con la instalación en la agenda política de las demandas de seguridad ciudadana, que en un principio llegaron vinculadas a la proliferación de delitos contra la propiedad y los secuestros extorsivos. Estas nuevas movilizaciones, de alcance muy variado, tienen en común el hecho de que interpelan al Estado como responsable y exigen que éste garantice la protección y seguridad integral de los ciudadanos.

El mapa actual de la Argentina muestra una proliferación de conflictos y movilizaciones sociales, en torno a temas tan diversos como el reclamo salarial, la demanda de trabajo y la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. En fin, un conjunto de acciones colectivas que, en gran parte, presenta un fuerte anclaje territorial, y abarca una multiplicidad de organizaciones, desde movimientos campesinos, poblaciones indígenas, organizaciones de desocupados, nuevas expresiones sindicales, minorías sexuales y hasta las nuevas formas asamblearias de defensa del hábitat.

Comentarios finales

En el presente libro hemos buscado analizar desde la perspectiva de la sociología política algunas de las dimensiones mayores de las transformaciones que han marcado la sociedad argentina en las últimas décadas. En las páginas que siguen no es nuestra intención realizar un resumen de lo dicho ni tampoco retomar la totalidad de las conclusiones que hemos deslizado al final de cada capítulo. Antes bien, quisiéramos aprovechar estos comentarios finales para plantear algunas reflexiones sobre las características de la sociedad excluyente y el rol de las nuevas movilizaciones sociales, en un contexto de gran asimetría en la distribución del poder social. Por último, quisiéramos deslizar ciertas consideraciones sobre el escenario político actual, atravesado por las exigencias y limitaciones que el "peronismo infinito" impone en la agenda política.

1

En los últimos 30 años, la Argentina sufrió una gran mutación. Hemos visto, sin embargo, que este proceso de mutación estructural no registró una secuencia única, sino más bien la forma de una dinámica que fue afirmándose a través de diferentes movimientos y rupturas sucesivas, marcando una fuerte progresión hacia la polarización social.

Es, entonces, a partir de los 70 cuando nuestro país realiza un pasaje acelerado a la informalidad y la precariedad y, de manera más enfática, a partir de los 90, cuando el proceso de reforma estructural impulsó una dinámica de fragmentación que arrastraría a sectores asalariados —pertenecientes al área central, pero también ligados a economías regionales con fuerte presencia del Estado—, además de involucrar otras franjas de trabajadores vinculados al trabajo informal. Este conjunto de transformaciones desembocaría en un inédito proceso de descolectivización de vastos sectores sociales.

Así, las transformaciones que arrancan en 1976 y que finalmente se realizan a lo largo de la década del 90, luego de diferentes vaivenes, implicaron una mutación de las pautas de inclusión y exclusión social, y trajeron consigo una nueva matriz social, caracterizada por la polarización y la heterogeneidad. Ya hemos dicho que en 1974 nuestro país tenía una distribución de la riqueza similar a la de muchos países desarrollados. Los datos disponibles indican que en el Gran Buenos Aires, en 1974 los ingresos familiares del 10% más rico eran 12,7 veces más que los del 10% más pobre. Durante los 90, esta brecha se amplió considerablemente, pasando a 22,1 veces en 1991, hasta llegar a ser el ingreso del 10% más rico 32,9 veces más que el del 10% más pobre en 1999. Luego del agravamiento de las condiciones de vida producido por la crisis de 2001-2002, la brecha, que había llegado a ser de 51,9 veces en 2001, en octubre de 2003 era de 41,6 veces.[1] Por otro lado, el incremento de las desigualdades no aparece exclusivamente ligado a la desocupación, sino también al notorio aumento de la pobreza. Mientras que en 1991, el 16% de los hogares se encontraba bajo la línea de pobreza, en el año 2000, el 25% de hogares era considerado como pobre. En 2002, la pobreza llegó a un pico de 54,3% y, actualmente, pese a la recuperación económica, llega al 40%.

Asimismo, es necesario recordar que en nuestro país la relación entre neoliberalismo y globalización fue naturalizada, lo cual contribuyó a desdibujar el carácter político de las llamadas reformas estructurales. Este proceso acompañó el vaciamiento institucional de la democracia, identificada sin más con la democracia liberal y representativa, así como la consolidación de un Estado, apoyado sobre el triple eje "patrimonialismo-asisten-

cialismo-matriz represiva". Ése fue el escenario general en el cual se inscribieron y (contra el cual se) desarrollaron gran parte de los procesos de descomposición y de recomposición social en los últimos quince años.

Así, durante la década del 90, los cambios fueron reflejando rápidamente la configuración de un nuevo "campo de fuerzas societal", noción que retomamos de Edward P. Thompson (1986), y que designa menos una estructura ya consolidada que un proceso atravesado por la polarización, en medio de una dinámica vertiginosa y, a la vez, muy inestable. Ahora bien, con los años, lejos de constituir un movimiento pasajero, la nueva dinámica de polarización fue moldeando los contornos más duraderos de una *sociedad excluyente*. Las dimensiones de esta nueva configuración social se tornarían definitivamente insoslayables a partir del estallido de la convertibilidad. Ciertamente, la crisis de 2001 trajo consigo importantes cambios de índole subjetiva y de índole objetiva. Por un lado, aquélla abrió las puertas a un nuevo escenario político, caracterizado por la crisis del sistema institucional y el desarrollo de nuevas formas de auto-organización social. Por otro lado, la crisis y el agravamiento de la miseria colocaron a la sociedad toda en un gran tembladeral, lo cual acentuó la fragilidad de los actores y la inestabilidad de las posiciones sociales. Por último, no es menos cierto que frente a la nueva situación, una gran parte de la sociedad comprendió entonces cuál había sido el alcance y la envergadura de los cambios sociales y económicos introducidos en los 90.

En definitiva, a partir de la crisis de 2001, dichas transformaciones, lejos de expresar una dinámica social pasajera y rápidamente reversible, han ido revelando cada vez más el núcleo central de la nueva sociedad, producto de la modernización excluyente y de la multiplicación de las desigualdades. Así, a diferencia de los 90, ya no se trata tanto de un proceso todavía en curso, como de la consolidación de una determinada matriz social, estructurada sobre la base de la cristalización de las desigualdades tanto económicas como sociales y culturales. Este proceso encontró una vuelta de tuerca en la desordenada salida de la convertibilidad, seguida de la devaluación y la pesificación asimétrica, que afectó muy especialmente a los sectores populares y medios, y contribuyó por ende a reforzar las brechas sociales y económicas.

El resultado ha sido la consolidación de una sociedad atravesada por una fragmentación social creciente, en cuyo interior coexisten numerosas y disímiles sociedades, con zonas de regulación diferente, recursos muy desiguales y niveles organizativos diversos. En fin, antes que un cuadro unitario, la imagen remite a una multiplicidad de sociedades, suerte de islotes, caracterizados por lógicas sociales heterogéneas, que operan como registros multiplicadores de la jerarquía y la desigualdad.

2

La crisis generalizada de 2001-2002 tuvo un efecto desnaturalizador importante, que terminó por enfrentarnos abiertamente, sin eufemismos posibles, con las consecuencias de un orden excluyente. Sin embargo, el estallido del modelo de convertibilidad en diciembre de 2001 y las movilizaciones que le siguieron, hicieron posible también que diferentes sectores sociales comprendieran de golpe, como si se tratara de una revelación, que la brecha social que se había abierto durante los 90 era profundamente ilegítima. Durante 2002, este cuestionamiento trajo aparejada una crítica radical de la globalización neoliberal en su versión vernácula, sentando las bases de la afinidad entre las clases medias movilizadas y las organizaciones de desocupados, que desde hacía años venían trabajando en sus barrios en la recomposición de los lazos sociales.

No obstante, cuatro años después de que la Argentina se transformara en un novedoso laboratorio de movimientos sociales, parece haber una escasa traducción político-institucional de esos procesos de autoorganización, así como pocos vestigios de la afinidad electiva desarrollada entre las clases medias y los sectores más excluidos. Muchos de los que habían salido a la calle, primero impulsados por una demanda de justicia, portadores luego de una exigencia de renovación de la política, optaron por volver a replegarse en el ámbito privado o se integraron —como apuesta personal, no colectiva— al espacio de la acción institucional.

Cierto es que las demandas de nueva institucionalidad encontraron numerosos escollos y dificultades en el interior de los propios movimientos. Pero estas demandas coincidían en su rechazo de la visión hegemónica y minimalista de la democracia, al tiempo que alentaban el desarrollo de formas de democracia directa y participativa. En consecuencia, las críticas colocaban en la agenda la necesidad de pensar una reforma política profunda, algo que estuvo muy lejos de ser evaluado desde la esfera institucional, precisamente porque muchos eran conscientes de que las formas propuestas desbordaban los marcos efectivamente existentes, amenazando las estructuras de poder político. Por otro lado, el retorno de la política a las calles, reavivó en diferentes sectores sociales (políticos e intelectuales) el atávico temor al desborde social, lo cual se expresó tanto en una desconfianza básica en la articulación de toda experiencia construida "desde abajo", como en un endurecimiento del discurso formalista acerca de la defensa de la institucionalidad existente. Por último, algunas de las demandas de democratización terminaron siendo objeto de una apropiación ilegítima por aquellos mismos partidos políticos —y aquellos dirigentes— responsables del vaciamiento económico e institucional del país.

Asimismo, a partir de 2003, la ciudad de Buenos Aires fue protagonista de una fuerte pulseada política entre las organizaciones de desocupados, actor central del período, y el gobierno nacional, apoyado por sectores de derecha y sus voceros políticos y mediáticos. Ya hemos dicho que esta lucha desigual apuntó —con visible éxito— a instalar un marco estigmatizante, sentando las bases de un "sentido común" antipiquetero, sumamente inquietante, que tiende a actualizar la asociación entre "clase peligrosa" y sectores populares, a través de dispositivos simbólicos excluyentes.

Sin embargo, la situación registra escenarios muy ambivalentes. Por un lado, la acción colectiva da cuenta de la eclosión de viejos y nuevos actores, que pujan —cada uno a su manera y muy pocas veces articuladamente— por correr los márgenes de la sociedad excluyente. Así, pese a la estigmatización de los piqueteros, pese al avance en la judicialización del conflicto social, a los llamados constantes a la institucionalización de los reclamos, a la creciente militarización de la ciudad de Buenos Aires, las tentativas de cierre del espacio público han fracasado. En efecto, el escenario actual muestra la multiplicación de las demandas, relacionadas tanto con la actualización de las luchas sindicales (muchas de ellas protagonizadas por comisiones internas, esto es, por fuera de la dirigencia de los sindicatos), como con la proliferación de demandas centradas en la defensa de la educación y la salud pública, y, de manera incipiente y lejos de los centros de poder, con las movilizaciones multisectoriales en defensa del hábitat. Amén de ello, no son pocas las acciones que adoptan un formato piquetero (asociado al corte de calles), mostrando con ello menos su agotamiento que la real eficacia que éste conserva en tanto instrumento de lucha. Estas acciones, que se añaden a los más variados reclamos asociados a la problemática de la seguridad ciudadana, apuntan a colocar en la agenda el tratamiento de un conjunto de derechos civiles, sociales, culturales y ambientales, muchos de los cuales han sido efectivamente licuados luego de tantos años de políticas neoliberales o se encuentran amenazados frente las nuevas orientaciones que adopta el capitalismo global, facilitadas por los marcos regulatorios existentes en nuestro país.

Por otro lado, es necesario recordar que estos últimos quince años de neoliberalismo han dejado profundas marcas en la subjetividad de los argentinos. No es casual, por ello, que las lecturas predominantes acerca de la conflictividad social subrayen *prima facie* las consecuencias negativas de las acciones de protesta (la obstrucción del tránsito, los problemas de transporte, la pérdida de días de clase, el riesgo de desatención en los hospitales, entre otros) o apunten a denunciar, acto seguido, su carácter eminentemente político. Este tipo de lectura, además de señalarnos la reducción del umbral de tolerancia respecto de la conflictividad social, apunta a ignorar el impacto que la gran asimetría en la distribución del poder social ha provocado en la forma que adoptan las luchas sociales actuales. En otros términos: no basta con comprender y afirmar cuán legítimos son estos reclamos en torno a los derechos. Necesario es también aprehender cuán íntimamente ligadas están estas metodologías y medios de expresión (la acción directa, especialmente los cortes o piquetes, las ocupaciones) con el modelo

actual de dominación, el cual da cuenta de una distancia abismal, hasta obscena y de una puja groseramente desigual entre, por un lado, las clases subalternas y, por el otro, las elites políticas y económicas. Esta última consideración sirve para recordarnos cuál es el estado de las relaciones de dominación en nuestro país, modelo de sociedad excluyente, que en sólo 30 años pasó de una situación de *empate social o hegemónico*, con un fuerte protagonismo y articulación entre sectores medios y populares, *a la gran asimetría*, visible en la concentración del poder en las elites económicas y políticas, así como en la fragmentación de las clases medias y la pauperización y territorialización crecientes de las clases populares.

3

Algunos podrían esgrimir que, en los últimos tiempos, vientos de cambio recorren el continente latinoamericano, luego de más de una década de hegemonía neoliberal. Este clima ideológico, que parece anunciar una nueva transición, tiene como protagonistas no sólo a las nuevas movilizaciones sociales, surgidas al calor de la resistencia a los modelos excluyentes implementados durante los 90, sino también a ciertos líderes gubernamentales latinoamericanos, quienes en los últimos años han asumido un discurso crítico respecto del neoliberalismo.

En nuestro país, para algunos esta línea sería ilustrada por Néstor Kirchner, quien —como ya hemos señalado— ha despertado expectativas políticas en diferentes sectores sociales. Cierto es que el actual gobierno ha adoptado una retórica antineoliberal que se propone cuestionar el fatalismo ideológico de la década anterior, asociado al triunfo de los mercados. Cierto es que Kirchner ha venido realizando gestos políticos cargados de alto valor simbólico (entre ellos, el descabezamiento de las cúpulas militares, la condena del terrorismo de Estado de los 70, la renovación de la Corte Suprema de Justicia). Sin embargo, pese a la retórica antineoliberal que pretende mostrar el actual gobierno, éste expresa un gran desinterés por dar forma y contenidos a una agenda política posneoliberal, en consonancia con tales discursos. Más bien, pese a que el escenario político presenta

modificaciones respecto de los 90, el llamado modelo neoliberal —y el régimen de dominación política que acompañó a su instalación— sigue gozando de buena salud. En realidad, el actual gobierno aparece atrapado entre los compromisos político-económicos que impone la situación de fuerte dependencia y el peso de una determinada cultura política e institucional. Durante 2005, este proceso fue acompañado por el deplorable espectáculo político electoral, que ilustra una vez más el carácter autorreferencial de la clase política (que engloba la totalidad de las líneas internas del justicialismo, pero se extiende más allá de él), que cree haber recuperado sus privilegios corporativos y un sentimiento de impunidad, típico de los noventa.

En razón de esto, para finalizar, pasaremos revista a algunos de los obstáculos políticos e institucionales que pesan en la actual gestión y que, desde nuestra perspectiva, impiden definir o dar contenido a una agenda posneoliberal. Nos referimos más precisamente a la articulación entre modelo decisionista, tradición populista y tradición desarrollista.

En primer lugar, el modelo decisionista se halla presente en el estilo de construcción del poder del actual presidente justicialista. En realidad, este rasgo muestra la fuerte continuidad que existe con el régimen de dominación política de los 90, uno de cuyos aspectos determinantes fue la ampliación del espacio de la soberanía presidencial. Recordemos que el vaciamiento de la soberanía nacional y la institucionalización de una "nueva dependencia", visible en la sumisión de la política a la economía, tuvo como correlato la redefinición de la soberanía presidencial en términos decisionistas y personalistas. Esto fue facilitado tanto por la convergencia entre una tradición hiperpresidencialista y una visión populista del liderazgo. En este sentido, el presidente Kirchner se hizo cargo de ambos legados. Al igual que Carlos Menem —diferencias de contexto estructural mediante—, Kirchner retomó ese espacio y fortaleció aun más el lugar de la soberanía presidencial, pero con el objetivo de redefinir y otorgar mayor variabilidad a la relación entre economía y política. En este sentido, puede afirmarse que existe una suerte de "recuperación del espacio de la política", en la medida en que Kirchner logró construir nuevos márgenes —variables— en dicha relación, en el contexto de la nueva depen-

dencia. Sin embargo, la relativa "recuperación de la política" se ha hecho en provecho del fortalecimiento de la soberanía presidencial, de la ampliación de la esfera de decisionismo y personalismo del Ejecutivo y, por ello, en desmedro de las propuestas de innovación y democratización política.

Esta caracterización nos permite introducirnos en el segundo obstáculo, al cual está estrechamente ligado al anterior: el peso de la tradición populista. En este sentido, es bueno volver a recordar que la matriz populista se asienta sobre tres principios o afirmaciones mayores:

- La conducción a través del líder (un liderazgo carismático o personalista, según los casos, con fuerte retórica nacionalista).
- Las bases sociales organizadas (la figura del Pueblo-Nación).
- La constitución de una coalición interclases, condición para una redistribución de la riqueza más equitativa (un modelo socio-económico integrador, que implica la afirmación del Estado).

El modo como se articulan estos tres elementos es sin duda variable y en mucho depende de los contextos e historias nacionales; pero también puede suceder —y ello es frecuente en las últimas décadas—, que el carácter incompleto del modelo, en virtud de la ausencia de alguno de sus elementos centrales (como, por ejemplo, un modelo socio-económico integrador), acentúe el primado de uno de ellos, en este caso, el principio del líder.

En efecto, como hemos dado a entender a lo largo de este libro, en la Argentina la tradición nacional-popular tiende a leerse en función del rol del líder, lo cual se ve reflejado en la actualidad en un determinado tipo de vinculación entre éste y las masas. En realidad, frente al vaciamiento de los restantes ejes de la tradición nacional-popular y por encima de la crisis y relativo eclipse de la concepción política movimientista, las sucesivas metamorfosis políticas no han hecho sino reafirmar y reforzar como principio fundamental la subordinación de los actores sociales y políticos al líder. Y ello, independientemente de la consolidación del sistema partidario o la alternancia electoral.

Así, la experiencia argentina se emplaza en un lugar diferente de la que actualmente tiene lugar en Bolivia, donde la tradición nacional-popular reaparece a través de las demandas de nacionalización de los hidrocarburos, que proclaman los actores movilizados. Asimismo, pese todas las afinidades —más deseadas que efectivamente existentes—, poco tiene que ver con el modelo propugnado por Chávez en Venezuela, cuyo carácter controvertido y ambivalente nos advierte ya que esa experiencia populista es multidimensional. Mas simple: en nuestro país, la tradición populista realmente existente tiende a reflejar la voluntad de subordinación de las masas organizadas a la autoridad del líder (como lo ilustran de manera evidente los sindicatos de la CGT pero también las organizaciones piqueteras oficialistas), vaciada de sus otros contenidos o ejes fundamentales. Al mismo tiempo, la unidimensionalización de la experiencia populista converge con la desconfianza hacia las nuevas formas de autoorganización de lo social y sus demandas de autonomía. En realidad, para la tradición populista y sus herederos, la cuestión de la autonomía de los actores constituye un punto ciego, impensado, cuando no una suerte de paradigma incomprensible y hasta "artificial" en función de nuestra geografía de la pobreza. Asimismo, esta no-tematización denota que el populismo argentino —en todas sus facetas, independientemente de las internas partidarias— no sólo tiene un gran desconocimiento de las nuevas tendencias organizativas globales, sino que no valora las nuevas prácticas políticas ni el impacto positivo que éstas podrían ejercer en un proceso de reformulación del contrato social, en un sentido incluyente.

El tercer obstáculo es el peso de la tradición desarrollista, pues ésta ha privilegiado una política de crecimiento económico en desmedro de una política de redistribución social, como si la promoción del primero tuviera efectos automáticos sobre lo segundo. En este sentido, el desarrollismo se inscribe en una tradición economicista, que tiende a aceptar como dato —y por ende, a naturalizar— el estado de las relaciones sociales; visible en este caso, en la gran asimetría entre las fuerzas sociales. Así, para el desarrollismo la "cuestión social" constituye una suerte

de agujero negro, o más bien, una caja de Pandora, cuya apertura se teme y siempre se posterga, en nombre de una concepción evolutivo-etapista que nunca termina por cumplirse, o bien de las crecientes —y reales, por cierto— restricciones internacionales. Esto explica el desinterés por instalar ciertos debates prioritarios, por ejemplo, el tratamiento de los derechos sociales, y la puja redistributiva lo cual abarca desde las luchas reinvindicativas de los sindicatos hasta las demandas de inclusión universal realizadas por las organizaciones de desocupados.

En fin, la crisis de 2001 y las grandes movilizaciones que le sucedieron abrieron una brecha profunda en el actual modelo de dominación, que lejos está de haberse cerrado tras la "apariencia de normalidad institucional"[2] que el país ha recobrado a partir de 2003. Antes bien, la situación de emergencia social e institucional que atraviesa el país plantea la necesidad de reinventar la democracia y repensar el Estado sobre bases solidarias. Sin embargo, este proceso de reinvención de las instituciones no supone volver al pasado, como creen los que piensan el Estado-Nación bajo moldes populistas, ni denostar la tradición estatista, proclamando la inevitabilidad de las tendencias globalizadoras. Sin duda, los desafíos del Estado posneoliberal son mucho más complejos que los del Estado Social del pasado, en la medida en que la desregulación estatal fue acompañada por la multiplicación de nuevos espacios de regulación regional y supranacional. Una vez más, creemos que para comprender el rol del Estado-Nación en la época contemporánea es necesario desnaturalizar las tendencias actuales de la globalización, a fin de recuperar las dimensiones más contingentes y conflictivas de estos procesos y señalar, a partir de ello, sus límites. En este sentido, hablar de los límites de la globalización supone recordar, como afirma Altvater (2000), que, más allá del carácter local, regional y global de los procesos, el Estado nacional constituye todavía el espacio de la participación democrática de los diferentes actores sociales, sobre todo, en lo que respecta a las demandas de ciudadanía.

En la Argentina, la tarea de reconstrucción del Estado y la sociedad encuentra su mayor adversario en las fuerzas conservadoras y reaccionarias, defensoras de un ideal neoliberal, actualmente enquistadas en múltiples espacios de poder, cuya

confianza de clase se ha visto reforzada en estos tiempos de gran asimetría, pero no es menos cierto que también los cultores de la tradición decisionista, populista y desarrollista oponen grandes obstáculos. Aunque el escenario actual (crítico del neoliberalismo y marcado por la circulación de prácticas contestarias) estimule la posibilidad de pensar creativamente las articulaciones (entre Estado y sociedad, entre democracia representativa y democracia directa y participativa, entre lo institucional y lo no-institucional, entre el espacio público estatal y el espacio público no-estatal, entre otras), sigue siendo dificultoso establecer una agenda posneoliberal, dada la tendencia al disciplinamiento y la invisibilización de "lo nuevo", por un lado, y, el riesgo de permanencia y reproducción de "lo viejo", por el otro, en el marco de una sociedad excluyente.

* * *

Algunos podrán objetar, en nombre de la gran asimetría, que el alcance de las nuevas dinámicas sociales es limitado, que las huellas de la resistencia son fragmentarias, más débiles de lo que es dable esperar, que la escasa articulación existente entre las luchas obtura y conspira contra su productividad política o su traducción institucional, que en definitiva las nuevas creaciones terminan por ser siempre "recuperadas" y absorbidas por la lógica de dominación. Esta invocación de las limitaciones —los márgenes de la acción y sus resultados— recorre el discurso político convencional, que, a fuerza de ser repetido, termina por naturalizarse, sin que por ello pierda, frente a las nuevas realidades sociales, su costado indecente o cínico. Frente a ello, es necesario recordar que es a través de las luchas como nuevas brechas sociales y políticas se han abierto en nuestro país, pese al cierre excluyente de nuestra sociedad; en definitiva, es mediante de las luchas y la acción colectiva como los sujetos han podido vislumbrar y apropiarse del sentido de lo político, concebido éste como autodeterminación y, a la vez, como creación de mundos alternativos.

Notas

Primera parte
La gran mutación

Capítulo 1. Hacia el nuevo orden neoliberal

1 Véanse los informes de Alerta Argentina, (2004), y del CELS, consagrado al tema de los desalojos y persecuciones de las poblaciones originarias (CELS:2003b).
2 En esta misma línea, reflexiona Alfredo Pucciarelli, cuando habla de "democracia excluyente". Para el tema, véase del autor *La democracia que tenemos. Declinación económica, decadencia social y degradación política en la Argentina actual*, Libros del Rojas, Serie Extramuros Nº 4, Buenos Aires, 2002.

Capítulo 2. Mutaciones de la política y modelo de dominación

3 Las declaraciones del ministro Roberto Dromi, nada menos que el máximo responsable de llevar a cabo la primera ola de privatizaciones, ilustran esta posición: "Ustedes saben con honestidad que los pliegos tienen una cláusula no escrita, que no la hemos escrito por vergüenza, por vergüenza nacional, que es el grado de dependencia de nuestro país, que no tiene ni siquiera la independencia, ni siquiera la dignidad, para poder vender lo que hay que vender. Un país que no tiene disponibilidad de sus bienes, un país que está inhibido internacionalmente, A-rro-di-lla-do, a-ver-gon-za-da-men-te" (Roberto Dromi, *Página 12*, 9/9/90, citado en Margheritis:2000, pp. 63-64). En el extremo hiperbólico de la escala emocional, la asunción del cambio en la relación de fuerzas se percibe también en las alegres declaraciones del canciller Guido Di Tella acerca de la política de "relaciones carnales" del país para con Estados Unidos, convertido en megapotencia indiscutible de un mundo unipolar.
4 Para un análisis crítico y exhaustivo de las posiciones de Chacho Álvarez durante este período, véase Corral (2002).
5 Como afirma Pierre Salama (2003): "Nos podemos interrogar sobre la ceguera de numerosos economistas, especialmente pertenecientes

a instituciones internacionales, de miembros de gobiernos argentinos y también de argentinos, economistas o no, durante todos estos largos años. ¿Es por incompetencia y si así fuera, el grado de incompetencia se mide con la vara de diplomas 'prestigiosos' otorgados por universidades norteamericanas, condición *sine qua non* para formar parte de estas instituciones? ¿Es por interés personal? ¿Es por ceguera ideológica y fundamentalista desconcertante? La respuesta puede ser aun más compleja. ¿No es cierto que a veces existen intereses comunes, no expresados claramente, de conducir tal o cual política favorable a intereses 'bien entendidos', y que se aplican dinámicas perversas en las que cada día que pasa se hace más difícil una ruptura negociada con el modelo aplicado y que prefiriendo la recesión a la crisis, en lo inmediato menos costosa, se provoca a corto plazo una crisis mayor?".
6 Para una discusión filosófica y política del tema, véase J. Flax, *La democracia atrapada. Crítica del decisionismo*, Buenos Aires, Biblos, 2002.
7 Este proceso, Althabbe lo analiza desde el punto de vista comunicacional. Así, afirma: "Y en esta construcción, la comunicación social tiene un rol central: esta soberanía puesta en escena es producida por la comunicación social" (Althabe:1998).
8 "No debe enervarse la capacidad del Presidente para mandar por decreto. Es la única forma que tiene de mandar. Cualquier otra interpretación 'politizada' o 'desjuridizada' significa reducirle poder, y de suyo, eximirle indebidamente de la responsabilidad de gobernar, 'administrar', 'ejecutar'. Las limitaciones de su poder desvirtúan las responsabilidades del presidente", Carlos Menem, "El decreto es la forma ejecutiva de mandar", *Clarín*, 18 de septiembre de 1996.
9 El vínculo con el partido no es sino una prolongación de la tradición peronista en lo que a las instituciones partidarias se refiere, caracterizada por la fuerte subordinación del aparato partidario a las decisiones del jefe presidencialista. Sin embargo, señalemos que este proceso va más allá del justicialismo: Alfonsín alteró una larga tradición en la UCR al aunar los cargos de presidente de la República y de presidente del Comité Nacional del partido, subordinando fuertemente el partido radical a sus designios políticos.
10 La crítica de Agamben va más lejos, pues la tendencia a la "normalización" del Estado de excepción viene a revelarnos, antes que las dificultades, los verdaderos límites que enfrentan los regímenes democráticos contemporáneos.
11 Por otro lado, la crisis de las formas más tradicionales de militancia política y la transformación del justicialismo en un partido burocrático de masas no es ajena a este proceso, caracterizado por el pasaje a una "democracia de lo público" (Manin:1995), donde predominan las estrategias de contacto y se multiplican los sondeos de opinión.
12 La "hipótesis delegativa" vendría a cuestionar así aquella otra tesis que afirma, para el caso argentino, la progresiva consolidación del sistema institucional, desde 1983 en adelante. En contraposición a

O'Donnell, esta última lectura propone una visión más matizada de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo (que, para el caso de la gestión de Menem, se refiere sobre todo a la segunda fase de reforma del Estado, que conllevó una mayor participación del Congreso) y subraya como rasgo importante de la institucionalización, la consolidación de una dinámica partidaria. Esta posición aparece en autores como Torre (1998), pero más claramente en Palermo y Novaro (1996), para quienes el menemismo afirma la salida del movimientismo, reemplazado por una dinámica más partidaria. Con argumentos diferentes, Peruzzotti (1998) discute la hipótesis de la entrada en una democracia delegativa, para subrayar la erosión de la tradición populista, visible en la emergencia de nuevas formas de politización, portadoras de una visión constitucionalista en la cual se aúnan democracia y derechos humanos.

13 La noción de equidad se basa en la idea de que el Estado debe reorientar su intervención no de una manera igualitaria, sino en pos de la protección de los grupos más vulnerables.

14 No olvidemos tampoco que esta política tuvo su antecedente en la llamada "Revolución Argentina", bajo la dirección de Onganía (1966-1969), que apuntó a poner fin a la recurrente inestabilidad institucional mediante la alianza política entre una elite tecnoburocrática y las Fuerzas Armadas. El Estado burocrático-autoritario, según la fórmula desarrollada por O'Donnell (1972), característico de los regímenes militares que se instauraron en los países latinoamericanos de alta modernización, como la Argentina y el Brasil, ejemplificaba esta nueva etapa, en la cual el autoritarismo y la exclusión política convergían con la modernización económica. En fin, siempre siguiendo a O'Donnell, en el Estado burocrático-autoritario la "afinidad electiva" entre economía y política, en el período de transición entre la fase inicial de la producción de bienes de consumo y la fase de "profundización" de la industrialización de bienes de capital e intermedios (tránsito que habría requerido políticas ortodoxas y una nueva concentración del ingreso en detrimento de los sectores populares) confluía con la existencia de una fuerte activación política del sector popular, que no lograba ser controlado y que producía retornos temporarios a la política nacional-popular.

15 Mientras Cavallo proviene de la Fundación Mediterránea, Roque Fernández pertenece al CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos), la otra usina reconocida del neoliberalismo vernáculo.

16 De esta manera, "los programas de ajuste ofrecen a la coalición política hoy hegemónica la posibilidad de recrear el escenario ideal para que se efectivice el crecimiento mecánico propuesto desde los modelos duales" (Barbeito y Lo Vuolo:1992).

17 Los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que dependían del Ministerio del Interior fueron instituidos por ley en 1988 y sus fondos eran destinados a las provincias, con el objeto de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros. La ley autorizaba su utilización

discrecional, siempre y cuando su destino no violentara lo establecido por la misma. Una investigación realizada por la Cámara de Diputados de la Nación da cuenta de su mecánica, durante el período 1990-2001, mostrando que "en su mayoría se trató de la entrega lisa y llana de subsidios, no sólo a gobiernos provinciales sino a cualquier tipo de entidad no gubernamental, empresas y particulares, teniendo como premisa la simpatía política del gobierno central hacia la jurisdicción, a las instituciones o personas favorecidas". El informe establece que sólo el 51% de esos fondos (un total de 2880 millones de pesos) fue entregado de manera legal.

18 La hipótesis de Gibson y Calvo es que habría sido el apoyo electoral de las provincias periféricas lo que permitió al peronismo mantener electoralmente la viabilidad de las reformas económicas que minaban sus bases obreras, asentadas en la región metropolitana (Conurbano Bonarense, Rosario, Santa Fe y Córdoba). Dicho apoyo electoral se habría garantizado a través "del mantenimiento del patronazgo estatal de redes clientelares de organizaciones políticas en regiones económicamente pobres pero políticamente valiosas en la periferia". Las dos conclusiones de este trabajo indican: por un lado, como hemos dicho, que el clientelismo es "integral a la racionalización política de las reformas"; por el otro, que el federalismo y la sobrerrepresentación de las regiones periféricas en el sistema político (a través de las Cámaras alta y baja) potenciaron el impacto del gasto político (pp. 190-204).

19 Sin embargo, la descentralización administrativa fue acompañada de reformas fiscales que apuntaron a la centralización de la distribución o a restar capacidad de recaudación a las provincias (Falleti:2001, p. 212).

20 Recordemos el spot de la campaña electoral de 1999, en el cual De la Rúa comenzaba diciendo "Dicen que soy aburrido...", a fin de resaltar la oposición entre los valores aliancistas —seriedad y transparencia— con aquellos asociados a la "fiesta menemista".

Capítulo 3. Mutaciones de la ciudadanía

21 Nos referimos al célebre trabajo *La marginalidad en América Latina. Informe preliminar*, de Miguel Murmis, Juan Carlos Marín y José Nun, Buenos Aires, Instituto Di Tella y Centro de Investigaciones Sociales, diciembre de 1968. Asimismo, a los aportes de Aníbal Quijano, sobre la noción de "polo marginal", acuñada a fines de los 60 y retomada en sucesivos trabajos, entre ellos, en *La economía popular y sus caminos en América Latina* (1997), Mosca Azul, Lima. Para una revisión de estos conceptos, puede consultarse en artículo de Belvedere (1997), "El inconcluso 'Proyecto Marginalidad'. Una lectura extemporánea a casi treinta años".

22 Esto no significa desconocer la existencia de redes de reciprocidad y formas de economía informal, en zonas tradicionalmente vulnera-

bles, por ejemplo en el norte argentino; sin embargo, lo propio de éstas es que, por lo menos hasta los años '80, se inscribían en un cuadro económico general de pleno empleo.

23 Para una aproximación al tema, véase la compilación de Pérez Ledesma (2000).

24 Véase la Tercera Parte de este libro.

25 Para un análisis comparativo de la invidualización en el contexto de un Estado de Bienestar y lo que él denomina el proceso de "individuación" en una sociedad desregulada, desde una perspectiva que retoma el debate teórico contemporáneo, véase Robles (1999).

26 "Si bien en nuestro país está vigente el marco legal que reconoce el derecho de los Pueblos Originarios a vivir en las tierras ocupadas por sus antepasados y a desplegar sus prácticas culturales y modos de vida, su cumplimiento y concreción permanece en el plano formal. Es decir, a pesar de la Ley Indígena (23.302), del artículo 75, inciso 17, de la Constitución nacional y de todos los tratados y convenios internacionales de rango constitucional como el 169 de la OIT, las demandas de los indígenas no se responden y las comunidades sufren aún la incertidumbre sobre la entrega de títulos" (GER:2004, p. 115).

27 En términos teóricos, el giro indica también un cambio de paradigma en el análisis de la acción social, en el cual cobra centralidad el "sujeto competente", a saber, la afirmación de que la capacidad de *agencia* está asociada al desarrollo de las competencias, en un mundo cada vez más complejo y atravesado por una fuerte dinámica de exclusión. Existen, sin embargo, visiones contrapuestas del actual proceso de individualización. Así, para autores como Beck y Giddens, la reflexividad y la autorregulación son pensadas no sólo en términos de expulsión del sujeto de las protecciones sociales, sino de emancipación del individuo de las estructuras, a la vez normativas y sociales, que constreñían la acción individual. Esta mirada más bien positiva sobre la nueva dinámica de individualización (a la vez expulsión y emancipación), contrasta sin duda con aquellas otras visiones que la asocian con la vulnerabilidad, la desafiliación y, en el límite, con la emergencia de un "individualismo negativo o de masa" (Castel:1995). Hemos tratado el tema en Svampa:2000.

28 Es bueno recordar que, al igual que en otras partes, en la Argentina los protagonistas de este nuevo estilo de vida no son sólo las clases altas, sino también las clases medias de servicios, con acceso al crédito o en ascenso social, que anteriormente residían en el norte del Conurbano Bonaerense, y en ciertos barrios residenciales de la ciudad de Buenos Aires y ciudades intermedias como Córdoba (Svampa:2001, 2004).

29 Esto trajo como consecuencia la expansión de agencias de seguridad privada, que tomó nuevo impulso luego de los hechos de 2001. En 2002, sólo en la provincia de Buenos Aires las agencias de seguridad privada (algunas de las cuales pertenecen a militares —conocidos represores— y muchas a ex policías), sumaban más de 700. Se estima

que en el nivel nacional estarían trabajando de custodios privados aproximadamente unos cien mil hombres, o sea "22 mil más que los que suman la policía bonaerense y Federal juntas" (*Clarín*, 10/9/2002). Sólo sectores de poder adquisitivo alto, y muy pocos de clase media, pueden pagar los servicios de este verdadero "ejército paralelo".

30 Sobre el rol del consumo en el proceso de legitimación del régimen menemista, ligado a la emergencia de una "cultura" o una "sensibilidad menemista", véase, además del conocido relato de Silvina Walger, *Pizza con champán* (1994), el excelente libro de Luciana Vásquez, *La novela de Menem* (2000).

31 La denominación "voto cuota" hacía referencia al carácter instrumental de la adhesión generada por el régimen menemista, sobredeterminado por la seducción consumista (la convertibilidad permitía planes de financiación en cuotas accesibles), así como por el temor al retorno a una situación hiperfinflacionaria. En este sentido, el "voto cuota" permitía explicar la adhesión de ciertos sectores tradicionalmente considerados como antiperonistas (clases medias urbanas), al Partido Justicialista, sobre todo durante las elecciones presidenciales de 1995.

32 El término "empoderamiento" (*empowerment*, en inglés), actualmente ocupa un lugar relevante en el discurso de las ONG y de diferentes organizaciones sociales. Designa el "proceso mediante el cual los individuos obtienen control de sus decisiones y acciones relacionadas con su salud; expresan sus necesidades y se movilizan para obtener mayor acción política, social y cultural para responder a sus necesidades, a la vez que se involucran en la toma de decisiones para el mejoramiento de su salud y la de la comunidad (WHO, *Health promotion glossary*, 1998). Se refiere al proceso de autodeterminación por el cual las personas o comunidades ganan control sobre su propio camino de vida. Se trata de un proceso de concienciación (tomar conciencia de todos los factores que influyen sobre la vida de las personas) y liberación (ganar poder de decisión sobre su propio destino)", http://www.lachsr.org/es/thesaurus/00001016.htm.

33 Para un enfoque de los nuevos procesos autogestivos, en términos de economía social solidaria, véase Coraggio (2002).

Segunda Parte
La nueva configuración social

Capítulo 4. Continuidades y rupturas de los sectores dominantes

1 Aunque el concepto de elite proviene de una tradición ideológica diferente a aquel de "clase social" (ésta fue acuñada por teóricos conservadores como Gaetano Mosca y Wilfredo Pareto), la noción de "elite en el poder" fue retomada por Wright Mills para designar a

aquellos que "forman una entidad social y psicológica más o menos compacta, y tienen conciencia de pertenecer a una clase social. Las personas son admitidas o no en esa clase, y es una diferencia cualitativa, y no una escala meramente numérica lo que los separa de quienes no pertenecen a la elite. Tienen una conciencia más o menos clara de sí mismos como clase social y se conducen entre sí, se casan entre sí, y tienden a trabajar y a pensar, si no juntos, por lo menos del mismo modo" (Wright Mills:1987, p. 18).

2 Recordemos que la teoría de la dependencia, tal como fue elaborada en los 60, afirmaba que los obstáculos del desarrollo forman parte intrínseca del proceso global del capitalismo, pues son el resultado de la asimétrica articulación entre el centro y la periferia. Como hemos dicho, la dependencia implicaba así el reconocimiento de que la realidad latinoamericana tenía varias escenas; por un lado, la local o nacional, por el otro, la internacional. En sus versiones extremas, la verdadera unidad de análisis terminaba siendo el sistema internacional, puesto que era la posición en el sistema económico mundial (ligada a la industrialización tardía y a un modo de dependencia) lo que determinaba el grado de desarrollo y el tipo de dominación existente (en el cual se destacaba la subordinación de la burguesía local a los actores transnacionales). Sin embargo, en sus versiones más dinámicas, la teoría de la dependencia estuvo lejos de ofrecer una forma únivoca y lineal en todos los países, en la medida en que se propuso analizar la articulación entre la política y la economía en las diferentes sociedades nacionales. En consecuencia, en lecturas de este tipo, las diferencias nacionales remitían a las trayectorias específicas de desarrollo, seguidas por cada país en función de sus variantes de dominación interna.

3 El único estudio sobre la sociedad contemporánea que apunta a abarcar las diferentes dimensiones del análisis, tal como lo planteamos al principio de este apartado, es el de Eduardo Basualdo, titulado "Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina" (2002). Véanse los interesantes comentarios de José Nun, Guillermo O'Donnell y Claudio Lozano, incluidos en el libro. Una mirada de los grupos económicos como actor político puede verse también en Ana Castellani y Martín Schorr (2004).

4 Esta hipótesis ha encontrado una expresión excesivamente institucionalista en Torcuato Di Tella (2004), quien considera que la falta de un partido conservador electoralmente fuerte da cuenta del "carácter incompleto del sistema político argentino". Sin embargo, como sostiene Inés González Bombal (1993), el derrotero de la Unión de Centro Democrático, considerado como el partido de derecha más importante de las últimas décadas, y prontamente absorbido por el peronismo durante los 90, muestra la caducidad de esta hipótesis.

5 José Nun, citando a Pierre Ostiguy, recuerda que el Plan Austral fue conocido antes por los grandes empresarios locales y extranjeros que por el pueblo argentino y gran parte de los representantes parlamentarios (Nun:2002, p. 5).

6 En otras épocas, el caso típico de relación prebendaria con el Estado fue ilustrado por las empresas del grupo Fortabat; en los 90, éste es ejemplificado por las empresas del grupo Macri, cuya actividad se reorientó del sector industrial a los servicios.

7 Zygmund Bauman sostiene que "la nueva libertad del capital evoca la de los terratenientes absentistas de antaño, tristemente célebres por descuidar las necesidades de las poblaciones que los alimentaban y por el rencor que ello causaba. El único interés que tenía el terrateniente absentista en su tierra era llevarse el 'producto excedente'. Sin duda, existe una similitud, pero la comparación no hace justicia a la liberación de preocupaciones y responsabilidades de las que goza el capital móvil de fines del siglo XX y que el terrateniente absentista jamás pudo adquirir" (Bauman:1999, pp. 17-18).

8 Cierto es que, al comienzo de la gestión menemista, esta suerte de "sobreactuación" formó parte de una estrategia política para atraer capitales y disolver el temor de un retorno al populismo. Sin embargo, la sobreactuación desbordó el plano simbólico, para alcanzar una plena expresión económica.

9 Según Ana Castellani y Martín Schorr (2004), entre 1999 y 2001, la crisis del modelo de convertibilidad desembocaría "en la ruptura de la 'comunidad de negocios' que se habría conformado entre grupos económicos locales y extranjeros durante la primera mitad del decenio" (pp. 10-11). Ello derivó en "la consolidación de dos distintas situaciones estructurales dentro de los sectores dominantes locales: de un lado, las grandes empresas extranjeras con fuerte tenencia de activos fijos; del otro, los principales grupos económicos locales, y algunos conglomerados extranjeros, posicionados fundamentalmente en activos líquidos (sobre todo, en el exterior) y en sectores productivos de elevada 'propensión exportadora' (alimentos, petróleo y derivados y unos pocos *commodities* industriales)" (pp. 15-16). Los autores sostienen que es en este contexto estructural que se desata la pugna acerca de cómo debe abandonarse la convertibilidad, entre los primeros, que propondrán un proyecto "dolarizador" y los segundos, que impulsarían la "devaluación". Como subrayan los autores, aunque "se trató de proyectos que respondieron a distintos intereses económico-sociales, ambos coincidían en que el ajuste recayera sobre las condiciones de vida de los sectores populares".

10 Entrevista con la autora (2005).

11 Aclaramos que esta caracterización sobre los actores que intervienen en la nueva trama productiva pertenece a Roberto Bisang.

12 Véanse los suplementos "Rural" de los dos diarios de mayor circulación del país. A propósito de ello, un artículo reciente consignaba que el Secretario de Agricultura de la Nación y el Ministro de Economía habían mantenido una reunión con las diez mayores exportadoras. Nada menos que ocho de ellas pertenecían al nuevo complejo agroindustrial (*La Nación*, 2/7/2005).

13 Para una visión optimista, véase el libro de Eduardo Trigo, Daniel Chud-

novsky, Eugenio Cap y Andrés López, *Los transgénicos en la agricultura argentina. Una historia con final abierto,* 2002. Para una visión crítica, pueden consultarse las investigaciones del GER (Grupo de Estudios Rurales) o los documentos elaborados por el Foro de Ecología Política (sobre todo, los de Walter Pengue).

14 Ciertamente, el Estado interviene mediante diferentes organismos, entre ellos, la Secretaría de Agricultura, el organismo regulador del área (Conabia) y, por último, a través del INTA. También se advierte la intervención de organismos de investigación, como la Agencia Nacional de Investigación Científica y Técnica, Conicet y CEPAL, entre otros.

15 "Mientras las agencias inmobiliarias estimaron el valor de la propiedad entre 70 y 200 millones de dólares, el Estado argentino no aceptó más oferente que la SRA, vendiéndole la propiedad a 20 millones" (Mariana Heredia:2003, nota 10).

16 Pues, en clave de época, este particular estilo de acción política que encarnarán Menem y el menemismo va a ser naturalizado y mistificado bajo la categoría omniexplicativa de "transgresor" (Sarlo:1990; Luciana Vázquez:2000, p. 77).

17 La noción se halla bastante difundida en el medio empresarial del país. Como publicaba *La Nación* (11/4/03), citado en Mirta Palomino (2003), "antes se medía el grado de responsabilidad social en términos de sus obras de caridad o pura filantropía, o el dinero que donaba a los sectores más necesitados. Hoy no es así: la define su capacidad para contribuir a fines que responden a grandes necesidades sociales: desarrollo laboral, transparencia, ética. Si destina dinero a asistencia pero contamina, será mal calificada. Se trata de una iniciativa que tiende a promover el desarrollo de una conciencia empresaria madura y abierta a las necesidades; de premiar a quienes juegan limpio con sus clientes, con sus proveedores, con su capital humano y con el conjunto de la comunidad".

18 Este código de restricciones, generalmente no escrito, pero suficientemente (re)conocido por los interesados, apunta a reflejar la historia y la identidad del grupo social de referencia, mediante pautas sociales y culturales comunes. Así, mucho más que las reglas explícitas, las condiciones de admisión van configurando el nivel social y, por ende, el contorno del grupo de pertenencia. En suma, como en los clubes ingleses, en los *countries* más exclusivos o tradicionales del país, existió el temido sistema de la "bolilla negra", por el cual una sola negativa proveniente de un socio del club podía excluir sin discusiones al candidato.

Capítulo 5. La fragmentación de las clases medias

19 Retomamos para ello la presentación realizada en el capítulo 1 de *Los que ganaron*, Biblos, Buenos Aires, 2001.

20 El reconocimiento de la creciente heterogeneidad del universo de los trabajadores de "cuello blanco", así como la expansión de los puestos de trabajo de alto nivel (los límites de su "responsabilidad", su acceso a las decisiones, en fin, las modalidades laborales que adoptaría su creciente

afinidad con las clases dirigentes), ha dado origen a una serie de interesantes debates en las ciencias sociales contemporáneas. Para una introducción general, véase R. Crompton, 1994.

21 Para dar cuenta del impacto de los procesos de empobrecimiento sufridos por los sectores medios a lo largo de los 90, tanto en este apartado como en el próximo, consagrado a la experiencia del trueque, tomaremos como base los trabajos realizados por el área de Sociología del Instituto de Ciencias de la UNGS, al cual pertenecemos. Para el estudio de los nuevos pobres, agredecemos los aportes de Gabriel Kessler; y en el caso del trueque, los trabajos fundadores de Inés González Bombal y Fabiana Leoni, así como la exhaustiva investigación de Mariana Luzzi.

22 Rusia conoció un fuerte desarrollo del trueque durante la década del 90, aun si la experiencia es diferente a la de nuestro país (pues no había moneda social). Para el tema, puede consultarse Mariana Luzzi (2005).

23 Para una cronología completa del trueque, así como una revisión de la bibliografía existente, sumada al testimonio de los protagonistas principales, véase de Hintze Susana (comp.), *Trueque y economía solidaria*, Prometeo-UNGS, Buenos Aires (2003).

24 De manera general, el proceso de suburbanización actual puede ser descripto como el desplazamiento de un modelo de "ciudad abierta", a un régimen de "ciudad cerrada", según el modelo norteamericano, marcado por la afirmación de una ciudadanía patrimonial, que refuerza la fragmentación social. En el tipo urbano emergente es prioritaria la búsqueda de la distancia social, ante las nuevas amenazas que trae aparejado el aumento creciente de las desigualdades sociales. Este estilo residencial daría origen a una suerte de "urbanismo de las afinidades" (Donzelot:1999), que hoy se halla presente, aunque en diferentes grados, en el conjunto de las sociedades contemporáneas.

25 En los residentes pertenecientes a las clases altas, la distancia social aparece naturalizada, producto de una socialización realizada en el "entre nos", esto es, en círculos sociales homogéneos. Desde este punto de vista, la elección del *country* o del barrio privado se inserta en el registro de la continuidad, a diferencia de los sectores medios en ascenso, socializados en otro modelo, caracterizado por la heterogeneidad social y la presencia de lo público. Sin embargo, más allá de la continuidad o de la ruptura, todos reconocen que las nuevas formas de habitar se insertan en un contexto de ensanchamiento de las distancias sociales entre ricos y pobres.

Capítulo 6. La transformación y territorialización de los sectores populares

26 Ciertamente, la teoría de la marginalidad era, desde el punto de vista político, más ambigua, pues si bien sus autores adherían a la hipótesis revolucionaria, sus conclusiones deslizaban una desconfianza en la posibilidad de construir un sujeto revolucionario "desde abajo".

27 Este apartado retoma parte de los análisis desarrollados en *La plaza*

vacía. Las transformaciones del peronismo, Losada, Buenos Aires, 1997 (en colaboración con Danilo Martuccelli).

28 En términos clasistas, la conciencia obrera puede ser definida como "la conciencia específica de un conflicto social, ligado a la apropiación y al control de la organización del trabajo y de los resultados de la producción" (Touraine:1966); en términos más culturalistas alude a la existencia de una "comunidad" que comparte un estilo de vida que, gracias a su homogeneidad y a su aislamiento social relativo, puede constituirse en un grupo social cerrado y altamente combativo (Hoggart:1990). En fin, esto no significa que no hayan existido experiencias de corte clasista en la Argentina. No hay que olvidar las corrientes anarquistas y sindicalistas anteriores al peronismo, como tampoco la emergencia de un "sindicalismo de clase" durante los 60 y 70, dentro de los sectores más calificados de la clase obrera (Córdoba), así como aquellas otras experiencias marcadas por la impronta comunitaria (como es el caso de la UOM en Villa Constitución).

29 Véase el capítulo 8 de este libro.

30 Uno y otro gremio ilustran dos estilos y legados sindicales diferentes: tradicionalmente, el sector comercio es considerado como uno de los más "débiles" en términos de identidad laboral y actividad sindical, mientras que el trabajador metalúrgico ha sido durante mucho tiempo el símbolo de la conciencia obrera (y peronista) en el país. Así, entre 1989 y 2002, el sector comercio, que posee uno de los sindicatos más grandes del país, fue protagonista del 1% de los conflictos laborales (Daniel Contartese, Gómez y Rúfolo, 2003, p. 15). Por su parte, el sector automotor, cuya suerte estuvo más ligada a una política de protección y exenciones, protagonizó numerosos conflictos. Hubo también conflictos de representación intersindical entre los dos gremios del sector (Smata y UOM). Volveremos sobre el tema en el próximo capítulo de este libro.

31 En un estudio reciente llevado a cabo en una fábrica automotriz (Toyota), Osvaldo Battistini y Ariel Wilkis (2004) constatan en las jóvenes generaciones de trabajadores el desarrollo de formas identitarias estrechamente vinculadas al marco laboral, tal como sucedía bajo el modelo anterior. Esto se explica por las características que ofrece la empresa, pues "en Argentina no existe un trabajador más permanente que el de Toyota" (p. 167). Sin embargo, los mismos autores no dejan de reconocer el carácter excepcional del "modelo Toyota" (rigidez/estabilidad) dentro de la producción posfordista y muy especialmente, en el contexto argentino de los 90, en el cual se instaló rápidamente un modelo de producción flexible, asociado a la precariedad e inestabilidad laboral.

32 La expresión es de Inés González Bombal.

33 En rigor, la represión y persecución se inicia en los 60, con el gobierno militar de Onganía, época en la cual la juventud emerge como nuevo actor político-cultural.

34 Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), organización especializada en el tema, lleva un registro de más de

2000 casos desde finales de la década del 80 a la actualidad, destacando un notorio aumento de los mismos en coincidencia con los discursos públicos de "mano dura". Según el último informe presentado (2004), el 65,40% de las víctimas de la violencia policial tenía entre 15 y 25 años. Más aún, en el año 2000, luego del homicidio de un joven en la zona norte del Gran Buenos Aires, saltó a la luz la existencia de un grupo parapolicial (formado por policías de la provincia de Buenos Aires y civiles), que tenía como práctica sistemática la "limpieza social" de jóvenes pobres y excluidos, lo que se traducía en detenciones arbitrarias, torturas y fusilamientos (Alerta Argentina:2004).

35 Este carácter de "clase sobrante" aparece reflejado también en el desprecio de las instituciones del Estado respecto del cuidado de la vida y la protección de los jóvenes. Lo sucedido en la discoteca Cromagnon, en diciembre de 2004, en la cual murieron casi dos centenares de adolescentes y jóvenes, expresa de manera trágica el alcance de este proceso.

36 Resultaría interesante profundizar las relaciones entre el rock barrial y la "cumbia villera", y la de éstos con los clásicos tópicos tangueros. Ya hemos señalado (Svampa y Pereyra:2003) cuán importante resultaría tender los lazos de la "cumbia villera" con el tango de los años 30, época en el cual la crisis económica afectó las posibilidades de ascenso social de vastas capas de la población. No por casualidad, en ese período proliferaron letras de tango donde convergían el resentimiento masculino con el menosprecio hacia la mujer. Según Pablo Semán y Pablo Vila (1999), el rock "chabón" articula ciertos tópicos tangueros (el barrio, o las constantes alusiones a un estereotipo tanguero de la virilidad, suerte de "guapo" —casi siempre un "perdedor"— apostado "en una esquina cualquiera").Por último, no debería olvidarse que, en el campo artístico, en los últimos tiempos el tango ha encontrado nuevos cultores, sobre todo en las franjas juveniles.

37 La tesis de Steve Levitsky (2001) es que, durante los 90, el peronismo conservó una fuerte infraestructura organizacional, con profundas raíces en el mundo popular. En realidad, el carácter descentralizado de estas organizaciones locales habría puesto límites reales a la capacidad de liderazgo de Menem para transformar el partido desde arriba. El trabajo, sin duda uno de los más importantes realizados sobre el peronismo de los 90, presenta, sin embargo, algunos problemas: primero, no da cuenta de las consecuencias de la desvinculación entre el mundo popular y el mundo sindical en esa "infraestructura local"; segundo, tampoco explora las repercusiones de la implementación de un nuevo estilo de gestión sobre las propias organizaciones populares peronistas (no nos referimos con ello a la autoridad de Menem, su estilo político, o las relaciones con la estructura partidaria, sino, de manera más específica, a las restricciones y transformaciones que produjo la política de descentralización y focalización de la ayuda social). Cierto es que su lectura se orienta sobre todo a desmitificar la visión "politológica" de las ciencias sociales, que durante los 90 privilegió una lectura en térmi-

nos de "neopopulismo" (esto es, como si la reformulación de la relación con las organizaciones populares peronistas hubiese dependido del solo liderazgo personalista y autoritario de Menem). Sin embargo, hacer hincapié en la continuidad organizacional, desdeña o minimiza las rupturas producidas; a saber, la reorientación de las organizaciones preexistentes y el surgimiento de un nuevo tejido "comunitario".

38 La cuestión asumía entonces una relevancia nacional, si tenemos en cuenta que la provincia de Buenos Aires es el distrito electoral más importante del país, con un 36,97% de votantes de todo el país.

39 En otro lugar (Martuccelli y Svampa:1997; Svampa y Pereyra:2003), hemos realizado un análisis de estas transformaciones del peronismo en términos de clientelismo afectivo.

40 Al respecto, véase "Politización de una muerte y responsabilidad pública", capítulo 6, en Fréderic (2004).

41 Los primeros dirigentes piqueteros provienen de diferentes tradiciones de la izquierda, entre ellas, del PCR, PRT, PC, MAS y, de manera más genérica, de la izquierda social cristiana. Para el caso de los más jóvenes, varios de ellos provienen de la nueva juventud militante, crítica de los partidos políticos, en ciertos casos, con algún pasaje por grupos de izquierda universitarios.

42 Puede encontrarse una primera exploración en Grimson (2003). Un trabajo en profundidad es actualmente realizado por el equipo de Ciencias Sociales de la UNGS, al cual pertenecemos.

Tercera Parte

La acción colectiva: de la crisis a las nuevas formas de resistencia al modelo neoliberal

Introducción

1 Por otro lado, como consigna Sebastián Pereyra (2005), "la participación de un antiguo dirigente del CELS, Jorge Baños, en La Tablada, generó una serie de discusiones y la pronunciación de la mayoría de las organizaciones históricas contra el desarrollo de acciones armadas".

Capítulo 7. Crisis estructural y nuevas formas de resistencia

2 En este período, los movimientos sociales urbanos despertaron expectativas en algunos analistas, que proponían una articulación entre luchas sociales (urbanas) y luchas políticas (sindicales, partidarias). Éste fue el caso de Manuel Castells, autor de un libro muy conocido en la época (1974). Sin embargo, la esperada articulación finalmente no tuvo lugar, y los trabajos posteriores concluyeron en pronósticos más bien pesimistas, visto el proceso de cooptación e institucionalización de la acción en el marco del "desarrollo local" (Cardoso:1983).

3 Cierto es que, a partir de 2001, el uso de la categoría de "protesta social" desbordó el campo académico, para pasar a constituir una suerte de lugar común, periodístico y político. En este sentido, es necesario aclarar que la noción de "protesta" aparece definida en el marco del paradigma de la interacción estratégica, en función de dos rasgos mayores: el carácter contencioso de la acción y su visibilidad pública. Este concepto ha sido retomado por numerosos analistas locales, entre ellos, Federico Schuster y Sebastián Pereyra (2001), para cuestionar la noción misma de movimientos sociales como "herramienta de comprensión de las movilizaciones" en razón de la heterogeneidad de las acciones actuales, así como de la complejidad y diversidad de sus manifestaciones y significaciones políticas. En razón de ello, para salir de la univocidad típica del lenguaje precedente, los autores citados proponían la noción de "redes de protesta", interpretada ésta como corolario de la acción y la emergencia de aspectos comunes, suerte de "aires de familia" (Schuster y Pereyra:2001, p. 57). Estas lecturas tienen el mérito de relevar novedosos aspectos de la acción colectiva surgidos a lo largo de los 90 y en buena medida, de insertar estos cambios en el nivel específicamente político del análisis. Sin embargo, pese a las ventajas operativas de la noción, creemos que sigue siendo necesario un análisis en otros niveles de la acción (dimensiones culturales, ideológicas, o aquellas específicamente subjetivas), y de sus distintas escalas (local, regional, nacional y global), más aún, a partir de la multiplicación de las formas de resistencia, visibles en la emergencia y consolidación de un vasto campo multiorganizacional. En este sentido, pensamos que no es posible escatimar cierta mirada analítica presente en la teoría de los movimientos sociales, pues más allá de sus lecturas, por momentos excesivamente normativas —aunque jamás reduccionistas—, continúan siendo notablemente enriquecedoras, en la medida en que nos permiten explorar cuestiones de orden cultural e ideológico, relativas a los procesos de construcción de las identidades colectivas. No hay que olvidar tampoco que, dentro de esta visión centrada en el análisis de la (re)construcción de identidades colectivas, confluyen perspectivas que hacen hincapié en la —no tan novedosa— heterogeneidad y complejidad de las luchas sociales, así como en el carácter contingente y precario del proceso de reconstrucción de las subjetividades. Sin duda, los análisis de Alberto Melucci (1991, 1994, 1998) constituyen la mejor ilustración de esta visión.

4 Para un análisis en términos de estrategias sindicales frente al proceso de reformas, véase Murillo (1997). Para una reconstrucción y análisis del surgimiento de la CTA, véase Armelino (2005). Para un análisis de los modelos sindicales en los 90 y su relación con la identidad peronista, Martuccelli y Svampa (1997).

5 A cargo de Francisco Gutiérrez, el dirigente de la seccional de la UOM de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, luego diputado nacional por el Polo Social.

6 Uno de los casos más relevantes es el de la UOM de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, una de las primeras seccionales en desarrollar

nuevas estrategias de conservación de empleo, a través de la conformación de cooperativas de trabajadores, luego del quiebre de las empresas. No por casualidad, el grupo liderado por Gutiérrez estaría en la fundación del MNER (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas), que se crearía en el año 2000, y constituye hoy una de las corrientes más importantes del multiforme campo de las fábricas recuperadas.

7 Para la reconstrucción de este conflicto, véase Martuccelli y Svampa (1997, capítulo 4).

8 Recordemos que las jurisdicciones provinciales pasaron a concentrar la gestión de cuatro áreas fundamentales: salud, educación (a excepción del nivel universitario), seguridad y bienestar social.

9 Ya hemos dicho, siguiendo a Eduardo Gibson y Ernesto Calvo (2001), que el gobierno menemista postergó hasta 1995 la reforma de la administración provincial, a fin de mantener sus bases electorales en las provincias periféricas, que resultaban decisivas para el control del Parlamento.

10 Para una lectura sobre las consecuencias de estos procesos, veáse Falleti (2001).

11 La Primera Marcha Federal constituye una inflexión importante, en la medida en que da cuenta de la progresiva cristalización de un núcleo opositor al modelo neoliberal, liderado por la incipiente Central de Trabajadores Argentinos (CTA, entonces Congreso de Trabajadores Argentinos), el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), los diferentes nucleamientos sindicales que darían origen a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), así como otros actores sociales (Federación Agraria Argentina, entre ellos).

12 La CTA se constituyó como central sindical en mayo de 1997. El gobierno le exigió regularizar su situación como organización de tercer grado, pues, como organización de tercer grado, una central no puede apelar al voto directo de los trabajadores (si no es a través de las organizaciones de segundo grado, los sindicatos del sector). Por su parte, la CTA defiende este mecanismo de elección de autoridades argumentando la necesidad de dar representación a aquellos componentes de la fuerza de trabajo "que no son incorporables organizativamente bajo los moldes del modelo sindical tradicional" (Lozano:1995). Por último hay que añadir que la CTA tiene personería jurídica, pero no personería gremial, cuyo monopolio se halla en manos de la CGT. La última demanda de personería gremial de la CTA le fue denegada en abril de 2005.

13 La FTV, que inicialmente contaba con diferentes líneas internas (aquellas organizaciones territoriales ligadas al Partido Comunista y a Patria Libre), fue perdiendo parte de su pluralismo original, en torno al liderazgo de líder de La Matanza Luis D'Elía. Entre 1998 y 2000, la organización lideró junto con su par de la CCC la lucha piquetera, pero a partir de 2001 optó por una línea de acción más institucionalizada y, desde 2003, abandonó la estrategia de la movilización para

apoyar de manera irrestricta el gobierno de Kirchner. Entre 2004 y 2005, la FTV perdió sus bastiones principales en el interior del país y en la ciudad de Buenos Aires, a raíz de las fuertes resistencias que ha generado el particular estilo político de D'Elía. No obstante, esas mismas organizaciones hoy siguen formando parte de la CTA.

14 No deja de ser sugestivo el quietismo de la CTA durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, así como durante el movilizado año 2002. Muy probablemente, sus dirigentes hayan sido sorprendidos por estos acontecimientos, como tantos otros actores de la sociedad argentina; sobre todo, luego del gran esfuerzo organizativo que involucrara la puesta en marcha de la consulta popular (Frenapo). Más simple, en la medida en que sus expectativas políticas estaban concentradas en esta propuesta, los dirigentes de la CTA tuvieron dificultades para adaptarse políticamente al nuevo escenario abierto luego de diciembre de 2001.

15 Así, además de la dirección del SEOM, la CCC cuenta con representantes dentro de la dirección de sindicatos municipales en Tucumán, del sindicato de Correo y de Televisión en localidades de Salta, en la seccional de ATE de Comodoro Rivadavia. También hay representantes de la CCC en la dirección de distintas seccionales de ATE, en Suteba (seccional de Quilmes y Berazategui) y en el sindicato de judiciales. Asimismo, está presente en varios gremios industriales, como en Terrabusi (donde encabeza la comisión interna de delegados), y en fábricas del Gran Buenos Aires y Rosario. La toma de 18 días en la fábrica Ford en 1985 fue dirigida por delegados pertenecientes al PCR, que formaban parte de las agrupaciones clasistas, previas a la conformación de la CCC. (Agradecemos la información suministrada por Pilar Sánchez.)

16 El Mocafor forma parte de la CTA y, durante años, integró también la Federación de Tierras y Viviendas, de la cual se apartó a principios de 2005.

17 El elemento novedoso que introducían las confesiones de Scilingo es que corroboraban, por primera vez desde el costado de los victimarios, aquellas denuncias que desde hacía casi dos décadas venían haciendo las organizaciones de derechos humanos.

Capítulo 8. Las dimensiones de la experiencia piquetera

18 El presente capítulo retoma pasajes del trabajo realizado en coautoría con Sebastián Pereyra, publicado en el libro *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Biblos, Buenos Aires, 2003 y 2004 (actualización y balance).

19 Las principales características del Plan Trabajar eran las siguientes: se requería la presentación de proyectos de mejoramiento barrial (por parte de municipios u ONG) que tuvieran "relevancia social", apuntando a mejorar la calidad de vida de la población. El subsidio inicial era de 200 pesos. Se exigía una contraprestación que tenía una duración de hasta seis meses con posibilidades limitadas de renovación. Por últi-

mo, los ámbitos locales eran los que cofinanciaban con recursos propios (materiales, recursos humanos, equipamiento) la puesta en marcha de los proyectos.

20 La masacre del Puente Pueyrredón marcó un momento de inflexión en la historia política reciente, respecto de los modos de concebir la represión, desde el aparato del Estado, hacia los sectores movilizados. Más allá de las diferentes interpretaciones, los hechos ocurridos en Avellaneda constituyeron un ensayo desde el poder, destinado a quebrar la organización de los movimientos sociales. Esto aparece avalado por el informe previo de la SIDE, así como por las declaraciones de distintos funcionarios y gobernadores, los cuales venían haciendo reclamos disciplinadores, planteando en algunos casos la necesidad de intervención de las fuerzas armadas en conflictos internos. Sin embargo, al descubrirse la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en los crímenes de Kosteki y Santillán, la sociedad argentina reaccionó en bloque, viendo en aquellos hechos una suerte de actualización de metodologías de aniquilamiento, propias de los años del terrorismo de Estado. En este sentido, el 26 de junio de 2002 dejó en claro que cada gran represión que ocurre en el centro político o que adquiere gran visibilidad, reactiva en la sociedad argentina el recuerdo de la represión de los 70. Los hechos de Avellaneda pusieron de manifiesto el potencial movilizador y solidario que posee la memoria de "la gran represión".

21 Como hemos señalado más arriba, en los últimos tiempos los "proyectos productivos" han adquirido gran importancia para la mayor parte de las organizaciones, aun para aquellas que se mostraban reticentes a impulsar esta vía. Esto se debe a que, desde fines de 2003, las organizaciones piqueteras reciben importantes subsidios financieros del gobierno (contra la presentación de proyectos) para emprendimientos productivos. Sin embargo, las condiciones laborales en las cuáles éstos se desarrollan revelan una gran dificultad y precariedad, en mucho, por falta de acompañamiento técnico y problemas de comercialización. Para una lectura sobre la "economía social" como nuevo paradigma o vía de otro desarrollo social, puede verse Coraggio (2002).

22 Por otro lado, en los últimos años el crecimiento de las organizaciones piqueteras se asentó también en el trasvasamiento de mediadores barriales o agentes comunitarios anteriormente ligados al partido peronista. En este sentido, la transformación de la cultura clientelar de los mediadores, así como de la perspectiva asistencialista, dirigida a los "beneficiarios", en la nueva práctica política está lejos de ser algo mecánico —y menos aún en un contexto de masificación—, lo cual requiere, ciertamente, una profundización no sólo de la dinámica asamblearia, sino también una definición más clara del horizonte político y estratégico de las organizaciones.

23 Bien vale la pena aclarar que las nuevas protestas plantearon un conflicto de derechos (entre el derecho a peticionar y el derecho a circular). En este sentido, alentados por el poder político, el Poder Judicial ha venido desarrollando una política de rechazo de las nuevas formas de protesta, estableciendo juicios muy cuestionables y pronunciándose, sin mayor reflexión, en favor del derecho de libre circulación. Para un amplio y riguroso tratamiento de esta temática desde el punto de vista constitucional, véase Gargarella (2005).

24 No olvidemos que la matriz populista se asienta sobre tres principios o afirmaciones mayores: uno, el principio de la conducción a través del líder (un liderazgo personalista, con fuerte retórica nacionalista), dos, el principio de las bases sociales organizadas (la figura del Pueblo-Nación), tres, la constitución de una coalición interclases, condición para una redistribución de la riqueza más equitativa (el modelo socio-económico integrador). Mientras que en la experiencia argentina los dos primeros principios están presentes (el líder personalista y las bases sociales organizadas), en la actualidad no existen indicadores acerca de la implementación de un nuevo modelo socio-económico, en un sentido redistribucionista. De manera que la expectativa reformista de los grupos filopopulistas se encuentra ante un obstáculo mayor, debido a la ausencia de uno de los ejes centrales del modelo al cual adhieren. Esta ausencia aumenta el riesgo de que, efectivamente, las organizaciones de tipo territorial terminen siendo un mero instrumento del Partido Justicialista (y de sus actuales disputas internas), o simplemente sean absorbidas y neutralizadas por las corrientes más conservadoras y reaccionarias del partido en cuestión, como ha sucedido —de manera trágica— en otros momentos de la historia argentina.

25 Para un análisis de estas dificultades, puede consultarse A. Grimson (2004) y Svampa (2004).

Capítulo 9. El retorno de la política a las calles (2002-2005)

26 Hay muy escasos trabajos sobre las agrupaciones de ahorristas, las cuales han sido sistemáticamente ignoradas por las ciencias sociales. Ello constrasta con la cantidad de trabajos e investigaciones existentes sobre las asambleas barriales. Muy probablemente esto se deba a que los ahorristas representan un tipo de reclamo estrechamente ligado a la defensa del interés particular. De hecho, el movimiento de ahorristas nunca pudo superar este carácter particular y dar un paso hacia la construcción de un "nosotros" más inclusivo, ni aun cuando obtuvo una mayor visibilidad a través del liderazgo de Nito Artaza, quien en algún momento intentó —sin éxito— articular ciertos elementos más "universalistas" en su discurso. Por otra parte, en las asambleas barriales había ahorristas, pero éstos no hablaban identificándose como tales, sino más bien como "vecinos" o, posteriormente como "asambleístas". Creemos que este problema de no-visibilidad y, en definitiva, de obturación de la problemática, se debía al hecho de que el movimiento de asambleas, en tanto se proponía una refundación política de la sociedad, representaba la máxima aspiración de

universalidad de las clases medias, mientras que los ahorristas representaban el otro extremo, esto es, la expresión del máximo particularismo de las clases medias. Un primer abordaje interesante de la protesta de los ahorristas fue realizado por Juan Luis Vázquez (2003).

27 En la actualidad, existen más de 150 fábricas recuperadas, nucleadas en diferentes corrientes, y constituidas en cooperativas. Las corrientes más importantes son el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT). A diferencia de la experiencia piquetera, las fábricas recuperadas han concitado desde el inicio una fuerte simpatía y apoyos sociales, que fueron fundamentales para su expansión y consolidación. Por otro lado, salvo casos excepcionales (entre los cuales se encuentran dos casos emblemáticos, como Brukman y cerámica Zanon), las fábricas recuperadas no encontraron una fuerte resistencia por parte del Estado, aun cuando la respuesta no fue homogénea y se hayan registrado varios desalojos. Antes bien, la crisis abrió nuevas oportunidades políticas, que coadyuvaron al acompañamiento de estos procesos, primero a través del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) —que creó una unidad ejecutora para las empresas recuperadas—; luego, facilitando la formación de cooperativas y a través de la expropiación (temporaria) en favor de los trabajadores. Las fábricas recuperadas se consideran a sí mismas como "movimientos", en tanto la recuperación (el acto de resistir) es equiparada a la protesta social (Rebón:2004, p. 85). Para un relevamiento minucioso, así como una presentación de casos emblemáticos, véase *Sin patrón* (La Vaca:2004). Un interesante análisis sociológico puede encontrarse en Rebón (2004). También pueden consultarse Di Marco *et al.* (2003) y Magnani (2003).

28 En realidad, el proceso asambleario argentino evolucionó hacia una suerte de *hipérbole autonomista*, que, erigida contra toda pretensión hegemonizante, condujo también a la imposibilidad de pensar la política a partir de la articulación, concebida ésta en términos constitutivos (y no solamente en términos de coordinación).

29 En el primer aniversario del 19 y el 20 de diciembre, no hubo un acto unitario, sino dos conmemoraciones de distinto tipo y calibre. Por un lado, en la mañana del 19 un sector de las asambleas realizó el "piquete urbano", que consistió en el bloqueo de algunas calles del microcentro porteño, donde están la Bolsa de Valores y el Banco Central, con el objetivo de interrumpir la actividad financiera. Las acciones, que conllevaron una rica y colorida puesta en escena, cargada de elementos estéticos y de perfomances, fueron coordinadas por distintas asambleas, colectivos culturales y agrupaciones estudiantiles. No hubo discursos, sino sólo una serie de acciones directas dirigidas contra la clase política y los símbolos del poder capitalista (en especial, contra el capitalismo financiero). Por otro lado, un día más tarde, el 20 de diciembre, se realizaría una gran movilización que culminaría en Plaza de Mayo. Banderas y pañuelos, mayoritariamente pertenecientes a las

diferentes agrupaciones piqueteras, colorearon la manifestación. Sintomáticamente, las asambleas que concurrieron no alcanzaron a ocupar la histórica plaza y quedaron apostadas en las calles laterales, desde donde siguieron el acto multitudinario. Un breve comunicado leído por dos asambleístas fue intercalado entre una veintena de discursos piqueteros. Para una excelente reconstrucción y lectura de estos hechos, véase Schillagi (2003).

30 Para un balance crítico del proceso asambleario, véase *El Rodaballo* (2004).

31 Aun así, podría argüirse que el legado de las asambleas también se ha hecho notar en la dimensión más institucional. No olvidemos que una de las aspiraciones mayores de las asambleas fue la creación de una nueva institucionalidad "desde abajo". En este sentido, aun en medio de un gran escepticismo, para algunas asambleas, el proceso de descentralización encarado por la ciudad de Buenos Aires, a través del proyecto de la "Ley de Comunas", cuya creación prevé la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada en 1996, abre nuevas posibilidades. Consecuentemente, y en una iniciativa que excedía el marco asambleario, se constituyó la "Coordinadora de Comunas", que reunió un conjunto de organizaciones vecinales (cuarenta y siete, de las cuales veinte, por lo menos, eran asambleas barriales). En la actualidad, aun si éstas han dejado de funcionar coordinadamente, son catorce las asambleas barriales de la ciudad de Buenos Aires que continúan participando de este proyecto, algunas de las cuales se encuentran integrando el "programa de transición hacia las comunas". Sin embargo, las diferencias son claras: mientras el gobierno de la ciudad de Buenos Aires alienta la implementación de las comunas como instrumento de "control ciudadano", para los asambleístas ello resulta insuficiente si no va acompañado por el desarrollo de herramientas orientadas a la participación popular, esto es, al "autogobierno".Aclaremos que las comunas son unidades de gobierno descentralizadas, gobernadas por una junta comunal. Su creación, prevista por la Constitución porteña, lleva más de tres años de demora. A fines de 2002, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intentó aprobar una ley que dividía a la ciudad en 19 comunas, pero no obtuvo los votos necesarios. Más aún, se encontró con la oposición de cuarenta y siete organizaciones vecinales, que integran la Coordinadora por Comunas y que cuestionaron la falta de información previa y de discusión entre los porteños. Finalmente, en 2005, fueron convocadas diferentes organizaciones vecinales para continuar la discusión, en el marco del "Programa de transición hacia las comunas". Lo que está en discusión es la cantidad de comunas y su delimitación, así como su competencia y presupuesto. Hasta julio de 2005, la Ley de Comunas todavía no había sido aprobada y continuaba bajo tratamiento parlamentario.

32 Entre los integrantes de Argentina Arde estaban el Grupo de Cine Insurgente, El Ojo Obrero, Contraimagen, Adoc (Asociación de Docu-

mentalistas), la Escuela de Cine de Avellaneda, estudiantes de cine de la universidad de La Plata, estudiantes de la escuela Prilidiano Pueyrredón, FM La Tribu, estudiantes de comunicación de La Tribu, Indymedia Argentina, en fin, diferentes fotógrafos, cronistas vecinales y periodistas. La denominación adoptada alude a *Tucumán Arde*, que fue la obra colectiva más conocida de la vanguardia plástica argentina, llevada a cabo en 1968. Esa experiencia artística y de comunicación alternativa tuvo por objetivo cuestionar la dictadura de Onganía, que pretendía difundir una imagen de bienestar social, valiéndose del ejemplo de la provincia de Tucumán y las plantaciones de caña de azúcar. Para ello, un grupo de artistas viajó hasta la provincia y testimonió a través de más de dos mil fotos lo que realmente estaba pasando. Con este material se hizo una muestra en la CGT de los Argentinos, que fue rápidamente clausurada. De esta manera, los artistas de *Tucumán Arde* plantearon una concepción diferente del arte, que se colocaba en ruptura con el circuito y la concepción artística pautado en aquel entonces por el Instituto Di Tella. Para el tema, véase Longoni y Mestman (1999). Asimismo, sobre el cine militante actual y su repolitización, veánse los trabajos de Cristian Dodaro y Daniel Salerno (2003). Para una muestra significativa del arte político, ligado a los procesos de diciembre de 2001, véase la exposición Ex Argentina, realizada por el Instituto Goethe, 2004.

33 Durante 2003, realizamos entrevistas a diferentes grupos de comunicación alternativa, entre ellos Anred, La Vaca e Indymedia Argentina. La frase citada pertenece al colectivo Indymedia, entrevista realizada en julio de 2003.

34 Véase el libro de C. Esperón y N. Vinelli (2004), dedicado al tema de la contrainformación, donde aparece el testimonio y la reflexión de una parte importante de estos colectivos.

35 Cierto es que los grupos suelen ser muy heterogéneos y variables. La mayoría se organizan bajo la forma de colectivos, esto es, organizaciones pequeñas (entre diez y cuarenta personas), flexibles y antiburocrática, que hacen hincapié en las formas de democracia directa y la democracia por consenso. Aunque no poseen un programa político definido, todas ellas combinan un marcado discurso anticapitalista y antirrepresivo con una fuerte aspiración a la democratización de las relaciones sociales.

36 Este aspecto es muy relevante, independientemente de las interpretaciones que se hagan de él y pese a que muy probablemente gran parte de los desocupados nunca hayan sido beneficiarios directos del modelo nacional-popular. Esta defensa y evocación de los derechos conculcados, presente ya en el origen —pese a que tienden a ser desdibujados por la política asistencial—, ayuda a entender por qué los desocupados en nuestro país orientan sus reclamos hacia al Estado en lugar de limitarse exclusivamente a desarrollar redes de reciprocidad e intercambio dentro del mundo popular.

37 Juan Carlos Blumberg se convirtió en el líder de un nuevo movimiento en demanda de seguridad, luego del crimen de su hijo, secuestrado y asesinado en marzo de 2004. Poco después, Blumberg, que culpó de la situación de inseguridad tanto a los jueces intervinientes como a la policía y al poder político, llamó a una primera gran marcha al Congreso de la Nación, que tuvo un carácter masivo. En la segunda marcha, realizada como la anterior en abril, presentó un petitorio donde se proponían cambios en la legislación penal, firmado por casi cinco millones de personas. En septiembre de 2004 hubo una tercera marcha, menos masiva, donde Blumberg fustigó a los organismos de derechos humanos.

38 Para una aproximación a esta problemática en perspectiva latinoamericana, véase el informe preparado para la 10ª Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Buenos Aires, 6 a 17 de diciembre de 2004, *dossier* "Políticas energéticas e impactos ambientales en Sudamérica. Avanzando en la construcción de una plataforma energética para los pueblos de América", coorganizado por la Coalición Ríos Vivos, la Fundación Heinrich Böll, el Programa Argentina Sustentable y el Programa Cono Sur Sustentable. Impreso en Santa Fe, Argentina.

COMENTARIOS FINALES

1 Datos elaborados sobre la base de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) del Indec, Instituto de Ciencias, UNGS.
2 La expresión pertenece a Pablo Bergel.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Abal Medina, Paula (2004), "Los dispositivos de control como mecanismos inhibidores de la identidad colectiva. Un estudio de caso en grandes cadenas de supermercados", en Battistini, Osvaldo (comp.), *El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria en los trabajadores*, Buenos Aires, Prometeo.

Acuña, Carlos (1994), "La burguesía como actor político", *Realidad Económica*, Nº 128, Buenos Aires.

— (1995), "Intereses empresarios, dictadura y democracia en la Argentina actual", en *La nueva matriz política argentina*, Buenos Aires, Nueva Visión.

Agamben, Giorgio (2004), *Estado de excepción*, Homo Sacer II, Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

Alerta Argentina (2004), "Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina" (Informe preparado para presentar en la Tercera Consulta Latinoamericana sobre Defensores/as de Derechos Humanos, San Pablo, Brasil, 25-27 de agosto de 2004), Buenos Aires, mimeo (disponible en lavaca.org y alertasalta.org.ar).

Alonso, Luis (2000), "Ciudadanía, sociedad del trabajo y Estado de Bienestar: los derechos sociales en la era de la fragmentación", en Manuel Pérez Ledesma (comp.), *Ciudadanía y democracia*, España, Pablo Iglesias.

Althabe, Gérard (1998), "Détour pour Buenos Aires", en Althabe, Gérard y Monique Selim, *Démarches ethnologiques au présent*, París, L'Harmattan.

Altvater, Elvar (2000), "El lugar y el tiempo de lo político bajo las condiciones de la globalización económica", en *Zona Abierta* 92/93, Madrid, pp.7-61.

Álvarez, Sonia (2000), "Capital social y concepciones de pobreza en el discurso del Banco Mundial, su funcionalidad en la 'nueva cuestión social'", en Jornada de Discusión "La cuestión social en el Gran Buenos Aires", UNGS, Proyecto Megaciudades, agosto, mimeo.

Améndola, Giuseppe (1997), *La ciudad posmoderna*, Madrid, Celeste.

Arendt, Hanna (1988), *Sobre la revolución*, Madrid, Alianza.

— (1996), *La condición humana*, Buenos Aires, Paidós.

Armelino, Martín (2005), "Acción colectiva y acciones de protesta: el caso de la CTA", en Naishtat, *et al.* (comp.), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires, Prometeo.

Aronskind, Ricardo (2001), *¿Más cerca o más lejos del desarrollo? Transformaciones económicas en los '90*, Buenos Aires, Libros del Rojas.

Azpiazu, Daniel, Miguel Khavisse y Eduardo Basualdo (1986), *El nuevo poder económico*, Buenos Aires, Hyspamérica.

Azpiazu, Daniel y Hugo Nochteff (1994), *El desarrollo ausente*, Buenos Aires, Tesis-Norma.

Azpiazu, Daniel (2002) (comp.), *Privatizaciones y poder económico*, Buenos Aires, UNQui-Flacso-IDEF.

Auyero, Javier (1997) (comp.), *¿Favores por votos? Estudios sobre el clientelismo político contemporáneo*, Buenos Aires, Losada.

— (2002), *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática*, Buenos Aires, Libros del Rojas.

Balibar, Etienne e Inmanuel Wallerstein (1995), *Raza, nación y clase*, Marid, IEPALA.

Barbeito, Alberto y Rubén Lo Vuolo (1992), *La modernización excluyente*, Buenos Aires, Unicef-CIEPP-Losada.

Barbeito, Alberto (1996), "Comentario de trabajo. La transformación industrial en los noventa. Un proceso con final abierto", *Desarrollo Económico*, número especial, vol. XXXVI (verano).

Basualdo, Eduardo (2000), *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa*, Buenos Aires, UnQui-Flacso, IDEP.

— (2002), *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Buenos Aires, UnQui-Flacso-IDEP. (Con comentarios de José Nun, Guillermo O'Donnell y Claudio Lozano.)

Battistini, Osvaldo y Ariel Wilkis (2004) "De la familia Falcón a la familia Toyota", en Battistini, Osvaldo (2004) (comp.), *El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria en los trabajadores*, Buenos Aires, Prometeo.

Bauman, Zygmund (1999), *En busca de la política*, México, Fondo de Cultura Económica.

Bayón, Cristina y Gonzalo Saraví (2002), "Vulnerabilidad social en la Argentina de los años noventa: impactos de la crisis en el Gran Buenos Aires", F. Errandonea Editor, Rocha, Uruguay.

Beccaria, Luis (2001), *Empleo e integración social*, México, Fondo de Cultura Económica.

— (2002), "Empleo, remuneraciones y diferenciación social en el último cuarto del siglo XX", en AAVV, *Sociedad y sociabilidad en la década de los '90*, Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento-Biblos.

Beck, Ulrich (1998), *La sociedad del riesgo*, Buenos Aires, Paidós.

— (2000) *¿Qué es la globalización?*, Buenos Aires, Paidós.

Beltrán, Gastón (1999) "La crisis de fines de los ochenta bajo la mirada de los sectores dominantes. Justificación e inicio del proceso de reformas estructurales de los años noventa", en *Época*, Año 1, Nº 1.

Belvedere, Carlos (1997), "El inconcluso 'Proyecto Marginalidad'. Una lectura extemporánea a casi treinta años", Apuntes de Investigación del CECYP, Buenos Aires, Año 1, Nº 1, octubre de 1997, pp. 97-115.

Bidaseca, Karina y Daniela Mariotti (2001), "Viejos y nuevos actores en la protesta rural en la Argentina", en Norma Giarracca (2001) (comp.), *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Buenos Aires, Alianza.

Bisang, Roberto, *et al.* (1996), "La transformación industrial en los noventa. Un proceso con final abierto", *Desarrollo Económico*, número especial, vol. XXXVI, pp. 187-216.

Bisang, Roberto (2003), "Apertura económica, innovación y estructura productiva: la aplicación de biotecnología en la producción agrícola pampeana argentina", *Desarrollo Económico*, vol. XLIII, Nº 171, pp. 413-442.

Bisio, Raúl y Ada Freytes Frey (1997), "Nuevos escenarios de negociación laboral. UOM versus SMATA, ¿divergentes planteos de la acción sindical?", en Ernesto Villanueva (coord.), *Empleo y globalización. La nueva cuestión social en la Argentina*, Buenos Aires, UNQui.

Bonaldi, Pablo Daniel (2004), "Hijos de desaparecidos. Entre la construcción de la política y la construcción de la memoria", en Elizabeth Jelin y Daniel Sempol (comps.), *Los jóvenes y la memoria*, Buenos Aires, Siglo XXI, colección "Memorias de la Represión" (en prensa).

Borja, Jordi (2000), "La visión ciudadana", en *La fragmentación física de nuestras ciudades*, Memoria del III Seminario Internacional de la Unidad Temática de Desarrollo Urbano, Malvinas Argentinas, 3 y 4 de agosto de 2000.

Borja, Jordi y Manuel Castells (1997), *Lo local y lo global. La gestión de las ciudades en la era de la información*, Madrid, Taurus.

Bourdieu, Pierre (1979), *La distinction. Critique social du jugement*, París, Minuit. [*La distinción*, Madrid, Taurus, 1998.]

— (2001), *Contre-feux (Pour un mouvement social européen)*, París, Raison d'Agir.

— (2002), *Interventions. Sciences Sociale et action politique (1961-2001)*, Marseille, Agone.

Brenner, Miguel (2001), "Ciudadanía y cumbia villera. Una mirada soez", Buenos Aires, Foro Página Digital.

Calderón, Fernando y Mario Dos Santos (1995), *Sociedades sin atajos. Cultura, política y reestructuración en América Latina*, Buenos Aires, Paidós.

Cardoso, Fernando H. y Enzo Faletto (1986), *Dependencia y desarrollo en América Latina*, México, Siglo XXI.

Cardoso, Ruth (1983) "Movimentos sociais urbanos: balanço critico", en Bernardo Sorj, y Maria Herminia Tavares de Almeida (comps.), *Sociedade e política no Brasil pos-64*, San Pablo, Editora Brasiliense.

Castel, Robert (1995), *Les métamorphoses de la question sociale*, París, Fayard. [*La metamorfosis de la cuestión social*, Paidós, Buenos Aires, 1997.]

— (2000), "¿Por qué la clase obrera perdió la partida?", *Actuel Marx. Las nuevas relaciones de clase. Congreso Marx Internacional II*, Buenos Aires, Edición K&ai.

Castellani, Ana y Martín Schorr (2004), "Devaluacionistas y dolarizadores. La construcción social de las alternativas propuestas por los sectores dominantes ante la crisis de la convertibilidad. Argentina, 1999-2001", Buenos Aires, mimeo.

Castells, Manuel (1974), *Movimientos sociales urbanos*, Madrid, Siglo XXI.

— (1997), *La era de la información*, vol. II: *El poder de la identidad*, Madrid, Alianza.

Castoriadis, Cornelio (1988), *Los dominios del hombre*, Barcelona, Gedisa.

CELS (2003a), "Plan Jefas y Jefes: ¿Derecho social o beneficio sin derechos?", Buenos Aires, mimeo, mayo.

— (2003b), *El Estado frente a la protesta social, 1996-2002*, Buenos Aires, Siglo XXI.

CEPAL (1963), *El desarrollo social de América Latina en la postguerra*, Colección Dimensión Americana, Solar/Hachette, Buenos Aires.

Cerruti, Gabriela y Sergio Ciancaglini (1992), *El octavo círculo. Crónica y entretelones de la Argentina menemista*, Buenos Aires, Planeta.

Cheresky, Isidoro (1995), "¿Hay todavía lugar para la voluntad política? Consenso economicista, liderazgo personalista y ciudadanía en Argentina", ponencia del seminario *Desarrollo institucional y crisis de representación política*, Instituto del Servicio Exterior de la Nación, 25-28 de julio.

Chiara, Magdalena, Claudia Danani y Judith Filc (2000), "Política y estilos de gestión de las políticas sociales: El caso del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense", en Oscar Oszlack (2000) (comp.), *Estado y sociedad. Las nuevas reglas de juego*, vol. II, Buenos Aires, Eudeba.

Cohen, D. (1997), *Riqueza del mundo, pobreza de las naciones*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Contartese, Daniel, Gómez Marcelo y Rúfolo Daniela (2003), "La desinstitucionalización de las relaciones laborales. Organización empresaria y acción sindical de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios de la República Argentina", ponencia presentada en Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, IV Congreso, La Habana, 3 de setiembre.

Coraggio, José Luis (2002), "La Economía Social como vía para otro desarrollo social", artículo central del debate "Distintas propuestas de Economía Social" lanzado en Urbared, Red de Políticas Sociales Urbanas, proyecto conjunto de la UNGS (Argentina) y la UNAM (México), publicado en www.urbared.ungs.edu.ar.

Corral, Damián (2002), "El devenir de una ilusión progresista. Construcción y consolidación del liderazgo político de Carlos 'Chacho' Álvarez (1991-1996)", Tesis de Maestría en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política, Buenos Aires, FLACSO, marzo.

Crompton, Rosemary (1994) Clase y estratificación social. Una introducción a los debates culturales, Madrid, Tecnos.

Cucurto, Washington (2003), *Cosa de negros*, Buenos Aires, Interzona Latinoamericana.

Delamata, Gabriela (2000), "La oposición política al menemismo y la promesa de ciudadano-social", *Estudios Sociales*, Nº 18, Santa Fe.

De Imaz, José Luis (1964), *Los que mandan*, Buenos Aires, Eudeba.

Del Cueto, Carla (2004), "Elecciones educativas de las nuevas clases medias. Educación y modelos de socialización en countries y barrios cerrados del Gran Buenos Aires", *Espiral*, Nº 31, vol. XI, septiembre-diciembre, Guadalajara.

Di Marco, Graciela, Héctor Palomino, Susana Méndez, Ramón Altamirano, Mirta Libchaber de Palomino (2003), *Movimientos sociales en Argentina. Asambleas: la politización de la sociedad civil*, Buenos Aires, Jorge Baudino-Unsam.

Di Tella, Torcuato S. (2004), *Historia de los partidos políticos en América Latina, Siglo XX*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Dodaro, Cristian y Daniel Salerno (2003), "Cine militante: repolitización, nuevas condiciones de visibilidad y marcos de lo decible", III Jornadas de Jóvenes Investigadores, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Donzelot, Jacques (1999), "La nouvelle question urbaine", en *Esprit*, Nº 258, París, noviembre.

Duarte, Marisa (2002), "Los impactos de las privatizaciones sobre el mercado de trabajo: desocupación y creciente precarización laboral", en Daniel Azpiazu (2002).

Dubet, François (2004), "Que faire des classes sociales?", en Jean Noel Chopart y Claude Martin, *Que reste-t-il des classes sociales*, París, ENSP.

Eder, Klaus, (1993), *The New Politics of Class. Social Movement and Cultural Dinamics in Advanced Societies*, London, Sage.

Elías, Norbert (1996), *La sociedad cortesana*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

— *El Rodaballo. Revista de Política y Cultura* (2004), Nº 15, Buenos Aires.

Esping Andersen, Gostan (1993), "Post-industrial Class Structures: An Anlytical Framework", en G. Esping Andersen (comp.), *Changing Classes. Stratification and Mobility in Post-Industrial Socie-tes*, London, Sage.

— *Obra colectiva, "Ex Argentina. Pasos para huir del trabajo al hacer"* (2004), Instituto Goethe - Interzona.

Falleti, Tulia (2001), "Federalismo y descentralización de la educación en Argentina. Consecuencias (no queridas) de la descentralización del gasto en un país federal", en *El federalismo electoral argentino*, Calvo, Ernesto y Juan Abal Medina (h), editores, Buenos Aires, Inap-Eudeba.

Farinetti, Marina (2000) "Violencia y Risa contra la política en el Santiagueñazo", en Revista de Apuntes de Investigación, Nº6 Buenos Aires.

Feijóo, María Cristina (1992) "Los gasoleros: estrategias de consumo de los NUPO", en Minujín, Alberto (comp.), *Cuesta abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina*, Buenos Aires, Unicef-Losada.

Ferreira Rubio, Delia y Mario Goretti (1996), "Cuando el presidente gobierna solo. Menem y los decretos de necesidad y urgencia hasta la reforma constitucional (julio 1989-1994)", *Desarrollo Económico*, vol. XXXVI, Nº 14, abril-junio.

— (2000), "Executive-Legislative Relationship in Argentina: From Menem's *decretazo* to a New Style?", presentado en la conferencia anual "Argentina 2000: Politics, Economy, Society and International Relations", Argentine Studies Programme and St. Antony's College, University of Oxford, Oxford, 15-17 de mayo.

Flax, Javier (2002), *La democracia atrapada. Una crítica del decisionismo*, Buenos Aires, Biblos.

Fraser, Nancy (1997), "Pensando de nuevo la esfera pública", en Nancy Fraser: *Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición "postsocialista"*, pp. 95-133, Bogotá, Universidad de los Andes-Siglo del Hombre.

Forni, Pablo (2001), "Las redes inter-organizacionales y sus implicancias en el desarrollo de las organizaciones comunitarias de los pobres y excluidos. Estudios de caso en el Gran Buenos Aires durante la década del noventa", Versión html del archivo en http://www.unesco.org.uy/most/seminario/ongs.

Fréderic, Sabina (2004), *Buenos vecinos, malos políticos. Moralidad y política en la provincia de Buenos Aires*. Buenos Aires, Prometeo.

Gamson, William y David Meyer (1998), "Marcos interpretativos de la oportunidad política", pp. 389-412, en McAdam, McCarthy y Zald (comps.), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, Estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*, Madrid, Itsmo.

Gargarella, Roberto (2004) *Crítica de la Constitución*, Buenos Aires, Colección Claves para todos.

— (2005) *El derecho a la protesta. El primer derecho*, Buenos Aires, Ad-Hoc.

GER (Grupo de Estudios Rurales) (2001), "El encuentro por la tierra, la vivienda, el hábitat y el desarrollo. Una plaza, muchos países", en Norma Giarracca (2001) (comp.), *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Buenos Aires, Alianza.

— (2004), "17 de Abril: Día Internacional de la Lucha Campesina. Desalojos y arrinconamientos de campesinos y de comunidades indígenas en la Argentina", *Realidad Económica*, Buenos Aires, mayo.

Giarracca, Norma (2001), "El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. Protesta agraria y género en el último lustro en Argentina", pp.103-129, en Norma Giarracca (comp.), *¿Una nueva ruralidad en América Latina?*, Grupo de Trabajo Desarrollo Rural, Buenos Aires, Clacso.

— (2001) (comp.), *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Buenos Aires, Alianza.

— (2005), "Territorios en disputa: los bienes naturales en el centro de la escena", *Le Monde Diplomatique*, octubre.

Giarracca, Norma y Carla Gras (2001) "Conflictos y protestas en Argentina de finales del siglo XX con especial referencia a los escenarios regionales y rurales", en Norma Giarraca (2001) (comp.), *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Buenos Aires, Alianza.

Gibson, Eduardo y Ernesto Calvo (2001), "Federalismo y sobrerre-

presentación: la dimensión territorial de la reforma económica en la Argentina", pp. 179-205, en Ernesto Calvo y Juan Abal Medina (h) (comps.), *El federalismo electoral argentino*, Buenos Aires, INAP-Eudeba.

Giddens, Anthony (1991), *La estructura de clases en las sociedades avanzadas*, Madrid, Alianza.

— (1995), *Modernidad e identidad del yo*, Barcelona, Península.

Gilly, Adolfo (1997), *Chiapas, la razón ardiente*, México, Era.

Goldthorpe, John (1995), "Sobre la clase de servicio, su formación y su futuro", en José Carabaña y Antonio De Francisco (comps.), *Teorías contemporáneas de las clases sociales*, Madrid, Pablo Iglesias.

González Bombal, Inés (1993), "Puntadas sin hilo", Documento de Trabajo, mimeo, 20 pp.

— (1988), *Los vecinazos*, Buenos Aires, Ediciones del IDES.

— (2002), "Sociabilidad en clases medias en descenso: experiencias en el trueque" (con la colaboración de Fabiana Leoni), en AAVV, *Sociedad y sociabilidad en la Argentina de los Noventa*, UNGS, Buenos Aires, Biblos, reeditado en Susana Hintze (2003) (comp.), *Trueque y economía solidaria*, Buenos Aires, Prometeo.

Grimson, Alejandro (2003), "La vida organizacional en zonas populares de Buenos Aires", Informe Etnográfico para "The New comparative Study on Urbanization and Models of Development in Latin America".

— (2004), "Piquetes en las ciénagas. Los bloqueos políticos de los cortes de ruta", en *El Rodaballo*, número 15, invierno 2004.

Gutiérrez, Leandro y Luis A. Romero (1995), *Sectores populares, cultura y política*, Buenos Aires, Sudamericana.

Gutiérrez, Paula (2001), "La lucha por la tierra en Río Negro. El Consejo Asesor Indígena", Norma Giarracca (2001) (comp.), *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Buenos Aires, Alianza.

Halperin Donghi, Tulio (1994), *La larga agonía de la Argentina peronista*, Buenos Aires, Ariel.

Heredia, Mariana (2003), "Reformas estructurales y renovación de las elites económicas en la Argentina: estudio de los portavoces de la tierra y del capital", *Revista Mexicana de Sociología*, Año 65, Nº 1, México, enero-marzo.

Hintze, Susana (2003) (comp.), *Trueque y economía solidaria*, Buenos Aires, UNGS, Prometeo.

Hirschman, Albert (1992), *Retóricas de la intransigencia*, México, Fondo de Cultura Económica.

Hoggart, Richard (1990), *La cultura obrera en la sociedad de masas*, Madrid, Grijalbo.

Hyman, H. (1968), "Grupos de referencia", en *Enciclopedia internacional de las ciencias sociales*, Madrid, Aguilar.

Iazzetta, Osvaldo (2000), "Los técnicos en la política argentina", en Oscar Oszlack (2000) (comp.), *Estado y sociedad. Las nuevas reglas de juego*, vol. II, Buenos Aires, Eudeba.

Inzúa, Mirna (2001), *¿Dónde están los desaparecidos? H.I.J.O.S. e HIJOS. Identidad y acción colectiva. Un estudio de caso a partir de la teoría de los movimientos sociales*, París, Memoria de DEA, Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales.

Jacinto, Claudia (1997), "Políticas públicas de capacitación laboral de jóvenes. Un análisis de las expectativas y estrategias de los actores", en *Estudios del Trabajo*, Nº 13, Buenos Aires, primer semestre.

James, Daniel (1990), *Resistencia e integración*, Buenos Aires, Sudamericana.

Jauretche, Arturo (1966), *El medio pelo en la sociedad argentina*, Buenos Aires, Peña Lillo.

Jelin, Elizabeth (1989) (comp.), "Los movimientos sociales en la Argentina contemporánea", en Elizabeth Jelin, *Los nuevos movimientos sociales*, Buenos Aires, CEAL, pp. 13-40.

— (1995), "Mujeres, género y derechos humanos", en Elizabeth Jelin y Ernest Hershberg, *Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina*, Caracas, Nueva Sociedad.

Jelin, Elizabeth *et al.* (1996), *Vida cotidiana y control institucional en la Argentina de los noventa*, Buenos Aires, Nuevo Hacer, Grupo Editor Latinoamericano.

Kessler, Gabriel (1996), "Algunas implicancias de la experiencia de desocupación para el individuo y su familia", en Beccaria y López (comps.), *Sin trabajo*, Buenos Aires, Unicef-Losada.

— (2000), "Redefinición del mundo social en tiempos de cambios. Una tipología para la experiencia del empobrecimiento", en Maristella Svampa (comp.), *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales*, Buenos Aires, Biblos.

— (2004): *Sociología del delito amateur*, Paidós, Buenos Aires.

Kessler, Gabriel y Mercedes Di Virgilio (2003), "La nueva pobreza urbana en Argentina y América Latina", trabajo presentado en el

Seminario "Perspectives on Urban Poverty in Latin America", Washington, Woodrow Wilson Center of Public Policy, 17 de setiembre.

Landi, Oscar e Inés González Bombal (1995), "Los derechos en la cultura política", en AAVV, *Juicios, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina*, Buenos Aires, Nueva Visión.

Lash, S. y J. Urry (1987), *The End of Organizated Capitalism*, Madison, University of Wisconsin Press.

lavaca (2004), *Sin patrón. Fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores. Una historia, una guía*, Buenos Aires, Cooperativa de Trabajo Lavaca Ltd.

Leoni, Fabiana y Mariana Luzzi (2002), "Nuevas redes sociales: los clubes de trueque", en Inés González Bombal (comp.), *Respuestas de la sociedad civil a la emergencia social*, Buenos Aires, Cedes, pp. 13-43.

Levitsky, Steve (2001), "Una desorganización organizada. Organización informal y persistencia de estructuras partidarias locales en el peronismo argentino", *Revista de Ciencias Sociales*, N° 12, Buenos Aires, octubre, pp. 7-63.

Lewcowicz, Ignacio (2004 [1994]), *Pensar sin Estado*, Buenos Aires, Paidós.

Longoni, Ana y Mariano Mestman (1999), "Vanguardia y revolución: acciones y definiciones por una nueva estética argentina, 1968", en Alfredo Pucciarelli (comp.), *La primacía de la política*, Buenos Aires, Eudeba.

Lomnitz, Larisa (1991), *¿Cómo sobreviven los marginados?*, México, Siglo XXI, 10ª edición.

Lozano, Claudio (1995), *Los niveles de sindicalización y la propuesta del CTA*, Boletín de Coyuntura, IDEF.

— (2005) *Los problemas de la distribución del ingreso y el crecimiento en la Argentina actual*, Buenos Aires, IDEF.

Luzzi, Mariana (2003) *Transformations sociales et nouvelles formes de sociabilité en Argentine depuis les années 90. Le cas des réseaux de trox*, Tesis de DEA, École des Hautes Études en Sciences Sociales, París.

— (2005) *Réinventer le marché? Les clubs de troc face à la crise en Argentine*, París, L'Harmattan, colección "Logiques Sociales".

Magnani, Eduardo (2003), *El cambio silencioso. Empresas y fábricas recuperadas por los trabajadores en la Argentina*, Buenos Aires, Prometeo.

Manin, Bernard (1995), *Métamorphose de la représentation politique*, París, Calmann-Lévy.

Margheritis, Ana (2000), "Política económica y capacidades de gobierno. Cómo se construye la viabilidad de un programa de ajuste (Argentina, 1983-1993)", en Oscar Oszlack (2000) (comp.), *Estado y sociedad. Las nuevas reglas de juego*, vol. II, Buenos Aires, Eudeba.

Marques Pereira, Jaime (1992), "La reducción de la intervención social del Estado", en Georges Couffignal (comp.), *Democracias posibles. El desafío latinoamericano*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Marshall, Thomas. H. (1998 [1949]), "Ciudadanía y clase social", en Thomas H. Marshall y Tom Bottomore, *Ciudadanía y clase social*, Madrid, Alianza.

Martín, Elisa (2002), "Cumbia, birra y faso. Em torno das possibilidades políticas de um gênero musical na Argentina contemporânea", ponencia presentada en la 23ª Reunião da Associação Brasileira de Antropologia, Gramudo/RS, junio, 37 pp.

Martínez, Oscar (1991), "El escenario: febrero-julio de 1989. Terrorismo económico y desestabilización política", en *El menemato. Radiografía de dos años del gobierno de Carlos Menem*, Buenos Aires, Letra Buena.

Martuccelli, Danilo y Maristella Svampa (1994), "Notas para una historia de la sociología latinoamericana", en *Cuadernos Americanos*, Año 8, Nº 46, julio-agosto.

— (1997) *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*, Buenos Aires, Losada.

Mac Donald Kevin (2003), "De la solidarité a la fluidarité", en Michel Wievorka, *Un autre monde... Contestations, dérives et surprises dans l'antimondialisation*, París, Balland, pp. 77-92.

McAdam, Doug, John McCarthy y Mayer Zald (1999), "Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales", en Doug McAdam, John McCarthy y Mayer Zald (comps.), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, Madrid, Istmo, pp. 21-46.

Melucci, Alberto (1991) "Qu'y a-t-il de nouveau dans les 'nouveaux mouvements sociaux', pp., 129-162, en Louis Maheu y Antonio Sales, *La recomposition du politique*, Presses de l'Université de Montréal.

— (1994), "Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales", en *Zona-Abierta* 69, pp. 153-178.

— (1998), "La experiencia individual y los temas globales en una sociedad planetaria", pp. 361-381, en Pedro Ibarra y Benjamín Tejerina (comps.), *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*, Madrid, Trotta.

Merklen, Denis (2000), "Vivir en los márgenes: la lógica del cazador. Notas sobre sociabilidad y cultura en los asentamientos del Gran Buenos Aires hacia fines de los 90", en Maristella Svampa (comp.), *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales*, Buenos Aires, Biblos.

— (2001), "Inscription territoriale et action collective. Les occupations illégales de terres urbaines depuis les années 1980 en Argentine», Tesis de Doctorado, École des Hautes Études en Sciences Sociales, París.

— (2005), *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*, Buenos Aires, Gorla.

Merton, Thomas, (1993), *Teoría y estructuras sociales*, México, Fondo de Cultura Económica.

Minujín, Alberto y Gabriel Kessler (1995), *La nueva pobreza en la Argentina*, Buenos Aires, Planeta.

Murillo, María Victoria (1997), "La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado en la primera presidencia de Menem", *Desarrollo Económico*, vol. XXXVIII, Nº 147, Buenos Aires, octubre-diciembre.

Murmis, Miguel (1993), "La heterogeneidad social de las pobrezas", en Alberto Minujín (comp.), *Cuesta abajo. Los nuevos pobres. Efectos de la crisis en la sociedad argentina*, Buenos Aires, Losada-Unicef.

— (1998), "Agro Argentino: algunos problemas para su análisis", en Norma Giarracca y Silvia Cloquell, *Las agriculturas del Mercosur, el papel de los actores sociales*, Buenos Aires, La Colmena.

— (2000), "Cuestión social y lazos sociales", Buenos Aires, mimeo, 22 pp.

Murmis, Miguel, Juan Carlos Marín y José Nun (1968), "La marginalidad en América Latina. Informe preliminar", Documento de Trabajo Nº 53, Buenos Aires, Instituto Di Tella, CIS.

Murmis, Miguel y Silvio Feldman (1992), "Posibilidades y fracasos de las clases medias según Germani", en Raúl Jorrat y Ruth Sautu (comps.), *Después de Germani. Exploraciones sobre la estructura social argentina*, Buenos Aires, Paidós.

Nardacchione, Gabriel (2000), "La infuencia de las nociones de servicio y vecino para la redefinición de las organizaciones sociales en su relación con el Estado municipal", en Oscar Oszlack (2000) (comp.), *Estado y sociedad. Las nuevas reglas de juego*, vol. II, Buenos Aires, Eudeba.

Notcheff, Hugo (comp.) (1998), *La economía argentina a fin de siglo: fragmentación presente y desarrollo ausente*, Buenos Aires, Flacso-Eudeba.

Nun, José (1987), "Vaivenes de un régimen social de acumulación en decadencia", en José Nun y Juan Carlos Portantiero (comps.), *Ensayos sobre la transición democrática en Argentina*, Buenos Aires, Puntosur.

— (1995), "Populismo, representación y menemismo", en AA.VV., *Peronismo y menemismo. Avatares del populismo en la Argentina*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto.

— (1999), "El futuro del empleo y la tesis de la masa marginal", *Desarrollo Económico*, vol. 38, número 152.

— (2002), "El proceso democrático en Argentina", Versión Preliminar, Ponencia presentada en el Seminario Brasil-Argentina, "A Visão do Outro", organizado por la Fundación Centro de Estudios Brasileiros, Brasilia, 3-5 de abril.

O'Donnell, Guillermo (1972), *Modernización y autoritarismo*, Buenos Aires, Paidós.

— (1977), "Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976", *Desarrollo Económico*, Nº 64, enero-marzo.

— (1978), "Notas para el estudio de la burguesía local, con especial referencia a sus vinculaciones con el capital transnacional y el aparato estatal", Documento de Trabajo Nº 12, Buenos Aires, Cedes.

— (2001), "El capital financiero y el futuro de la Argentina", en *Página/12*, 1º de marzo.

— (2002), "Comentario de G. O'Donnell", en Eduardo Basualdo, *Sistema político y modelo de acumulación política en Argentina*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes-Flacso-Idep.

— (2004), "¿Democracia delegativa?", en *Contrapuntos*, Buenos Aires, Paidós.

Ostiguy, Pierre (1990), *Los capitanes de la industria*, Buenos Aires, Legasa.

Palermo, Vicente y Marcos Novaro (1996), *Política y poder en el gobierno de Menem*, Buenos Aires, Norma.

Palomino, Héctor (2003), "El movimiento de empresas recuperadas". En colaboración. Cátedra de Relaciones del Trabajo-Revis-

ta *Sociedad*, N° 20-21, Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires.

— (2005), "Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sindicales. 1975-2003", Buenos Aires, *Nueva Historia Argentina* (dir. Juan Suriano), Buenos Aires, Sudamericana (en prensa).

Palomino, Mirta (1988), *Tradición y poder. La Sociedad Rural Argentina (1955-1983)*, Cisea-Gel, Buenos Aires.

— (2003), "Las visiones elitistas de la pobreza", Versión Preliminar, presentada en "Power in the streets? Social and Political Protest in Contemporary Argentina", 20th Annual Latin American Labor History, Conferencia, septiembre-octubre, Duke University, 20 pp.

Panebianco, Angelo (1990), *Modelos de partido*, Madrid, Alianza.

Pengue, Walter (2004), "La transnacionalización de la agricultura y la alimentación en América Latina", Resumen del Informe desarrollado como Coordinador Regional junto a Resources Agricultural International Network Grain entre 2001 y 2003, en el marco del proyecto "Transnacionalización de la agricultura y la alimentación en América Latina", publicado por Grain, Biodiversidad, Seedling.

Peñalva, Susana (2001), "Retirada del Estado, flexibilidad neoliberal y desintegración social a la luz del enfoque institucionalista. Efectos y consecuencias sociales del proceso privatizador a partir de la revisión del caso Somisa", en AAVV, *Privatizaciones e impacto en los sectores populares*, Buenos Aires, Belgrano.

Pereyra, Sebastián (2005), "¿Cuál es el legado del movimiento de derechos humanos? El problema de la impunidad y los reclamos de justicia en los '90", en Francisco Naishtat, Federico Schuster, Gabriel Nardacchione y Sebastián Pereyra (comps.), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires, Prometeo (en prensa).

Pérez, Germán (2001), "Pálido fuego: Hannah Arendt y la declinación de la figura del trabajador en las sociedades contemporáneas. Apuntes sobre los piqueteros en Argentina", Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, mimeo.

Peruzzotti, Enrique (1998), "La naturaleza de la nueva democracia argentina. Revisando el modelo de democracia delegativa", en Raúl Urzúa y Felipe Agüero, *Fracturas en la gobernabilidad democrática*, Santiago de Chile, Centro de Análisis de Políticas Públicas y Universidad de Chile.

Pinçon, Michel y Monique Pinçon-Charlot (2000), *Sociologie de la bourgeoisie*, París, La Découverte.

Piriz, María Inés, Roberto Ringuelet y M. del Carmen Valerio (1999), Un movimiento social agrario de los 90: *Las Mujeres Agropecuarias en Lucha" de la región Pampeana*, Nures (Núcleo Regional de Estudios Socioculturales), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2002), "Aportes para el Desarrollo Humano en Argentina/2002: Un enfoque integral", Buenos Aires.

Portantiero, Juan Carlos (1973), "Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual", en Oscar Braum (comp.), *El capitalismo en crisis*, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 73-117.

Prévôt Schapira, Marie France (1993), "Du Welfare à l'assistance: la décentralisation de l'intervention sociale en Argentine", en *Cahiers de l'Amérique Latine*, Nº 15.

— (1999), "Amérique Latine: la ville fragmentée", *Esprit*, Nº 258, noviembre.

Pucciarelli, Alfredo (2002), *La democracia que tenemos. Declinación económica, decadencia social y degradación política en la Argentina actual*, Buenos Aires, Libros del Rojas, Serie Extramuros Nº 4.

Quijano, Aníbal (1998), *La economía popular y sus caminos en América Latina*, Lima, Mosca Azul.

Rebón, Julián (2004), *Desobedeciendo al desempleo. La experiencia de las empresas recuperadas*, Buenos Aires, Picasso-La Rosa Blindada.

Robles, Fernando (1999), "Inclusión, exclusión y construcción de identidad. El caso de las mujeres jefas de hogar en Chile", en Fernando Robles, *Los sujetos y la cotidianeidad. Elementos para una microsociología de lo contemporáneo*, Talcahuano, Sociedad Hoy.

Rodríguez Blanco, Mariela (2002), "La parte de los que no tienen parte. La dimensión simbólica y política de las protestas sociales: la experiencia de los piqueteros en Jujuy", Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, mimeo.

Rofman, Alejandro (1999), *Las economías regionales a fines del siglo XX. Los circuitos del petróleo, del carbón y del azúcar*, Buenos Aires, Ariel.

Roitter, Mario y Marcelo Carmelo (2005), "Corporate Social Action in a context of crisis: Reflections on the Argentine Case", en Cynthia Sanborn y Felipe Portocarrero (comps.), *Philanthropy*

and Social Change in Latin America, Harvard, DRCLAS Latin America Book Series, Harvard University Press.

Sábato, Jorge (1988), *La clase dominante en la Argentina moderna*, Buenos Aires, Cisea-GEL.

Salama, Pierre (2003), "L'économie argentine de l'endettement: chronique d'une crise annoncée", en Diana Quattrocchi-Woisson, *Argentine, enjeux et racines d'une société en crise*, París, Tiempo.

Santillán, Carlos (1998), *Diálogo con Jesús Olmedo*, Buenos Aires, Ediciones Populares.

Sarlo, Beatriz (1990), "Menem, cinismo y exceso", *Punto de Vista*, Nº 39, diciembre.

Sassen, Saskia (1999), *La ciudad global. Nueva York, Londres, Tokio*, Buenos Aires, Eudeba.

Savage, M. *et al.* (1992), *Property, Bureaucracy and Culture*, Londres, Routledge.

Schillagi, Carolina (2003), *Lazo social, lazo político. La experiencia de las asambleas barriales en la Argentina contemporánea*, Tesis de Maestría, UNSAM-Universidad de Georgetown.

Schuster, Federico y Sebastián Pereyra (2001), "La protesta social en la Argentina democrática. Balance y perspectivas de una forma de acción política", Norma Giarracca (2001) (comp.), *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Buenos Aires, Alianza.

Schvarzer, Jorge (1991), *Empresarios del pasado. La Unión Industrial Argentina*, Buenos Aires, Cisea-Imago Mundi.

— (1996), *La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria argentina*, Buenos Aires, Planeta.

Semán, Pablo y Pablo Vila (1999), "Rock chabón e identidad juvenil en la Argentina neoliberal", en Filmus, Daniel (comp.), *Los noventa. Política, sociedad y cultura en América Latina y Argentina de fin de siglo*, Buenos Aires, Flacso-Eudeba, pp. 225-257.

Semán, Pablo (2000), "El pentecostalismo y la religiosidad de los sectores populares", en Maristella Svampa (comp.), *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales*, Buenos Aires, Biblos.

Sennett, Richard (2000), *La corrosión del carácter*, Barcelona, Anagrama.

Sidicaro, Ricardo (2001): *La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001)*, Buenos Aires, Libros del Rojas, Serie Extramuros, Nº 1.

Sigal, Silvia y Juan Carlos Torre (1969), "Reflexiones en torno a los

movimientos laborales en América Latina", en Rubén Katzman y José Luis Reyna (comps.), *Fuerza de trabajo y movimientos laborales en América Latina*, México.

Simmel, Georg (1986), *El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura*, Barcelona, Península.

Sebreli, Juan José (1966), *Buenos Aires, vida cotidiana y alienación*, Buenos Aires, Siglo XX.

Sousa de Santos, Boaventura (2005), *Reinventar la democracia, reinventar el Estado*, Buenos Aires, Clacso.

Svampa, Maristella (1994), *El dilema argentino. Civilización o Barbarie*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto.

— (2000), "Identidades astilladas. De la 'Patria Metalúrgica' al 'Heavy Metal'", en Maristella Svampa (comp.), *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales*, Buenos Aires, Biblos.

— (2001) *Los que ganaron. La vida en los countries y en los barrios privados*, Buenos Aires, Biblos.

— (2002), "Las dimensiones de las nuevas movilizaciones sociales", en *El Rodaballo*, Año 8, N° 14, Buenos Aires, julio.

— (2003a) "1973-1976. El populismo imposible y sus actores", *Nueva Historia Argentina, 1955-1976*, vol. IX (dir. Daniel James), Buenos Aires, Sudamericana.

— (2003b), "Las dimensiones de las nuevas movilizaciones sociales: las asambleas barriales, segunda parte", *El Ojo Mocho*, número 17, Buenos Aires.

— (2004), *La brecha urbana*, Buenos Aires, Claves para Todos.

Svampa, Maristella y Sebastián Pereyra (2003), *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires, Biblos. (reedición 2004, Addenda: M. Svampa, "Actualización, balance y reflexiones, (2002-2004)".

Teubal, Miguel (2001) "Globalización y nueva ruralidad en América Latina", en *¿Una nueva ruralidad en América Latina?*, Grupo de Trabajo Desarrollo Rural, Buenos Aires, Clacso.

Teubal, Miguel y Javier Rodríguez (2001), "Neoliberalismo y crisis agraria", Giarracca, Norma (2001) (comp.), *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Buenos Aires, Alianza.

Thompson, Edward P. (1986), *Costumbres en común*, Madrid, Gedisa.

Thwaites Rey, Mabel (2004), *La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción*, Buenos Aires, Prometeo.

Torrado, Susana (1992), *Estructura social de la Argentina, 1945-1986*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor.

Torre, Juan Carlos (1989), *Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976*, Buenos Aires, CEAL.

— (1998), *El proceso político de las reformas económicas en América Latina*, Buenos Aires, Paidós.

— (1999), "Los desafíos de la oposición en un gobierno peronista", en Juan Carlos Torre et al., *Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, democracia y mercado*, Buenos Aires, Norma.

Torti, María Cristina (1999), "Protesta social y 'Nueva Izquierda' en la Argentina del Gran Acuerdo Nacional", en Alfredo Pucciarelli (comp.), *La primacía de la política*, Buenos Aires, Eudeba.

Touraine, Alain (1966) *La conscience ouvrière*, París, Seuil.

— (1988), *La parole et le sang*, París, Odile Jacob. [*Actores sociales y sistema político en América Latina*, Santiago, Prealc, 1988.]

Touraine, Alain y Wieviorka, Michel (1988), "La classe ouvrière et le mouvement ouvrier", en Henry Mendras y Michel Verret, *Les champs de la sociologie*, París, Armand Colin, pp. 75-85.

Trigo, Eduardo, *et al.* (2002), *Los transgénicos en la agricultura argentina. Una historia con final abierto*, Buenos Aires, Libros del Zorzal.

Vaca, Josefina y Hernán Cao (2004), "La división regional del trabajo en la Argentina: nuevos elementos y tradicionales equilibrios", *Realidad Económica*, Nº 202, febrero-marzo, IADE, pp. 65-87.

Vásquez, Luciana (2000), *La novela de Menem. Ensayo sobre la década incorregible*, Buenos Aires, Sudamericana.

Vázquez, Juan Luis (2003), "Apuntes sobre las protestas de clase media", Informe presentado a la cátedra "Política y sociedad", Maestría en Ciencias Políticas, IDAES, Buenos Aires.

Vinelli, Natalia y Carlos Rodríguez Esperón (comp.) (2004), *Contrainformación. Medios alternativos para la acción política*, Buenos Aires, Peña Lillo, ediciones Continente.

Walger, Silvina (1994), *Pizza con champán. Crónica de la fiesta menemista*, Buenos Aires, Espasa.

Weber, Max (1988), *Economía y sociedad*, México, Fondo de Cultura Económica.

Woods, Marcela (1998), "Redes Clientelares en el Conurbano Bonaerense: usos del espacio y formas de estructuración del poder local". La versión original de este trabajo fue presentada en las III Jornadas Internacionales Estado y Sociedad: "La reconstrucción de la esfera pública", Buenos Aires, CEA, UBA.

Wortman, Ana (2003) (coord.), *Pensar las clases medias. Consumos culturales y estilos de vida urbanos en la Argentina de los noventa*, Buenos Aires, La Crujía.

Wright Mills, Charles (1961), *Las clases medias en Norteamérica*, Madrid, Aguilar.

— (1987), *La élite en el poder*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Zermeño, Sergio (1989), "El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden", *Revista Mexicana de Sociología*, octubre-diciembre, pp. 115-150.

Zibechi, Raúl (2003), *Genealogía de la revuelta. Argentina, sociedad en movimiento*, Buenos Aires, Letra Libre.

Zuleta, Alejandro (2003), "Algunas precisiones sobre la nueva gerencia pública y su implementación en la administración", Segundo Congreso Argentino de Administración Pública, noviembre (formato electrónico).

Este libro se terminó de imprimir
en el mes de noviembre de 2005
en Impresiones Sud América SA,
Andrés Ferreyra 3767/69, 1437,
Buenos Aires, República Argentina.

Otros títulos en Taurus:

CARTOGRAFÍA PERSONAL
Escritos y escritores de America latina
Jorge Lafforgue

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA SABIDURÍA?
Harold Bloom

EL TAMAÑO DE UNA BOLSA
John Berger

NO ES POSIBLE CALLAR
Héctor Tizón

CRIATURAS DEL AIRE
Fernando Savater

LA FILOSOFÍA EN UNA ÉPOCA DE TERROR
Diálogos con Jürgen Habermas y Jacques Derrida
Giovanna Borradori

HISTORIA NATURAL DE LOS RICOS
Richard Conniff

LA TIERRA EXPLOTA
Superpoblación y desarrollo
Giovanni Sartori y Gianni Mazzoleni

¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA?
HOMO VIDENS
La sociedad teledirigida
LA SOCIEDAD MULTIÉTNICA
Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros
Giovanni Sartori

LOS FELICES 90
EL MALESTAR EN LA GLOBALIZACIÓN
Joseph E. Stiglitz

LA CULTURA
Todo lo que hay que saber
Dietrich Schwanitz

LIBROS
Todo lo que hay que leer
Christiane Zschirnt



MARISTELLA SVAMPA

LA SOCIEDAD EXCLUYENTE

Comparar la Argentina actual con la de tres décadas atrás es un ejercicio inquietante. Son tantos y tan grandes los cambios, que no es exagerado afirmar que se trata de dos países diferentes. En la base de esa verdadera metamorfosis estructural se encuentra la aplicación inflexible del neoliberalismo. Si bien las políticas que derivan de esa doctrina son hoy predominantes en el mundo, es en países como el nuestro, eufemísticamente denominados "emergentes", donde sus efectos son más dramáticos. La fuerte desregulación económica, combinada con el debilitamiento desmedido de las funciones sociales del Estado, sumaron nuevos y más agudos focos de exclusión social a los ya existentes. Lo que verdaderamente emergió en la Argentina de los últimos años es una nueva sociedad, caracterizada por la polarización y la heterogeneidad.
Son muchos los estudiosos que han encarado el análisis de diferentes aspectos de este cambio. En ellos se basa y con ellos dialoga Maristella Svampa en esta obra que es, sin dudas, el primer intento exitoso de aproximarse de manera integral a este proceso de conformación de un nuevo país. *La sociedad excluyente* se convierte así en un libro singular, que combina acertadamente rigor intelectual con una mirada crítica y comprometida.

ISBN 987-04-0232-1
